Universidad del Tolima
Año 2015
Volumen 14 Nº 27
ISSN 1657-9992

Aquelarre

Nº 27

Abril de 2015

Revista de filosofía, política, arte y cultura

Centro Cultural de la Universidad del Tolima

Aquelarre

Revista del Centro Cultural de la Universidad del Tolima.

Rector
Dr. José Herman Muñoz Ñungo

Director
Julio César Carrión Castro

Editor
Johan Sebastían Gutiérrez Mosquera

Consejo Editorial
Boris Edgardo Moreno
César Augusto Fonseca Árquez
Gabriel Restrepo Forero
Javier Vejarano Delgado
Manuel León Cuartas
María Angélica Mora Buitrago
María Victoria Valencia Robles

Diseño y diagramación
Leonidas Rodríguez Fierro

Impresión
León Gráficas Ltda.

Tiraje 2.000 ejemplares

Dirección postal: Centro Cultural Universidad del Tolima Barrio Santa Helena - Ibagué
Teléfono: (+)57-8-2669156 - Ibagué
Correo electrónico: ccu@ut.edu.co

Tabla de contenido

Carta del editor. Cinco décadas del nacimiento de las FARC.EP 9

MEMORIA

Los 50 años de las FARC-EP 15
Carlos A. Lozano Guillén

Selección de textos de Alfredo Molano sobre orígenes del conflicto armado

Limpios y Comunes 21

Nacimiento de las Farc: De El Davis a Villarrica 27

Asalto a Marquetalia 35

El legendario comandante de las FARC rememora 70 años en la guerrilla 43

Carta abierta a Alfonso Cano 49
Medófilo Medina

Respuesta a Medófilo Medina 63
Timoleón Jiménez

PERSONAJES

Érase una vez Manuel Marulanda Vélez 85
Yezid Arteta Dávila

En diálogos: *Sargento Pascuas*: 50 años en las Farc 95
Tony López

Las otras voces de la historia: mi encuentro con Raúl Reyes 111
Miguel Ángel Beltrán Villegas

DIÁLOGOS

Acuerdos de la Uribe 123

Los papeles de Tlaxcala 127

Resolución de paz 159

Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia 161

Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 163

ARCHIVO FOTOGRÁFICO 169

CONFLICTO Y NACIÓN

Colombia: guerra, conflicto histórico y solución política 181
Miguel Eduardo Cárdenas Rivera

Colombia, ¿mucha nación? 197
Herbert Braun

Programa agrario de las Farc-Ep 205

ACERCA DEL TERRORISMO

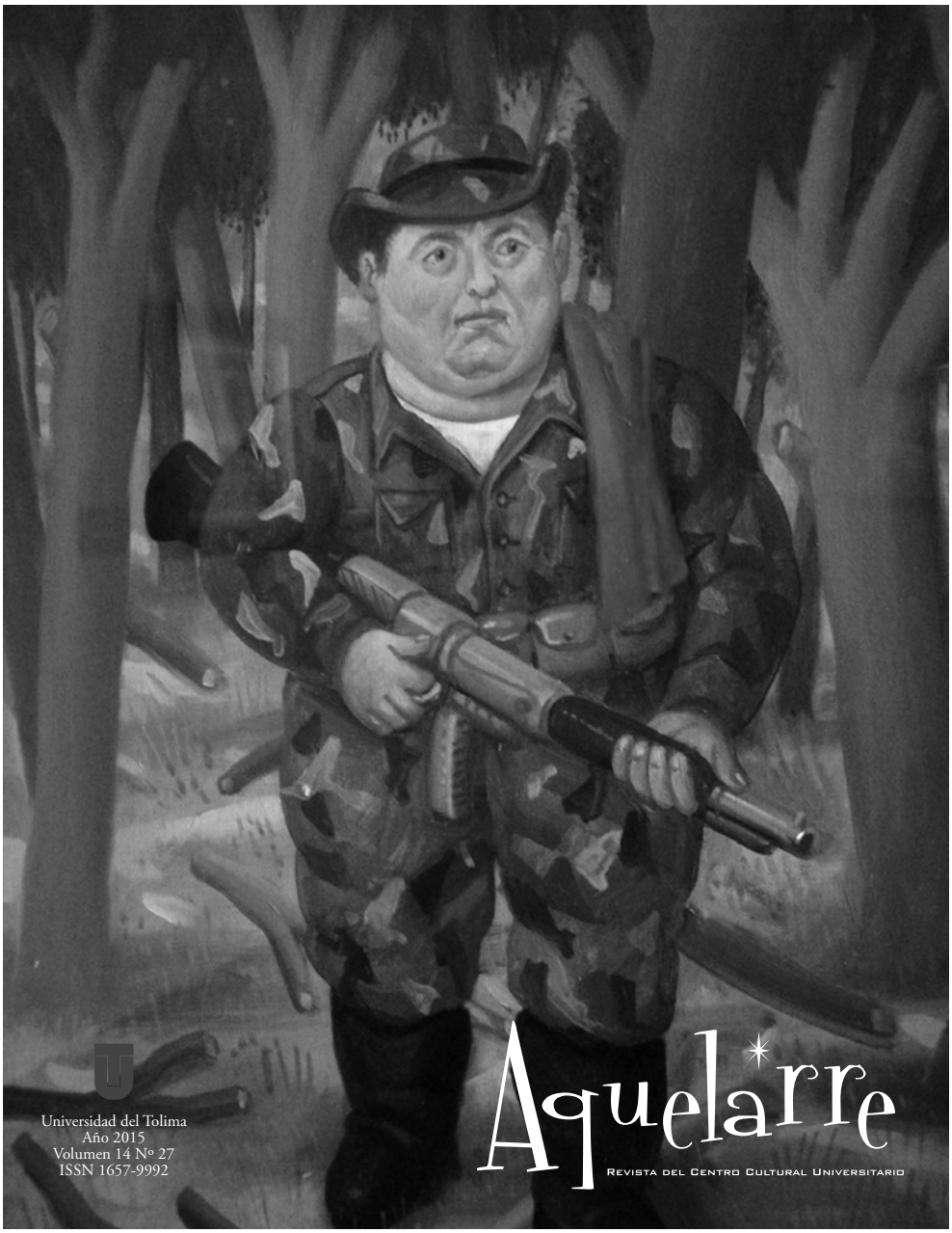
Acerca del terrorismo 213
Julio César Carrión Castro

La posición marxista acerca del terrorismo individual..... 215
León Trotsky

El terrorismo de Estado en América Latina 221
Antonio García Nossa

Terrorismo y respuesta justa 227
Noam Chomsky

Índice de ilustraciones 239



Portada: *Tirofijo* / Fernando Botero / Óleo sobre lienzo / 1999 / 45.72 x 33.02 cm / Museo Botero, Banco de la República / Bogotá.

Aquelarre, revista no venal, editada por el Centro Cultural de la Universidad del Tolima.

Cinco décadas del nacimiento de las FARC.EP

"El presente del pasado es la memoria"

Más de medio siglo y Colombia aún vive la última de sus guerras, la que se distingue además porque es la que hemos vivido y la que nos han contado, la misma que sin reparos ha cobrado la vida, el tiempo y las ideas de hombres y mujeres que han hecho parte de la nación de naciones que es Colombia.

El 9 de abril de 1948, luego de la muerte del líder popular Jorge Eliecer Gaitán, el país inició una de las décadas más violentas y desafortunadas de su historia; miles y miles de familias campesinas vieron ante sus ojos cómo el cielo azul y las dulces estepas verdes de las montañas, se teñían de rojo. La violencia había comenzado. Las hordas de conservadores pacificaban los campos colombianos a machete y plomo, la chulavita estaba dispuesta a la carroña y el Río Grande de la Magdalena se crispaba a la caída de los cuerpos.

El control de amplias extensiones del territorio nacional, por parte de los gamonales y los terratenientes ya era para ese entonces un lugar común, la política estaba tomada por los ideales conservadores y la economía se proyectaba dependiente y servil de los intereses de las potencias. La modernidad no era más que un discurso.

Mientras Europa y Estados Unidos le presentaban a la humanidad el nuevo orden mundial, luego de la aparente victoria del ejército aliado contra las fuerzas del nazismo; el comunismo se alzaba como una nueva amenaza global para paz, según lo dictaminaba el gobierno norteamericano, nuestro país recibía un nuevo modelo de "democracia" de la mano del Golpe de Estado que ejecutó el general Gustavo Rojas Pinilla al supuestamente "demócrata" presidente conservador, Laureano Gómez, el 13 de junio de 1953.

La dictadura se recuerda porque, además de traer la televisión y otros desarrollos tecnológicos y arquitectónicos al país, incrementó de manera amplia y sostenida, el número de estudiantes asesinados por el régimen.

El dictador cayo y la benemérita "democracia" colombiana se mantuvo.

El 18 de mayo de 1964, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, y como una iniciativa más de pacificación del territorio nacional, 16 mil hombres se tomaron a Marquetalia; una pequeña población al sur del departamento del Tolima, en donde un puñado de campesinos insurrectos, herederos de las prácticas de autodefensas masivas campesinas de los años 40 y de la resistencia liberal, tuvieron que enfrentar no sólo las circunstancias y avatares de la represión nacional, sino el proyecto expansionista del imperio.

Se dice que en ese instante no eran más de 20 los hombre en armas, que quien los dirigía era Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez o *Tirofijo* un campesino, amigo de bandoleros, un guerrillero; se cuenta también que todo lo que sucedió fue un desafío a la imaginación, pero fue como la historia se escribió; por cada hombre que se alzó en armas, y permanecía en las montañas, 800 soldados fueron enlistados y puestos al frente para terminar de manera definitiva los despojos de la guerra partidista, y el enclave de las guerrillas comunistas.

Ninguno de los 16 mil hombres, ni el general José Joaquín Matallana quien dirigió la operación, ni el mismo presidente de la republica pudieron percibir más allá del inmediatismo victorioso de su trabajo, la más amplia expresión del momento histórico al que acudían, los 20 hombres que resistían en la profundidad de la montaña, daban inicio a lo que con los años se denominaría las FARC.EP las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejercito del pueblo, la guerrilla más antigua del continente, que ha vivido ininterrumpidamente 50 años de historia político-militar, y que sin lugar dudas se convirtió en un importantísimo sujeto político, en un sujeto histórico, que da cuenta de lo que en estos cinco decenios ha sido el sustrato del acontecer político que se ha forjado en el campo colombiano y, por supuesto, un elemento clave de la tremenda historia nacional.

"El presente del presente es la acción"

Luego de Marquetalia nada de cordura quedaría en el país. Así como la muerte de Jorge Eliecer Gaitán inauguró la violencia, Marquetalia inauguró la guerra contra-insurgente y 50 años después el país persiste en recordar las interminables cotidianidades por las que varias generaciones de colombianos han atravesado, circunstancias que han sido, a la luz de la historia, desgarradoras, infames e insoportables.

Las FARC.EP. se convirtieron en una organización político-militar de orientación comunista, que se trazó como objetivo la toma del poder para la transformación radical de los aspectos sociales de miseria y desigualdad en las que el país se encuentra inmerso, según ellos, como resultado de los interminables gobiernos de la oligarquía; el método para la toma del poder, fue la combinación efectiva de las formas de lucha, la política y la militar. Estas ideas se desplegaron por el territorio nacional y la guerrilla creció, se estableció en varios frentes, comandancias y un Estado Mayor que coordina y orienta todas las decisiones de la organización.

Con el paso de los años ciertos combatientes fueron ganando reconocimiento al interior de la filas guerrilleras en el quehacer de la guerra y la política, instaurándose como referente moral para los insurrectos; Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Alfonso cano, Iván Márquez, solo por recordar algunos nombres.

Pero mientras la guerra se desarrolla, el gobierno nacional y la guerrilla, han intentado en varias ocasiones acercamientos de carácter político, con la intención de finalizar el conflicto armado social e histórico de los colombianos. Desde la Uribe en 1984, pasando por Tlaxcala en

1991, San Vicente del Caguán en 1997 y la Habana en el 2012, Colombia ha visto y escuchado por los medios de comunicación cada uno de los procesos de paz entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC.EP.

Mucho ha transcurrido en estos procesos, desde la toma a Casa Verde, el mítico campamento del secretario a de las FARC. EP en el municipio de la Uribe en el departamento del Meta, ordenada el 9 de diciembre de 1990 por el presidente César Gaviria Trujillo, pasando por el establecimiento de la zona de distensión el 7 de noviembre de 1998 en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa, todos del departamento del Meta y San Vicente del Caguán, en departamento del Caquetá; y como no recordar la *silla vacía* el 7 de enero de 1999, en la instalación de la mesa de negociación de la paz en San Vicente del Caguán, en la que el presidente Andrés Pastrana asistió pero el líder guerrillero Manuel Marulanda lo dejó esperando, aludiendo años después que su ausencia fue producto de una amenaza en contra de su vida; y así muchos más, recuerdos, anécdotas y curiosidades en cada nuevo intento de negociación, tres de las cuatro mesas de negociación de la paz que se han conocido, fallaron.

Ahora, en el 2015, la mesa de negociación de paz para Colombia, completa 3 años de actividades; se pactó en ella una agenda de debate y negociación que rigurosamente ha entregado al país tres informes, 1) "La agenda política para el desarrollo agrario integral", dado a conocer en la Habana el 21 de junio del 2013; 2) "Participación política", dada a conocer el 8 de diciembre de 2013 y 3) "Solución al problema de las drogas ilícitas" entregado el 16 de mayo del 2014. Todos estos borradores de acuerdo, que se han establecido, sólo cobran validez si en la mesa las partes llegan a firmar el Acuerdo General de Finalización del Conflicto.

"El presente del futuro es la imaginación"

Como parte del proceso de discusión que a la fecha desarrollan las FARC. EP y el gobierno nacional en la mesa de negociación en la Habana, Cuba, la insurgencia propuso la constitución de la comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) la que fue aprobada por negociadores el día 5 de agosto de 2014, y que tiene la responsabilidad de servir como "insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad".

Es desde la perspectiva de escudriñar la historia de lo que ha transcurrido en estos dolorosos cincuenta años de guerra entre las FARC.EP y el Estado Colombiano, que la Revista *Aquelarre* del Centro Cultural de la Universidad del Tolima hace esta nueva entrega editorial; una compilación de documentos y artículos que se presentan desde múltiples miradas del pasado y el presente y que nos brindan nuevas esperanzas de futuro.

El primer bloque comprende los 50 años de existencia y presencia de las FARC. EP en el conflicto colombiano, se divide a su vez en tres momentos, el primero,

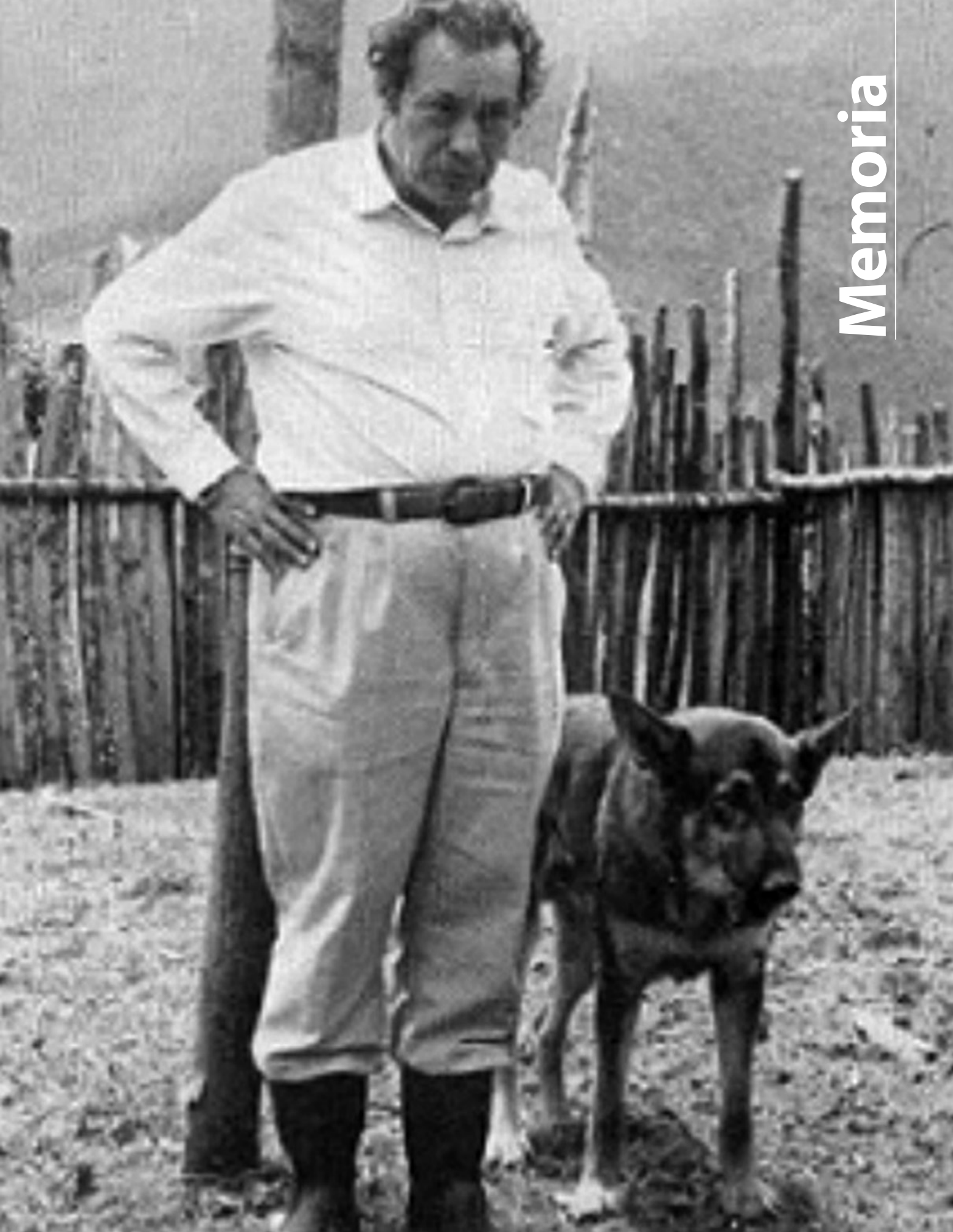
Memoria, en el que iniciamos acompañados por Carlos Lozano Guillen, quien como director del semanario *Voz* del Partido Comunista Colombiano, nos comparte un artículo especial para este número, luego de la mano del maestro Alfredo Molano, quien en su ardua tarea de investigación, reconstruye los inicios de la guerrilla, seleccionamos cuatro de sus textos de la serie, "*Origen del conflicto armado*" publicados por el periódico *El Espectador*; y para finalizar, contamos con la presencia del profesor Medófilo Medina en un intercambio epistolar; en carta enviada al entonces comandante de las FARC.EP, Alfonso Cano, en la cual expone algunas interpretaciones acerca de los orígenes y la historia de las FARC.EP; carta que luego, por la circunstancia de la muerte de Cano, sería respondida por el ahora comandante de la guerrilla Timoleón Jiménez, el 13 de enero del 2012.

Luego de este primer capítulo, continuamos con *Personajes*, donde presentamos los perfiles de tres comandantes de las FARC.EP. Por último, cerramos con la compilación de algunos documentos de los procesos de negociación, la Uribe, Tlaxcala, el Caguán y la Habana, y adicionamos un archivo fotográfico.

El siguiente bloque es *Conflicto y nación*, que contiene algunos insumos teóricos, básicos para la discusión actual. Finalizamos este número de *Aquelarre*, con la sección *Tolle lege* (Toma, lee) planteando una discusión en torno al cotidiano concepto de "Terrorismo", tan socorrido por los políticos y los comunicadores, pero tan esquivo de atrapar, en este intento recogimos las tesis de león Trotsky, Antonio García Nossa y Noam Chomsky.

Esperamos, con mucho optimismo y alegría que nuestro esfuerzo editorial nutra desde las palabras y la disertación, la construcción de la Paz en Colombia, una paz como lo pretende la mesa de negociación de la Habana, duradera y con justicia social.

Sebastián Gutiérrez
Editor



Los 50 años de las FARC-EP

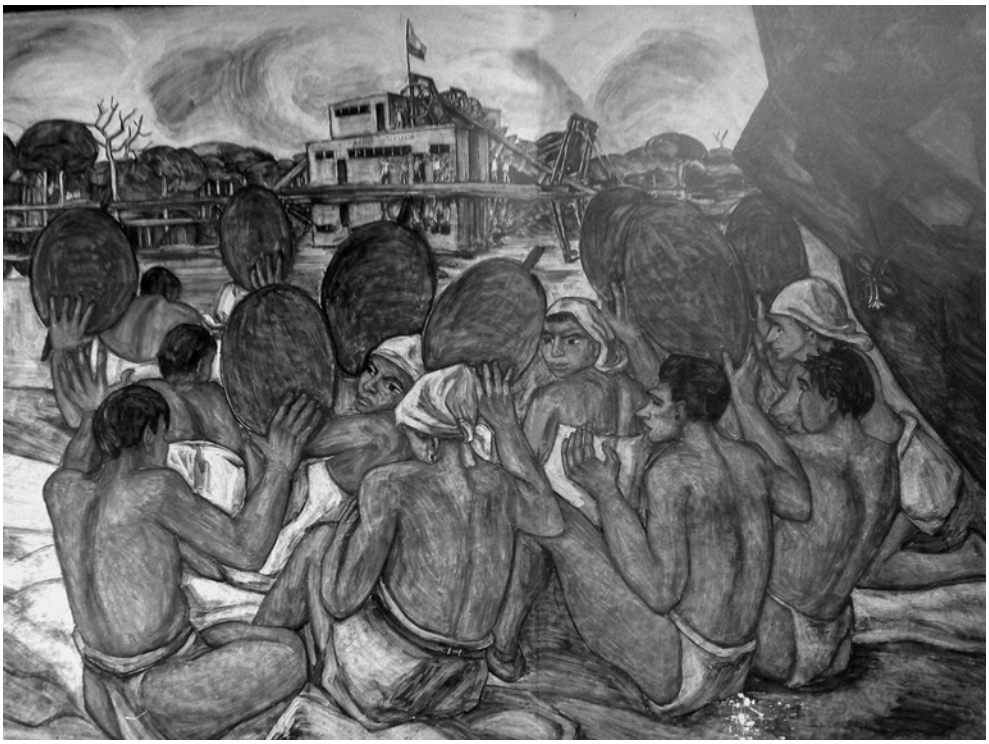
Una Historia que no puede ignorarse

Las FARC-EP surgieron hace 50 años llamando al diálogo y a la solución política del conflicto

Carlos A. Lozano Guillén*

La fecha histórica de la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) es el 27 de mayo de 1964, cuando se produjo el primer enfrentamiento del pequeño grupo de campesinos, encabezados por "Manuel Marulanda Vélez", decididos a resistir la agresión de 16 mil soldados a Marquetalia, enviados por el presidente Guillermo León Valencia a arrasar la pequeña población tolimense en el sur del país, considerada una "república independiente" por la caverna derechista colombiana, liderada por el entonces senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, uno de sus más prominentes voceros, asesinado hace 19 años, vaya paradoja, por conspiradores militares y civiles golpistas.

* Director de VOZ y dirigente del Partido Comunista Colombiano



Se inició así una nueva etapa del conflicto social y armado colombiano, que dio vida a la guerrilla más antigua del continente, que tiene su origen en la resistencia armada campesina a la violencia conservadora de la segunda mitad de la década de los años 40 del siglo XX.

La cruenta Operación Marquetalia se inició el 18 de mayo de 1964, en ejecución del Plan Laso, elaborado por el Pentágono de los Estados Unidos. Incluyó movilización de tropas por aire, tierra y agua en cantidad de 16 mil uniformados, con participación de infantería, artillería y aviación. Los campesinos, después de movilizar a sus familiares (mujeres, niños y ancianos), decidieron resistir la agresión oficial en un número no superior a 20.

El 27 de mayo, como ya se dijo, se produjo el primer combate y, por esta razón, para las FARC-EP, desde el punto de vista histórico, equivale a la fecha de fundación de la organización insurgente. Aunque en lo formal, la decisión fundacional fue en la Segunda Conferencia Guerrillera del Bloque Sur, realizada entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1966, dos años después.

El peso del acontecimiento del ataque a Marquetalia, primero, y a Riochiquito, El Pato y Guayabero después, es el que le da trascendencia a la decisión de Manuel Marulanda y de los guerrilleros del sur del país de conformar una guerrilla a nivel nacional no solo para resistir sino para buscar el poder mediante la aplicación de la guerra de guerrillas.

Sin embargo, es dable anotar que desde que se conoció, en abril de 1964, de la existencia del Plan Laso, los campesinos de Marquetalia llamaron al Gobierno al diálogo y a buscar un acuerdo político

que evitara la confrontación. Contribuyeron en este sentido la dirección nacional del Partido Comunista Colombiano, algunos parlamentarios liberales, entre ellos varios del MRL de Alfonso López Michelsen, y conocidos prelados de la Iglesia católica, como monseñor Germán Guzmán y el padre Camilo Torres. Pesaron más en el establecimiento, como siempre, las voces destempladas del militarismo y del guerrerismo y la orden de Washington.

El semanario VOZ, a la sazón VOZ de la Democracia, la primera VOZ, denunció en abril de 1964 la existencia del Plan Laso y el inminente ataque a Marquetalia: El gobierno de Guillermo León Valencia decidió clausurar el periódico con el argumento de que la información era mentirosa. Significó un golpe a la libertad de prensa y reflejo del desprecio frentenacionalista por la democracia real. Así nació VOZ Proletaria, la segunda VOZ.

Las FARC-EP surgieron hace 50 años llamando al diálogo y a la solución política del conflicto, como antes lo hicieron las guerrillas y los campesinos de la resistencia armada en los años 40 del siglo pasado, cuando exigieron "la tierra para el que la trabaja" y en 1953, durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, demandaron la Asamblea Nacional Constituyente soberana y democrática en rechazo a la de bolsillo del régimen militar.

Se puede decir, a la luz de la historia, que los antecedentes de las FARC-EP fueron la lucha guerrillera contra las dictaduras conservadoras de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, la resistencia armada campesina en el Frente Nacional bipartidista y la realización de la Primera y Segunda Conferencia Guerrillera del Bloque Sur, en 1964 y 1966. Es en esta última cuando se define con claridad la orientación táctica y estratégica de las FARC, como "guerrilla de nuevo tipo" por el legendario Jacobo Arenas.

"(…)los destacamentos guerrilleros del Bloque Sur nos hemos unido en esta Conferencia y constituido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que iniciarán una nueva etapa de lucha y unidad con todos los revolucionarios de nuestro país, con todos los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales, con todo nuestro pueblo, para impulsar la lucha de las grandes masas hacia la insurrección popular y la toma del poder para el pueblo", dice la declaración política de la Segunda Conferencia Guerrillera del Bloque Sur.

El tema agrario fue fundamental en su incidencia, aunque tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, el carácter de la democracia se convirtió en factor importante también. El Estado violento, cerrado a las libertades públicas y a las garantías democráticas, fue entendido por los guerrilleros como un obstáculo para la reforma agraria y los cambios sociales y para la existencia de partidos políticos de oposición y de izquierda en el sistema bipartidista.

Desde las dictaduras conservadoras, a partir de 1946, los latifundistas armaron bandas criminales a su servicio, apoyadas por la policía chulavita y el Ejército, para impedir la lucha agraria de los campesinos. Fue una manera de cerrar

las posibilidades de la lucha democrática. Numerosos dirigentes campesinos fueron asesinados y encarcelados y otros adoptaron el camino de las armas para enfrentar el terrorismo de Estado.

En respuesta a la violencia reaccionaria, promovida desde las alturas del poder, surgieron los primeros grupos guerrilleros en la mitad del siglo pasado. "Manuel Marulanda Vélez", comandante de las FARC-EP hasta su muerte, los enumera así en su célebre texto *"Cuadernos de campaña"*:

"Bajo la dirección de los liberales

a. A partir de 1950, Bilbao, Horizonte. La ocasión, La Quebrada y Rioverde.
b. A partir de 1951, Herrera, El Agarre y El Socorro. Todos en el municipio de Rioblanco.

Bajo la dirección de los comunistas

a. A partir de 1949, Chicalá, Horizonte, La Marina e Irco, municipio de Chaparral.
b. A partir de 1950. El Davis, municipio de Rioblanco; Paujil, Peñarrica, municipio de Ataco.
c. A partir de 1951, Córdoba, Sucre, municipio de Chaparral.
d. A partir de 1952. El Davis II, municipio de Chaparral, Cambrín, municipio de Rioblanco y Saldaña o el 'Infierno', municipio de Ataco.
e. En 1953: Calamar, en el municipio de Chaparral, línea divisoria con el de Ortega."

La Primera Conferencia Guerrillera del Bloque Sur, el 20 de julio de 1964, adoptó el Programa Agrario que se convirtió en una ley de la organización guerrillera. La definió así: "A la reforma agraria de mentiras de la burguesía oponemos una efectiva reforma agraria revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano, entregando en forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador". Es lo que define con claridad, desde la perspectiva de las FARC, la génesis del conflicto, afectada por la precariedad de la democracia y el despotismo del poder de la oligarquía dominante.

Las FARC-EP, convertida en una fuerza guerrillera política y militar, se convirtieron en parte fundamental de la realidad colombiana. Su naturaleza política, mucha veces soslayada por la "gran prensa" y los belicistas, ha sido reconocida aun por sectores de la burguesía que han aceptado el diálogo en búsqueda de la solución política del conflicto mediante un acuerdo nacional.

La pluma de estirpe campesina, pero clara y precisa, de "Manuel Marulanda Vélez", narra así lo que calificó como un salto a 1964, cuando surgieron las FARC con el antecedente de la resistencia armada campesina y de otros grupos guerrilleros de mediados del siglo pasado: "Saltamos a 1964. En mayo de este año, previa una gigantesca campaña de prensa reaccionaria contra la imagen de 'república independiente' creada por el Pentágono norteamericano para descalificar las regiones campesinas donde los campesinos desarrollaban una vida independiente de la influencia de los partidos tradicionales,

la represión oficial inicia una nueva etapa guerrillera. El primer blanco de esta guerra civil no declarada fue Marquetalia y luego extendida a otros lugares como Riochiquito, El Pato y Guayabero(…)." (Cuadernos de Campaña).

Cuánta tragedia y cuántas muertes de colombianas y colombianos no se hubieran evitado, si el gobierno prepotente y autoritario de Guillermo León Valencia (conservador), en 1964, segundo del Frente Nacional, engendro antidemocrático de la oligarquía bipartidista, hubiera aceptado el llamado de los campesinos del sur del país y de tantos dirigentes políticos de posiciones democráticas, para establecer el diálogo y la solución política del conflicto social en la defensa de la tierra y de los derechos de los campesinos. Así surgieron las FARC-EP que se convirtieron en una fuerza política y militar de influencia en el país. Es un hecho político y social innegable si se hace la lectura auténtica y veraz de la historia colombiana.

Timoleón Jiménez, comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP tras el asesinato de Alfonso Cano, sucesor de Manuel Marulanda, explicó las razones por quá años después a la sigla FARC le agregaron las letras EP: "La Séptima Conferencia Nacional Guerrillera celebrada en el año 1982, dispuso que se añadiera a las cuatro letras de nuestra sigla FARC las letras EP, que nos darían a conocer en adelante como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, con el propósito de expresar que a nuestro carácter político militar revolucionario se añadía un vínculo indestructible con la lucha de masas del pueblo colombiano, que las FARC perseguíamos la toma del poder para nuestro pueblo, partiendo de la idea fundamental de que sería ese pueblo el que

unido, organizado y movilizado debía protagonizar los profundos cambios que reclamaba la patria. No ha sido nunca nuestra idea suplantar al pueblo de Colombia, obrar a su nombre sin contar con su respaldo, pretender imponerle una u otra forma de lucha. Nuestros enemigos, los más rabiosos enemigos del pueblo colombiano, siempre se han empeñado en presentarnos como una gente extraña, aparecida quizás de dónde, cargada de ideas foráneas, ajena por completo a las realidades históricas, económicas y sociales de nuestro país. Nada más falso".

Cincuenta años después, en el gobierno actual de Juan Manuel Santos, las FARC-EP están sentadas en una mesa de diálogo en La Habana, buscando la paz con democracia y justicia social. Aunque enfrentando las mismas mezquindades de la clase dominante, pero con evidentes logros: tres de los seis puntos de la agenda han sido adoptados (Desarrollo Agrario Integral, Participación Política y Solución al problema de las drogas ilícitas), así sea de manera parcial. Al tiempo están en discusión los temas de víctimas y del fin del conflicto, este último por una comisión de militares y guerrilleros.

Es la demostración del fracaso de la lucha contrainsurgente. Plan Laso y Plan Colombia, de diseño yanqui, mas todos los planes militares con asesoría internacional, fracasaron porque no lograron el objetivo de aplastar a las guerrillas, incluyendo los planes militaristas de la "seguridad democrática" del uribismo mafioso.

Es lo que demuestra que el único camino es el diálogo, el de la solución política que modifique las causas del conflicto. Los 50 años de las FARC-EP son parte de la historia colombiana que no puede ignorarse.

-Capítulo II-

Limpios y Comunes*

Alfredo Molano Bravo**

Manuel Marulanda 'Tirofijo' escribió en 'Cuadernos de Campaña' sobre El Davis: "Era un inmenso refugio humano en el corazón de la zona de operaciones". / Archivo - El Espectador

El Davis fue una hacienda ganadera en la hoya del río Cambrín, sobre el lomo de la cordillera Central, en el sur del Tolima, donde los Loaiza crearon un comando guerrillero. Con la llegada de las columnas de marcha que venían de Coyaima, Irco, Chaparral, y de cientos de familias sueltas, el movimiento llegó a ser un pueblo de más de 2.000 habitantes. "Era —escribió Manuel Marulanda en Cuadernos de Campaña— un inmenso refugio humano en el corazón de la zona de operaciones, cuya vida transcurría en condiciones de organización exiliada en una región liberal".

En esa época de asedio de los chulavitas, y un poco más tarde del Ejército, los bienes

* Tomado del periódico El Espectador

** Profesor y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, periodista y escritor.

eran colectivos —"hasta la ropa era compartida entre familias"— y la comida muy escasa. Los adultos conformaban partidas para salir de la zona a buscar comida o a realizar operativos militares. Las mujeres se encargaban de coser y lavar la ropa y de la "rancha" o preparación de alimentos; los viejos cultivaban maíz, fríjol, yuca, plátano y caña panelera, y los niños ayudaban en diversas labores, incluida la preparación militar en un comando llamado Batallón Sucre. Un guerrillero recuerda: "Nadie podía estarse quieto o haciendo pereza. Todos y todas teníamos que estar haciendo algo, aportando para la subsistencia". Había hospital, campo de paradas, fábrica de cotizas de fique, almacén general o comisariato, comedores generales, armería, escuela, guardería para niños, juez, y se llegó a construir refugios antiaéreos.

Las comisiones que salían a combatir solían ser mixtas, compuestas por unidades de los Loaiza o limpios o liberales, y de los comunes, es decir, comunistas, y para coordinar las operaciones fue creado el Estado Mayor Unificado, compuesto por ambas fuerzas. Con el pasar de los días, las acciones conjuntas dieron lugar a una diferencia profunda: las armas ganadas en los combates —alegaban los comunistas— no eran propiedad privada de los comandantes sino propiedad colectiva del movimiento. En realidad, la organización de los limpios era una especie de gamonalismo armado contra los conservadores y la policía chulavita. Los comunistas, orientados por el Partido, tenían un programa social que reivindicaba los derechos a las tierras baldías y las garantías políticas a la oposición. Hacia finales de 1951 El Davis se dividió en dos sectores: El Davis propiamente dicho, mandado por Isauro Yosa, Mayor Lister, y Luis Alfonso Castañeda, alias Richard, llamados "Comunes", y el sector de La Ocasión de los liberales, o "Limpios", donde vivían don Gerardo y sus leales.

El rompimiento definitivo se produjo cuando los comunistas adoptaron el programa aprobado por la llamada Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional, conocida como Conferencia Boyacá, reunida el 15 de agosto de 1952, a la que asistieron delegados de las guerrillas del Llano, de Santander, de Antioquia y de Sumapaz. La Conferencia —cuyo verdadero lugar de encuentro

fue Viotá, Cundinamarca— se proponía la construcción de un gobierno popular que restableciera libertades democráticas, decretara una reforma agraria —"que pusiera en práctica el principio de la tierra es para quien la trabaja"—, devolviera la integridad de las comunidades indígenas, nacionalizara las minas, separara la Iglesia del Estado, creara un ejército nacional y democrático y adoptara una política internacional independiente.

Los liberales no asistieron a la reunión y el conflicto entre ambas tendencias quedó planteado. Los combates entre liberales y comunistas fueron frecuentes y muy fuertes porque "se llevó a cabo —escribió Marulanda— entre hombres de ley que prefieren morir antes que huir". En un ataque liberal al comando de El Davis perdieron la vida dos hijos de don Gerardo Loaiza y uno de los García. Charro Negro, Ciro Trujillo y Marulanda se solidarizaron con la causa comunista.

La Conferencia Boyacá se desarrolló mientras El Davis era cercado por las tropas del gobierno y, quizá por esta razón, como una estrategia para reducir la presión sobre su centro, las guerrillas intentaron tomarse la base aérea de Apiay, que por lo demás fue un descalabro, y provocaron combates en zonas periféricas como Calarma, Las Hermosas, Gaitania y Santiago Pérez. Hay que recordar que por aquellos días las guerrillas de Guadalupe en el Llano emboscaron un contingente del Ejército en Puerto Gaitán, Meta, y le causaron 98 bajas. Ramsay, un investigador norteamericano, calcula que en 1951 las guerrillas del Llano tendrían unos 3.000 hombres; las del sur del Tolima, 6.000, y las de Cundinamarca y Antioquia, 12.000. Es decir, unas 36 unidades orgánicas en conjunto, sin unidad de mando. Por su parte, el Ejército tenía 15.000 soldados, y la Policía, 25.000. La situación era muy peligrosa para un gobierno debilitado en lo político.

En el sur, la respuesta del gobierno conservador fue la represión brutal con las FF. MM. o con las bandas de chulavitas y pájaros. Se masacró el pueblo de Belalcázar, Cauca; se bombardeó El Líbano; los diarios El Espectador y El Tiempo y las casas de López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo fueron incendiados. Según el libro La Violencia en Colombia, había en el país focos de resistencia armada contra el gobierno que tendían a conformar un movimiento guerrillero unificado del que la Dirección Liberal Nacional fue un apoyo vergonzante y calculador y el Comité Central del Partido Comunista un orientador clandestino. No cabe duda de que esta amenaza fue un factor definitivo del golpe de Estado contra Laureano Gómez encabezado por Rojas Pinilla —13 de junio de 1953— e impulsado por el liberalismo y por una mayoría conservadora.

Rojas Pinilla inauguró su gobierno bajo el lema "No más sangre, no más depredación; paz, justicia y libertad para todos". A los pocos días decretó una amnistía y un indulto general, tanto para guerrilleros como para aquellos servidores públicos que "por causa de excesivo celo en el cumplimiento de sus funciones" hubiesen cometido delitos. Los aviones del gobierno bombardearon con hojas volantes las zonas de conflicto llamando a la entrega de armas.

Tras un corto período de completo desconcierto y con el respaldo de la DLN, entregaron armas las fuerzas del Llano, Magdalena Medio, Antioquia, Cundinamarca. Al sur del Tolima llegó a caballo una comisión encabezada por los doctores Rafael Parga Cortés, Ismael Castilla y Severiano Ortiz, conocidos jefes liberales de Chaparral, a negociar la entrega. Por otra vía, Alfonso Mejía Valenzuela, mayor del Ejército, y un sacerdote Larrazábal buscaron acuerdos con los liberales, quienes, cansados de la guerra, aceptaron poco a poco las condiciones.

Los generales Mariachi, Valencia y Pasillo, que habían pertenecido al sector comunista y que constituían una de las fuerzas más representativas de los limpios, entregaron sus armas en Santa Ana. Los demás mandos fueron haciéndolo paso a paso. Don Gerardo Loaiza fue nombrado alcalde de Rioblanco. Los comunes sospecharon que se trataba de una nueva fase del conflicto en la que los limpios se volverían aliados del gobierno y cambiarían sus viejos fusiles por armas de dotación oficial contra las fuerzas de los comunes.

Las guerrillas del Bloque Sur o de El Davis no aceptaron los términos propuestos por Rojas, al que llamaron "el delincuente más villano del país, quien conquistó su título a base de asesinatos y masacres… (como) la matanza colectiva en la Casa Liberal de Cali siendo comandante del Ejército en 1949", y uno de los más develados "servidores del imperialismo norteamericano y su política de guerra".

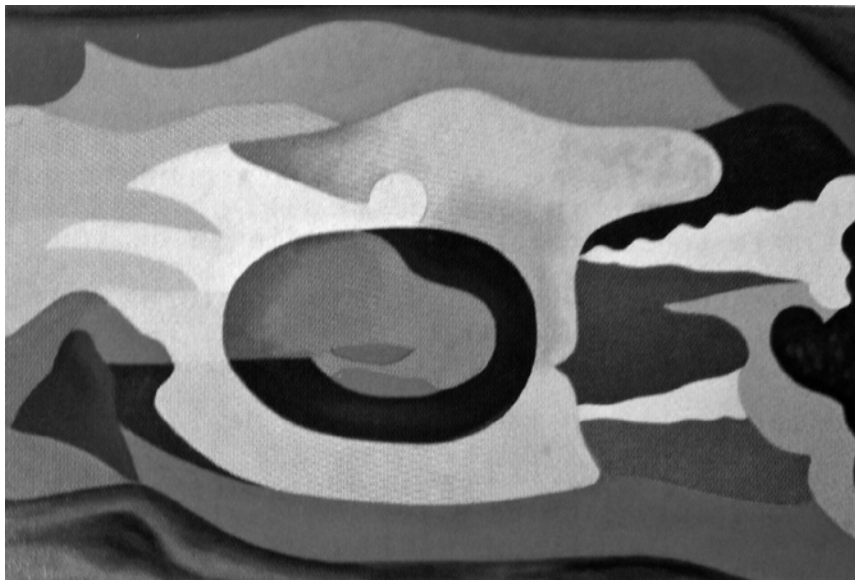
Cabe recordar que Marulanda fue testigo en ese año de las quemas de Ceilán, El Dovio, La Primavera y de la más cruda violencia en el Valle, dirigida por un aliado de Laureano Gómez y de Rojas Pinilla, Ángel María Lozano, alias el Cóndor. Ante el Senado, en 1959, Rojas confesó: "…él me ayudó en la pacificación del departamento (del Valle)".

En octubre de 1953 el Bloque Sur llamó a continuar la lucha como movimiento de autodefensa de masas hasta lograr "el retiro de todas las fuerzas represivas; la devolución de las fincas a las víctimas de la política de sangre y fuego; la reconstrucción de sus viviendas; la reposición de sus bienes; el suministro de auxilios

en dinero, semillas, herramientas; la construcción de escuelas, centros sanitarios, vías de comunicación, y la parcelación de tierras". Ante la división con los limpios, los comunes crearon el Ejército Revolucionario de Liberación, con una organización "similar a la del Ejército Nacional": compañías, escuadras y guerrillas, jerarquías —mayores, capitanes, sargentos— y un estricto reglamento, que incluía a la población civil.

Rojas Pinilla había decretado la amnistía y el indulto de manera condicional y dio un plazo para la entrega de armas, al término del cual volvió a declarar la guerra al movimiento guerrillero, que brevemente operó de manera unificada. Hay que tener en cuenta que Rojas fue un protegido de Mariano Ospina Pérez, que lo nombró director de Aerocivil y ministro de Comunicaciones. Toda la región se vio entonces envuelta en sangrientos combates. Más de 5.000 hombres, dice Marulanda, apoyados por la aviación y estrenando fusiles punto 30, cercaron El Davis. Los liberales pactaron de nuevo un acuerdo; los comunistas constituyeron las "comisiones rodadas" al mando de Ciro Trujillo, Charro Negro, y Andrés Bermúdez, El Llanero, se quedó con 75 hombres en la zona para defenderla; finalmente fueron copados por el Ejército y sus mandos fusilados. La población civil fue evacuada al ritmo y en la medida en que los comandos se abrían paso.

Al desintegrarse El Davis, Richard salió con su gente para Calarma; Avenegra, otro de los mandos, se perdió por los lados de Natagaima, y Yosa se refugió en Gaitania. Marulanda escribió: "Al cesar en el año 53 la lucha guerrillera, por entrega de la mayoría de los combatientes liberales, los comunistas subjetivamente no podían continuar por su cuenta y riesgo" el movimiento. Entonces optó por constituir, en compañía de Charro Negro, un comando clandestino, "absolutamente móvil", que se conoció como el de "Los Treinta", con 26 hombres y cuatro mujeres.



La gran mayoría de cuadros —tanto liberales como comunistas— se fundaron como colonos en las regiones de Gaitania y San Miguel. "Toda esa tierra la abrimos a hacha y sembramos comida y café", cuenta Jaime Guaracas. Balín, quien fue guardaespaldas de Marulanda, recuerda: "colonizamos la zona entre los 30 que quedamos. Hicimos trochas para sacar madera y hacer fincas, comisionábamos para el Cauca y para el Huila, para Caldas y para el Valle; en todas partes creábamos cadenas y enlaces; se consiguieron préstamos de la Caja Agraria para cultivar café, se sembró comida y hasta ganado llegamos a tener".

Los Treinta se emplazaron entre Marquetalia —llamada en ese tiempo el Támaro— y Riochiquito, mientras Lister, Richard, Cardenal formaron una columna de marcha que se desplazó con armas, mujeres, niños y bestias desde Gaitania hasta Villarrica, en el oriente del Tolima, por los caminos de Prado, Dolores, La Colonia. Allí encontraron a Ciro Trujillo. Las organizaciones que existían en Sumapaz y Tequendama albergaron el destacamento. Años después, Isauro Yosa contaba: "Villarrica era una región donde uno podía moverse tranquilo porque todos sabían quiénes éramos y a qué habíamos venido. Los camaradas eran muy respetados. Yo me mantenía dando charla, dando orientación, organizando, porque sabíamos que la calma era corta. Si la paz anochecía, no amanecía".

-Capítulo III-

Nacimiento de las Farc: De El Davis a Villarrica

Alfredo Molano Bravo

El líder izquierdista Juan de la Cruz Varela (centro) cuando ya era el líder campesino que inspiró el movimiento guerrillero. / Fotos: Archivo - El Espectador

Quienes impulsaron y festejaron el golpe de Rojas Pinilla tenían calculado que su papel de árbitro duraría entre el 13 de junio de 1953 y el 7 de agosto de 1954. Rojas no pensaba así y presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente (Anac) que sesionaba —desde cuando fue convocada por Laureano Gómez— dos proyectos íntimamente ligados: la elección de Rojas Pinilla como presidente legítimo y una ley que prohibía el comunismo. Sustentó el primer proyecto en la imperiosa necesidad de consolidar el orden público y el segundo en la infiltración comunista.

Los partidos tradicionales, que ya comenzaban a temer la instauración de una

dictadura militar —salvo el laureanismo y sectores marginales del Partido Liberal—, sentaron su protesta. Mariano Ospina, mentor del general y jefe supremo, quien además presidía la Anac, hizo aprobar las normas en la reunión convocada para agosto de ese año. El movimiento estudiantil, muy cercano al liberalismo, organizó en junio una manifestación en memoria de Gonzalo Bravo Pérez, caído durante una protesta contra Abadía Méndez en 1928.

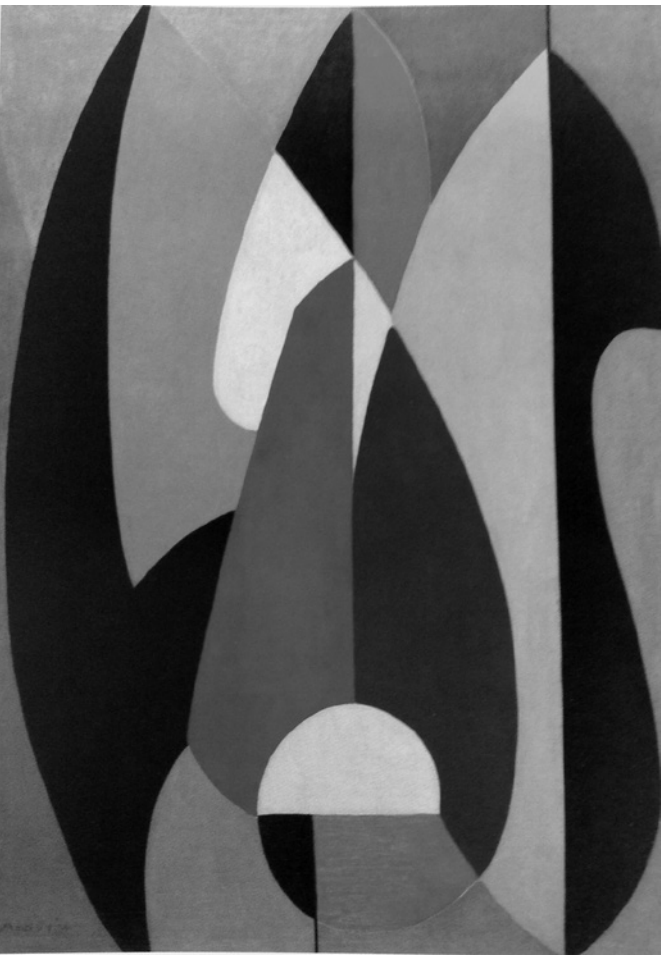
En la puerta de la gloriosa Universidad Nacional cayó esta vez Uriel Gutiérrez. Al día siguiente hubo otra manifestación aún más grande y el batallón Colombia, acabando de regresar de Corea, disparó contra los estudiantes: 10 muertos y 40 heridos. El Gobierno declaró que infiltrados comunistas y agentes laureanistas habían disparado contra la tropa. Durante tres meses el Gobierno agitó esta acusación por todos los medios: "El comunismo soviético busca apoderarse de la patria".

La ley anticomunista fue aprobada como acto legislativo número 6, firmado por Mariano Ospina Pérez y el ministro Lucio Pabón Núñez. La ley colombiana fue copiada de The subversive activities control act of 1950, impulsada por el senador Joseph McCarthy. Esta enmienda, pieza maestra de la Guerra Fría, fue la herramienta para desplegar la más brutal persecución de la izquierda norteamericana, cuyas más conocidas víctimas fueron los esposos Julius y Ethel Rosemberg, acusados de espionaje a favor de la URSS y ejecutados en la silla eléctrica en 1953. Fueron perseguidos también Charles Chaplin, Arthur Miller, Elia Kazán, John Steinbeck.

Con base en esta ley se impidió la entrada al país de Pablo Neruda. La ley que prohibía el comunismo en el país se sustentaba en los hechos del 8 y el 9 de junio y en el levantamiento del 9 de abril. La Corte Suprema de Justicia concluyó en diciembre que "en las muertes de los estudiantes no tomaron parte el comunismo ni la subversión laureanista".

Los culpables de pertenecer, colaborar, simpatizar con el comunismo podían ser condenados a prisión entre uno y cinco años o confinados en una colonia penal agrícola. El Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) fue el encargado de definir quién era "rojo". Para Rojas, "guerrilleros intelectuales" eran Eduardo Santos y Alberto Lleras. De otro lado, la ley buscaba ganar el apoyo del gobierno de EE. UU. para la reelección del "segundo libertador", como gustaba ser llamado el jefe supremo. La política de guerra fría adoptada por Rojas Pinilla tuvo su más cruel y brutal desarrollo en la llamada Guerra de Villarrica, situada en la falda occidental del Páramo de Sumapaz, en el oriente del Tolima.

A partir de los años 40 el movimiento agrario entró en una fase política y muchos de sus dirigentes fueron a elecciones con distinta suerte. Juan de la Cruz Varela fue elegido a la asamblea del Tolima entre 1945 y 1949. Gaitán ganó las elecciones de 1947 y al año siguiente fue asesinado. En Fusa y Pasca, los nueveabrileños se tomaron la alcaldía y apresaron a las autoridades, igual a lo sucedido en Ceilán, Valle, y en muchos municipios liberales del país. El levantamiento duró una semana.



En Villarrica, que era un pueblo liberal, hubo tres muertos conservadores el 10 de abril, pero rápidamente se retornó a la normalidad. En agosto, Laureano había dicho desde España: "Creo que la guerra civil es inevitable, quiera Dios que la ganemos nosotros". La violencia conservadora comenzó en agosto en San Bernardo, donde miembros de la policía chulavita asesinaron a tres y dejaron 15 heridos.

En octubre, Juan de la Cruz sufrió un atentado en Arbeláez, pueblo eminentemente conservador, después de lo cual el dirigente se refugió en el alto Sumapaz. Justamente en ese año fue nombrado director de la colonia de Villamontalvo Eduardo Gerlein, un barranquillero que andaba siempre escoltado por la chulavitas y que había llegado a conservatizar la región. Según Rocío Londoño, pocos días después asesinaron a 140 personas en la vereda San Pablo cuando los llevaban presos para la cárcel de Cunday.

Los homicidios, la quema de ranchos y la violación de niñas continuaron durante todo el año. Al final los campesinos habían organizado su resistencia bajo la modalidad de autodefensas campesinas. Su primera operación consistió en atacar una patrulla del Ejército, allí resultaron muertos 19 soldados. El Gobierno bombardeó la vereda de Mercadillas, donde se desarrolló la acción.

Varela fue uno de los principales organizadores de la autodefensa. Los más importantes grupos se organizaron en las veredas El Roble y Galilea, en Villarrica, y El Palmar, en Icononzo. En esta vereda ingresó Varela al Partido Comunista en 1952. Una asamblea de autodefensas lo eligió comandante del grupo junto con otros campesinos: Luis Enrique Hernández, alias Solito; Salomón Cuéllar, alias Vencedor, y Rafael Castellano, Tarzán, originalmente de las autodefensas de Viotá; Víctor Jiménez, alias Roncerías, y Luis Mayusa, alias Gavilán, que había sido parte del comando de Chicalá, Tolima, bajo el mando de Isauro Yosa.

El ataque a El Palmar se produjo en diciembre de 1952 y dio lugar a otra marcha de unas 4.000 personas hacia Villarrica. Los enfrentamientos fueron constantes y sangrientos. De Villarrica la marcha continuó hacia el alto Sumapaz buscando refugio en el páramo, donde Varela reorganizó a la gente y formó las autodefensas

de la región. Los insurgentes atacaron el puesto militar de La Concepción, la base militar más importante del Ejército en el alto Sumapaz.

Con Varela en el Partido Comunista, el grueso de las autodefensas siguió las directrices del comité central, uno de cuyos más ilustrados dirigentes, Gilberto Vieira, había orientado la lucha agraria en la región del Tequendama. Varela participó en la célebre Conferencia Boyacá en 1952; en julio de 1953 tomó contacto con el general Duarte Blum, a raíz de lo cual el Gobierno atendió las demandas de las autodefensas y convinieron una entrega de armas que, según los viejos guerrilleros, fue más bien un acto simbólico porque la mayoría de armas buenas quedaron en manos de los guerrilleros. Uno de los puntos principales de la exigencia de los campesinos fue un plan de parcelación y de devolución de las tierras despojadas por los conservadores a sus legítimos propietarios. En la entrega de armas apareció Avenegra, que llegó de la región de Natagaima, donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior.

El Gobierno creó la Oficina de Rehabilitación y Socorro y el Instituto de Colonización e Inmigración. El Partido Comunista, que conocía de sobra el anticomunismo del general, no compartió del todo la decisión y adicionó a las demandas agraristas la amnistía general y el levantamiento del Estado de Sitio, para lo cual creó el Frente Democrático. Seis meses después se hicieron regulares las quejas de los campesinos —que al regresar a sus tierras las encontraron ocupadas o vendidas— y los programas de rehabilitación nunca arrancaron.

El mismo general Duarte Blum, que había hecho los acuerdos y recibido las armas, declaró a la misión militar norteamericana que "esas promesas de ayuda económica no se han cumplido". El tesorero del Partido Liberal dijo: "Se ofrecen pajaritos de oro y todo no queda más que en un pantalón de dril, una camisa y un salvoconducto". En estas condiciones, numerosos grupos de campesinos que se habían desmovilizado se enmontaron de nuevo con sus familias.

El coronel Cuéllar Velandia, cinco días después de ser nombrado jefe civil y

militar del Tolima, en marzo de 1955, denunció "la agitación comunista en Ortega y Villarrica" y dio comienzo a una "drástica limpieza… a fin de poner coto a la depredación". Poco después, el oriente del Tolima fue declarado zona de operaciones militares: se decretó el toque de queda, se levantó un empadronamiento general y se construyó un campo de concentración en Cunday.

Hubo redadas generales a mediados de abril en las que fueron "trasladadas a centros de trabajo" unas 4.000 personas y 250 presos fueron remitidos al campo de concentración. Uno de ellos fue Isauro Yosa, Mayor Lister. Paralelamente, el Gobierno emitió un decreto que limitaba la libertad de prensa e impedía entregar información relacionada con actos ilegales o deshonrosos de las FF. AA., bajo pena de cárcel. La guerra comenzó de nuevo. A fines de abril de 1955 el Gobierno informó de manera sucinta sobre las operaciones militares, que "en primera fase se habían hecho para despejar el eje Cunday-Villarrica-Berlín.

El Batallón Colombia se apostó cerca de Villarrica y los combates entre fuerzas reagrupadas del Sumapaz y el Ejército fueron aumentando en frecuencia y en composición de fuerzas. En mayo hubo un enfrentamiento que duró tres días, en el que aparece ya la figura de Luis Morantes, que el país conocerá como Jacobo Arenas, y quien había continuado la agitación emprendida por Erasmo Valencia.

Juan de la Cruz Varela le escribió al Gobierno denunciando que la represión del Ejército había obligado a 2.000 trabajadores a refugiarse en las montañas para salvar sus vidas. El Gobierno aducía que la región había sido infiltrada por el comunismo soviético y que si había problemas de tierra era porque los comunistas se habían apoderado de las tierras de humildes labriegos.

Navas Pardo, amigo íntimo de Rojas y jefe del Ejército, decía que en el país había 15.000 bandidos en operación, de los cuales 3.000 era comunistas. Los militares hablaban de que en el Tolima se habían creado "superestados". Al embajador norteamericano le comunicó que Lister, "un líder de la guerra civil española", había muerto con otros de origen alemán, checo e inclusive ruso.

El embajador de EE. UU., en un informe al Departamento de Estado escribió que el análisis de la Brigada de Orden Público del Tolima ha llegado a la conclusión de que "todos los habitantes del área rural son bandidos en potencia". Pero el análisis falla en presentar evidencia satisfactoria de infiltración e inspiración comunistas en la acción guerrillera. "La lucha en los alrededores de Villarrica —recordaba un guerrillero— duró entre seis y ocho meses defendiendo posiciones… decíamos que tenían que matarnos para poder sacarnos de ahí".

Los guerrilleros, bajo el mando de comandantes que tenían experiencia de la resistencia tanto en Sumapaz como en el sur del Tolima, organizaron la que se llamó "La Cortina", una línea defensiva de trincheras donde esperaban impedir el avance de las tropas oficiales. res, inclusive colchones, camas, gallinas" (ver recuadros).

La embajada norteamericana informó a su gobierno que entre el 7 y el 10 de junio Villarrica había sido destruida por el bombardeo aéreo y por el incendio causado por las bombas napalm. La Fuerza Aérea "nos informó privadamente que la FAC arrojó aproximadamente 50 bombas napalm fabricadas aquí (en Colombia)", lo que permitió la captura de la Colonia, que había sido zona de colonización desde los años 40 y que el Ejército consideraba la sede del movimiento comunista. Felipe Salazar Santos, jefe liberal del Tolima, escribiría más tarde: "Fue una ocupación militar y política de 'tierra arrasada'… contra todo lo sospechoso de comunista". Según Navas Pardo, la ofensiva "rompió la organización comunista en el oriente del Tolima.

Desde el golpe militar, Rojas entró en conversaciones con el gobierno de EE. UU. para comprar armas por un valor de 150 millones de dólares, suma que era superior al total de asistencia militar a América Latina. Se dijo que el Gobierno gastó la cosecha cafetera de 1954, que alcanzó los más altos precios de la década, en armas y pertrechos. En mayo de 1955 había comprado 3.000 bombas napalm, que, como se sabe, son gasolina espesada que al estallar se derrama a una temperatura de 700 grados centígrados. No obstante, el embajador norteamericano cuestionó el negocio de las armas, consideradas por él mismo como "de terror" porque supondría un uso que podría ser desaprobado por todo el continente.

Sin embargo, ante la insistencia de los militares colombianos que habían determinado que la guerra contra las guerrillas se debía terminar el 8 de junio para

conmemorar el golpe de Estado, aceptó que "la misión aérea en Bogotá auxiliara técnicamente a la FAC en la preparación de bombas. Así concluyen Silvia Galvis y Alberto Donadío en su biografía sobre Rojas Pinilla: "El bombardeo fue de manufactura múltiple: asesoría norteamericana, materia prima europea y mano de obra colombiana".

La violenta y desproporcionada ofensiva de las FF. MM. sobre Villarrica obligó a los guerrilleros no sólo a romper la cortina, sino a cambiar radicalmente de estrategia y a convertir su fuerza en lo que se llamó guerrilla rodada o móvil. Estas guerrillas hostigaron al Ejército con el objetivo de permitir que la población civil fuera evacuada hacia el alto Sumapaz, donde el movimiento de autodefensa organizado por Varela había sido y seguía siendo muy

fuerte, El Ejército temía el enfrentamiento y en cierta medida lo evitó a pesar de bombardeos y ametrallamientos esporádicos. Otro contingente civil compuesto emigró hacia la Hoya de Palacio en las cabeceras del río Duda, que bota sus aguas al Guayabero. Fueron marchas verdaderamente heroicas. Cientos de familias sin comida, con niños, animales domésticos, bártulos.

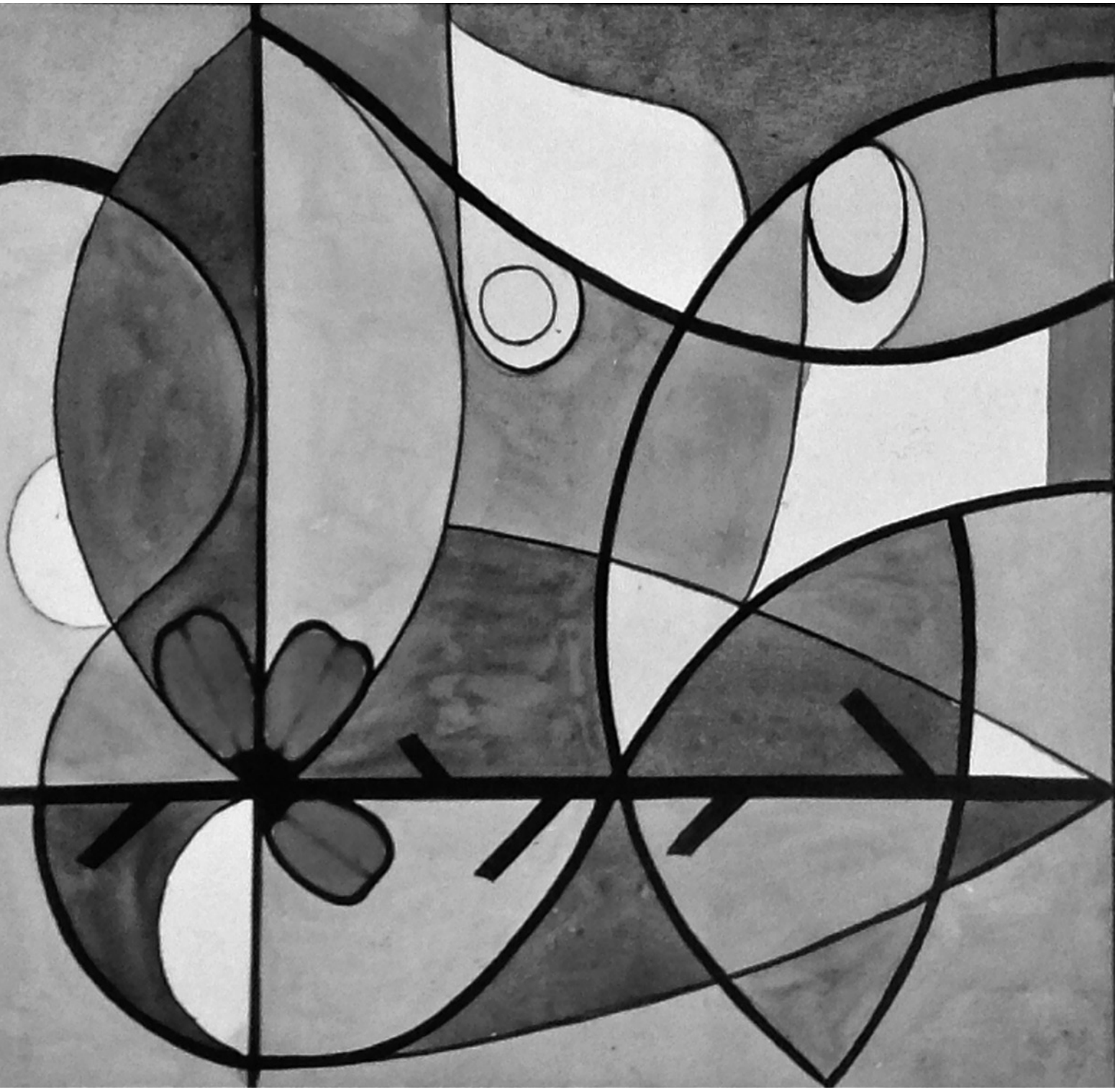
Perseguidas por tierra y aire por las FF. MM., lograron en seis meses escapar de la ofensiva e instalarse en las regiones altas del macizo de Sumapaz. Otras fueron evacuadas y fundaron colonizaciones en las vertientes del río Guayabero, del Ariari y de El Pato. Toda la vertiente del Orinoco. Algunas regresaron a Villarrica.

Rocío Londoño afirma que los comandantes guerrilleros formaron cinco contingentes, "uno al mando de Richard que, como se recordará, había llegado desde El Davis; el segundo al mando de Diamante; el tercero al mando de Palonegro; el cuarto con Avenegra, también del sur del Tolima, y el quinto con Tarzán, venido del Tequendama, y de Luis Mayusa, Gavilán. En diciembre se reunió una conferencia de comandantes a la que asistieron, entre otros, Varela, Vencedor, y Anzola, dirigentes guerrilleros, con el fin de organizar la resistencia armada y la colonización de las regiones de La Uribe y El Duda.

También se habló de crear un ejército de liberación nacional. Entre 1955 y 1957 las dos estrategias complementarias de sostener una guerra de guerrillas rodadas desde el Guayabero y el Caguán hasta el Magdalena, y al mismo tiempo colonizar la vertiente oriental del Sumapaz desde el Ariari, en Meta, hasta El Pato, en Caquetá-Huila, se pusieron en práctica. Fue lo que se ha llamado la colonización armada. Mientras esto sucedía y Rojas fundaba la Tercera Fuerza, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez firmaban el Pacto de Benidorm en España, base del Frente Nacional.

En el oriente del Tolima, Juan de la Cruz Varela entró en conversaciones con Rafael Parga Cortés —que conversaba también con Mariachi en Planadas, en el sur del departamento—, exigiendo garantías del Gobierno para volver a sus fincas y regresar a sus dueños legítimos las tierra usurpadas, abrir líneas de crédito barato, dotar de herramienta e insumos a los agricultores, abrir la cárceles, adjudicar baldíos sin costo, levantar el estado de sitio y desmontar las "guerrillas de paz" y las bandas de pájaros y chulavitas.

El gobierno de Alberto Lleras instituyó el Plan Nacional de Rehabilitación Nacional. Manuel Marulanda Vélez se acogió y, sin entregar armas, fue nombrado inspector de la carretera entre Planadas, Gaitania, San Luis y Aleluya. Los combatientes y sus familias que se refugiaron en las regiones de Marquetalia y Riochiquito y los que lo hicieron en el Ariari, el Guayabero y El Pato, adelantarían el desmonte de selvas y la fundación de fincas. Serían las que los militares y Álvaro Gómez llamarían Repúblicas Independientes.



Selección de textos de Alfredo Molano sobre orígenes del conflicto armado

-Capítulo III-

Asalto a Marquetalia

Alfredo Molano Bravo

La luna de miel entre Rojas Pinilla y los partidos tradicionales se comenzó a romper a principios de 1956. El precio del café se desplomó. De un promedio de 80 centavos de dólar la libra en el año 54, bajó en 1957 a 65 centavos libra. La economía, que hasta entonces se había mostrado solvente, se resintió y la banca y la industria acusaron creciente malestar. De otro lado, liberales y conservadores no tenían duda de que la intención del Jefe Supremo era hacerse reelegir por la ANAC entre el 58 y el 62, apoyado en la Tercera Fuerza, el nuevo partido. Para rematar, el enriquecimiento de la familia Rojas era comidilla de toda reunión. Belisario Betancur, Guillermo León Valencia, Alberto Lleras Camargo impulsaron una alianza conspirativa. La sede de la Andi se convirtió en el cuartel general donde se organizó la caída del régimen. La Iglesia y un sector de militares se unieron al movimiento y el 10 de mayo de 1957 Rojas y su familia salieron rumbo al exterior.

El 14 de junio, la FAC bombardeó con proyectiles de alto poder el altiplano de Marquetalia, que era la sede del comando de 'Marulanda'. / Archivo - El Espectador

Por aquellos días las columnas de marcha que habían huido organizadamente de Villarrica con cerca de 10.000 personas se fundaron en las regiones de El Pato, Guayabero y el Ariari, y crearon, según el general Valencia Tovar, las repúblicas independientes. Charro Negro, Manuel Marulanda y Ciro Trujillo dominaron, con unos pocos hombres armados, los caminos entre Riochiquito y Gaitania y dirigieron la colonización campesina armada de estas últimas zonas desde los campamentos guerrilleros de La Símbula en Cauca y El Támaro en Tolima. Según Jaime Guaracas —uno de los comandantes—, los guerrilleros tumbaron selva,

sembraron maíz y fundaron el pueblo de Riochiquito.

No eran estas zonas las únicas que habían vuelto a la pelea. Sumapaz, el norte del Valle, el oriente de Huila, el occidente de Cundinamarca, Quindío, el noroeste de Antioquia, el Magdalena Medio, guerrillas y cuadrillas de bandoleros retomaron las armas. A diferencia del gobierno de Rojas, que consideraba la violencia —a decir de Gonzalo Sánchez, gran estudioso del fenómeno— una gigantesca ola de criminalidad, para el Frente Nacional en sus primeros días se trataba de una verdadera guerra civil no declarada. Sobre esta premisa Alberto Lleras creó, un mes después de posesionarse como presidente, la Comisión Especial de Rehabilitación y, poco después, la Comisión Nacional Investigadora de las Causas de la Violencia, que iniciaron acercamientos con los grupos armados buscando negociar su desmovilización a cambio de programas sociales: tierras, créditos, vías, asistencia técnica, salud, educación. Las mismas promesas de siempre. El daño de la violencia en vidas había sido enorme: 240.000 homicidios.

El Gobierno puso el énfasis del plan de rehabilitación en el departamento del Tolima, donde era gobernador Darío Echandía, que ofrecía volver "a pescar de noche", y donde la violencia había sido particularmente brutal: 35.000 casas campesinas habían sido incendiadas. A pesar de los diagnósticos que mostraban la íntima relación de la tierra con la guerra, las inversiones se dirigieron principalmente hacia la construcción de obras públicas.

En 1959 se emplearon 6.700 hombres en 110 frentes de trabajo, en uno de los cuales Manuel Marulanda fue inspector jefe de carretera. Muchos de sus compañeros, sin desarmarse puesto que el programa no lo exigía, trabajaron bajo sus órdenes en la construcción de la carretera Aleluyas-El Carmen. El general Belarmino Pinilla, quien fue después comandante de la flotilla de helicópteros que ocupó Marquetalia, recuerda que "Tirofijo trabajaba de noche como taxista en Neiva para redondear el sueldo".

Los guerrilleros volvieron a trabajar el campo. Charro Negro recibió un préstamo y se dedicó a negociar bestias y a dar funciones de cine en los pueblos con una máquina que el programa le facilitó. Isauro Yosa compró una mejora

e hizo un hato lechero. Joselo se fundó en Planadas. Isaías Pardo abrió una finca. "Usted no se imagina lo que era ese hombre derribando monte", recuerda Jaime Guaracas, su compañero, que colonizó tierra en Gaitania. Marulanda compró una casa en Gaitania; mientras tanto, Ciro Trujillo se empeñaba en construir el pueblo de Riochiquito. Las guerrillas de autodefensa se transformaron en un movimiento agrarista. Charro Negro fue nombrado presidente de la Unión Sindical de Agricultores de Tolima y Huila, y Ciro Trujillo ocupó idéntico cargo en la Unión de Agricultores de Riochiquito y Tierradentro.

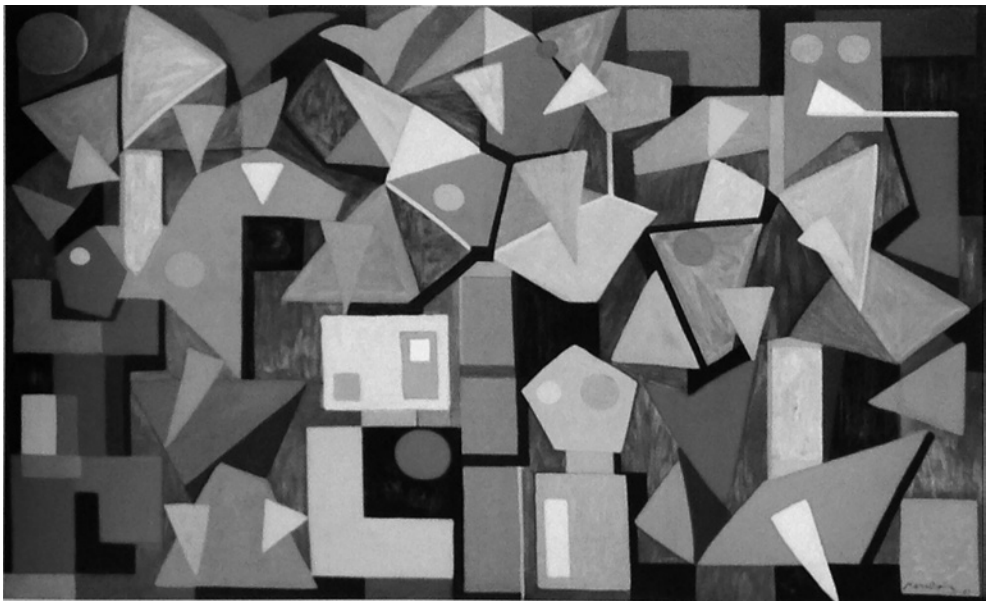
Cabe recordar que el 1º de enero de ese año Fidel Castro entró victorioso a La Habana y poco después el Che Guevara en Punta del Este acusó a Estados Unidos de importar a América Latina la Guerra Fría. En Colombia, el presidente Lleras Camargo había aprobado el Plan Lazo, a la sombra de la Alianza para el Progreso, siendo comandante del Ejército el general Ruiz Novoa, que había dirigido el Batallón Colombia en Corea. Se trataba de una estrategia que daba gran importancia a los efectos psicológicos de la acción cívico-militar inspirada en la doctrina de Seguridad Nacional. El triunfo de la Revolución cubana impulsó —como reacción a ella y a su influencia regional— la aplicación de esta teoría como una estrategia de contención del comunismo. Al ser nombrado Ruiz Novoa ministro de Guerra por el presidente Valencia (1962-1966), convirtió el Plan Lazo en fundamento de la guerra contrainsurgente.

El programa de rehabilitación integró también a excombatientes del liberalismo como los generales Mariachi y Arboleda, que se habían separado de los comunes y sostenían con ellos una guerra abierta. Mariachi acusó al movimiento agrario de Marquetalia del robo de 200 reses; Isaías Pardo respondió: "Las tomamos porque el Gobierno no nos ha cumplido las promesas". Mariachi invitó a Charro Negro a una reunión en Gaitania para arreglar el problema. Charro asistió. Se trataba de una emboscada de la cual no salió vivo.

Marulanda viajó a Neiva y a Ibagué a denunciar el asesinato. La respuesta del Ejército fue clara: "Ya vamos para allá a imponer orden". Marulanda entendió el mensaje y de regreso a Gaitania reorganizó a sus hombres, que dejaron abandonadas las herramientas de trabajo y volvieron a los fusiles. Era el 11 de enero de 1960.

El movimiento agrario de Marquetalia se transformó en Autodefensa Regular, que, según testimonio de Guaracas, fue creada "con la misión de estar patrullando, previendo cualquier peligro para poder trabajar más tranquilos". No obstante, Marulanda montó emboscadas contra el Ejército en las carreteras El Carmen y el Alto, donde les quitó varios fusiles a las tropas del Gobierno. La reacción de la Sexta Brigada fue, según el propio Mariachi, armar un grupo de exguerrilleros liberales o limpios.

A mediados de 1961 el Partido Comunista citó a una conferencia de autodefensas en El Támaro —que desde entonces se llamó Marquetalia— a la que acudieron delegados de El Pato, Natagaima y Guayabero y donde los representantes del comité central hicieron a Marulanda



una fuerte crítica por las acciones contra la fuerza pública. Marulanda argumentó que él no se iba a dejar liquidar ni por el Gobierno ni por los limpios.

Poco tiempo después, el Ejército ocupó El Hueco, uno de los campamentos de las autodefensas, de donde la fuerza pública pudo pasar a San Miguel y La Suiza, ya en el corazón de Marquetalia. El control sobre el movimiento de los pobladores, la información sobre sus parcelas y la limitación de su abastecimiento se hicieron críticos. La estrategia de control sobre un área determinada buscó impedir, según el general Álvaro Valencia Tovar, que las guerrillas de Marquetalia se regaran por toda la región, que era precisamente el objetivo que Marulanda planteó en esa conferencia y que está implícito en la expresión "guerrilla rodada".

A principios del año 62, el Ejército entró a Natagaima en son de guerra por considerar que el Partido Comunista ejercía de hecho la autoridad sobre la zona, que por lo demás había sido sede del Consejo Supremo de Indias, fundado por Quintín Lame en 1920, de donde había salido años atrás una de las marchas hacia El Davis. La gente huyó a las márgenes del río Anchique.

Las tropas oficiales mataron, según se denunció, más de 15 personas, entre ellas a Avenegra, que había regresado de Villarrica. En honor a esos muertos se organizó un grupo de autodefensa que se llamó 26 de Septiembre, fecha de la masacre. Un mes después, Álvaro Gómez pronunció su famoso discurso sobre las repúblicas independientes. Lleras Camargo hizo caso omiso del ataque de Gómez, pero el alto mando del Ejército tomó nota y comenzó a elaborar la gigantesca operación militar que denominó "Operación Soberanía".

Más allá de los aspectos puramente tácticos, lo esencial de la nueva estrategia fue la política de acercamiento a la población civil. El Plan Lazo elaboró estrategias diferentes para las regiones de Marquetalia y Riochiquito. Mientras para Marquetalia planeó una operación militar de

tierra arrasada, para Riochiquito ensayó al comienzo operativos cívico-militares. Gilberto Vieira denunció en la Cámara los planes militares y responsabilizó al Gobierno de los efectos que ello pudiera traer al país.

Durante todo el año 1963, Marulanda amplió la influencia de las autodefensas regulares a una gran área comprendida por Balsillas, Aipe, Palermo, Órganos, Chapinero, San Luis, La Julia, Aipecito, en Huila; El Carmen, Natagaima, El Pató, Monte Frío, Praga, Casadecinc, Santa Rita, Sur de Atá y Gaitania, en Tolima. Esta amplia región fue la que en realidad constituyó la denominada "República Independiente de Marquetalia", donde, previendo los operativos del Ejército, las guerrillas se dedicaron a cultivar maíz y arroz, a construir depósitos para almacenar alimentos y pertrechos, a organizar a la población civil bajo unas normas de convivencia y a adiestrar unidades y mandos militares. Dice Guaracas: "Ese año se orientó construir caletas en la profundidad de la selva y almacenar allá la provisión que más se pudiera, según las posibilidades de cada familia. Pensábamos que si una familia tenía que esconderse tuviera por lo menos para seis meses de sobrevivencia... Estábamos creando zonas de reserva".

A fines del año las autodefensas, después de celebrar la Nochebuena y el Año Nuevo, se atrincheraron en puntos estratégicos para esperar la ofensiva de las Fuerzas Militares. Valencia Tovar dice que en marzo de 1964 hubo siete ataques de la guerrilla al Ejército que le causaron nueve bajas. Ese mismo mes, un avión desconocido hasta entonces para las guerrillas, el T-33, hizo los primeros vuelos rasantes sobre el cañón del Atá. Por esos días Arturo Alape fue enviado por el Partido Comunista a Guayabero, y Jacobo Arenas y Hernando González a Marquetalia.

El 16 de abril "nos confundimos en un abrazo fraterno con Manuel Marulanda y un grupo de muchachos que ya esperaban el avance de la tropa", escribió Jacobo en su Diario de la Resistencia. Una de las primeras medidas tomadas por los guerrilleros fue citar a una conferencia para informar sobre la Operación Marquetalia, que se veía venir, y nombrar un secretariado de resistencia compuesto por Marulanda, Isauro Yosa y los recién llegados. Escribieron una carta abierta al presidente Guillermo León Valencia donde puntualizaron: "Nuestro 'delito', que la locura de vuestra excelencia estimula, reside en nuestra firme oposición al sistema bipartidista del Frente Nacional".

La conferencia adoptó una estrategia fundamental: "La movilidad absoluta y total de las guerrillas y la no aceptación de una guerra de posiciones". La preocupación central consistió, en ese momento, en la evacuación de la población civil del teatro de guerra. Fue una tarea ardua y triste. Guaracas recuerda que "los hombres acompañaban a sus mujeres y a sus hijos hasta el lomo de la cordillera, donde los despedían y regresaban a los comandos". Las familias cargaban lo poco que podían llevar a cuestas —una muda, un par de gallinas, algún marrano— hacia lugares previamente determinados por el secretariado o estado mayor del movimiento llamado Bloque Sur.

El 18 de mayo a las 9 de la mañana Caracol informó que la Operación Soberanía contra la República Independiente de Marquetalia había comenzado. Marulanda dijo, según Guaracas: "Ahora sí se nos vienen para acá". El Gobierno emprendió la operación con el experimentado Batallón Colombia al mando de José Joaquín Matallana y efectivos de los batallones Tenerife, Roocke, Boyacá, Galán, comandados por el brigadier Currea Cubides.

Oficialmente, el general Valencia Tovar sostuvo: "Los efectivos sumados apenas pasaban de 1.200 hombres"; la guerrilla calculó que la fuerza osciló entre 10.000 y 16.000 soldados, apoyados por aviones T-33 y por siete helicópteros. Según Guaracas, las guerrillas estaban compuestas por 30 hombres armados. "El arma más ventajosa era una carabina San Cristóbal; las demás, ocho fusiles M1, y el resto, fusiles de perilla". Gregorio Fandiño, sargento que participó en los combates, da una cifra exacta: 3.375 militares.

Según El Espectador, el Ejército la consideró "una operación civilizadora". El 21 de mayo publicó en primera plana un reportaje de Jack Brannan. "El ejército (de EE.UU.) reveló hoy (en Washington) que ha contribuido a la eliminación de los bandidos que aterrorizaron la campiña de Colombia durante los últimos 16 años. Un vocero militar añadió que el Ejército suministró asesores de operaciones bélicas especiales y helicópteros al Ejército colombiano. Desde 1958 los merodeadores perdieron todos sus objetivos políticos y se dedicaron meramente al robo y al asesinato... y se calcula que en 10 años mataron 23.000 personas".

El primer gran encuentro tuvo lugar en La Suiza, sobre el río Atá, el 20 de mayo. Fue un combate intermitente que permitió a la guerrilla de Isaías Pardo montar una emboscada donde cayeron los primeros soldados. "La radio —escribió Jacobo— informó de un oficial muerto y varios soldados heridos". Guaracas, que participó en el combate, no habló de bajas, pero sí de "trilla al Ejército". El 7 de junio, El Espectador tituló: "Ola de terrorismo anoche en el país: 28 bombas en Bogotá, 5 en Medellín, 1 en Manizales y 3 en Palmira".

El 14 de junio, la FAC bombardeó con proyectiles de alto poder el altiplano de Marquetalia, que era la sede del comando de Marulanda. El bombardeo fue acompañado por ametrallamientos aéreos que facilitaron el desembarco de 400 unidades aerotransportadas. El hoy general Belarmino Pinilla, quien comandaba como capitán la flotilla de helicópteros, recuerda así la acción: "Habíamos construido una base para helicópteros en la cordillera, donde congregamos la tropa de asalto, unos 400 hombres. Para esa operación utilizamos cuatro helicópteros: dos Iraquois y dos Kamande giro entremezclado. Acordamos hacer un circuito elíptico que recorríamos a prudente distancia. Las máquinas cargaban y descargaban alternativamente la tropa en un potrero donde estaba el comando central de Tirofijo. Yo fui el primero en entrar a Marquetalia en el helicóptero con Matallana. Hice un vuelo estacionario a 10 metros de la choza sabiendo que los guerrilleros estaban ahí, pero al oírnos salieron disparados de la sorpresa tan berraca. Yo le había dicho a Matallana: ahí no se puede aterrizar, entonces hago

un vuelo estacionario y ustedes saltan y que Dios los proteja".

El recuerdo de Guaracas coincide en este punto: "Abandonamos el campo y quemamos la casa de Marulanda porque no se iba a permitir que el enemigo se sirviera de sus cosas". Un par de francotiradores dificultaron el avance de la tropa. Matallana declaró que la lentitud en coronar el objetivo se debía al minado del área. Jacobo dio cuenta de que el 15 de junio dos cazas "lanzaron bombas sobre el caleterío donde se concentraba la mayoría de las familias en la selva. Quince niños resultaron muertos". Guaracas confirmó el episodio. El general Pinilla lo niega: "Nunca bombardeamos blancos civiles, pero —confiesa— sí utilizamos napalm". Marulanda había instruido a su gente: "Cuando los aviones ametrallan o bombardean, lo están haciendo a tientas, no están apuntando sobre cada uno de nosotros porque no nos ven. No hay que asustarse ni perder el control ni la moral porque quien pierde el control queda bajo la acción del pánico, y en ese momento no se sabe para dónde coger". Se advirtió también un brote de lo que los guerrilleros llamaron "viruela negra", cuyos síntomas eran una fiebre altísima y la aparición de llagas.

Las guerrillas no pudieron contener la fuerza del Ejército y se movieron hacia lo que se conocía como el alto de Trilleras, que Marulanda había señalado como el sitio de reunión. Según Guaracas, 25 hombres pasaron la noche esperando el combate, divertidos por los chistes de Marulanda. Fue la última noche que "íbamos a dormir cerca de nuestras casas". A las 4 de la mañana se comenzó a preparar la emboscada. El Ejército entró en

el área después de un intenso bombardeo y cuando todo les parecía dominado, la guerrilla atacó y, según Jacobo, causó siete muertos y 20 heridos al Ejército. Guaracas comentó sobre el combate: "Fue una pelea larga, muy buena". Cerca de allí el Ejército intentó otro desembarco para izar la bandera nacional, pero "la guerrilla lo impidió hasta última hora".

El 18 de junio, por fin, el Ejército logró asegurar el área. Los altos mandos, dice Jacobo con sorna, "hicieron entrega al Gobierno, con la presencia de varios ministros, de Marquetalia libre de bandoleros". Cuatro días más tarde, cuando el Gobierno celebraba el triunfo, fue activada una bomba de alto poder que permitió a los guerrilleros recoger una ametralladora calibre 50 y varios fusiles. El 22 de junio el Ejército ocupó totalmente la región con lo que —escribió Jacobo— "la guerra pasaba de la resistencia a la guerra guerrillera auténtica". La guerrilla se hizo invisible y el Ejército perdió todo contacto con ella.

Los bombardeos continuaron intermitentes sobre posiciones que la guerrilla había abandonado. En medio de ellos, el secretariado de resistencia citó el 20 de julio a una asamblea que aprobó el Programa Agrario cuyo primer punto convocaba a la lucha por una "reforma agraria auténtica: que cambie de raíz la estructura social del campo, entregando en forma gratuita la tierra a los campesinos que la trabajen o quieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista".

El segundo punto decía que los colonos, ocupantes arrendatarios, aparceros agregados recibirían títulos de propiedad sobre los terrenos que explotaran y se crearía la unidad económica en el campo, y llamó a la creación de un Frente Único del Pueblo. Guaracas opinó que la declaración fue la respuesta a la ocupación de todo ese territorio de colonización de Marquetalia, "donde los campesinos habían descargado sus hachas para fundar y construir un rancho".

La revista Life informó pormenorizadamente los resultados de la Operación Marquetalia: los bandoleros no sólo no habían sido derrotados sino que habían logrado consolidarse como fuerza guerrillera. Concluía que la ocupación militar había costado 300 millones de pesos. A lo que Ruiz Novoa respondió con un "no tanto". Según los cálculos de Jacobo, se habían incendiado 100 ranchos, ocupado los terrenos abiertos, devorado 100.000 gallinas, robado 10.000 reses, encarcelado 2.000 campesinos y asesinado 200.

La guerrilla se esfumó, se volvió un fantasma para el Ejército

-Capítulo VI-

El legendario comandante de las FARC rememora 70 años en la guerrilla

Entrevista con Jaime Guaraca en La Habana

Alfredo Molano Bravo*

La historia de la fundación de las Farc, hoy en medio de un proceso de negociación con el gobierno y tras medio siglo de guerra.

Jaime Tarsicio Guaraca tiene hoy 82 años y vive en Cuba. Acompañó a Marulanda desde muy niño, fue uno de los guerrilleros más aguerridos en Marquetalia y el segundo al mando de las Farc una vez fundadas. Fue detenido y torturado en Palmira. En Cali, un consejo de guerra lo condenó a 35 años y estuvo preso en la isla de Gorgona. Al levantarse el Estado de sitio fue liberado y regresó a las guerrillas. Hizo parte del secretariado durante las conversaciones de Casa Verde entre el gobierno de Belisario Betancur y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

Lo entrevisté en La Habana y comenzó así la conversación:

Jaime Guaraca: Primero quiero saludar al vilipendiado y sufrido pueblo colombiano.

* Profesor y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, periodista y escritor.

Alfredo Molano Bravo: Cuéntenos de sus orígenes, de sus padres, de su niñez.

J.G.: Mi padre fue un campesino de Natagaima, que de joven pagó el servicio militar y cuando terminó se casó con mi madre, que era de San Luis. Ambos tolimenses, medio indígenas pijaos. Se fueron a tumbar monte a un punto de nombre Las Mercedes, municipio de Santiago Pérez. Abrieron una pequeña finca de la que se abastecieron para abrir otra mejora que llamaron San Isidro. Ahí nací yo. Se cultivaba especialmente café, maíz, fríjol, y se sembraba pasto para criar ganado.

Cuando mataron a Gaitán oímos la noticia en el radio de un viejo liberal. La gente venía ya asustada porque los gallos cantaban a las 8 o 9 de la noche y eso era señal de malas noticias. Va a haber muertos...

A.M.B.: ¿Y cómo comenzó la violencia?

J.G.: Apenas mataron a Gaitán, el Partido Liberal dio la orden de que todos los reservistas se presentaran en Santiago Pérez, porque Mariano Ospina, el presidente, ordenó armar a los conservadores en muchas regiones del país. A La Estrella llegó un contingente de policía y de godos civiles armados. Al otro día mataron tres colonos a puro machete y les pelaron el cuero de la cara. Vino el saqueo, quemaron la escuela, el pueblito mismo, y recogieron reses, caballos y mulas. La vereda quedó desolada. Quemaron nuestro rancho. Muchos vecinos pegaron para Bilbao, para los lados de Herrera, porque se oyó el rumor de que por allá se estaba organizando algo. Y fue verdad: don Gerardo Loaiza, primo de Manuel Marulanda, estaba organizando la guerrilla liberal. Mis hermanos, como muchos vecinos de La Estrella, comenzaron en el comando de los Loaiza. En el año 49 se organizaron comandos en La Estrella, Peña Rica, San Miguel y El Paujil, comandado este por Ciro Trujillo. Las armas eran escopetas de fisto, una que otra de cápsula y muy contadas veces una carabina 22. Todos seguían el ejemplo

que venía de La Herrera, donde estaban los Loaiza.

A.M.B.: ¿Eran todos liberales?

J.G.: Sí, pero también se organizó otro comando mandado por Isauro Yosa, un campesino comunista que formó su guerrilla con jóvenes de las veredas de Irco, Charalá y Horizonte, municipio de Chaparral. Desde el comienzo lo acompañaron Luis Alfonso Castañeda, capitán Richard, Canario y Joselito, muertos ambos con el grado de capitán. Gerardo Loaiza los invitó a unirse con los de La Herrera. Isauro, mayor Lister, aceptó, pero se fue con familias, ancianos, niños, puercos y gallinas. Fundó el comando de El Davis en socia con don Gerardo, general Loaiza, y Leopoldo García, general Peligro.

A.M.B.: ¿Cómo era El Davis?

J.G.: Era una meseta muy hermosa que se eligió para hacer el comando. Con la gente que llegó huyendo del Tolima y del Huila se formó una ciudad chiquita. No eran 50 familias, pasaban de 200. Fue un campamento muy bien montado, con varias organizaciones: de los 15 años hasta los 40, y a veces hasta los 50, eran guerrilleros de fila que cumplían cualquier misión militar. Con los mayores de 50 se construían ranchos, cultivaban comida, hacían alpargatas y trabajaban el cuero para hacer cartucheras. Las mujeres remendaban, cocinaban, lavaban; algunas eran enfermeras y otras enseñaban a leer a niños y a ancianos. Los hombres de fila salían a pelear o a llevar abastecimiento porque lo que se cultivaba no alcanzaba.

Cuando yo llegué no había cumplido 12 años. Duré unos días en el Batallón Sucre, donde participaban los niños de 10 a 14 años; a los 15 ya se podía pasar a la fila de guerrilleros. Un día deserté de los pioneros, me presenté en la fila de los disponibles y me aceptaron como guerrillero. No había cumplido los 13 todavía.

A.M.B.: ¿Cómo fue el rompimiento entre liberales y comunistas?

J.G.: Cuando la dirección liberal supo, protestó y le dijo a Gerardo que no admitía ese tipo de socias. Don Gerardo le hizo caso, reunió a los comunistas, los comunes, y les dijo: "Los comunistas nos han traicionado con una ideología traída de Rusia. Aquí rompemos". La asamblea aprobó. Pedro Antonio Marín, que todavía no era Marulanda, y Jacobo Prías Alape, que ya era Charro Negro, se opusieron y templaron Gaitania.

En eso recibió el poder Laureano Gómez y fue peor, metió al Ejército. Tirofijo, Charro Negro y Lister, Isauro Yosa, mandaron evacuar las familias a Peñarrica, donde se fundó el comando de Marquetalia.

A.M.B.: ¿Con Rojas Pinilla cambiaron las cosas?

J.G.: Rojas tomó el poder y promulgó una amnistía general para los alzados en armas. Marulanda, Charro Negro y Lister desconfiaban. Nos formaron y Charro dijo: "Los que quieran seguir peleando, den un paso al frente". Lo dimos sólo 10 muchachos y un adulto que se llamó Mundo Viejo; después nos juntamos 26 hombres y cuatro muchachas y salimos del Tolima a Río Chiquito. El resto se fue a Villarrica a coger café. La otra gente armada se fue a sus regiones a tumbar monte y a hacer finca, sobre todo en El Támaro, que Charro bautizó Marquetalia. Hasta que Rojas rompió fuegos y bombardeó Villarrica en 1955. Mucha gente llegó huyendo al Pato y al Guayabero; otra regresó al sur del Tolima. Rojas cayó al año siguiente.

A.M.B.: ¿Algo cambió con el Frente Nacional?

J.G.: Lleras Camargo dio unos días de paz, que llamó la Pacificación. Contrataron a Marulanda para trabajar en la carretera entre El Carmen y Gaitania; Charro se puso a negociar en bestias; Lister, a hacer finca. Pero no entregaron armas; el Gobierno no las pidió. Preparaba el ataque. A Mariachi, que había sido compañero nuestro, se lo ganaron y nos lo pusieron de frente: el 11 de enero de 1960 mataron por la espalda a Charro Negro. Manuel nos dijo: "El Gobierno se nos viene". Así fue. La tropa entró a Gaitania. Comenzó el acoso. El Ejército se emboscó en los caminos, amanecían, rodeó casas, instaló un mortero y nos intimidaba a bombazos. Después metió la acción cívico-militar a sacar muelas. Hicieron un censo, apuntaban hasta las gallinas. Marulanda, al ver reducido el espacio, a comienzos de 1961 preparó un grupo de muchachos en el arte militar para convertirlos en guerrilleros; a ese grupo entró Miguel Pascuas. Por primera vez, financiados por la regional del Partido Comunista, nos dieron cobija, hamaca y tenis en vez de alpargatas de fique. Manuel preguntaba: ¿qué hacer? "El único que tiene armas nuevas y buenas es el Ejército; va tocar salir a cogerle uno que otro fusil". Y por ese camino nos fuimos.

En el 62 el Ejército decidió lanzar un operativo grande. Le hicimos resistencia. Alcanzó a llegar a San Miguel, pero se devolvió, en parte por la protesta que se le hizo en Bogotá y Cali. Pero cerró la puerta en Gaitania, donde se aposentó. Nada entraba ni salía del pueblo.

A.M.B.: ¿Cómo fue la Operación Marquetalia?

J.G.: El 25 de julio de 1961, Álvaro Gómez Hurtado, el hijo de Laureano, habló de las repúblicas independientes, que en realidad eran comandos que tuvo la guerrilla en las dictaduras de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, Urdaneta Arbeláez y Rojas Pinilla. En marzo del 62 comenzaron los operativos; en abril ya estábamos esperándolos.

Hubo que evacuar la población civil, que era nuestro problema, y quedamos solos. Fue un lío muy tremendo convencer a las mujeres para irse. No querían. Tenían razón. No era justo perderlo todo después de haber ayudado a trabajar la tierra para hacer finquita durante cinco años. La resistencia se hizo con 48 varones y cuatro mujeres. De esos no estamos vivos sino tres: Miguel Pascuas, Jaime Bustos y quien le habla. La evacuación civil terminó en mayo. El 18, a las 11 de la mañana, el Repórter Esso de Caracol anunció que Guillermo León Valencia, el presidente, había dado la orden de comenzar la Operación Marquetalia con 16.000 hombres del Ejército. El 27 de mayo se inició la pelea por el camino indígena de La Suiza, con un grupo de seis compañeros que nos habían asignado detener la entrada por los márgenes del río Atá. Nosotros dimos la primera pelea y, a mucho honor, yo disparé el primer tiro. Después hubo varios combates hasta que llegamos al alto de Socorreño y se produjo el desembarco de tropas en los helicópteros al ladito de Marquetalia. Nosotros estábamos ahí con Isaías Pardo. Dijimos: no tiene sentido seguir aquí, ya se toman Marquetalia. Entonces cruzamos el río Atá y fuimos a buscar a Manuel al alto de Trilleras.

Esa noche nos dijo: "A dormir porque es la última noche que vamos a dormir en casas". Al otro día a las 5 de la mañana

él ya tenía organizada una emboscada y le ordenó a Isaías: "Hágale, camarada". Estuvimos tres días esperando la tropa hasta que entró en la emboscada. La pelea empezó a las 9 de la mañana y la orden de retirarnos de las trincheras se dio a las 6 de la tarde. El Ejército no pudo recoger ni sus heridos ni sus muertos. Más adelante Isaías había preparado la Anastasia, una bomba de gran poder que Marulanda mandó estallar al paso de los soldados. Se les hizo mucho daño. Nos bombardearon y de ahí nació la viruela negra, que nosotros llamamos "espuela de gallo". Eran ampollas que al reventarse dejaban la llaga. Cuando Marulanda vio eso, dijo: "Hay que sacar inmediatamente la gente de aquí porque ahí tiraron algo infeccioso". Nos fuimos para la hacienda San Miguel, desde donde hicimos varios asaltos en Peña Rica, Juntas y carretera al Carmen. Bombardeaban a la loca desde los T-33. El secretariado, que eran Marulanda, Isauro Yosa, Isaías, Jacobo y Hernando González, acordó la movilidad total de las guerrillas. Yo salí con Isaías y Darío Lozano a guapearles por el lado de Canoas, para distraerlos; en una de esas peleas mataron a Isaías. Marulanda se esfumó. El Ejército decía que nosotros éramos más de 600 hombres... si hubiéramos tenido al menos cien, no los habríamos dejado moverse. Éramos 52 y sólo 25 con armas buenas. La dirección del secretariado marchó hacia el Cauca a hacer la convocatoria del bloque Sur y detrás de ellos salió toda la población civil.

Carta abierta a Alfonso Cano

Medófilo Medina*

Personas de carne y hueso

Comandante Cano:

Me dirijo a usted apoyado en dos razones.

La primera es la circunstancia de haberlo conocido personalmente y de haber interactuado como miembros de la Juventud Comunista. Estudiamos en la misma facultad de la Universidad Nacional; es cierto, Usted entraba cuando yo egresaba del pregrado.

La última vez que hablamos brevemente fue durante mi visita al Campamento del Secretariado de las FARC del 26 al 29 de febrero de 1986, en las postrimerías del proceso de paz que comenzó en 1982. Llegamos allí con la colega de la Universidad Nacional Rocío Londoño, quien había iniciado su investigación sobre el dirigente campesino Juan de la Cruz Varela y estaba interesada en conocer la visión de Manuel Marulanda y de Jacobo Arenas sobre Varela.

* Historiador, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia.

También conocí a Joaquín Gómez en Moscú cuando adelantaba su carrera en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, y yo el doctorado en la Universidad de Moscú. Me impresionaban su disposición sencilla, su talante festivo.

Al comandante Pablo Catatumbo lo aprecio, podría decir, como colega: recuerdo algunas conversaciones sobre historia de Colombia durante mi visita a la sede del Secretariado. Aparte de su evidente erudición histórica, mostraba una preocupación muy típica de la profesión: la necesidad de las fuentes de información, de conservarlas y recuperarlas mediante la investigación. Me habló con preocupación del archivo de las FARC o al menos de la documentación que no estaba organizada, sistematizada, sino apenas conservada. Me he preguntado luego: ¿Se ha preservado aquella documentación tan valiosa para la historia contemporánea de Colombia?

Recuerdo también un encuentro con Iván Márquez en una larga conversación donde tomó parte Daniel Pecaut, una tarde reverberante en Florencia en los tiempos del Proceso de Paz de La Uribe. Entonces Iván ejercía como miembro del Congreso de la República en representación de la Unión Patriótica. Habíamos compartido afanes en la lucha estudiantil con quien se convertiría en el comandante París en las filas de las FARC.

A Usted, a los dirigentes que he nombrado, no los podría ver a través de los prismas construidos por la propaganda de los medios de comunicación. Tampoco los asumo en la condición de héroes, aunque he admirado su decisión de tomar riesgos y afrontar sacrificios en defensa

de una concepción social y política. La imagen que de Ustedes tengo es la humana que guarda mi retina, asociada con el intercambio en actividades o discusiones políticas. En efecto Ustedes fueron gente de estudio y dirigentes políticos urbanos antes de convertirse en cuadros militares.

Los colombianos necesitan entender el por qué de la guerra

La segunda razón para esta carta es que he pensado hace mucho sobre la necesidad que objetivamente tendría el ciudadano corriente de conocer la argumentación de las FARC, y de sopesar tanto su visión del país actual como sus propuestas hacia el futuro.

Durante años he sido profesor e investigador de la historia contemporánea de Colombia, y en los últimos quince años he dedicado también esfuerzos al estudio de América Latina. Subrayo: no soy experto en las FARC, pero dada la época de la que me he ocupado, he tenido que leer y reflexionar sobre el Conflicto Interno por cuanto es parte inseparable de nuestra historia. Por supuesto en estas líneas está incorporada mi sensibilidad de ciudadano atento a las cosas del bien común.

La intención primordial del grupo de intelectuales que, junto con la senadora Piedad Córdoba, le escribió a ustedes una carta era iniciar un intercambio epistolar más allá de las diatribas y la estigmatización. Debo reconocer que tal objetivo cedió ante las urgencias del momento y se extravió en los quehaceres ciertamente necesarios del intercambio humanitario.

Creo que sigue siendo válido insistir en un intercambio epistolar de esta naturaleza, el cual tendría sentido independientemente de los avatares de la guerra y de las dificultades políticas y técnicas que rodearían una tal comunicación. Un intercambio de cara a la opinión pública y donde puedan participar quienes quieran hacerlo y crean que la palabra razonable mantiene su fuero aún bajo las circunstancias más adversas.

En la coyuntura de Colombia y en la fase actual del conflicto interno es por demás necesario y oportuno profundizar la reflexión sobre el mismo y abrir la discusión amplia y democrática, bien sobre la inevitabilidad de la guerra o bien sobre las posibilidades de la paz.

Malos augurios

Hace pocos días el almirante Edgar Cely, comandante de las Fuerzas Militares (Declaraciones para Caracol Radio, junio 15 de 2011) refiriéndose a la confrontación con Ustedes afirmó: "Este es un momento histórico, tenemos que estar unidos; *estamos en los veinte metros finales más importantes*".

Pero tan preciso acotamiento de distancias militares no convence ni al mismo personaje que lo ha fijado. En el mismo reportaje había dicho el almirante, aludiendo a las acciones recientes de las FARC: "Cambiaron*su estrategia* y ahora están generando una situación que entendemos perfectamente, pero nosotros también estamos cambiando *nuestra estrategia*" (énfasis añadido). Pues bien: cuando se habla o cuando se proyectan *estrategias,* estamos refiriéndonos a un período más largo del que tomaría recorrer esas cortísimas distancias.

Por su parte en el reportaje que el periódico español Publico. Se difundió el mismo día de las declaraciones del almirante Cely, Usted, comandante Cano, advirtió: "Mientras no aboquemos seriamente, entre todos, la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales del país, la confrontación será inevitable. Unas veces más intensa, otras no tanto. En algunos momentos con la iniciativa militar del Estado, en otros con la iniciativa popular, en una trágica ciclotimia que debemos superar, inteligentemente, con grandeza histórica".

Lo que el párrafo deja en pie es la mención a la "*trágica ciclotimia*" y esto nos lleva a

entender que para Usted la paz sigue siendo lejana, o que estamos abocados a seguir en una curva de confrontación sin término y donde no se asoma todavía algún futuro esperanzador para los colombianos. Aunque parezcan modestas hay novedades que exigirían especial reflexión.

En su reportaje resulta muy limitada su referencia a la *Ley de Víctimas*, a cuyo proyecto Usted le había prestado mayor consideración en el video difundido por Anncol en enero del año en curso. Al respecto permítame una breve digresión. Sobre el sentido político de esta ley hablan tanto la criminal ofensiva que se ha puesto en marcha contra los restituidos como también el coro de voces de latifundistas y ganaderos tradicionales, inversionistas agrícolas y de sus voceros políticos que la presentan como violación al sagrado derecho de la propiedad privada y golpe a la "confianza inversionista".

Los asesinatos buscan disuadir a los campesinos empeñados en recuperar sus tierras de proseguir con el movimiento, al tiempo que se proponen apartar a las autoridades de su acción para la aplicación de la ley. Ya antes el país ha sido testigo del desarrollo de ofensivas y campañas de esa índole cuando se ha ensayado poner en marcha políticas agrarias de orientación progresista. Yo me pregunto hoy, Comandante, ¿Volverán tales sectores a imponer de nuevo su designio?

Los argumentos históricos de las FARC

Quisiera referirme a enunciados de las FARC que unas veces se encuentran formalizados programáticamente y otras veces se reiteran de modo más informal en reportajes y declaraciones concedidos por Usted o por sus compañeros del Secretariado, como aquellos que se han conocido durante los últimos meses.

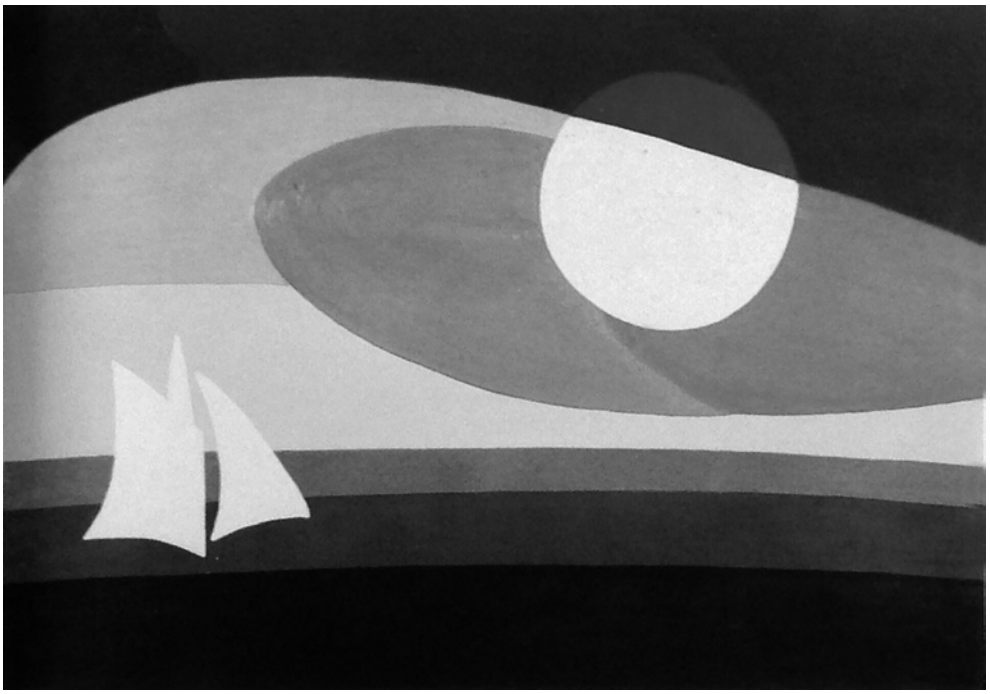
Se trata de fórmulas verbales que en el discurso de las FARC se asumen como axiomas o sentidos comunes. Yo quisiera abrir sólo algunos de tales códigos hasta ahora cerrados, para hacerlos objeto del intercambio dialéctico.

Comienzo por los argumentos sobre el origen del movimiento armado.

La Autodefensa campesina original

Un primer enunciado reza: la lucha armada en Colombia no nació por decreto de nadie; fue la respuesta popular a la violencia de latifundistas y ganaderos amparados por un régimen político antidemocrático y excluyente.

En principio la afirmación es verdadera, pero a mi juicio hace falta seguirla con distancia crítica en su desarrollo. Sin duda en 1949 y en algunas regiones donde venían consolidándose los movimientos de colonos y campesinos, resultó inevitable organizar la autodefensa armada, no ya en defensa de la tierra sino de la vida misma. Pero ya en la primera pausa de "La Violencia" en 1953, había motivos para plantearse la reorganización de un movimiento agrario que, por ejemplo en el Sur del Tolima, venía trabajado con vigor desde mediados de los años treinta. No sobra recordar que en Chaparral, el Partido Socialista Democrático (denominación



temporal del Partido Comunista) había tenido ya dos concejales campesinos, uno de ellos el legendario Isauro Yossa.

Pero la reorganización del movimiento campesino no ocurrió. Al contrario cundió el desconcierto y se prolongó la confrontación con antiguos combatientes liberales que respondieron de manera aún más enconada y en efecto agravaron la violencia.

Marquetalia: el viraje

Permítame hacer memoria del hecho crucial que Ustedes con razón han celebrado como el hito fundacional de las FARC. Ese hecho comenzó con la agresión a los pobladores de Marquetalia por parte del Ejército apoyado por fuerzas de Estados Unidos mediante el tristemente célebre Plan LASO. La respuesta que allí se dio era inevitable y la hazaña de los colonos y campesinos quedará inscrita en los anales de la lucha del pueblo colombiano. Analizando aquella coyuntura, Pierre Gilhodés escribió que entre 1964 y 1965 el Ejército colombiano "se inventó un enemigo", dado que previamente no había una actividad militar en esa avanzada de la colonización.

Luego una *decisión* de los colonos llevó a convertir las autodefensas en guerrillas. En 1966 el X Congreso del Partido Comunista mediante otra *decisión* le dio contenido estratégico a la lucha armada guerrillera al adoptar la política de *combinación de todas las formas de lucha* como su teoría y su práctica.

El paro cívico del 77 y la oportunidad perdida

Sólo menciono otro momento crucial. La escogencia de una opción sería decisiva para iniciar otra etapa de la lucha guerrillera y por lo mismo otra fase del conflicto interno en Colombia. Se trata, comandante Cano, de la lectura del Paro Cívico Nacional (PCN) del 14 de sep-

tiembre 1977 que hicieron la dirección de las FARC y la mayoría de la izquierda.

Aquella fue una protesta formidable, un capítulo de la historia de la muchedumbre política en Colombia. Pero muchos concluyeron, de manera subjetiva, que se acercaba la hora de hacer confluir la movilización cívica con la acción armada de la guerrilla, en un formidable torrente insurreccional que resultaría irresistible. Recordará usted que el M-19 fue la guerrilla que de manera más acelerada readecuó su acción a esa previsión. Las FARC concluirían su aprestamiento para actuar de forma más ofensiva en la VII Conferencia que tendría lugar en 1982.

Aún me sigue sorprendiendo que el establecimiento colombiano hubiera llegado a la misma conclusión, pero en dirección contraria: El PCN habría sido un intento de insurrección cuya reedición debía evitarse a toda costa. El presidente Turbay Ayala y el ministro de Defensa, general Camacho Leiva, desarrollaron entonces una ofensiva brutal y desinstitucionalizada en *defensa de las instituciones*.

La derecha y la izquierda asimilaron el PCN desde sus propias matrices de pensamiento y no pudieron o no quisieron entender lo que aquel acontecimiento había significado realmente. La polarización del país ganó terreno al tiempo que la presencia de las mafias narcotraficantes se hacía sentir en la economía, la sociedad y la política. Esta coincidencia de fenómenos resultaría trágica.

La izquierda hubiera debido estudiar el Paro y la serie de los paros cívicos locales que habían tenido lugar entre 1957 1977. *A mi juicio, era necesario ajustar la política a la primacía de los escenarios urbanos y adecuarla a la cultura política que había reflejado aquella protesta multitudinaria contra el alto costo de la vida*. El camino escogido fue insistir en las mismas estrategias de antes y darles la espalda a las nuevas realidades.

Sumapaz y Viotá: un modelo alternativo

En la historia colombiana se encuentran modelos de lucha armada, que Usted conoce bien, donde la guerra terminó sin pasar por una derrota de los combatientes. Aludiré a uno de ellos, uno especialmente pertinente porque tuvo su origen por la misma época y dentro de la misma matriz política donde nacieron las FARC. Me refiero al movimiento campesino encabezado por Juan de la Cruz Varela en Sumapaz y Oriente del Tolima.

En esas regiones los campesinos tomaron las armas a finales de 1949, combatie-

ron eficazmente contra la policía y las bandas al servicio de los gamonales y caciques conservadores hasta 1953. En octubre de ese año entregaron las armas en Cabrera y se reincorporaron a sus parcelas. Volvieron a ser objeto de persecución sangrienta y nuevamente fueron a la lucha armada en defensa de la vida. Hasta el Sumapaz llegó la honda del la campaña militar desencadenada por el gobierno de Rojas Pinilla entre noviembre de 1954 y mediados del año siguiente contra el movimiento agrario del Oriente del Tolima, conocida como la Guerra de Villarica.

Cuando la Junta Militar que sustituyó a Rojas en 1957 pintó algunas posibilidades de paz, Varela entabló conversaciones y presentó un pliego de demandas que fue aceptado por el gobierno. Años después él mismo evocaría aquel breve período de paz en los siguientes términos: "Las tropas fueron retiradas, nos dieron todas las garantías, salíamos a los pueblos, convivíamos con el Ejército, con la policía y las autoridades. Es un reconocimiento de honor al mérito, porque parecía que nunca hubiéramos estado en guerra" (Rocío Londoño Botero, *Juan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984),* Bogotá: Universidad Nacional, 2011, p.570).

Los campesinos volvieron al trabajo en sus propiedades. No se trató ciertamente de una marcha bucólica. Las bandas de terratenientes causaron asesinatos, ocasionaron víctimas y atropellos económicos, pero los campesinos se quedaron, no permitieron el despojo de sus tierras. En ello jugó un papel decisivo el hecho de que los campesinos hubieran podido mantener la organización y la movilización de la gente.

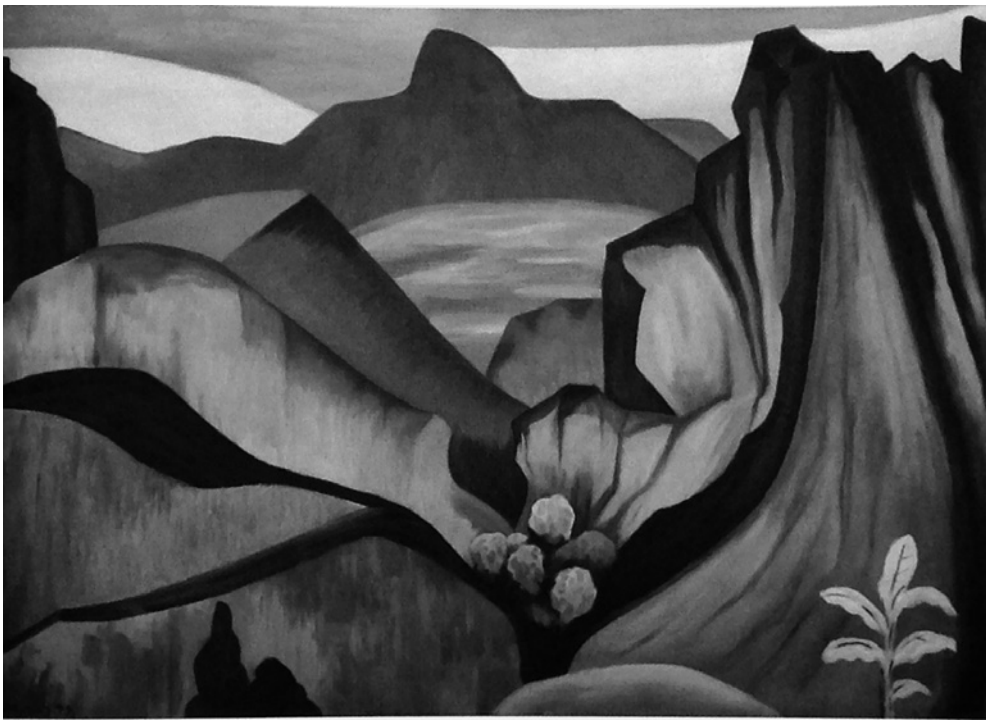
También por los tiempos de "La Violencia" de 1946 a 1964, el movimiento agrario de Viotá negoció acuerdos para el Tequendama, que hicieron de esta región una comarca de paz en medio de la guerra. Debo anotar además que tanto en Sumapaz como en el Tequendama, el Partido Comunista respaldó las alternativas de la paz. Estos casos merecen ser estudiados con detenimiento en el momento actual cuando no obstante el ruido de los tambores de la guerra la paloma de la paz intenta levantar su vuelo.

Comandante Cano, si bien no desconozco que el origen y el desarrollo de los conflictos sociales obedecen a razones objetivas y a causas estructurales, por otra parte subrayo el papel de las decisiones o de las escogencias entre alternativas políticas que llevan a cabo las partes en el conflicto. Si destaco el resultado de escogencias de caminos distintos del que hasta hoy han transitado las FARC, lo hago en virtud de aquella sabiduría elemental según la cual las cosas que comienzan por voluntad de las personas también pueden acabarse por voluntad de las personas.

Paso ahora a conversar, si me disculpa Usted esta ya larga misiva, sobre las razones sobre las cuales las FARC ponen el mayor énfasis para insistir en la lucha armada bajo las circunstancias actuales de Colombia.

Pobreza y desigualdad acuciantes

Comienzo por los factores que harían inevitable la acción armada: las causas



estructurales como la pobreza, la monstruosa desigualdad en la distribución del ingreso, la inconmovible concentración de la propiedad sobre la tierra, la imposibilidad de las mayorías para acceder a una educación de calidad o a los servicios de salud….

Por supuesto la lucha armada hunde sus raíces en este océano de privaciones e iniquidades. Creo que pocos negarían la validez del argumento. Paradójicamente los militares que pusieron en marcha la maquinaria de guerra contra campesinos y colonos a mediados del decenio de 1960 introdujeron en el mundo oficial lo que el general Ruíz Novoa, Ministro de Guerra llamó entonces las causas estructurales de la subversión y que en el decenio de 1980 otro general, Landazabal Reyes Ministro de Defensa denominó como los "factores objetivos" de la violencia.

Pero aunque el argumento sea tan convincente en términos éticos y en términos lógicos, no deja, Comandante, de mostrar grietas cuando se lo somete a ciertas preguntas críticas y en el contexto concreto de Colombia.

Preguntas inquietantes

Sin contar sus años de actividad como autodefensa campesina, las FARC ya tienen 47 años de existencia. Es pertinente preguntar: ¿Cuáles son los beneficios que esta lucha abnegada de tres generaciones de hombres y mujeres guerrilleros le han traído a Colombia? ¿Cuáles grupos de trabajadores rurales o urbanos han logrado conquistas sociales *duraderas* por obra de las FARC durante este medio siglo? Más allá de los recursos polémicos, no descarto que Usted, Comandante, disponga de respuestas que yo ignoro y que sería del más alto interés para todos conocer.

La utilización del Conflicto

En este punto debo aludir al uso del conflicto interno por parte de los sectores dominantes para impulsar sus propios intereses económicos, sociales y políticos. Es evidente que los señores de la guerra, los paramilitares amparados por sectores de las Fuerzas Armadas y otros actores legales o ilegales opuestos al interés de los trabajadores y de las fuerzas democráticas se benefician de maneras muy distintas de la existencia y la prolongación del conflicto interno en contravía de los cambios que las FARC se propusieron desde su creación. Hay en especial razones para pensar que el fenómeno Uribe se gestó en el contexto del con razón llamado "síndrome del Caguán", un fenómeno político – emocional que arrastró a la mayoría de la opinión y la puso en manos de la extrema derecha.

La parapolítica, cuyo camino fue abierto por el paramilitarismo contrainsurgente y mafioso, ha sido el mecanismo más eficaz de reclutamiento de un nuevo personal político. Esa clase política accedió a las esferas de la dirección del Estado y de los partidos, creó sus redes de neo-clientelismo, e indujo a un nuevo balance de las participaciones regionales en el aparato del Estado.

Los apoyos populares de las FARC

Comandante: no tengo duda que a lo largo de su historia las FARC han contado con bases sociales de apoyo. En regiones enteras han sido el único Estado para la población excluida del acceso a bienes y servicios. A la larga se admitirá que por la acción de la insurgencia grandes regiones que por largo tiempo fueron periféricas han entrado paradójicamente en el proceso de la integración nacional. El hecho de que Colombia haya sido un país de colonizaciones y que aún en el siglo XXI haya frontera agraria abierta constituye uno de los fundamentos para entender la sociología de la guerrilla.

También entre las mayorías pobres de las grandes ciudades hay sin duda sectores que apoyan la lucha armada y personas de otros medios sociales que lo hacen por motivos políticos o ideológicos.

De aquí se siguen al menos dos grandes consecuencias. Por una parte no parece realista ni sensata la política de exterminio que proclaman o reclaman algunos sectores. Por otra parte no sería posible que el movimiento guerrillero acepte poner fin al conflicto interno mediante el trámite de una simple reinserción.

Apoyo insuficiente para lograr los cambios

Señalado lo anterior, debo añadir que el balance objetivo de los apoyos sectoriales y regionales al actuar de las FARC no constituye la base sociopolítica que les permita a las FARC encabezar el vasto movimiento político de las masas urbanas y rurales que se hace necesario para lograr cambios profundos en Colombia.

Las potencialidades de transformación que los movimientos armados han podido crear en su larga historia germinarán solo cuando ellos logren ser parte efectiva y por tanto creíble de un movimiento democrático por la paz. Por supuesto: la salida

negociada del conflicto no significará el cumplimiento automático de los cambios, pero sin duda contribuirá a crear las condiciones para que la gente luche por ellos de manera políticamente más efectiva y humanamente más constructiva.

El conflicto y la interferencia de Estados Unidos

Comandante: las FARC desde un comienzo reclamaron el desarrollo soberano de Colombia y en especial se opusieron a nuestra subordinación inveterada respecto de Estados Unidos. Pero, otra vez, los sectores dominantes han usado el conflicto para afianzar su alienación irrestricta con los intereses económicos y geopolíticos de ese país.

Cuando el segundo gobierno de Uribe estableció el Acuerdo de Cooperación Militar con el pretexto de combatir "el terrorismo", el embajador de Estados Unidos William Bronfield trató de tranquilizar a quienes se alarmaron o indignaron, al decir que no se trataba de algo nuevo sino de renovar un acuerdo anterior. Ese acuerdo no era otro que el Pacto Militar Bilateral firmado el 17 de abril de 1952. Tal ocurrencia bien podía tomarse como un desplante cargado de cinismo, en tanto el Pacto del 52 fue un acto de vergonzosa sumisión al interés militar de un país extranjero; corrían los tiempos de la participación de Colombia en la aventura de Estados Unidos en Corea.

No quisiera que esta reflexión mía se tomara como un reclamo al movimiento armado por no haber logrado la adopción de una política internacional independiente. En todo caso esta sería una responsabilidad que trasciende a los alzados en armas. Pero a mi juicio el que Colombia cuente con "la guerrilla más antigua del mundo", como suele decirse, tampoco ha servido para disminuir la dependencia frente al imperialismo.

Asesinato de los opositores: el exterminio de la Unión Patriótica

Comandante Cano, me refiero ahora a un punto que suele paralizar la discusión con quienes defienden la continuidad de la lucha armada: se trata del asesinato o la persecución de quienes han hecho dejación de las armas por parte de sectores del Estado, de sicarios al servicio de terratenientes, ganaderos, empresarios u otras fuerzas de derecha.

Esta en realidad es la expresión aguda de la intolerancia inscrita en el sistema político colombiano respecto de las corrientes alternativas o de izquierda que pretenden irrumpir en la escena política o impulsar los movimientos sociales.

En su ya mencionado reportaje para Publico.es, recordó Usted la serie bicentenaria de líderes populares que han sufrido la violencia y que va desde el atentado al Libertador hasta los asesinatos de Jaramillo Ossa y Cepeda Vargas, para concluir de manera lapidaria: "Porque en Colombia a la oposición democrática y revolucionaria, la asesina la oligarquía. La masacre de la Unión Patriótica es la muestra palmaria."

¿Quién podría sensatamente negar que la anterior afirmación tiene bases muy ciertas?

Y sin embargo una vez más es necesario abrir las fórmulas cerradas. La Unión Patriótica fue víctima de una alianza conformada por sectores de las Fuerzas Armadas, mafias del narcotráfico, gamonales políticos y paramilitares. Pero estas fuerzas contaron a su favor con el hecho de que la UP, surgida por convocatoria de las FARC, es decir por un movimiento guerrillero que hacía parte de un proceso de paz, tuvo que cargar con el fardo de sostener la política de combinación de todas las formas de lucha.

Me parece que en la encrucijada de 1984 se planteaba la disyuntiva: o bien se profundizaba el proceso de paz y la guerrilla se transformaba en una fuerza política sin apoyaturas militares, o bien se continuaba con la acción insurgente renunciando a la creación de una organización política legal.

Usted mismo ha insistido desde hace ya tiempo en un tipo de organización política distinto y por definición, *ilegal,* lo cual, conceptualmente al menos, tiene más coherencia que la fórmula de 1984.

El intento de sentarse en dos sillas a un mismo tiempo fue una decisión inevitablemente utópico-catastrófica. No soy tan ingenuo para pensar que los exterminadores de la UP se hubieran convertido en palomas de la paz o en defensores de Derechos Humanos ante la decisión de renuncia a las armas por parte de los insurgentes. Sin embargo considero que amplios sectores políticos y corporativos del país se hubieran constituido en dique de contención frente a esa alianza siniestra. Guiados por la ética, o aún por pautas mecánicas del principio

de justicia, hay fuerzas de opinión considerables que en casos semejantes han jugado en defensa de quienes optan por dejar las armas.

El M19: las respuestas del gobierno y de la opinión

Quizá, comandante Cano, sea pertinente recordar acá que en los acuerdos preliminares entre el M-19 y el gobierno Barco se adoptaron compromisos que luego

fueron parte del proyecto de reforma constitucional que debatía el Congreso en 1989. El gobierno se vio obligado a retirar el proyecto por la inclusión del tema de la extradición que auspiciaron las mafias. Pero si entonces el presidente no estuvo en condiciones de cumplir, los votantes resarcieron al M-19: primero en las elecciones al Congreso de 4 de marzo de 1989 y luego, más ampliamente, en las elecciones a la Constituyente del 9 de diciembre de 1990.

Otra cuestión sería discutir lo que hizo el M-19 con semejante capital político. Pero en aquella encrucijada confluyeron una organización guerrillera en proceso de paz y el vigoroso movimiento ciudadano por una nueva Constitución -la que sería adoptada en el 91.

Respuesta sibilina

No puedo concluir sin referirme a una pregunta que a Ustedes siempre les formulan y con la cual seguramente los seguirán apremiando: la relación de las FARC con los negocios de la droga, dados en especial los altos costos de la guerra en Colombia.

Debo admitir el desconcierto que me produjo su respuesta en la citada entrevista para Público.es: "Quisiera serle taxativo en esto: ninguna unidad fariana, *de acuerdo a los documentos y decisiones que nos rigen*, (énfasis añadido) pueden sembrar, procesar, comerciar, vender o consumir alucinógenos o sustancias psicotrópicas. Todo lo demás que se diga es propaganda".

Yo no quisiera figurar entre los propagandistas, pero no puedo ignorar que su remisión a "*los documentos y decisiones que nos rigen*" fue una manera muy peculiar de respuesta sobre la cual habría que concluir sencillamente que dentro de las FARC sucede lo que ocurre en Colombia: que la ley *se obedece pero no se cumple.*

Los signos de cambio en América Latina

Los partidarios de la salida política al conflicto solemos buscar los signos

que anunciarían la paz en cada coyuntura. No pocas veces se trata de meras proyecciones del deseo; pero esta carta no quiere anticipar escenarios futuros, sino apelar de manera realista o aún desencantada al análisis de los factores e intereses particulares, corporativos o existenciales que sustentan la guerra colombiana, para invitarlo, comandante Cano, a repasar su peso frente a los beneficios que para todos tendría el compromiso efectivo con la salida negociada del conflicto.

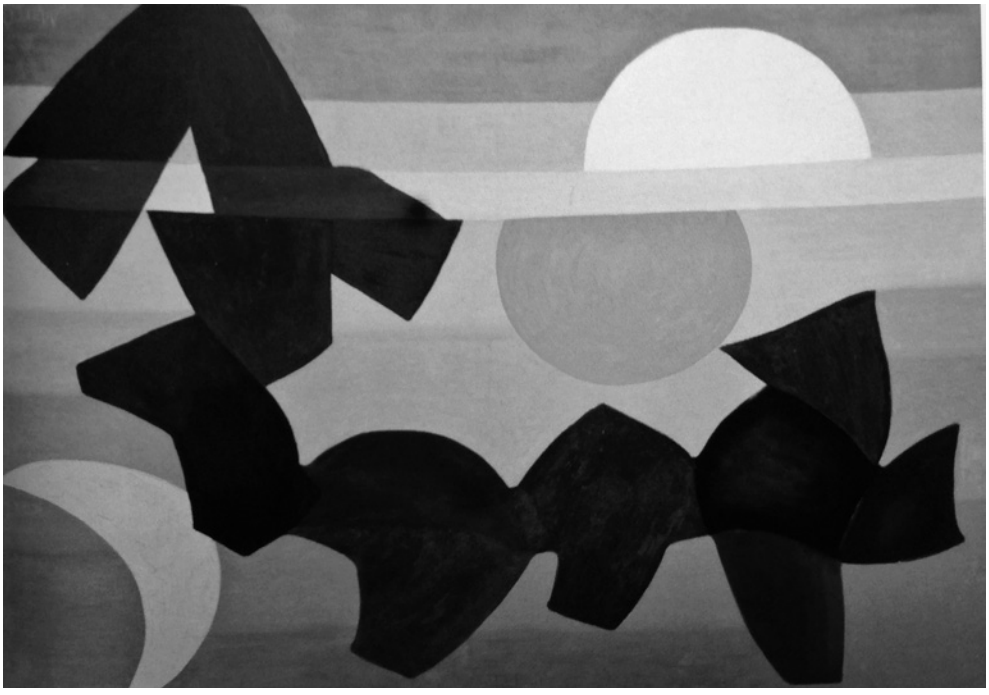
Las tendencias sociales, políticas y geopolíticas que desde hace un decenio se vienen observando en América Latina estimulan el análisis y alientan la controversia democrática. En Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador en Argentina y Uruguay se vienen ensayando caminos de participación nueva de la gente, se adoptan políticas sociales más o menos profundas según el prisma desde el cual se las mire, se plantean apuestas por el avance de un mundo multipolar contra las formas más aberrantes de la dependencia con respecto al imperialismo, se dan pasos de un mayor control de las riquezas y los recursos propios.

Todos estos países pasaron por experiencias insurgentes a las cuales encontraron término ¿Quién hoy podría invocar como emblemática particularidad colombiana la prolongación de una guerra que no parece que pueda prolongarse sino a costa de descomponer a sus protagonistas militares y de enervar a toda la nación con el culto a los valores de muerte?

La perpetuación de la guerra no puede erigirse en mito nacional ni el programa de la destrucción del adversario en un objetivo colectivo exaltante.

Es una decisión

Comandante Cano: Quisiera concluir con una cita de la Asociación Campesina



del Valle del Río Cimitarra: "A nuestro entender, el conflicto puede tener salida atacando sus causas objetivas, mediante la realización de reformas políticas, económicas y sociales, que permitan mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población colombiana. Pero también, a partir de la voluntad y decisión política expresa de las fuerzas en contienda". (Encuentro Nacional de Comunidades, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz en Colombia. "El diálogo es la ruta" Barrancabermeja, Agosto 12-15 de 2011).

Es una aspiración que se fortalecerá en la medida en que las señales aún débiles pero ciertas de paz que se originan en el gobierno y aquellas que Usted y sus compañeros han lanzado en los últimos meses se plasmen en una auténtica y concreta opción por la paz.

Respuesta a Medófilo Medina

Timoleón Jiménez*

Enero 13 de 2012

Doctor:
Medófilo Medina
Bogotá.
Apreciado Profesor:

Con mi saludo quisiera hacerlo partícipe de la voluntad varias veces expresada por el Camarada Alfonso Cano de dar respuesta a su carta abierta. Es obvio que las circunstancias que lo asediaban hicieron imposible la materialización de su propósito.

Si me lo permite, muerto el Comandante en combate, intentaré sin pretensión satisfacer en parte sus inquietudes, salvando el hecho de que usted le haya escrito a él en consideración a la relación personal y política que sostuvieron en un ya lejano pasado. A veces me asalta el pensamiento de que quería usted entablar más un intercambio con el antiguo camarada que con las FARC. Es que no es fácil relacionarse en las condiciones actuales del país con nosotros. Existe un prisma mediático establecido, que ubica de inmediato en la picota a quien ose asumir una visión distinta a la pregonada por el poder. Eso del pensamiento único es mucho más que una consigna. Adopta consecuencias letales, trascurre por el ostracismo y el olvido, la estigmatización, el fin definitivo del empleo, la intimidación, la ruina, la cárcel, hasta llegar incluso a una muerte anodina.

Su valentía merece reconocimiento. Como académico de criterio indepen-

* Comandante Estado Mayor Central de las FARC-EP

diente, se arriesga a pasar de la efímera gloria concedida por sus francos cuestionamientos, a la irredimible condena por haberse prestado a servirnos de incauto instrumento. Todo dependerá de lo que los depredadores de oficio puedan obtener una vez se lancen hambrientos sobre nuestras consideraciones. Es eso en realidad lo único que les interesa, un flanco nuevo por el cual intentar desangrarnos.

El porqué de la guerra

El primer subtítulo de su carta dice: Los colombianos necesitamos entender el porqué de la guerra, lo cual nos confirma que usted no se encuentra solo y que un importante sector del pensamiento social espera sin prevenciones lo que podamos decir. El movimiento que se firma Colombianas y Colombianos por la Paz parece haberlos decepcionado un tanto, en atención a que en su parecer terminó absorbido por las urgencias emanadas del intercambio humanitario.

Quizás no resulte conveniente la generación de ese tipo de distancias. Tal vez lo que en el camino la senadora Piedad Córdoba y otras personalidades han comprendido, es que resulta más fructífero para la paz de Colombia asumir tareas prácticas y concretas por la vida y la libertad de sus compatriotas, que enfrascarse en sesudos intercambios epistolares que generen un mar de especulaciones. Son puntos de vista, no necesariamente contradictorios, y que bien podrían marchar de la mano en una misma dirección. Es cuestión de sumar antes que dividir.

Pero expone usted en su apoyo argumentos que son respetables. El debate abierto y público de opiniones en torno a la inevitabilidad de la guerra y las posibilidades de la paz es urgente. Creemos que él envuelve una discusión amplia sobre las realidades económicas, sociales, políticas, culturales y hasta ambientales del momento contemporáneo mundial, latinoamericano y nacional. Nunca le hemos temido a eso, por el contrario, nuestro alzamiento en armas obedece a que siempre se nos han cerrado las puertas para tomar parte en él.

Usted no lo sabe, tal vez porque el tipo de vida que le implica su vocación por la investigación social y la enseñanza es muy diferente al nuestro. Pero eso que llama dificultades políticas y técnicas o los avatares de la guerra que podrían dificultar un intercambio fluido, significan en realidad que las veinticuatro horas del día hay sobrevuelos sobre nosotros ubicando la mínima señal eléctrica, de radio, teléfono o internet para molernos a bombas. Sin hacerle mención de las enormes operaciones terrestres que buscan exterminarnos.

Es una verdadera hazaña lograr hoy día comunicarnos con el resto del mundo. No solemos hablar de esto pues automáticamente nos exponemos a la furiosa jauría, siempre presta a escarnecernos por pretender aparecer como inocentes víctimas. Tal vez ustedes logren valorar la importancia de que nuestros adversarios otorguen garantías efectivas para nuestro ejercicio político. Valdría la pena que en aras de la paz intentaran también hacer conciencia en ellos al respecto. Pero no creemos que sus misivas en ese sentido cuenten con la difusión de las que nos dirigen. Muy probablemente los tratarían de algo muy semejante a ingenuos útiles. Precisamente este conflicto es un debate armado

en el que una de las partes, representada por el Estado, emplea todo género de recursos con el propósito de impedir la expresión del pensamiento de la otra. En el medio han estado siempre los que inclinados hacia nuestras posiciones terminan siendo víctimas de la persecución, así como quienes en aras de su tranquilidad han asumido que de lo que se trata es de decir cosas que halaguen a los poderosos, recurriendo por pulcritud al ingenio.

Qué bien le haría a la democracia y la paz que su carta contribuyera a abrir una brecha por la que el ciudadano corriente pudiera conocer la argumentación de las FARC y sopesar nuestra visión actual del país y nuestra propuesta hacia el futuro. La generalidad de su exposición parece apostar a la idea de que conseguirlo es un asunto sencillo, ligado fundamentalmente a una cuestión de voluntad personal. Así se desprende incluso de su ilación histórica, de acuerdo con la cual haber surgido fue justo, pero en cambio persistir hoy es infundado.

La democracia colombiana

Usted debe conocer que al interior del universo de los medios de comunicación circulan diccionarios para uso de redactores y presentadores. En ellos se define de modo categórico el listado de los términos que pueden ser usados y el sentido imperativo en el que deben emplearse. Imperialismo y oligarquía son, por ejemplo, palabras en absoluto desuso, que deben ser puestas en su adecuado lugar de ridiculeces cuando algún trasnochado vocero de extremistas las traiga a cuento. Existe un solo léxico admitido, y con el lenguaje unas únicas realidades permitidas.

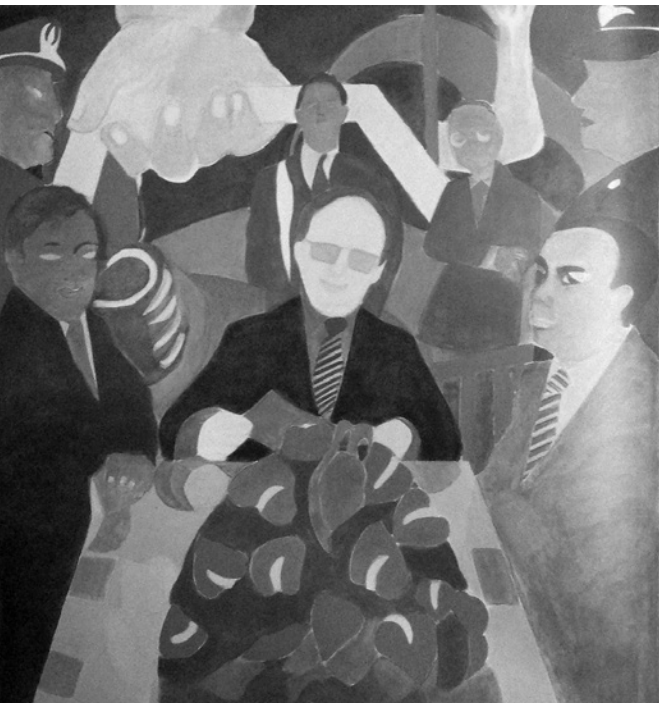
Según estas, el sistema multipartidista y de elecciones periódicas promovido desde la Casa Blanca, es el máximo ideal democrático alcanzado por la humanidad. En nombre de él pueden invadirse y bombardearse países y pueblos enteros, desestabilizar gobiernos no afectos, o imponer por la fuerza autoridades transitorias o definitivas. Siempre con el sano y loable propósito de dar paso a las economías de mercado, a la millonaria inversión extranjera, a la exacción descarada de recursos naturales, al enriquecimiento apresurado de una élite privilegiada.

Nuestro modo de ver las cosas es distinto. Se parece más al del asesinado Presidente Lincoln. Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sobra decir que el régimen colombiano se ajusta más a las

previsiones difundidas por el Washington de Bush y Obama. Se humilla ante ellas. Nosotros creemos que no son coincidentes los intereses de las clases privilegiadas con los de los millones de destinatarios de sus políticas. Creemos que los de abajo tienen su propia visión de las cosas y nos identificamos con ella. Promovemos entonces un régimen político distinto. Que parta de una premisa fundamental, la independencia y la soberanía nacionales. En Colombia debe gobernar un partido o movimiento que se preocupe antes que nada por la suerte de sus habitantes, por elevar el nivel de vida de los más desfavorecidos. Para hacer realidad eso, tal vez sea necesario chocar con los intereses de diversos monopolios económicos de aquí y el exterior. Pero las decisiones políticas fundamentales, y todas las demás, deben apuntar a satisfacer el interés de la mayoría de los colombianos.

Porque la política como tal, en este país y en la mayoría de las economías de mercado, ha perdido por completo su esencia. No se llega al poder para cumplir un determinado programa. Se llega para ejecutar las directrices emanadas de los grandes poderes internacionales. Las economías y los planes de desarrollo nacionales y locales están condenados a cumplir con el libreto del FMI, el Banco Mundial y la OMC, entre otras instituciones. Cada país y provincia tienen ya su destino fijado en una cumbre previa. Ningún gobierno puede salirse del guión establecido. Si alguno lo pretendiere, será inmediatamente tachado de antidemocrático y quedará expuesto a peligrosas sanciones. Definitivamente eso no puede ser admitido en verdad como democracia. El ejemplo más a mano lo tenemos en Colombia. En la más reciente campaña presidencial los candidatos que quisieron contar con una mínima posibilidad de victoria, estuvieron obligados a declarar en sus propios estilos que continuarían con la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Esa era la única línea que se consideraba como democrática. Ninguna otra posibilidad contaba con la más mínima esperanza. Si recuerda usted las últimas elecciones regionales y locales, el tan promocionado ex guerrillero que terminó elegido a la alcaldía de Bogotá, tuvo que romper con el movimiento de izquierda del que hacía parte, declarar sin pudor su disposición a vincularse al proyecto de Unidad Nacional del Presidente y hasta identificarse con el cadáver político de Álvaro Gómez. Sólo con tan denigrante muestra de sujeción a los dictados del gran capital podía contar con su aquiescencia y por tanto terminar electo.

Como producto de eso, y no creo que usted se niegue a reconocerlo, el ejercicio de la política en los marcos institucionales de hoy, está vaciado por completo de contenido ideológico. Es que hasta la noción de ideología fue proscrita. Las campañas electorales se reducen a estrategias de marketing en las que cuentan son los capitales invertidos en la orgía publicitaria. Capitales que tendrán que rendir sus beneficios desde las administraciones elegidas. Aspiraciones personalistas ligadas a los más bajos propósitos y encubiertas por floridos discursos que no dicen nada. Ante tamaña realidad, los de abajo, el pueblo raso del que los usos corrientes prohíben hablar, no cuenta con posibilidad legal de expresar sus intereses. Se lo pretende arrastrar dentro de partidos y



grupos nepotistas y corruptos, que sólo le producirán enormes decepciones. Por eso, para hacer valer sus derechos, la gente no tiene no tiene más alternativa que apelar a las calles, a las carreteras, a los paros y asonadas para lograr ser atendida. Es ese estrecho marco, reforzado por la violencia represiva y criminal del Estado, el que explica la resistencia popular a la represión, y la existencia y persistencia del alzamiento armado en Colombia. Al tiempo que imprime forma objetiva al contenido de una solución política. Esta no puede entenderse sino como un replanteamiento del orden existente. No se trata de que guerrilleros arrepentidos y previamente desacreditados en extremo, entreguen las armas, se sometan al escarnio mediático y jurídico, para luego, con la espada pendiendo de un hilo sobre sus cabezas, ingresar al mercado de la política partidista a fin de hacer coro a las mentiras oficiales. De lo que se trata es de reconstruir las reglas de la democracia para que se debatan ideas y programas en igualdad de oportunidades.

Sin el riesgo de ser asesinados al llegar a casa. O desaparecidos y torturados por una misteriosa mano negra que ya se anuncia que existe, como aquellas fuerzas oscuras que exterminaron a la Unión Patriótica bajo la mirada impasible de la clase política colombiana. Es justo que se abra un debate público y libre sobre estos asuntos, que se pueda hablar de estos temas sin ser arrollados de inmediato por los monopolios informativos concertados. Porque hasta de eso se trata en una solución política, de cómo poner freno a la intolerancia del unanimismo mediático.

Un escepticismo fundado en la experiencia

Profesor, créame cuando le digo que admiro su coraje. Es imprescindible en cualquier sociedad la actividad de la gente que adversa con altura. Tal vez no estemos de acuerdo con todo lo que plantea, pero reconocemos su honestidad y nos inspira respeto. Verá, nuestro análisis de la sociedad colombiana no puede restringirse al examen de las individualidades. Usted mejor que nadie sabe que un enfoque científico, implica el reconocimiento de que los intereses de las clases inmersas en el proceso histórico, tienen mayor relevancia que la actuación de los personajes.

Varios de nuestros contradictores, desde espectros distintos, critican lo que llaman nuestra ceguera ante las positivas señales planteadas por Santos desde su llegada misma al gobierno. Que su reconciliación con Chávez y Correa, que su concertación

con las cortes, que haber incorporado a Angelino, que sus guiños a la oposición, que su disposición a los derechos humanos, que su ley de víctimas y de restitución de tierras, que su voluntad de paz. Se empeñan en convencernos de que sumarse a Santos refuerza la lucha contra la extrema derecha fascista que representa Uribe, y enrumba el país por la senda de las reformas democráticas. Están confundidos cuando menos.

Santos no se distanció un milímetro de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que patrocinó la confianza inversionista de Uribe. Lo que nos muestran sus locomotoras es la extrema radicalización de las prácticas neoliberales, la aceleración incontrolada de la deuda externa, la más desvergonzada entrega de nuestras riquezas naturales, el arrasamiento ambiental en beneficio de los monopolios, la prelación por la agroindustria exportadora en perjuicio de la economía campesina. Las distancias políticas que separan a Uribe de Santos no son muy distintas a las que separan a Bush de Obama o a Mariano Rajoy de Zapatero. Todo eso a la par con la profundización de la guerra, los bombardeos y la multiplicación de operaciones militares en las zonas agrarias, las capturas masivas silenciadas por la prensa en distintas regiones del país, el asesinato de dirigentes sindicales y populares, particularmente de reclamantes de tierras, su ley de seguridad contra la protesta ciudadana, sus programas de multiplicación carcelaria, etcétera. Su proyecto de reforma a la justicia resultó chocando de frente con las cortes y en cambio resucitó la justicia penal militar para reforzar aún más la impunidad.

Y ya sabemos cómo, sólo mediante una gigantesca movilización estudiantil, se logró frenar su proyecto de privatización de la educación universitaria. Quizás lo que está influyendo a distintas oenegés para salir en su defensa, son la fronda burocrática y los acuerdos de asesoría y asistencia, es decir los contratos implicados en la reglamentación de la ley de víctimas y restitución de tierras, para los cuales se hace ostentación de multimillonarios presupuestos que, seguramente, inspiran los buenos sentimientos de muchos sectores. Por la plata baila el perro dice el viejo refrán colombiano, del cual nos sentimos sincera y radicalmente distanciados.

Usted insiste en que expresemos una opinión ampliada sobre esta ley. Para ser sincero, las expectativas que nos despierta se parecen mucho a las que nos inspiró la aprobación de la ley de justicia y paz con la que se pretendió embrollar el problema paramilitar y reparar en primera instancia a las víctimas. Astutas maniobras para neutralizar la opinión internacional y cooptar opositores. Sus posteriores desarrollos, ampliamente conocidos, hablan por sí solos de sus falsas bondades. Los mismos personajes que asumieron la Comisión de Reparación vuelven a aparecer encabezando esta nueva aventura, lo cual resulta de por sí bastante diciente.

Sectores serios de la izquierda, en diversas publicaciones, han señalado ya repetidamente sus reparos, a los cuales sin dudar nos sumamos. Sería muy largo explayarnos aquí. Pero no sobra advertir que son los intereses de las multinacionales y grandes capitales locales, los que exigen una normalización o legalización de las tierras en las que adelantan o piensan adelantar sus proyectos de inversión agroindustrial. La urgencia de reglas claras apunta a preferir el derecho de terceros ocupantes de buena fe, con los que los modestos despojados tendrán que pactar sus cuotas de participación, perdiendo para siempre la posesión de su tierra y su proyecto de vida.

El derecho de las víctimas a retornar a su lugar de origen o reubicarse en otro, se consagra sujeto extrañamente a los marcos de la política de seguridad nacional, lo cual debía resultarles preocupante. Llama la atención que la exclusión del derecho a las víctimas del despojo anteriores a 1991, deja por fuera de plano a los campesinos desterrados en el Magdalena Medio durante la embestida paramilitar de los ochenta. Curiosamente esa región comprende las mejores tierras del país para el cultivo de la palma. Y una mención de Perogrullo, una cosa son los términos judiciales previstos en la ley y otra los reales que consumen los largos contenciosos ante los jueces.

Con relación a los sectores extremistas del latifundio, el paramilitarismo y mismo empresariado que se oponen a la aplicación de tal ley, cabe tener presente que si no representan una mayoría significativa en el entorno de los intereses involucrados en la normalización del derecho de propiedad, terminarán aislados. No podrán impedir la realización de los urgentes requerimientos del gran capital. Será éste el encargado de delimitar con el tiempo el verdadero alcance de la norma, y no serán los derechos de los desplazados los que terminarán imponiéndose. A menos que ocurra un cambio radical en este país, el cual no va a provenir, estamos seguros, del que algunos juzgan buen corazón de Santos. Si por desgracia, fueran esos sectores radicales los que cuentan con el mayor peso, nuestro país va a verse abocado a una nueva y terrible ola criminal de masacres, asesinatos y destierros, los cuales solo vendrían a demostrar que Santos no fue más que la vana ilusión de algunos, en el sentido de representar sectores sociales distintos a las mafias y el lumpen que defendió su antecesor. Resulta así sospechosa la proclamada intención gubernamental de profundizar la guerra total contra nosotros antes que contra aquellos. Mal puede salirse

a proclamar la necesidad de respaldar al actual gobierno. Antes bien, creemos que adquiere una urgencia acuciante denunciar sus demagógicas promesas y sobre todo su actuación completamente contraria a ellas.

Un poco de historia

La extensión de los temas implicados en su carta riñe con las circunstancias y el tiempo que nos permite la confrontación. El rigor académico exigiría en realidad que los argumentos en los que cifra usted ciertas afirmaciones acerca del pasado histórico, fueran expuestos con mayor lógica y amplitud, para poder sopesarlos en su justo valor. De alguna manera la naturaleza de su escrito lo impide, lo cual puede terminar por conducirnos a un vano enfrentamiento de supuestos inadecuadamente fundamentados. Sin embargo, me permito señalar algunos hechos que creo podrían enriquecer aun más sus apreciaciones. Sin desmedro de la importancia que merece el estudio del paro cívico nacional de 1977, creo que el referente básico para la comprensión de los desarrollos posteriores de la historia colombiana no deja de ser el 9 de abril de 1948. De allí surgió la certeza de que cualquier alternativa política democrática, progresista, antiimperialista y popular estaba sentenciada a muerte por los sectores económicos y políticos dominantes en nuestro país. La convicción de que un levantamiento general de las multitudes inconformes estaba condenado al fracaso si no contaba con una dirección seria, madura, experimentada y consecuente. La legitimación del derecho del pueblo a alzarse en armas cuando la violencia oficial y privada se ensañara contra él. También la inolvidable lección de que por más contradicciones que puedan existir al interior de las clases dominantes del país, estas terminan por unirse en un frente único y brutal cuando quiera que juzgan que el populacho se creció envalentonado a reclamar sus derechos. La pusilánime y ofídica actitud de la dirección liberal reunida con Ospina Pérez en palacio, ocupará siempre la memoria popular cuando se trate de graficar la traición contra toda una nación enardecida. Pero por sobre todo un aspecto de la historia nacional que usted apenas referencia para de alguna manera ponerlo en contra nuestra, la perversa intervención de los Estados Unidos.

Casi a la manera de un faro gigantesco que con su haz de luz rompe las tinieblas para conducir a buen puerto una embarcación en medio de la noche oscura, la correcta interpretación del papel desempeñado por la IX Conferencia Panamericana en el asesinato de Gaitán, y el señalamiento posterior contra el Partido Comunista como autor de ese hecho, ponen de manifiesto el trágico destino de nuestro país bajo la égida de la Doctrina de Seguridad Nacional adoptada tras la segunda guerra mundial por el Estado norteamericano. La teoría del enemigo interno que se encargarían de inculcar a todas las fuerzas armadas del continente dejaría una huella infame. Son demasiadas cosas juntas como para menospreciar la trascendencia del acontecimiento. Es claro que con él se prefigura la suerte actual de Colombia. Hasta en algunos detalles sorprendentes, como que el primer designado a la Presidencia llevaba el apellido Santos.

La misma sangre azul de los que pasan y vuelven a dirigir el país. Había también un Lleras, del mismo pedigrí del ministro del interior actual. Y así, de prisa, valdría la pena recordar que el afán del fanático falangista Laureano por una salida militar a la crisis, terminó por servir a Ospina para convencer a al liberalismo de la conveniencia de una arreglo amigable.

Un nuevo episodio de la rivalidad entre esas dos familias conservadoras tuvo lugar durante el paro del 14 de septiembre. El llamado ospino-pastranismo, resentido contra la tenaza Álvaro-Lopista que lo excluía de la burocracia, optó por sumarse a la convocatoria de paro, aupando a la UTC a salir a la calle a sumarse a los 3 millones de arrepentidos que habían votado en el 74 por Alfonso López. Era su pequeño desquite por el 9 de abril. Cuando la protesta social se desbordó incontenible, los godos echaron atrás, interesados apenas como estaban en puestos y contratos. Son antecedentes que se olvidan a la hora de estimar la sinceridad de la voluntad de paz de Andrés Pastrana, hijo de Misael, cuando decidió jugarse un diálogo en el Caguán.

Eso de la intervención norteamericana se convirtió en una atrocidad mundial en los años sesenta del siglo pasado. El pavor al imaginario despliegue soviético y a otra Cuba, en medio del renacer independentista de África y Asia, sofisticó la Doctrina de Seguridad Nacional a la modalidad de la contrainsurgencia aprobada por John F. Kennedy. De ella provendrían el escalamiento de la agresión a Vietnam, la matanza de medio millón de indonesios en nombre del anticomunismo, el golpe

militar contra Juan Bosh y la intervención militar en República Dominicana, el golpe en Brasil contra el gobierno de Joao Goulart. Y el Plan LASO que involucraría a la región agraria de Marquetalia primero, y luego a Riochiquito y otras zonas del país.

Mal puede entonces compararse la naturaleza de los conflictos agrarios en el Sumapaz o el Tequendama, en defensa de la vida y de la propiedad de la tierra contra la voracidad latifundista, con la campaña terrorista anticomunista desplegada por el imperialismo en todo el orbe y aprovechada por la oligarquía liberal conservadora para eliminar la oposición a su Frente Nacional. Los intereses en juego eran completamente distintos. Cuando los campesinos marquetalianos se dirigieron al país y al mundo entero, pidiendo solidaridad para evitar ser agredidos como se tramaba, ofrecieron en cambio un diálogo que fue rechazado de plano y se trocó por

bombas y metralla. De allí brotaría el histórico Programa Agrario que definió el carácter de su lucha.

Se trataba de una lucha de índole política, por el poder para el pueblo. Ni en ese Programa Agrario, ni en ningún documento posterior de las FARC hasta la fecha de hoy, se ha planteado jamás que como organización político militar nuestra meta sea la toma del poder tras derrotar en una guerra de posiciones al Ejército colombiano, como se repite una y otra vez por todos aquellos que insisten en señalarnos la imposibilidad de ese objetivo. Desde nuestro nacimiento las FARC hemos concebido el acceso al poder como una cuestión de multitudes en agitación y movimiento. Así como con la táctica de la combinación de las formas de lucha definimos que no desdeñamos ninguna de las vías que las clases dominantes nos permitan u obliguen a emplear.

Desde luego que esa es otra discusión que desborda el tema de que nos ocupamos. Déjeme decirle en cambio, Profesor, que cuando se estudian fenómenos complejos, hay que tener los dos ojos abiertos, para no incurrir en el error de mirar un solo aspecto. Si la desmovilización de las guerrillas liberales y comunistas que se sucedió en el país en el año 1953 no condujo a la paz definitiva, a quienes menos puede imputárseles la responsabilidad es a los comunistas. Los movimientos de autodefensa del sur del Tolima se trasladaron al oriente de ese departamento, a Villarrica y sus alrededores, ilusionados con las promesas oficiales y dispuestos a convertirse en pacífico movimiento agrario.

De allá los sacarían a la brava los planes militares de la dictadura de Rojas Pinilla, en uno de los dramas humanos más terribles y conmovedores de la historia colombiana. La guerra de Villarrica aparece en crónicas de la época, como crudo testimonio del trato que confieren los dueños del poder en Colombia a quienes confían ingenuamente en sus palabras. De esa auténtica diáspora terminarían surgiendo las colonias agrarias del Ariari, Guayabero, Duda, perseguidas igualmente con saña en años posteriores. El pequeño foco campesino dirigido por Jacobo Prías Alape y Manuel Marulanda Vélez, que optó por penetrar a las profundidades de la montaña y fundar la región de Marquetalia, sería atacado una década después, tachado de república independiente.

Usted reconoce no ser un experto en las FARC. Al parecer hay especialidades académicas sobre nosotros. Que sepamos, ninguno ha llegado acá nunca a entrevistarnos. Es lo menos que podría esperarse de quienes escriben libros o dictan conferencias sobre nuestra lucha. Cosas de la ciencia social posmodernista. La desconfianza al discurso del poder no es cuestión gratuita. Ya le hablaba de Villarrica. Está también lo sucedido con Guadalupe Salcedo y otros jefes guerrilleros desmovilizados. Carlos Pizarro. ¿Usted de veras cree que tiene alguna presentación decir que el genocidio contra la Unión Patriótica hubiera sido evitado por la reacción ética de fuerzas considerables de opinión surgidas como reacción del abandono de las armas por nosotros?

El exterminio de la Unión Patriótica se halla enmarcado dentro de la estrategia del denominado conflicto de baja intensidad,

una versión más avanzada de la Doctrina de Seguridad Nacional. La UP era uno de esos partidos antidemocráticos que según el documento de Santafé debía ser neutralizado por promocionar el estatismo. Si usted hace memoria, tal vez recuerde que no sólo se persiguió de manera implacable a la Unión Patriótica, sino que con ella perecieron también los más destacados defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales, campesinos y populares más comprometidos en el conflicto con las recién aparecidas políticas neoliberales. Más tarde no sólo se asesinó a los líderes sino que fue emprendida una diabólica operación de exterminio generalizado, desplazamientos y terror.

Usted dice bien, todo ello producto de una impúdica alianza entre sectores de las Fuerzas Armadas, mafias del narcotráfico, gamonales políticos y paramilitares. Pero soslaya que aquello se constituyó en una verdadera política de Estado, auspiciada y consentida desde el Pentágono. Excluya los muertos de la Unión Patriótica, caídos, según usted, por obra de nuestra utópica y catastrófica decisión de sentarnos en dos sillas. ¿Cuántos suman? ¿5.000? Resultan en realidad un porcentaje mínimo en el espantoso holocausto en que las clases dominantes sometieron a nuestro país en las últimas tres décadas. ¿Fueron dique de contención de semejante avalancha de sangre las fuerzas políticas y corporativas que hubieran actuado por obra de nuestra desmovilización?

Profesor, lo que ha sufrido nuestro país durante décadas es la siniestra práctica fascista de seguridad nacional con traje de democracia. Esa no cambia porque el Presidente haya sido Valencia, Belisario

(¿Recuerda el Palacio de Justicia?), Gaviria, Samper, Uribe o Santos. Mientras los colombianos en conjunto no tomemos la decisión real de apelar a todas nuestras reservas políticas, sociales, culturales y éticas a fin de desterrar de los cánones constitucionales y legales esa perversa concepción de Estado, que encarnan en primer término las fuerzas militares y de policía, el fin del conflicto y la paz permanecerán muy distantes. En ese contexto, la voluntad de paz adquiere visos complejos, que superan de lejos la decisión unilateral de entregar armas.

Unas precisiones necesarias

Al igual que sucede con el desconocimiento de la situación que soportan en las cárceles del país una considerable proporción

de colombianos encerrados por cuenta de su pertenencia a las FARC, al lado de los cuales una porción notablemente mayor de compatriotas paga entre rejas su vocación por la lucha social y política, da la impresión de que para mucha gente en nuestro país los guerrilleros heridos o muertos en combate no existieran, o al menos se tratara de unos seres humanos inferiores cuya deleznable vida puede ser truncada sin que le importe a ninguno. Pero no es así en verdad, Profesor. Dentro de las miles y miles de víctimas del fascismo en nuestro país, hay que incluir también a las valerosas mujeres y hombres que entregaron su vida o su integridad física combatiéndolo. Y un razonamiento elemental conduce a hacerlo. Se trata de colombianas y colombianos que comprendieron la necesidad de luchar por un país mejor, y asumieron esa tarea conscientes de los enormes riesgos que les deparaba. El alzamiento armado está reconocido como la forma más elevada de la lucha política, es decir que hace parte del aluvión de formas de actividad que persiguen el objetivo del poder para el pueblo. No es ajeno a este, y es más, no podría existir si no contara con una enorme base popular de apoyo.

Puede parecer ingenioso y hasta despertar aplausos, pero no resulta convincente trazar una frontera que separe a la guerrilla de la lucha popular, ni reclamarle de manera independiente cuáles puede contar como suyos entre los éxitos conseguidos a favor de las masas oprimidas. Las luchas de todos los de abajo conforman un frente y sus conquistas o reflujos benefician o aplazan el acercamiento al objetivo general de redención social. Desde luego que examinar las cosas así se corresponde a la óptica de clase de los explotados. Otras visiones, animadas muchas veces por la idea de una neutralidad inexistente, en realidad hacen parte y sirven a los intereses de los de arriba, a la burlona sonrisa de los sectores dominantes.

La lucha popular en su conjunto ha conseguido muchas cosas y la sola pregunta, cuando menos, destila cierto veneno, bien sea de naturaleza nihilista o francamente burgués. De la lucha armada de veinte años que precedió los Acuerdos de La Uribe, se derivarían para el país efectos verdaderamente modernizantes que implicaron importantes avances. Desde luego que unidos a los clamores y reclamos de muchos otros sectores, ya lo decía atrás. No se trata de metas acabadas, sino especies de postas para el posterior relevo que lleve las cosas más adelante.

¿A quién en Colombia le parece tolerable hoy que el Presidente de la República designe uno a uno los gobernadores y estos luego uno a uno a los alcaldes? ¿Acaso no fueron los tiros y las resonantes denuncias de las guerrillas colombianas las que pusieron en el centro del debate nacional el tema de los derechos humanos? Después se tejería toda una leyenda en torno a la idea de la séptima papeleta que supuestamente sirvió de origen a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿No fue un clamor mil veces repetido al país por Jacobo Arenas, la necesidad de realizar una Constituyente que relevara la vieja constitución del 86?

Debe sonarles a bofetada en el rostro a los militares colombianos, y más ahora que se aprestan a que el Congreso santista les reviva su fuero militar, el que las FARC

afirmemos que a punta de denuncias y tiros también, desempeñamos un rol determinante en la concepción restrictiva que terminó imponiéndose en nuestro país sobre esa jurisdicción especial patrocinadora de escandalosa impunidad. Plinio Apuleyo Mendoza o José Obdulio Gaviria viven amargados, restregándoles a los demás colombianos cómo permiten que la guerrilla se cuele en todas partes. No es la guerrilla, señores trogloditas, son los avances democráticos de la lucha popular.

¿Y el estado de sitio? ¿Y el arrinconamiento del paramilitarismo fascista? ¿Será cierto de verdad que las armas en manos del pueblo no jugaron un papel considerable en ello? La lista que podría ir completándose es muy larga, Profesor. Incluso podría convertirse en un importante tema de estudio en foros universitarios. Nuevamente el tiempo y el espacio me impiden extenderme más. Además de que al hacerlo, de buena fe y sin intención de perjudicar a nadie, podría acrecentar el disgusto de personajes y sectores supremamente peligrosos para la salud de los heroicos compatriotas que, en distintos momentos y lugares, han levantado tan dignas banderas.

Hasta cierta etapa de la lucha armada, anterior a la generalización de la táctica estatal de combatirnos con la fórmula de secarle el agua al pez, nuestra presencia y combatividad en muchas regiones del país, dio origen a que en las alturas del Estado se enteraran de la existencia de esas gentes y la suma de adversidades que pasaban. El afán de aislarlas de nosotros, condujo por una especie de carambola, a que así se tratara de trochas llegaran a muchos pueblos y veredas, vías por las cuales circulara un carro de línea, escue-

las donde los niños pudieran educarse, puestos de salud en donde al menos una promotora les suministrara una elemental asistencia.

Hasta la consolidación actual que pregonan practicar en catorce zonas del país las fuerzas militares, ha implicado la atención de algunas de las necesidades angustiosas de la gente. Mal haríamos nosotros en sobreestimar este aspecto sobre los desplazamientos, los encarcelamientos masivos, las persecuciones, los crímenes y el terror generalizado que impone la ocupación militar de extensas áreas, así como el repoblamiento de las mismas con gentes de su fiar. La asistencia social de programas como Familias en Acción, que hace parte de todo lo anterior, no deja de tener el sabor amargo de que jamás habría

surgido si la guerrilla no hubiera puesto antes un pie allí. Esto suena indignante, pero no deja de ser útil para dimensionar la mezquindad de los planes oficiales. En su reciente viaje a Londres, Santos se convirtió en presa de caza de los medios por haberse atrevido a hablar de despenalizar las drogas. En el Pleno de Estado Mayor Central del año 2000, en pleno proceso del Caguán, de manera oficial, las FARC planteamos al pueblo norteamericano, a su Congreso y al gobierno de los Estados Unidos la legalización de las drogas. Y los campesinos de este país llevan décadas hablando del asunto en distintos espacios. Si tal eventualidad llegara a producirse un día, la historiografía oficial se encargaría de ensalzar al actual Presidente como el artífice de tan trascendental medida. No sería la primera vez en la que las clases dominantes colombianas se apropian de viejos anhelos populares para presentarlos como suyos y negar de paso la actuación de los desposeídos en la historia.

La voluntad sincera de paz

Hablando del Caguán, lo invito Profesor a realizar un desprevenido estudio histórico de los Acuerdos que posibilitaron la zona de despeje y los diálogos cumplidos allí. A la luz de las reglas pactadas con Pastrana, haciendo caso omiso de las malintencionadas campañas de prensa, no puede encontrarse un solo hecho de parte nuestra que signifique una violación a las mismas. Fue el Estado quien hizo valer su tesis de dialogar en medio del conflicto, lo cual quería decir que por fuera de la zona de despeje la guerra continuaría con toda su crudeza. La propia Defensoría del Pueblo se encargó de declarar que las supuestas pistas que mostró Pastrana en fotografía para justificar el fin de la zona, eran en realidad antiguas carreteras.

Pero la embestida mediática adquirió tal dimensión en contra nuestra, que Osama Bin Laden o Hussein resultaban ángeles comparados con nosotros. Lo que jamás ningún analista objetivo se ha detenido a examinar, es la actitud del gobierno, que en la Mesa hablaba un lenguaje y por fuera de ella el contrario. Uno de los Acuerdos fundamentales a que llegamos se llamó la Agenda Común por el Cambio para una Nueva Colombia, la relación precisa de los temas que ocuparían la discusión en la Mesa de Diálogos: El contenido de los acuerdos de paz, la doctrina militar, las reformas democráticas al sistema político, el modelo de desarrollo económico, el régimen tributario, el empleo y la atención social, la tierra, la política de explotación de los recursos naturales, las relaciones internacionales y el tratamiento social al problema del narcotráfico.

En tres años de conversaciones, el gobierno se dio maña para que ni siquiera uno de esos puntos fuera abordado en los diálogos. En medio centenar de audiencias públicas a las que concurrieron más de 30.000 colombianos con sus propuestas sobre los temas específicos de las convocatorias, y en un sin número de formales Mesas Redondas con sectores de la producción y la academia, fueron debatidos temas de trascendencia para la vida y el futuro del país. Se suponía que la Mesa de Diálogos se encargaría del examen de lo concluido en todos esos eventos. En eso consistía el proceso, de conformidad con las reglas pactadas. Ni una sola vez, absolutamente ni una, el gobierno posibilitó dar paso en el orden del día de las reuniones a ese asunto.

Contrariamente a lo que se comprometía en la Mesa, públicamente declaraba todo el tiempo que temas como el Plan Colombia, los acuerdos de ajuste con el FMI, el Plan Nacional de Desarrollo, las reformas constitucionales tipo régimen de transferencias, o legales como el nuevo código minero no hacían parte de ningún tipo de debate con la guerrilla. O sea que borraba con el codo los compromisos firmados con Manuel Marulanda Vélez, difundidos ampliamente por la prensa nacional. Y sin embargo, nadie hablaba de ello. Era como si no estuviera pasando. Lo que se revelaba todos los días al país era que las FARC no tenían la menor voluntad de paz, que en cada respiración estaban violando los acuerdos.

De ese modo quedaba patente la verdadera intención oficial, lo único que nos reservaba era el derecho a la rendición sin condiciones. El gobierno era consciente de que si no lo lograba, al menos ganaba el tiempo que necesitaba para readecuar a las fuerzas armadas para la guerra de exterminio. Ningún estudioso del tema puede dejar pasar por alto el inmenso significado de lo expresado por el Comisionado de Paz de entonces, Víctor G. Ricardo, al periodista Hollman Morris, en su documental sobre el encuentro *El diálogo es la ruta* celebrado en Barranca en agosto pasado: si las FARC en ese momento hubiesen sabido que el Estado no contaba con qué comprar un cartucho, no se hubiera sentado a dialogar en el Caguán.

Era el Establecimiento quien se burlaba abiertamente no sólo de nosotros sino de la comunidad nacional e internacional que acompañaba el proceso. La gran prensa desempeñaba con lujo de detalles su nefasto papel en esa conspiración contra Colombia. De lo que se trataba en realidad era de aniquilar de una vez y para siempre la oposición a la radicalización de las políticas neoliberales impuestas por la banca trasnacional y aceptadas de buen grado por la oligarquía gobernante. Basta con observar quiénes integraban el equipo de gobierno de Pastrana y quiénes lo integran hoy. Es el mismo grupo de tecnócratas formados y devotos por la Escuela de Chicago, cuyas realizaciones hacen hoy aguas en todo el mundo.

Es por eso que no se encuentran diferencias de fondo entre lo que se nos exigía por debajo de la mesa una década atrás y lo que se nos conmina a hacer hoy día con la famosa llave oculta de Santos. Hace

diez años, además, se hallaba en esplendor el dominio abierto de los llamados halcones en el gobierno norteamericano. La reconocida alianza entre el poderío militar de ese país y las grandes corporaciones industriales y financieras, que suele agruparse en la denominación complejo militar industrial del Pentágono, abría sus fauces guerreristas ansiosas de más negocios por cuenta de la guerra en cuanto rincón de la tierra le fuera posible.

Vale la pena indagar cómo se contabilizan aquí los centenares, los miles de millones de dólares de la ayuda norteamericana a la guerra. ¿Harán parte del superávit en la balanza de pagos? ¿Influirán en la cifra de crecimiento de la inversión extranjera? ¿Se reflejan en el avance del PIB? Lo que estudiosos muy serios sostienen es que tan grande avalancha de recursos provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos de los Estados Unidos, constituye en realidad un escandaloso chorro de subsidios a las grandes empresas ligadas al sector bélico. Los dineros nunca entran a Colombia, sino que con ellos se pagan todas las armas e implementos que fabrican esos pulpos empresariales y que se trasladan aquí con el benévolo nombre de ayuda.

Ellos más que ninguno, animados por su satánica idea de guerra contra el terrorismo, presionaban la escalada del conflicto colombiano. La guerra total contra las guerrillas, en la concepción de seguridad nacional, serviría a la vez para golpear indistintamente al movimiento social y popular que se enfrentaba decidido a las medidas neoliberales de privatización, flexibilización laboral y libre comercio. Todas ellas, como tenemos cada día más

claro, nos condenan cada vez más al saqueo descarado de nuestros recursos naturales, a la eterna soga al cuello del crecimiento de la deuda, y sobre todo al recorte acelerado de los servicios públicos y derechos conquistados por los trabajadores en tiempos pasados, sin posibilidad de marchar hacia adelante.

¿No es que ya anuncian un nuevo régimen de jubilaciones que alarga aún más la edad para tener derecho a una pensión? Como ve, Profesor, eso que usted y mu-

chos colombianos percibieron como el síndrome del Caguán, y que los llevó en un arrebato emocional a inclinarse hacia la extrema derecha que representaba Uribe, no pasa de ser una fábula, si se la examina de modo objetivo, ligándola a los demás aspectos de la realidad. Señalarnos más encima con el dedo índice a nosotros como directos responsables de ella, sobre todo desde la respetable posición de intelectualidad pensante, resulta un despropósito tan bien elaborado, que haría merecedor del galardón de oro a los publicistas y propagandistas de la globalización neoliberal.

Voy a decirle algo que a mucha gente le podrá parecer inadmisible. Si el ganador de las elecciones del año 2002 en Colombia hubiera sido Horacio Serpa, hubiera sido él el encargado de desarrollar con leves diferencias de matiz el Plan Colombia, el Patriota y la consolidación. Hubiera sido él quien firmara el TLC con los Estados Unidos y quien recorriera el mundo afanado por más acuerdos de libre comercio, del mismo modo como le señalaba con relación a quienes miran en Santos un campeón de la democracia. Nuestros Estados se hallan condenados a desempeñar un rol subordinado en el entorno de los intereses del gran capital trasnacional. Es por eso que retoma toda su urgencia la recuperación de la soberanía e independencia nacionales, así como la necesidad de la integración latinoamericana que nos permita enfrentar con éxito al monstruo.

Una ligera mirada al entorno

No creo que merezca debate su apreciación de lo que sucede en el entorno latinoamericano. Es justa y acertada. Apenas podría agregarle una mención. Es la que se refiere a los dos modelos de izquierda que se implementan en nuestro continente. Uno, el del Brasil, decididamente inclinado a la asistencia social, mientras en todo lo demás se ciñe a la cartilla dictada por los poderes internacionales del capital, y el otro, el de Cuba y Venezuela, que apuntan a construir un modelo socialista acorde con sus realidades nacionales, pero completamente autónomo en materia de políticas económicas. Usted sabe que Lula obtuvo incluso el título de personaje mundial del año en el 2010, mientras los Castro y Chávez reciben el trato de demonios en los círculos dominantes.

Fidel y Chávez son considerados los peores dictadores internacionales por las agencias de prensa norteamericanas y europeas. En Colombia, en el entorno de las clases dominantes y los grandes medios de comunicación, el proceso revolucionario venezolano es visto con la misma saña y repudio con que lo mira la catorce veces continuas derrotada oposición de ese país. La imperiosa necesidad económica impuso el acuerdo de Santos con Chávez, por el que el primero se comprometió a respetar lo que hacía el segundo en su país. Pero todos los colombianos sabemos lo que en realidad piensan Santos y su corte. Todos, al unísono, se unieron al coro de felicidad por el golpe del 11 de abril de 2002. La actitud sigue siendo la misma. No nos engañemos.

Aquí tenemos un ejemplo contundente de lo que significan las políticas neoliberales que no admiten Cuba y Venezuela. Se encuentra en la Guajira y se llama el Cerrejón. Hace casi tres décadas que se

anunciaba la milagrosa redención que operaría la mina más grande de carbón a cielo abierto del mundo. La realidad dice más que las palabras. Los miles y miles de millones de dólares se fueron para otra parte. ¿Y los Wayú? ¿Y el acueducto de Riohacha? ¿Y la miseria galopante en la región? Hasta tuvimos en un comienzo una empresa minera carbonífera asociada con la transnacional. Se la tragaron también. El cuento de las locomotoras de Santos es más de lo mismo. Sería bueno indagarle sobre su inclinación por la guerra total en lugar de la paz.

El eterno sambenito

No lo culpo a usted. Nos han hecho mucho daño con eso. Resulta más cómodo estigmatizarnos así y echar bombas encima de nosotros, que dejar que hablemos y expongamos en igualdad de condiciones nuestro pensamiento y nuestra propuesta de país. Es su ventaja competitiva, al decir de ellos. El apoyo de los medios imperiales y locales para construir cuanto quieran. La cooptación de la inteligencia. La cárcel y la tumba para quienes sostengan lo contrario. Me ratifico sin vacilaciones en lo expresado por el Camarada Alfonso Cano en relación a nosotros y el narcotráfico. Sin ínfulas de prestidigitador. Voy a añadirle tan solo una cosa, dada su cortesía al escribirnos. Me imagino los adjetivos que me acarreará esto.

Si hay un oficio ingrato y malquerido es ser agente del fisco. Crear un impuesto que grave a los compradores de pasta de coca significa cobrarlo. Sucede que quien envía sus emisarios a buscar la mercancía, palabra de uso en su jerga, es la mafia crecida a la sombra del Establecimiento. Se trata de personas que han adoptado una decisión en la vida, hacer la mayor cantidad de dinero, en el menor tiempo posible, al precio que sea. Para pasarla tan bien como los capitalistas esos que ven en el cine y la televisión. A quienes también les salvan capitales en tiempos de crisis económica. Tratar con gente así no es fácil. Sus emisarios siempre tendrán el oculto propósito de burlarnos. Con esa intención inventan todo tipo de artimañas. No quedaba otro remedio que salirles al paso con algunas medidas, como fijar sitios exclusivos de venta, entre otras.

Sobre gestiones de ese tipo es que nuestros enemigos han edificado la leyenda. En realidad nosotros cobrábamos un derecho a las mafias por entrar a comerciar en las áreas de nuestra influencia. Ese tipo de relación, que no es precisamente de buenos amigos, nos convierte en demonios. A otros, relacionados con propósitos mucho más reprochables, les va mejor en su carrera económica, política o militar. El gobierno de los Estados Unidos sí que sabe hacerlo, como se vio en el famoso escándalo Irán-Contras.

El problema con nosotros tiene motivaciones muy distintas. La siembra y la recolección de la hoja de coca obedecen a situaciones suficientemente explicadas en este país. Lo demás es carreta, como dijo Alfonso.

Antes de despedirme de usted, quisiera expresarle mis agradecimientos. Aunque con muchas interrupciones, el esfuerzo por responder de algún modo sus agudas inquietudes, que honradamente espero no vaya a terminar de algún modo en una afrenta, me ha resultado inmensamente placentero. En medio de nuestras diferencias, que no creo sean tantas como pudiera pensarse a primera vista, me veo obligado a reconocer en usted a un hombre francamente preocupado por la realidad y el futuro de nuestro país, a un colombiano hastiado de la violencia que hace enormes esfuerzos por contribuir a que se abran las puertas del diálogo y la salida civilizada al conflicto. Ese solo hecho lo hace acreedor a nuestro fraterno abrazo,
Cordialmente,

Montañas de Colombia,
diciembre de 2011.

Personajes

Érase una vez Manuel Marulanda Vélez

Pedro Antonio Marín: Un hombre llamado *Tirofijo**

Yezid Arteta Dávila**

Cuando un grupo de diputados franceses, durante las negociaciones del Caguán, fueron hasta el campamento de «Tirofijo» para discutir sobre la situación de Colombia, de repente se sorprendieron al observar que el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se levantó de la mesa, introdujo una mano en el bolsillo de su pantalón de dril, extrajo un puñado de granos de maíz y luego los arrojó a unas gallinas que merodeaban por los alrededores. Esta anécdota, que le relató a la periodista Patricia Lara[1] el diplomático francés Daniel Parfait, es la metáfora más fiel para definir al hombre que fundó y dirigió por espacio de 44 años a la guerrilla más antigua del hemisferio occidental: el revolucionario Manuel Marulanda Vélez —su nombre de guerra— jamás dejó de ser el campesino Pedro Antonio Marín, nacido el 13 de mayo de 1928 en la población cafetera de Génova.

Eran los primeros días del mes de diciembre de 1984 cuando lo conocí en el legendario campamento La Caucha. El cuartel lo componía una casa de va-

* Esta historia fue nominada a los premios Simón Bolívar de periodismo en el género de crónica. Publicada en la edición No 58 de la Revista *Número*.

** Adelantó estudios en leyes y sociología.

rias habitaciones, construida en madera aserrada y techada con láminas de zinc, además de cuatro o cinco barracas que alojaban a los guerrilleros. En aquel lugar, atravesado por una diáfana quebrada que desemboca en el río Duda, se hallaba el mando central de las FARC, el selecto grupo de jefes insurgentes que, de acuerdo con los planes aprobados en la Séptima Conferencia realizada en 1982, estaba llamado a dirigir la estrategia de guerra contra el Estado hasta su derrocamiento, y remplazarlo por un gobierno popular. Han pasado desde entonces veinticuatro años y la guerra colombiana no parece tener un final cercano.

Desde la creación de la república en 1819, Colombia ha parido sólo dos hombres que han combatido en forma casi continua por más de medio siglo. El primero de ellos fue el aristócrata payanés Tomás Cipriano de Mosquera, que a los dieciséis años se enroló en las filas del ejército del Libertador, batiéndose en una y otra guerras hasta un poco antes de su muerte. El otro fue el agricultor Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda Vélez), quien se alzó en armas, casi sin interrupción, contra quince gobiernos, una junta militar y una dictadura. Mosquera y su ejército sedicioso derrocaron al gobierno de Mariano Ospina Rodríguez en 1861. Marulanda falleció sin haber visto que su proyecto insurgente llegara al poder. Coincidencialmente, ambos jefes militares murieron días antes de cumplir ochenta años.

La vida de Marulanda es la historia de Colombia en el último medio siglo. A diferencia de la mayoría de los líderes mundiales, que mueren asesinados por algún fanático, en el lecho de una sofisticada clínica, en mansiones rodeados por sus más cercanos colaboradores o en una elegante funeraria atestada de familiares que se disputan una jugosa fortuna, «Tirofijo» murió en un cambuche construido con varas, palmas y helechos de la selva, esa misma maraña de árboles milenarios, bejucos y hojarascas que por espacio de varias décadas lo protegieron de los enemigos que lo buscaban incesantemente para matarlo.

No puedo olvidar la impresión que me llevé aquella mañana que arribamos al cuartel general de las FARC en compañía de un guía que arriaba una recua de mulas cargadas con víveres para los guerrilleros, y Camilo, un músico natural de Neiva que se reincorporaba a las filas luego de haber purgado en prisión una condena por rebelión y que meses después encontraría la muerte en combate en un paraje del Magdalena Medio. Allí, frente a mis ojos, estaban los que para esos días eran leyenda: Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. Y digo que me sobrecogí porque ya en ese entonces, aun para los mismos comunistas, «Tirofijo» era un mito que pesaba en el imaginario de los colombianos. Además de los dos históricos jefes insurgentes estaban allí Alfonso Cano y Raúl Reyes. Yo había decidido en aquel entonces abandonar las luchas universitarias en Barranquilla para unirme a las huestes de las FARC, y justamente Manuel Marulanda fue uno de los primeros guerrilleros que vi armados: portaba una carabina M-2 de fuego selectivo terciada sobre el hombro izquierdo, el mismo tipo de arma que inmortalizara el «Che» Guevara en la quebrada del Yuro, donde lo emboscaron e hirieron.

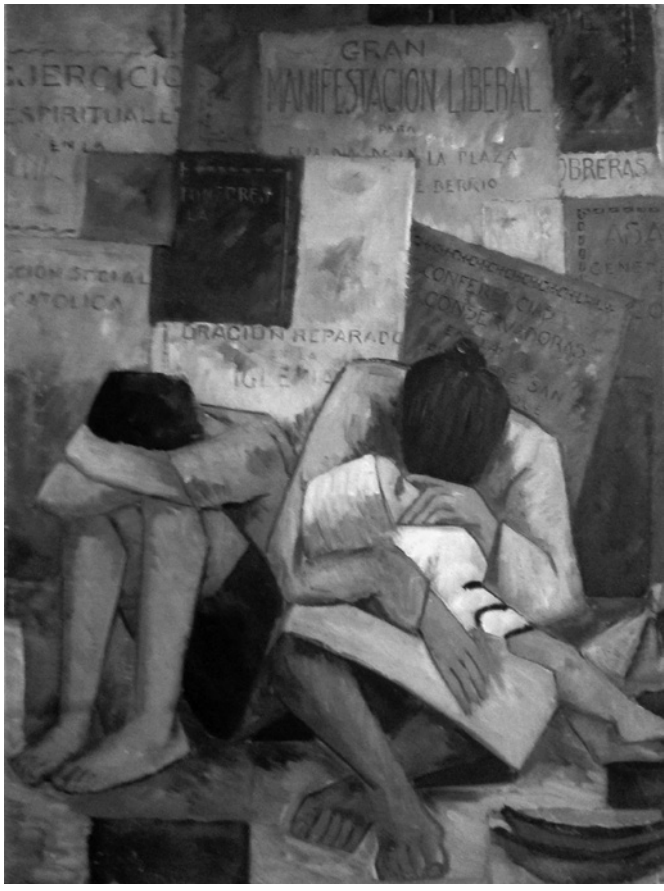
En Vivir para contarla[2], Gabriel García Márquez relata un episodio del que fue testigo en compañía del fotógrafo Daniel Rodríguez, ocurrido en la región de Villarrica por allá en los años cincuenta, cuando se desempeñaba como periodista en el diario El Espectador. Recuerda el Nobel la emboscada contra un destacamento de soldados de la dictadura de Rojas Pinilla, realizada en un paraje rural del municipio por un embrión guerrillero del Tolima dirigido por un muchacho de veintidós años que hacía «carrera en su ley». Cuarenta y tantos años después a «Tirofijo» lo consultaron en su campamento de guerra acerca de aquel episodio y dijo no recordarlo. No es así, Marulanda lo recordaba todo; simplemente quería minimizar, por no decir que esconder, su papel en la conducción táctica del combate, pues no era amigo de referir sus proezas militares (que se pueden contar por montones) porque su espíritu era de grupo, de acción colectiva. «Tirofijo» fue dueño de una memoria prodigiosa. Podía recordar en detalles cada roca, cada árbol, cada riachuelo que cruzaba un camino que recorrió hacía muchos años. Muchos mandos medios llevaron a cabo celadas exitosas contra la fuerza pública siguiendo estrictamente las instrucciones que les proporcionaba Marulanda, quien les decía en qué lugar debían emboscar a los francotiradores, qué recodo del camino debían sellar para que no escapara la patrulla, dónde ubicar al grupo de asalto o el de corte, en fin, el zorro «Tirofijo» tenía calcada en la memoria el teatro del combate, aun cuando estuviera a centenares de kilómetros del lugar o hubiera dejado de transitar por allí cuarenta años atrás.

«Tirofijo» se destacó como un guerrero entregado totalmente a sus hombres. Vivió como un espartano, con lo justo para sobrevivir en las duras condiciones de la guerra de guerrillas, compartiendo con su tropa cada una de las vicisitudes de la trashumancia guerrillera. Enseñando a cada combatiente desde lo más elemental, tal como la manera en que se debe cortar una cebolla para sazonar la carne de un cerdo, hasta la complejidad de una emboscada cuya relación era de 10 a 1. «Tirofijo» jamás creó distancias entre él y sus hombres, y así lo recuerdo, cuando una madrugada en La Caucha nos comentaba con lenguaje sencillo, sin pretensiones y arandelas, la decisión de las FARC de permitir la incorporación

masiva de jóvenes estudiantes a las estructuras rurales, rompiendo con el viejo mito de que los «urbanos» no eran capaces de asimilar los vórtices de la lucha armada en el campo. Quienes lo escuchamos con inusual atención, compartíamos la misma ración de arepa y chocolate que él comía, sentados sobre unos troncos fijados en horcones.

Cuando se iniciaron los diálogos en el Caguán con el presidente Pastrana, en enero de 1999, más de medio centenar de guerrilleros procedentes de distintos frentes y columnas estábamos presos en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. Seguíamos los sucesos relacionados con la negociación a través de la televisión, de manera que podíamos ver las imágenes de los voceros de las FARC, y naturalmente la ruda figura de Manuel Marulanda. Algunos de los prisioneros hacían notar que «Tirofijo» asistía a cada uno de los eventos luciendo una camisa a cuadros de colores azul y blanco. Los más quisquillosos se ruborizaban por este hecho, pues mientras los voceros oficiales vestían diversos y elegantes atuendos, el jefe de un sólido ejército guerrillero aparecía en escena siempre con la aludida camisa, al parecer la única que guardaba en su mochila de campaña y reservada para la ocasión. Este simple hecho, que para algunos prisioneros era motivo de vergüenza, es por el contrario una demostración del hombre ajeno a las veleidades y la vanidad, un jefe revolucionario al que le tenía sin cuidado su imagen exterior puesto que para él lo esencial era su pliego de reivindicaciones. En estos tiempos de imágenes mediáticas, de poses superfluas y expresiones corporales estudiadas, no hay duda de que el guerrillero más antiguo del mundo era lo opuesto a todo ello, una especie de outsider a su manera.

La muerte de «Tirofijo» se produjo a consecuencia de un infarto cardiaco, tal como reza en el comunicado oficial de las FARC leído en forma grandilocuente por Timochenko, uno de sus discípulos que se forjaron en la Operación Cisne 3[3] que se libró en la histórica región del Guayabero. El cadáver de Marulanda Vélez ha sido el trofeo más preciado por varias generaciones de militares colombianos. Todo oficial o suboficial del ejército soñó alguna vez con «darlo de baja en combate». «Tirofijo» demostró ser más listo que sus perseguidores, y vaya que lo fue, pues más de medio siglo peleando y escabulléndose de las trampas que le tendían sus enemigos es, en el terreno



militar, una verdadera hazaña, sobre todo cuando la guerra en Colombia ha sido de verdad y no de mentirillas. Su deceso no deja de ser una representación alegórica de las dos grandes utopías que hoy persisten en Colombia, a pesar de la muerte violenta de millares de ciudadanos por razones del conflicto. Una es la quimera que Marulanda ha dejado de herencia a sus sucesores y que pretende imponerse mediante un triunfo militar que le arrebate el poder a la rancia y codiciosa oligarquía colombiana. La otra es la fantasía de los guerreristas del establishment, que sueñan con minar en forma definitiva la capacidad de combate de los alzados hasta verlos forzados a firmar su rendición incondicional. Lograr un punto de encuentro entre estas dos posturas maximalistas podría ser la llave que permita transformar y construir la paz en Colombia.

En un país de saltimbanquis, donde a la dirigencia política le tiene sin cuidado realizar cualquier tipo de maroma para obtener sus réditos particulares, una sociedad que reproduce sin vergüenza alguna las más abyectas prácticas arribistas, la figura de «Tirofijo» parecería exótica. Marulanda fue un hombre testarudo, que jamás renunció a su programa de transformación agraria, lo que prueba su tesitura, independientemente de que se compartan o reprochen los métodos empleados para lograrlo. Es una lástima que la dirigencia del país, obnubilada por los prejuicios de linaje y su arrogancia intelectual, no percibieran que detrás del ejército que comandaba Marulanda se encontraban unos agravios íntimamente ligados a la tenencia de la tierra y a la persecución por sectarismo político. Los discursos

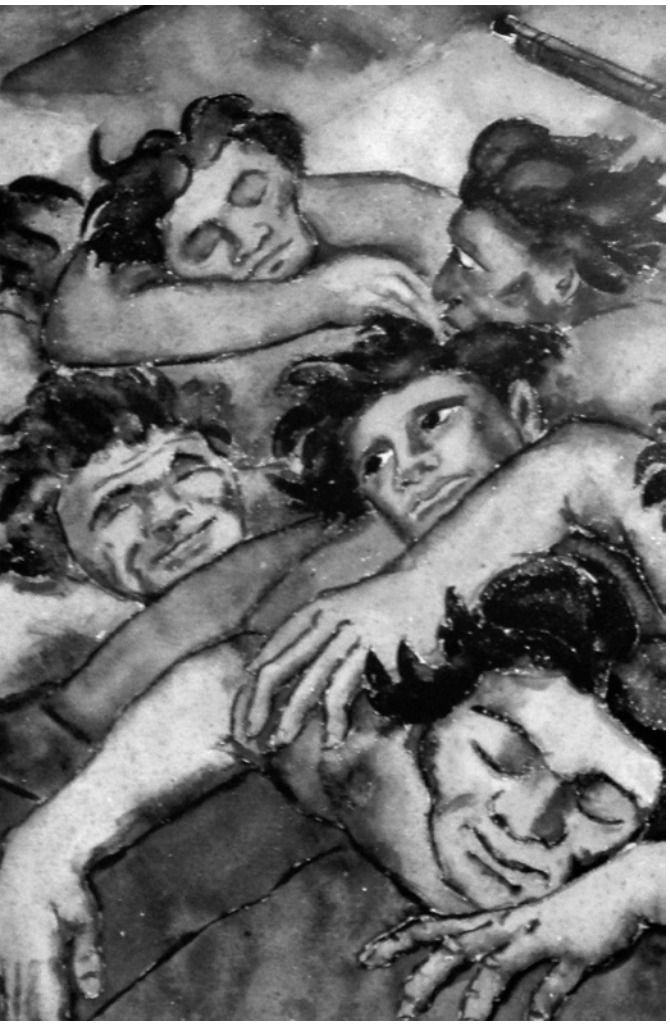
de la «modernidad» miraron a «Tirofijo» como a un raro animal en extinción, lo trataron de «dinosaurio», de «chusmero», de «forajido», de «antisocial», de «bandido»; mientras tanto, él seguía reclutando campesinos en la frontera agrícola, en la punta de la colonización, en la Colombia de fábulas y mitos, en lo profundo, allá donde la historia se transmite de modo oral. Antes de escuchar y corregir los orígenes de las demandas campesinas, los centros de poder se emplearon a fondo por eliminarlo. El resultado es lo que sabemos: una guerra sin cuartel y sin reglas.

En la vida errante del guerrillero, donde se caminan miles de kilómetros durante días y años sin llegar a ninguna parte, el hecho de llevar una libra de más o de menos en la mochila adquiere una enorme relevancia. Menciono este detalle porque marchar al lado de Marulanda implicaba una serie de condicionamien-

tos derivados de la rusticidad, o mejor, de la autenticidad de su carácter. La columna que caminaba con «Tirofijo» debía cargar un pesado molino para triturar el maíz, ya que no permitía que las arepas que consumían él y sus hombres se hicieran con harinas elaboradas. Gustaba de tener animales de huerta en sus campamentos, tales como gallinas o cerdos, y escuchar el canto de un gallo rompiendo la madrugada. Por razones tácticas y de respeto al orden de la naturaleza misma, sus subalternos tenían la prohibición terminante de cortar las raíces de los bejucos que se elevaban por los tallos de los árboles hasta entramarse sobre los copos, pero además no permitía la tala de bosques sin justificación o la cacería de animales del monte, salvo en caso de extrema necesidad, esto es, para alimentarse en aquellos períodos donde la supervivencia de sus combatientes dependiera de ello. Estas actitudes de Marulanda no eran el resultado de un discurso aprendido en torno al respeto al hábitat, ni tampoco una pose glamorosa alrededor del consumo de alimentos orgánicos, sino más bien una actitud connatural a un hombre de costumbres sencillas, la de los campesinos, aquellos que lo veían pasar por sus míseros ranchos, y sin embargo no lo delataban, no tanto por el temor que ello implicara, sino porque «Tirofijo» — como lo nombraban — era la representación misma de su marginalidad; lo veían como el «último mohicano», el residuo de aquellos tiempos turbulentos de la violencia partidista, donde el solo hecho de ser un desdichado labriego, liberal o conservador, era motivo suficiente para morir con la cabeza cortada a machete. Por esta razón, muchos campesinos se ufanaban de conocerlo o mentían entre ellos de haberlo visto algún día pasar por su granja, porque en últimas la figura tosca y perseverante de «Tirofijo» era la encarnación de los ilusiones de ellos mismos.

La biografía de Manuel Marulanda Vélez, cuando aún era el agricultor Pedro Antonio Marín, podría ser francamente aburrida para aquellos lectores que gustan de folletines y de historias románticas, con pasajes plenos de aventuras extravagantes y viajes exóticos. Lo único que se sabe por boca de su centenaria tía Ana Francisca Marín es que de niño era un excelente e invencible jugador de trompo. Que después apareció en una lista que por error el dirigente conservador de Génova, Floro Yépez Gómez, había dejado en el bolsillo de un sacoleva que envió a una lavandería de vapor. «Liberales para matar», titulaba el papel encontrado por el lavandero, donde por supuesto estaba el nombre de Pedro Antonio Marín, y tachados por una cruz los que ya se habían cargado. «Desde que se fue con la chusma de Modesto Ávila, ni más lo he vuelto a ver», le contó la anciana mujer, que cumple 101 años y vive en un barrio popular de Armenia, al periodista de El Espectador Miguel Ángel Rojas[4].

Quienes realmente convirtieron a Pedro Antonio Marín, tan pobre de solemnidad hasta ese entonces, en un auténtico personaje de biografía fueron los «ilustres» gobernantes de la época a quienes se les ocurrió la brillante idea de que un pequeño grupo de campesinos analfabetas, que gestionaban una comuna agrícola en el culo del mundo, eran la



rediviva versión criolla de los bolcheviques que tomaron por asalto el palacio de invierno en San Petersburgo. Eso fue en 1964, y lo atacaron; él se defendió con 48 hombres que le acompañaban y años después obligó a los descendientes de los agresores a negociar con una organización que reunía a unos 20.000 combatientes a principios de 1998. Sin embargo, «Tirofijo» nunca se tomó en serio aquello de que era un importante dirigente revolucionario de América Latina, y siguió llevando al cinto una cubierta «chaparraluna» que guardaba un machete de dieciocho pulgadas, de los mismos con los que limpiaba la maleza en sus años mozos, cuando jornaleaba por unos cuantos reales en las haciendas cafeteras del viejo Caldas. Ni siquiera Marulanda se refería al hecho de que el más grande icono mundial de todos los tiempos, Ernesto «Che» Guevara, lo mencionara de manera relevante en el famoso Mensaje de la Tricontinental, escrito de su puño y letra en el año 1966 y publicado al año siguiente, cinco meses antes de su muerte en Bolivia[5].

Manuel Marulanda Vélez no se tragó el cuento de la fama que lo presentaba como el «guerrillero más antiguo del mundo», y a diferencia de los jóvenes combatientes que ostentaban vanidosamente ante las cámaras de televisión sus uniformes de campaña camuflados y sus fusiles de asalto, él seguía siendo el mismo Pedro Antonio Marín que conversaba con un ordeñador de vacas sobre la manera de curar la pata de un ternero que cojeaba. Sin portar charreteras, calzando sus botas de arriero, su pantalón de dril barato y su camisa a cuadros de cuatro pesos, ponía en aprietos a los más encumbrados generales de la república aprisionados en sus lustrosos uniformes de fabricación estadounidense. Aparentemente, «Tirofijo» no era consciente de lo que representaba, pues a pesar de que su fotografía aparecía en la primera plana de los más importantes periódicos del mundo, y que sus imágenes eran presentadas una y otra vez en vivo y en directo por las grandes cadenas de televisión por cable, su cotidianidad proseguía igual, como si aún fuera el pobre muchacho campesino que se fue con la «chusma» de Modesto Ávila porque los conservadores lo andaban buscando para matarlo.

«Tirofijo» murió físicamente el 26 de marzo, según explica el comunicado leído por Timochenko. De inmediato, el ministro de Defensa dijo públicamente que el alma del fundador y jefe máximo de las FARC se encontraba desde ese día en el infierno (lo condenó a las tinieblas sin haber hecho escala en el purgatorio). Del comentario realizado por el ministro se ha de colegir que el paraíso está reservado para él y los suyos. Para desgracia de Colombia, las grandes y encumbradas familias que sucesivamente se han repartido el botín, por lo que sus alforjas están repletas, se han reservado el derecho de mandar no sólo en la tierra sino también en el más allá, arrogándose potestades que hasta ahora se había guardado para sí el mismísimo dios. No hay duda de que la soberbia de los poderosos es uno de los mayores obstáculos para la reconciliación de los colombianos. Si le creyéramos al ministro que el alma de «Tirofijo» está en los aposentos del diablo, bien podría el jefe de las FARC seguir la máxima de Mark Twain y sentirse cómodo adonde lo envió el alto funcionario de gobierno; al fin y al cabo, como diría este escritor estadounidense «el paraíso lo prefiero por el clima; el infierno, por la compañía». A lo mejor, el que fue el guerrillero más viejo del mundo encontrará más de un personaje interesante de la historia para conversar, para divertirse, para reírse, para dar y recibir consejos.

No sabemos si tomar en serio o no el ofrecimiento que ha hecho el alto mando militar colombiano de ofrecer una jugosa recompensa de varios miles de dólares a quien dé informes acerca del lugar donde fue enterrado el cadáver de «Tirofijo», con el fin de «averiguar» por las causas de su muerte. En Colombia todo parece ser serio pero al final todo resulta caricaturesco, tal como sucedió recientemente con el reloj de Raúl Reyes, presentado como un lujoso Rolex de varios miles de dólares; con todo, al final se comprobó que era un reloj «pirata», de los mismos que venden en el mercado de Tepito de Ciudad de México o en El Boliche de Barranquilla por unas cuantos calderillas. En Colombia, las noticias de la guerra han llegado a tal grado de banalidad que lo trágico se transmuta, como por arte de magia, en algo cómico. Fueron más de sesenta años, miles de muertos y millones de dólares que se emplearon para matar a «Tirofijo» y sin embargo no pudieron lograrlo. Ahora que se sabe que está bien muerto, la pregunta es: ¿cuántos años, cuántos muertos y cuántos dólares se necesitarán para dar con los restos de «Tirofijo»?

La última vez que vi físicamente a «Tirofijo» fue en el campamento de «Hueco Frío», donde funcionaba la Escuela Nacional de Cuadros Hernando González Acosta, dirigida en ese entonces por Timochenko. Habíamos finalizado una maniobra de entrenamiento con su columna de marcha, y Marulanda asistió a la reunión de balance y clausura del curso. Iba acompañado de un formidable perro ovejero bautizado con el nombre de Danger, y había abandonado recientemente el consumo de cigarrillos: los celebres Pielroja que lo acompañaron durante muchísimos años en sus campañas. En aquella jornada estuvieron también Jacobo Arenas y Alfonso Cano. Desde entonces han pasado veintitrés años y escribo estas notas a miles de kilómetros de aquel lugar, desde una escuela en la que se estudian los conflictos armados en el mundo y propugna la resolución dialogada de los mismos.

He cerrado el capítulo de la lucha armada luego de pasar un tiempo en la prisión, y desde este lugar pienso en Miguel Pascuas — apodado «El sargento Pascuas» por quienes frecuentan los círculos de la guerra —, el único sobreviviente activo de aquellos cuarenta y ocho hombres que resistieron el ataque oficial contra Marquetalia en mayo de 1964. Pienso también en Alfonso Cano, el nuevo comandante en jefe de las Farc, con quien comparto el gusto por la música salsa y el futbol. En algunos momentos conversé con Pascuas en la zona montañosa de Corinto, territorio de los indígenas paeces, y también en un viejo campamento en El Pato, y la idea que me formé de él es que conserva el mismo componente de todos los marquetalianos: la humildad. En la Segunda Conferencia Nacional de Organización de la Juventud Comunista, en el año de 1977, coincidí con Cano, a la postre secretario del regional de Bogotá para la época. Algunos años después, militantes ambos en las filas de las Farc, charlábamos muy animadamente, y entre bromas, sobre el futuro de la organización. Era Alfonso Cano miembro del Secretariado y yo responsable de un frente en el suroccidente

del país, y conmemorábamos para esos días el vigésimo aniversario de las Farc. En resumidas cuentas: Pascuas es la impronta viviente de un asunto campesino que aún está por resolver en Colombia, y Cano es la nueva generación de guerrilleros llamados a sellar un pacto definitivo: una paz que beneficie al conjunto de la sociedad colombiana.

Bibliografía de referencias:

1. Véase revista Diners.
2. Vivir para contarla, Editorial Mondadori, p. 553.
3. En 1980, durante una importante operación en la región del Guayabero, el ejército empleó un nuevo modo de operar contra la guerrilla, desplazándose a campo traviesa y sin dejarse detectar por la población civil. En respuesta, las Farc opusieron una nueva táctica, que se materializó en la Operación Cisne 3.
4. Véase diario El Espectador, 31 de mayo de 2008.
5. Ernesto «Che» Guevara, Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental, abril de 1967.

En diálogos: *Sargento Pascuas*: 50 años en las Farc

Tony López *

Desde La Habana, Cuba el periodista cubano Tony López entrevistó a Miguel Pascuas, uno de los fundadores de las Farc a propósito de las cinco décadas que cumple el movimiento guerrillero en medio de los diálogos de paz con el gobierno Santos.

Miguel Pascuas, izquierda, acompañado de Tony López.

El periodista cubano Tony López, que ha desarrollado un extenso trabajo entrevistando a varios miembros del Secretariado de las Farc, entrevistó en La Habana a Miguel Pascuas, uno de los fundadores del grupo guerrillero. Una entrevista en la que la memoria de Pascuas reconstruye el nacimiento y primeros años de una guerrilla que después de cinco décadas de lucha armada está dialogando con el Gobierno Nacional.

Camarada Miguel Pascuas, estamos en el 2014, año en que se cumple en 50 aniversario de la fundación de las FARC.

* Periodista, politólogo y analista internacional.

Usted ha vivido toda esa historia porque ingresó a la organización desde los años 60, entonces mi idea es que se pueda culminar un relato que sobre su vida inició el año pasado a instancia de una entrevista que le hizo Jesús Santrich.

Él me ha cedido la posibilidad de preguntarle y a usted le agradezco que lo ha permitido. Entonces, concretamente quisiera que hablemos un poco sobre aquella etapa de origen que circunscribe a la operación Marquetalia.

Le reitero mi saludo y mi gratitud, y comenzamos:

T. L. Camarada, la segunda retaliación contra Marquetalia se da en 1964. ¿Podría darnos algunos detalles sobre cómo se produjo aquel suceso?

M. P. Fue durante el gobierno de Guillermo León Valencia que se ejecuta la operación contra Marquetalia. Ésta comienza con la ayuda y la asesoría técnica de Estados Unidos. Para la arremetida emplearon 16 mil soldados sobre un área montañosa donde estábamos 48 compañeros. Allí teníamos nuestras fincas; la mayoría trabajábamos cultivando la tierra y otros en pequeñas ganaderías.

De la operación se conoció con tiempo a través de diferentes contactos y por eso hubo oportunidad de hacer una intensa actividad política buscando que el ataque no se produjera.

Fue mucho lo que hablamos para que no se agrediera a Marquetalia que por entonces era una zona muy organizada en el trabajo y en la convivencia. Allí se producía mucha comida que salía para Gaitania, Planadas y hasta para Neiva. Gente que quizás antes había tomado las armas, en ese momento la dedicación que tenía era la de arar la tierra y criar animales, pequeñas ganaderías.

Recuerdo que en una ocasión un sacerdote visitó Marquetalia con el fin de bautizar los niños y a un compañero nuestro, el sargento Tula, también lo bautizó el sacerdote allá en el monte porque la represión no había dejado bajar a Gaitania. Nosotros estábamos en paz, pero había mucha represión del ejército. El gobierno, al contrario de ayudar a los campesinos al desarrollo de la región, con vías de comunicación, con inversión social que resolviera los problemas de salud, educación, vivienda, etc. que han azotado a las zonas rurales desde siempre, lo que determinó fue desatar un ataque masivo revestido de intolerancia, y no solamente eso sino que su ataque atendía a ordenes extranjeras, a ordenes de los Estados Unidos.

Cuando ya vimos que la situación se complicaba, que el ataque era inminente, nos juntamos lo que podía ser como la reserva de la vieja autodefensa, gente que tenía su experiencia en la guerra y todo el que estuviera en condiciones de pelear. Era un asunto de vida o muerte y había que defenderse. En Marquetalia nos juntamos 48 campesinos para resistir la agresión que venía arrasar con todo y matarnos; se resistió más de tres meses, tiempo en el que en lo primero que nos ocupamos fue en evacuar a las familias y sus bienes más preciados, al menos lo que se podía mover dentro del monte, porque la verdad es que a todos les tocó meterse selva adentro para sobrevivir.

Lo que arrojaron los balances y las informaciones es que el número de efectivos que usaron para toda la operación fue de 16.000, que incluían fuerzas combinadas de infantería, artillería y aviación ya fuera para bombardear o para llevar la tropa y suministros. Con esa fuerza iniciaron un cerco para bloquearnos y aniquilarnos. Esa Operación, si mal no estoy, así ya para el terreno, la dirigió el coronel Correa Cubides que comandaba la Sexta Brigada, y todo lo coordinaban desde Ibagué y Neiva.

De parte nuestra, pues la resistencia la comandaba el camarada Manuel Marulanda, pero cuando comienza la agresión con nosotros estaban por ahí desde mitad de abril, los dos camaradas que envió el partido con toda la información que había y con la misión de permanecer junto a nosotros ayudando a conducir la actividad política y militar. Esos compañeros son Jacobo Arenas que era de la Dirección del Partido y Hernando González que era de la Dirección de la Juventud Comunista. Hasta Gaitania llegaron, me refiero a la parte rural de montaña y a partir de ahí se multiplicó la actividad política en defensa de Marquetalia, porque de lo que se hablaba era de una operación de exterminio donde iban a meter entre 10 mil y 16 mil gentes de batallones diversos como el batallón Colombia. la Escuela de Lanceros, el Juambú y otros cuantos, que eso era como decir la tercera parte del ejército, y de remate con la asesoría la Misión Militar norteamericana y los llamados “Cuerpos de Paz”.

Eso, digamos que tuvo efecto positivo porque hasta una comisión de parlamentarios y de sacerdotes católicos plantearon visitar la región para ir a evaluar lo que estaba ocurriendo, si el gobierno tenía razón para proceder como pretendía, pero la jerarquía militar y la misma iglesia católica no dejaron, no permitieron que la delegación se arrimara a Marquetalia, pues estaba de por medio y tomando las decisiones la embajada gringa.

De todas maneras, al menos las manifestaciones públicas de solidaridad con la gente de Marquetalia eran muy claras y cotidianas y nosotros seguíamos tomando

puesto para enfrentar lo que llegara, y la preparación incluyó la puesta en marcha de nuestra propia propaganda que se hacía, y de eso estaba a cargo el camarada Jacobo Arenas, con un mimeógrafo que le decían "La Rotativa".

En lo que tiene que ver con la parte militar, la dirección del movimiento agrario se convirtió en Estado Mayor Guerrillero y se crearon unos grupos pequeños de gente armada y desarmada definiéndose áreas concretas donde debían actuar, o emboscarse, o alertar, etc.

Después de estar pendientes, un poco en tensión desde abril, al fin el 27 de mayo comenzó la acción en un punto llamado en La Floresta. Ahí, en el cañón del río Atá se da el primer tiroteo con el grupo del camarada Joselo; eso fue un miércoles. Tres días después, un sábado, se da otro combate fuerte con el grupo del camarada Isaías Pardo. Estos compañeros son dos de los héroes inolvidables de la resistencia. Isaías murió en el marco de la operación, peleando a orillas del San Miguel y Joselo fue asesinado en Bogotá adonde se había trasladado para que le resolvieran un problema de salud.

Bueno, eso de ahí para delante fue combates y más combates que solamente paraban cuando se agotaba la comida.

Eso es lo que, en general yo le puedo comentar sin saber qué más decirle de lo ya hasta ahora dicho, porque sobre este asunto de la resistencia de Marquetalia el camarada Manuel explicó muy bien, con detalle lo ocurrido, se lo contó a Arturo Alape y este sacó un libro muy bueno sobre las Vidas de Pedro Antonio Marín Marulanda. Precisamente así se llama el libro, *Las Vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo*, y uno de sus capítulos se titula *"La Operación Marquetalia, la guerra que aún no ha terminado",* como efectivamente usted ve que no ha terminado. Y también el camarada Jacobo Arenas hizo un magnífico trabajo que explica como fue la resistencia, y eso lo hace en un libro que se llama *"Diario de la Resistencia"*, entonces imagínese, qué más yo le puedo agregar a un tema que está explicado de manera muy clara por los dos camaradas que estaban a la cabeza del movimiento.

T. L. De todas maneras camarada Miguel siempre es bueno refrescar la memoria, sobre todo si consideramos que usted, con el compañero Jaime Guaracas, son los dos últimos sobrevivientes de aquella época tan importante para la historia de Colombia, porque bien sabido es que allí tiene

sus orígenes esta guerrilla, la más antigua del continente, que hoy está en diálogos con el gobierno, y que precisamente ahora cumplen 50 años de su fundación. De esos cincuenta años usted es un testigo de primer orden, desde la génesis hasta el presente. Por favor coméntenos sus propias percepciones.

M.P. Bueno, cierto que estoy en las FARC desde su fundación, un poco antes inclusive porque ya había dicho en una entrevista anterior que mi ingreso lo hice con el camarada Marulanda, él fue el que me habló y me dijo que me metiera en la resistencia se da en enero de 1960 inmediatamente después que el gobierno mandó a asesinar al camarada Jacobo Prías, c/p "Charro Negro", que era el jefe del movimiento agrario de Marquetalia. Entonces si quiere percepciones, esto es muy importante decirlo porque fíjese que estamos hablando de un crimen que se comete contra un dirigente popular que había confiado en la palabra del gobierno y estaba en paz, se supone que no había guerra, que se había llegado a un acuerdo y la gente estaba trabajando, la lucha que se hacía era sin las armas.

Si se recuerda, en la entrevista que le menciono, yo explique que el camarada Manuel Marulanda andaba normalmente, de civil, como inspector de carreteras, y yo era un muchacho, trabajador. De repente, y directamente después que matan a Charro Negro es que yo lo veo, armado, y es cuando él me habla y dice sin muchas vueltas que era hora de ingresar, y la razón que me da es que habían matado a Charro Negro, que no había justicia y que en eso tenía las manos metidas el gobierno. Se le oía muy dispuesto, sin duda alguna cuando expresó que se iba a enfrentar al gobierno, que a él también lo estaban buscando para matarlo y que no se iba a dejar matar sin pelear. Y eso así pues fue como lo más fuerte, porque naturalmente el camarada me dio unas razones políticas muy entendibles, eso ahí mismo donde yo estaba tirando pico y pala, porque eso era así, trabajando y hablando, yo estaba haciendo un alcantarilla para el desagüe de la carretera.

T. L. ¿Entonces podemos decir que en 1960 se reactiva la actividad guerrillera a raíz del asesinato de Jacobo Prías?

M. P. Bueno es que las cosas no se dan tan así como de la noche a la mañana, yo pienso, y así lo decía el camarada Marulanda, que ese crimen es una de las razones principales para reiniciar la pelea, como decía él, fue como el comienzo y chispazo en serio de esa lucha, porque se venían acumulando razones y ese asesinato colma la paciencia y la buena voluntad de la gente que estaba en paz. Pero de todas maneras lo que hace el camarada Manuel, sobre todo es alertar, explicar que eso de la paz que habían prometido era una mentira, que había una intención de aniquilar al movimiento agrario y que allí estaba la paz del gobierno baleada en el cuerpo del principal dirigente agrario de Marquetalia y de la región, porque en verdad eso era el camarada Jacobo Prías

Entonces yo debo recordar que en toda esa zona había un trabajo político muy organizado de parte de los compañeros, eso no era así como que cada quien andaba por ahí en desorden, no; había organización política y la influencia del Partido Comunista era más o menos notoria, y

esa era la línea que seguía el camarada Marulanda. Él por ahí como desde el 53, desde los días de la creación del Comando del Davis andaba en lo del comunismo y el Charro Negro también, pues ellos eran muy unidos y su trabajo político muy coordinado. Juntos, y al lado de otros dirigentes, claro, tenían como el trabajo organizativo con características similares por el Guayabero y en Riochiquito, que eran las partes donde antes había florecido la resistencia armada comunista hasta cuando por ahí en los finales de 1957 hubo el acuerdo de paz con el gobierno, y que era la paz en la que andaban los camaradas Prías y Marulanda que duró más o menos desde finales del 57 hasta cuando asesinan al camarada Jacobo Prías a traición.

T.L. Pero, ¿qué paso?

M.P. Pues resulta que se desataron las provocaciones del gobierno sobre todo diciendo que esas zonas agrarias eran "repúblicas independientes", y vinieron los asesinatos y la persecución que obligó a organizar la autodefensa. Hasta donde yo recuerdo, por lo que viví y entiendo, es que es esa persecución obligó nuevamente a tomar las armas, porque todas las áreas donde existía el Movimiento Agrario que tenía tendencia comunista, como Río Chiquito, El Pato, Guayabero, el Sumapaz o Marquetalia sufrían la malquerencia del gobierno.

Hablando con el camarada Efrén Gonzáles, c/p Nariño, el venía de Villarrica contaba que durante toda la época de la dictadura de Rojas Pinilla entre el 1954 y el 1957, esa zona siempre vivió como en asedio solamente porque eran comunistas y trabajaban organizadamente, hasta que les hicieron la guerra en firme y los hicieron salir de sus sitios de vivienda. Después de eso y como consecuencia de todo ese desplazamiento forzado de la gente es que se organizan estas zonas de Rio Chiquito, El Pato y las otras que mencioné, como zonas de movimiento agrario que también incluían a Marquetalia. Pues usted debe saber que ese nombre se lo puso Charro Negro por allá en el año 55, porque antes se llamaba El Támaro. Entonces, cuando ya cae la dictadura de Rojas Pinilla en el 57, los destacamentos guerrilleros en realidad estaban como autodefensa totalmente vueltos movimiento campesino.

Esto fue así, y es muy importante saber que la gente seguía políticamente al Partido Comunista, y esto lo agrego para que se entienda, y es lo que dice la historia que siempre hemos aprendido de nuestros orígenes, que en el 58, la Dirección del Partido había hecho el Congreso, creo que era el octavo, y allí se había declarado como orientación que se habían abierto algunos espacios o posibilidades para hacer la lucha por la vía pacífica, sin negar claro, que había que pelear duro en el camino de la democratización del país.

Eso de pronto no era más que un deseo, pero fue lo que se pensó y lo que se siguió como línea política. Pero de todas maneras la realidad puso en su sitio cada cosa, viéndose que para eso no habia perspectivas ciertas. La sola imposición del sistema político bipartidista paritario lo demostraba. Pero bueno, con todo y eso lo que se indicó para actuar fue la *"línea de autodefensa de masas contra la violencia oficial y reaccionaria"*.

Lo concreto fue que el gobierno con una falsa excusa de acabar con el bandolerismo, utilizando agentes encubiertos y desmovilizados liberales convertidos en paramilitares siguieron matando gente, pero sobre todo comunistas. El gobierno dice que estaba haciendo la "guerra preventiva", en realidad era pura guerra sucia. Así con esa situación el Partido Comunista mantuvo la linea de la "autodefensa de masas".

Eso se ratificó en el Noveno Congreso, y después lo hizo el 29 Pleno del Comité Central, y ya cuando ese Pleno se estaba celebrando, Estados Unidos junto al ejército colombiano estaban ejecutando el denominado (Latin American Security Operation) conocido como Plan Laso.

Entonces, fíjese bien, con la pacificación emprendida por el Frente nacional constituido por la unión de los Partidos Liberal y Conservador, el personal armado comunista que había, se desmovilizó, entró a una supuesta paz prometida por el gobierno, y esa decisión política se aplicó principalmente en Marquetalia y desde ahí mismo se mantuvo la gente organizada como movimiento agrario.

Por la finca de Marquetalia, se le pagó a la dueña con unas cabezas de ganado, unas mulas, y $50.000 pesos en efectivo. Con todo eso, hablando en plata blanca, Marquetalia dejó de ser zona guerrillera para convertirse en zona campesina de actividad agraria.

En ese momento en que se está fuera de la actividad militar es que asesinan al camarada Jacobo Prías, y eso no es solamente decisión del gobierno colombiano, porque ya estaban andando los desmovilizados como paramilitares al servicio del gobierno, como era el caso de José María Oviedo (a) Mariachi, que fue quien materialmente lo asesinó.

El caso es que estaba en Colombia la misión yanqui con el total beneplácito, de la oligarquía. Esa misión estaba encabezada por William Yarborough y su equipo (misión Yarborough), y son ellos los que diseñan e imponen el Plan Laso (Latin American Security Operation) contra la resistencia campesina de la región de Marquetalia, con un paquete de guerra sicológica y propagandística que tenía una visión ideológica anticomunista sacada de los manuales con los que formaban a los "cuadros militares" del continente en las escuelas de instrucción militar estadounidense de los años cuarenta y cincuenta.

Estas son las cosas importantes que creo que se podrían resaltar de lo que fueron las circunstancias que rodearon la Operación Marquetalia, porque como le dije antes, el detalle de las acciones y el día a día de los hechos esta bien relatado en los libros de los camaradas Marulanda y Jacobo Arenas.

T. L. Entiendo que usted ve un hilo conductor entre lo que es la resistencia armada comunista anterior a 1964 y el surgimiento de las FARC. Entonces, ¿se podría afirmar que este nacimiento es una determinación más de orden ideológico-político o corresponde más a una necesidad de sobrevivencia? ¿Realmente los campesinos no tuvieron otra alternativa que la de rearmarse?

M. P. Es que esos asuntos no se pueden separar como quien pone cosas diferentes en costales distintos, no. Una cosa va generando la otra, va influyendo. Si a usted lo persiguen para matarlo para quitarle la tierra, usted se defiende como sea, pero si usted logra la formación que le enseña que es que hay unas razones por las que le quieren quitar esa tierra, si usted toma conciencia de eso con seguridad su resistencia, su lucha ya no será por la mera tierra suya, lo cual es muy importantes pero no ya lo fundamental, sino que usted pelea por la tierra, por los intereses del colectivo, y eso le va marcando un tipo de pensamiento diferente, si se quiere llámela ideológica y póngale que aparecen razones ideológicas. Pero le repito que eso no se puede separar tajantemente.

Yo le digo esto como para mayor explicación, y es que en el caso de la resistencia armada comunista, es obvio que ella surge como consecuencia de un desarrollo político de las estructuras de un partido, que crece, se cualifica…, pero eso ocurre porque encuentra una situación objetiva donde darse, ocurre porque ese partido logra un influjo en las zonas rurales que padecen el abusos, latrocinio, injusticias y ese partido brinda las explicaciones y la salidas justas para los afectados.

A finales de los años cuarenta, en Colombia había una intensa represión conservadora. Eso fue durante los gobiernos de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta. Para entonces, ya había un trabajo organizativo, político del Partido Comunista tenía en el campo, allí donde la gente tenía las mayores necesidades, y la necesidad principal era la de la tierra, y para adelantar esa lucha se organizaron las Ligas Campesinas. Pero ahí mismo se intensifica la represión de los mismo que por décadas le han arrebatado la tierra a la gente del campo; ahí mismo se intensifica la represión de los terratenientes que después se pone más grave con las persecución terrible que

agregan a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Por esa persecución, por la necesidad de sobrevivencia, porque ya había algo de conciencia política, etc., la gente asume la organización de la autodefensa de masas como autodefensa armada. Este fenómeno tiene especial desenvolvimiento en el sur del Tolima.

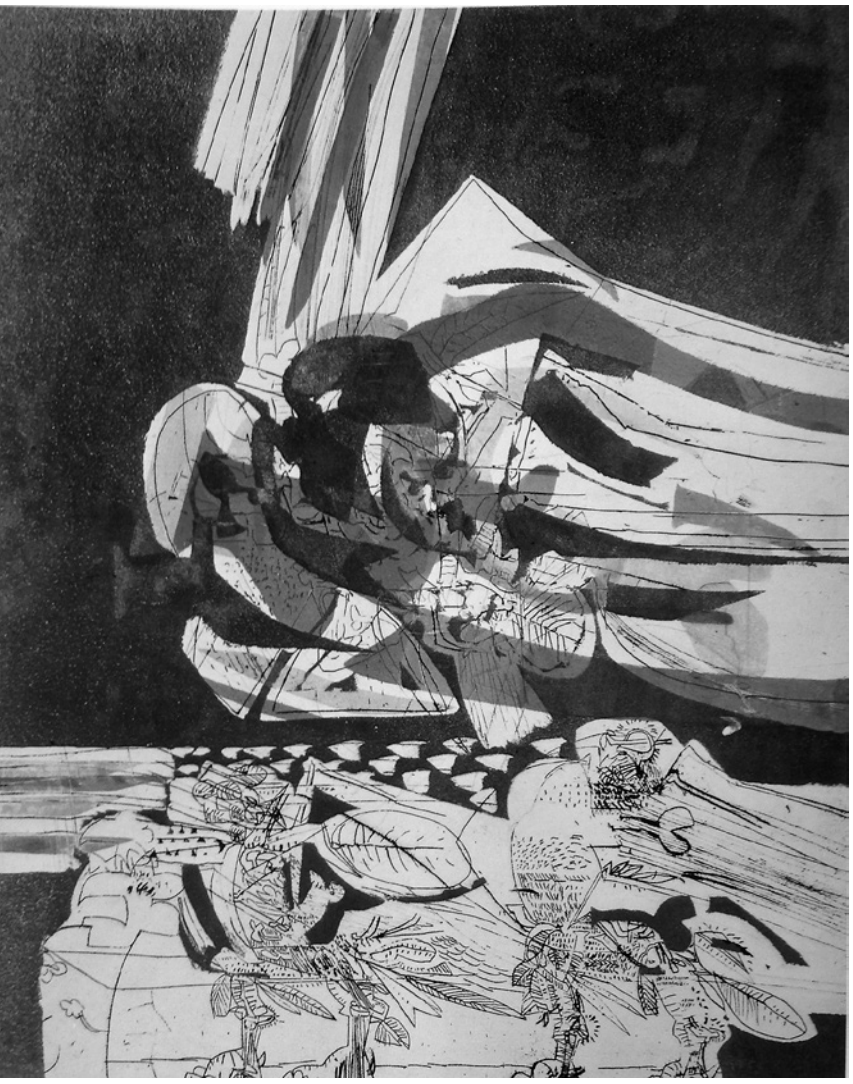
Esa no es una etapa fácil, son tiempos de vida o muerte, sobre todo en esas áreas estigmatizadas por los poderosos. Una de ellas era el Tolima, ahí especialmente usted puede poner a Chaparral, pero tomando en cuenta que la persecución gubernamental con su policía "chulavita" era contra campesinos liberales y comunistas. En eso las manos de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta, como Presidentes, estuvieron metidas totalmente, y bien podemos decir que ellos obligaron a las ligas campesinas a pasar de la resistencia de masas a la toma de las armas; y ese paso no fue solamente de los comunistas, porque a los liberales también les tocó y eso tocó hacerlo cargando con las familias y todo para donde quiera que tocaba irse por la persecución.

En esto que estoy relatando se puede ver que de la autodefensa se va pasando a la idea de constituir una guerrilla, lo cual ya implicaba no solamente un concepto de defender la vida sino que además ya había un propósito político. Este paso es poco a poco y lo obligan las circunstancias, pero con el agregado de que se le va metiendo conciencia política. ¿Si ve?

Sin temores podemos decir que hasta antes del ataque a Marquetalia, había la resistencia más que todo ligada a la idea de la autodefensa, pero que ya a esas

alturas de los hechos, como producto de un proceso, de unas causas, de un agravamiento de los problemas de orden material, pero además por la cualificación de la conciencia política la organización que se concibe es con una nueva visión y una nueva mentalidad que es la de la guerrilla.

En este momento del proceso, ya no está solamente la idea de la defensa de la parcela, de la región. En este momento ya ha aparecido una idea en que la resistencia armada frente a las agresiones comprende una visón territorial, de influencia política de grupos con mucha movilidad y decisión de poder, con una conducción política , bueno digamos que política y militar. De tal manera que todos esos momentos importantes de lucha de resistencia armada en Irco, en Chicalá, el Davis, en Villarrica, etc. cada uno con sus cualidades y procesos particulares se convierten en un solo gran proceso antecedente para llegar a lo que



fue la experiencia de Marquetalia como inicio de la guerrilla en serio, a partir del que surgirán nuevas experiencias que luego darán la madurez para proyectar la ocupación de las tres cordilleras, o dar el paso hacia la realización de la *Primera Conferencia del Bloque Sur* que es donde con mejor reflexión, como con mayor orden y entendimiento se hace el análisis de este proceso que se ha ido viviendo pero también pensando y ordenando en la mente como para decirnos a nosotros mismos: bueno, ya hemos atravesado esta y esta otra situación, ya hemos dado este y este otro paso, entonces hemos tenido una evolución, ya no somos solamente una autodefensa sino que ahora somos una guerrilla. Por eso, aunque ahí todavía no nos llamamos FARC, esa Conferencia, la del Bloque Sur la consideramos como la Primera Conferencia de las FARC-EP.

Esto también tiene su importancia porque se trata de ver que hay momentos muy especiales en que en la lucha hay que hacer un alto para meditar, para hacer conciencia del rumbo que se le da a un proceso. Y aquí en la Conferencia del Bloque Sur hubo eso, la reflexión sobre la experiencia organizativa, el análisis de la experiencia política y militar de la resistencia hasta llegar, especialmente, a la de Marquetalia. Aquí decimos, bueno esto tiene otro carácter, el movimiento armado ya no está solamente por defender la vida de cada quien y de las familias, sino que ya está es por una lucha en que el propósito es la toma del poder y eso resulta que es un salto inmenso, tan grande que marca el inicio de la historia de las FARC ya como tal. A los pocos meses, creo que seis, se dará la *Conferencia Constitutiva* de nuestra organización.

Con esta explicación, vuelvo un poco atrás para decir que, entonces, el surgimiento de las FARC obedece a un proceso, y que la fecha de fundación que es la del 27 de mayo es una simbología. Quiero decir que una organización como la nuestra, no nace un día X porque alguien lo decidió y ya, sino que su surgimiento tiene unas causas, hay una gestación. Entonces, la fecha rememora un día heroico de esa resistencia, es el combate primero que se da cuando el avance de la operación enemiga choca con nuestra gente y logramos recuperar los primeros

fusiles. Y hasta aquí, en el proceso del que hablo, se han producidos una cantidad enorme de hechos con un trasfondo de orden social, político y económico en el que la lucha por la tierra tiene un papel muy pero muy especial.

Entonces, sin duda, el asesinato del camarada Jacobo Prías, que era con el camarada Manuel Marulanda el fundador de Marquetalia, y jefe del Movimiento Agrario de la región por aquel entonces, y por otro lado el ataque militar contra la zona son, podríamos decir, dos detonantes principales del surgimiento de las FARC.

En varias ocasiones se ha recordado de nuestra parte un criterio muy preciso del camarada Manuel sobre estos hechos, y es que fueron los directorios de los partidos políticos y los militares los que movieron a los delincuentes como Mariachi, para que se produjera el asesinato de Jacobo Prías quien ya era conocido como un dirigente muy querido que estaba de lleno en la política abierta, pacífica, desarmada, como integrante además del Partido Comunista. El hacía parte del Comité Central de este partido. Marulanda sobre esto tiene una frase muy conocida en la que dice que *"con el correr del tiempo la muerte de Charro Negro nos ha llevado a una confrontación nacional con grandes perspectivas para producir cambios; y si ello nos permite, crear todas las condiciones para tomarnos el poder"*. A eso, él le agregaba la opinión de que no todas las veces se producen levantamientos armados por la muerte de un comandante, y decía que a su modo de ver prácticamente era un caso muy particular.

Y sobre esos pensamientos es que el camarada Manuel Marulanda afirmaba que *"en Marquetalia ha comenzado el chispazo y comienzo de la revolución en serio de acuerdo a lo que estamos viendo"*. A Charro lo asesinaron por la espalda el 11 de enero de 1960. Yo ingresé a la guerrilla el mismo mes del mismo año unos días después de ese crimen de Estado, en plena iniciación del sistema político excluyente liberal-conservador que las oligarquías bautizaron con el nombre pomposo de Frente Nacional, y en pleno desarrollo de "guerra preventiva" y bajo el peso de la llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional" que implantaron los Estados Unidos en nuestra país con el beneplácito de quienes nos gobernaban.

Desde 1958, quien había asumido la presidencia de la República cómo primer mandatario del Frente Nacional era el liberal Alberto Lleras Camargo. Ya desde el parlamento colombiano el señor Álvaro Gómez Hurtado, el hijo de otro nefasto presidente que se llamó Laureano Gómez, había iniciado una campaña feroz contra Marquetalia diciendo que era una "República Independiente", así que aún estando Lleras Camargo en la Presidencia, se produjo el primer ataque a Marquetalia, eso fue el 8 de enero de 1962. El segundo ataque, que es del que estamos hablando se da en 1964 bajo la presidencia de Guillermo León Valencia. Esta es la que se llama propiamente "Operación Marquetalia" y realizan como parte del Plan LASO, o Latín American Security Operation".

T. L. Miguel, hoy en día y luego de sus 52 años de guerra, lo cual significa su presencia en primera línea de combate,

a lo largo de los 50 años de lucha que cumplen las FARC en este mes de mayo de 2014, ¿qué significa para usted el nombre Marquetalia?

M. P. Para mí Marquetalia, aparte de todo lo que he explicado, tiene un sentido muy especial, que es el sentido que le dan todos los guerrilleros de las FARC, incluyendo a los más nuevos, porque es que a los más nuevos se les enseña la historia para que tengan claro de donde es que venimos y para donde es que vamos. Sí, entonces Marquetalia es el símbolo de la resistencia popular armada en nuestro país. Pero además es el símbolo del surgimiento de la guerrilla como tal, ya tomando el rumbo no de la autodefensa campesina, sino el de la guerra de guerrillas móviles. Además, con un heroísmo que genera mucho orgullo en el movimiento revolucionario fariano. De ese símbolo viene un compromiso inquebrantable de llevar la lucha por las transformaciones sociales hasta donde nos trazamos que es hacer una revolución socialista en Colombia. Eso no es para que se nos quede por ahí enredado. Ese es el compromiso que significa Marquetalia, porque además es el compromiso que tiene otro nombre inclaudicable que es el nombre de nuestro eterno comandante Manuel Marulanda Vélez.

T. L. ¿A usted le tocó pelear en Marquetalia?

M. P. Pues ahí empecé y todavía no he terminado. Lo que no le podría decir es en cuantos combates participé porque eso es como difícil uno ponerse a llevar cuentas de ese tipo. Lo que si le diría es que nosotros no nos replegábamos hasta cuando se nos acababa la comida, y eso implica que hubo muchos combates, y muchos soldados del gobierno muertos y heridos. Nosotros recuperamos buen armamento; pero también hubo una compañera muerta, no recuerdo ahora su nombre de guerra, la ametralló un avión. También hubo un guerrillero muerto en combate, él se llamaba Luis Salgado y otro guerrillero se desnucó cuando se cayó con 4 arrobas de maíz encima. Otra gente nuestra se enfermó de viruela negra y otros con un mal en los pies que llamaban espuela de gallo. No es fácil, en la guerra muere gente de lado y lado y todos tienen sus dolientes.

Después de muchos combates salimos hacía el comando de Ciro Trujillo en Río Chiquito. Eso significaba 8 días por trocha para llegar hasta allá, pasando por el Simbola. Ya asentados por esos lados, veníamos intermitentemente a Marquetalia a pelear unos días y otra vez regresábamos a Río Chiquito. Ahí generalmente, promediando, entre ida y vuelta y los ratos de pelea, nos gastábamos 20 días, pero cuando montábamos emboscadas y la tropa enemiga demoraba en pasar por el lugar preparado, el tiempo de espera se nos alargaba hasta por un mes, pero no nos regresábamos sin pelear, había que pelear.

T. L. Cree usted que aún se siguen manteniendo las mismas motivaciones de antes para la lucha en las FARC.

M.P. Por supuesto camarada, las circunstancias que motivan la lucha armada siguen siendo las mismas, solo que en un contexto contemporáneo y con los problemas agravados. Sigue el mismo

intervencionismo estadounidense por el dominio de nuestras tierras que se las quieren distribuir a pedazos, eso en comunión con el gobierno que cada día se deslegitima. Este gobierno no pone freno a la extranjerización de la tierra y de nuestros recursos. También en el plano de la democracia lo que hay cada día son nuevas restricciones, nuevas normas "liberticidas" de "seguridad ciudadana". Los diversos gobiernos de derecha siempre le han dado la espalda al genuino soberano, y sin importarle la suerte de los nacionales arremete contra los bosques y reservas naturales, que no solo deben ser preservadas por condiciones obvias de cuidado ambiental, también porque son parte inalienable y sagrada de nuestros pueblos aborígenes, cuya cosmovisión le da un valor preciado y entrañable a la tierra; y esto no es tradición solamente de ellos sino de todos los colombianos, sobre todo de los campesinos y comunidades rurales en general que en virtud del mestizaje tienen una gran influencia indígena en su idiosincrasia.

Ahora nos quedan son los miles de muertos, tanto soldados como guerrilleros, campesinos, etc.; pueblo que sigue sufriendo la violencia desatada por estos gobiernos que cada día entregan nuestra riqueza colombiana a unas multinacionales.

Utilizan las mismas artimañas para lograr el exterminio, aunque ahora empeoraron, porque no les basta con querer acabar con su encarnizado plan guerrerista a la guerrilla sino que, además, se valen de la manipulación de los medios de información para llenar con ilusiones y falacias las expectativas de paz de la nación.

A mi mucho de lo que hoy se dice desde la propaganda oficial me recuerda mucho a lo que el gobierno también decía antes, pareciera que eso el gobierno no cambia. Recuerdo, por ejemplo, que estando en

Rio Chiquito, en el comando de Ciro Trujillo, el gobierno hacía la propaganda sobre que ya había acabado con los Marquetalianos, igual que ahora, cuando el gobierno vende la imagen, con base en mentiras, de una guerrilla doblegada, cuya única opción es entregar las armas sin derecho a exigir nada y pareciera que un diálogo para el entendimiento lo quisieran convertir en un proceso de sometimiento lleno de mezquindades, de tal forma que a estas alturas de la vida todavía el gobierno no se decide a acabar con el latifundio, por ejemplo.

De todas maneras y frente a la propaganda enemiga que sugiere nuestro declive, después de acordarme de tanta odisea en esta lucha, me da risa ver al enemigo tratando de presionarnos como si nos fuéramos a asustar. No, eso no va con nosotros. Por lo menos yo estoy aquí todavía lidiando y con ganas de seguir luego de medio siglo de estar batallando. Le apuesto a la paz, la deseamos, pero resolviendo los problemas que generaron el alzamiento y en eso, las ganas para seguir luchando nos sobran.

T. L. Bien comandante Miguel, le agradezco mucho su atención y su disposición para responder a esta entrevista. Algún mensaje final.

M. P. Si, pues yo me había comprometido a narrar algunas anécdotas sobre aquellos días de Rio Chiquito, mis experiencias con Líster, con el camarada Jaime Guaracas, con el camarada Manuel, con el camarada Jacobo, etc. y la verdad es que quedo debiendo esa parte, pero no me bajo del compromiso. Ahora pensé que era mejor hablar del sentido general que tiene ese símbolo que es Marquetalia, sobre todo en este mes en que cumplimos

50 años de resistencia como FARC-EP. Pensé así porque Colombia debe tener bien claro que esta lucha tiene un origen, unas razones llenas de justeza, que no es un capricho o el producto de la insensatez. Entonces, digamos que dejo dos mensajes. Uno primero, muy sencillo, y es el de la reiteración de mi compromiso de narrar algunas anécdotas de esta historia hecha por gente humilde que quiere la paz con justicia social para el país y que esta dispuesta a entregar la vida por ello. Un segundo mensaje tiene que ver con la paz, y es que estamos en la Habana porque tenemos convencimiento de lograr ese propósito. Hay una necesidad nacional de paz y las FARC quieren ayudar a forjar los escenarios que la permitan. pero eso no depende solamente de nosotros.

En este momento ya cumplimos el año y medio de diálogos y hemos concretado dos acuerdos parciales. Uno sobre Reforma Rural Integral y otro sobre Partición Política. En el primero se consignan logros y de eso ya hable en algún momento resaltando que la promesa de formalizarle la atierra a todos los campesinos es muy importante, como lo es la promesa de llevar salud, vivienda educación ,etc. Pero eso apenas está en promesas y con el inconveniente de que todavía el gobierno no se compromete con la delimitación del latifundio, con una redistribución en serio de la tierra y con parar su extranjerización. Estos son elementos fundamentales de una reforma agraria, lo que quiere decir que lo fundamental no está resuelto.

Y en el plano de la participación política, que es el asunto de la democracia, también todo está como un paquete de promesas en el que lo más resaltante podría ser la creación de circunscripciones lectorales especiales para la gente que vive en las zonas más apartadas. Estas personas podrían elegir en las elecciones normales y luego hacerlo nuevamente para una representación especial de sus zonas, pero asuntos como el de la reforma electoral y política que recomponga este corrompido sistema electoral no están resueltos ni siquiera como promesa, como tampoco están resueltos temas cruciales como el de la existencia del paramilitarismo o el de la existencia de la criminal Doctrina de la Seguridad Nacional, la misma del enemigo interno que es la que ha desatado la guerra sucia y el terror oficial en Colombia.

Entonces, asuntos esenciales de la democracia todavía están en veremos. Y sobre el tercer punto referido al tema del narcotráfico, hay avances pero debe haber una definición más clara del Estado en cuanto a su compromiso de cambiar la política de guerra contra las drogas que ha fracasado mundialmente y en Colombia a llenado el país de sangre, contaminación ambiental y muerte. El gobierno ni siquiera se ha comprometido aún con acabar con las desastrosas fumigaciones que le llenan el bolsillo a Monsanto mientras destruye nuestro medio ambiente. Y por otro lado, mientras golpea con todo a los eslabones más débiles de la cadena que son los cultivadores y los consumidores, no despliega acciones visibles contra los duros del narcotráfico que están incrustados en el sector financiero. Bueno de todas maneras hay avances, pero aún hay mucha cosa metida en el congelador y se trata de asuntos fundamentales que hay que comenzar a abordar sin más demoras.

En todo caso, como se trata de asuntos delicados, de interés nacional, seguramente lo más conveniente será que se convoque la Asamblea Nacional Constituyente que le permita al soberano actuar con sabiduría en la definición de estas dificultades y en la concreción de la refrendación. Esa Asamblea es una necesidad, como lo es también la de la creación de una Comisión que esclarezca la verdad sobre la historia del conflicto, estableciendo las responsabilidades políticas del caso. Sin esa Comisión es imposible abordar el importante tema de las víctimas del conflicto. Ya sabemos que si se requiere justicia, obligadamente se debe establecer la verdad, por eso la urgencia de la Comisión.

Bueno, no me extiendo más. También agradezco la paciencia suya para recibir mis respuestas y dejo mi deseo por que el pueblo colombiano se empeñe con su vigor y su creatividad en esta loable tarea que es la de alcanzar la paz con justicia social para todos.

T.L. Gracias a usted comandante Pascua, ha sido un importante su relato, que se conoce poco en nuestra América latina y caribeña. Esperemos que este nuevo intento de solución al conflicto social y armado termine con un acuerdo de paz justo y duradero, lo cual sería un gran triunfo para su pueblo y para nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Pero antes dígame como le ha parecido nuestro país.

M.P. Cuba es realmente un país muy hermoso, de personas muy instruidas y cultas, con una extraordinaria vocación solidaria, gentes muy espontáneas, siempre he admirado la lucha del pueblo cubano que fue un ejemplo para nosotros. El camarada Fidel Castro, el Che Guevara, son símbolos muy grandes para todos los revolucionarios. La obra de la revolución cubana repercute en todo nuestra región, sobre todo llevando salud y educación a muchos pueblos hermanos. Realmente Cuba y su Revolución son un paradigma de resistencia y lo demuestran en su lucha contra ese brutal bloqueo de Estados Unidos, cada día más absurdo y estúpido.

Las otras voces de la historia: mi encuentro con Raúl Reyes

Miguel Ángel Beltrán Villegas*

"Es necesario escuchar e interactuar con estas 'voces bajas'
porque tienen muchas historias que contarnos
–historias que por su complejidad tienen poco
que ver con el discurso estatista- y que son por completo
opuestas a sus modos abstractos y simplificadores"

Ranajit Guha

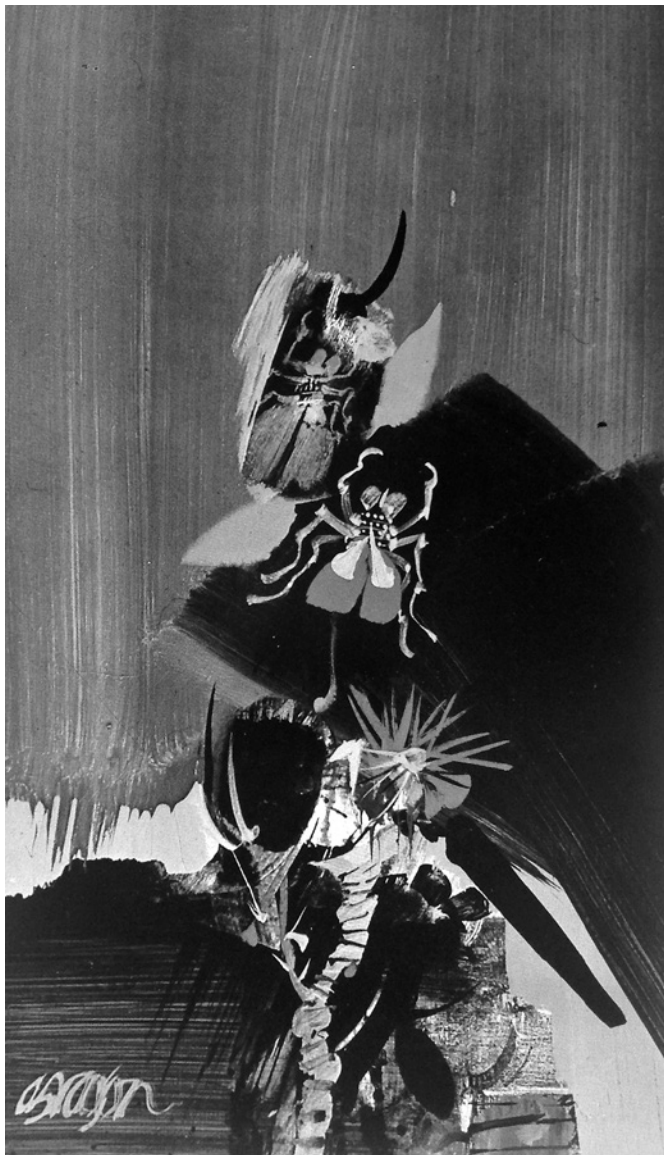
Nos recordaba el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, en el epílogo de una de sus últimas novelas: *El Sueño del Celta,* donde narra la trayectoria vital del diplomático y aventurero Roger Casement -comprometido con la causa del nacionalismo irlandés y quien a principios del siglo pasado denunciara las atrocidades del colonialismo europeo en el Congo Belga y la Amazonía Sudamericana- aquellas palabras del escritor uruguayo José Enrique Rodó: *"Cada uno de nosotros es, sucesivamente, no uno, sino muchos. Y estas personalidades sucesivas, que emergen las unas de las otras suelen ofrecer entre sí los*

* Sociólogo y Doctor en Estudios Latinoamericanos.

más raros y asombrosos contrastes". La cita rondaba en mi mente a propósito de las declaraciones y comentarios periodísticos que siguieron a la muerte del máximo líder de las FARC, "Alfonso Cano", en un operativo militar que, al igual que otros tantos realizados por las fuerzas militares colombianas ha despertado serias controversias sobre su legitimidad y el respeto a las normas internacionales que regulan la guerra.

Como en los casos anteriores de la muerte de Luis Edgar Devia ("Raúl Reyes") y Jorge Briceño ("el Mono Jojoy"), estas complejidades se difuminaron y el estigma de "terrorista" pareció prevalecer sobre cualquier otra consideración. Con un ingrediente nuevo: algunos se permitieron hablar de sus relaciones de amistad con el estudiante de antropología, asiduo lector y en ese momento militante de la Juventud Comunista (JUCO), Guillermo León Sáenz. Tal vez su formación universitaria y su procedencia de una clase media urbana le confería ante ciertos sectores sociales, una relevancia que jamás se les reconoció a los otros dos jefes guerrilleros. Reacción comprensible dentro de los estereotipos de una guerrilla que algunos siguen imaginando fundamentalmente rural y en el contexto de un país donde la precaria cobertura de la educación superior sigue haciendo de ésta un canal de ascenso social.

En principio este manejo mediático no debería sorprendernos. Los poderes estatuidos recurren a la legitimación de la propaganda a través de una suerte de "comunicación discursiva", que aspira a erigirse en una verdad única, válida para todos los grupos sociales, donde prima lo que el lingüista Teun Van Dijk denominaría una "autopresentación positiva por parte del grupo dominante y de heterorepresentación negativa de los grupos dominados". Este control del texto y el contexto, -para utilizar dos conceptos centrales en este autor- parece haber permeado en Colombia muchos campos incluyendo entre otros el académico, espacio por excelencia del ejercicio crítico.



Tras la ruptura definitiva de los diálogos del Caguán, el 20 de febrero de 2002 y el triunfo electoral del presidente Álvaro

Uribe Vélez pocos meses después, el uso público de determinadas palabras quedó prohibido sospechoso de ser un lenguaje subversivo, retrotrayéndonos a los oscuros días del Estatuto de Seguridad de Turbay. Y para no dejar campo a la imaginación, el Alto Comisionado para la paz de ese entonces y hoy prófugo de la Justicia colombiana, Luis Carlos Restrepo, en una circular dirigida a las representaciones diplomáticas en el exterior, prohibió el uso de términos como "conflicto armado", "actores armados", "comunidades de paz", ya que aceptarlos era a su juicio legitimar "los grupos armados ilegales". Como si se tratase de uno de los innumerables pasquines recreados al mejor estilo de Augusto Roa Bastos, "Yo el Supremo" pretendía crear una nueva realidad de un solo plumazo: "Colombia: una Democracia pluralista y garantista, amenazada por el terrorismo". Claro, para entonces el primer mandatario de los Estados Unidos, George Bush ya habían hecho lo propio, advirtiendo a las naciones del mundo: "o están con nosotros o están con los terroristas".

Frente a estos preocupantes hechos, algunos académicos optaron por tomar el camino más corto, esto es hablar y escribir de asuntos que no incomodaran a los poderes instituidos (mejor referirse al posconflicto que al conflicto) y que no pusieran en tela de juicio las verdades oficiales (reconocer las bondades de la democracia colombiana y la inminencia del "fin del fin"); otros prefirieron marginarse del debate público, aceptando la autocensura como un costo menor y necesario para ser reconocidos como "expertos en un campo de conocimiento". A estos colegas vendría muy bien recordar las palabras de Edward Said cuando anota que *"El intelectual nunca lo es más que cuando está rodeado, lisonjeado, presionado, intimidado por la sociedad para ser una cosa o la otra"*. Por supuesto no faltaron voces aisladas que a contracorriente de esta tendencia y asumiendo los costos de formular una postura que se aparta del discurso oficial, han colocado (y siguen colocando) sobre la arena pública, debates que hacen parte de los índices de temas prohibidos y expurgados por el Santo Oficio de la Inquisición.

Uno de ellos precisamente es el de la interlocución académica con "los actores armados"

En su reciente carta de respuesta a la misiva pública enviada al jefe guerrillero "Alfonso Cano" por el reconocido historiador Medófilo Medina, el hoy Comandante del Estado Mayor Central de las FARC Timoleón Jiménez, reclamaba justificadamente que "lo menos que podría esperarse de quienes escriben libros o dictan conferencias sobre nuestra lucha" es que "vengan a entrevistarnos", y trataba de interpretar esta omisión como "cosas de la ciencia social posmodernista". Sin perjuicio, de que hay quienes todavía piensan que el conocimiento proviene única y exclusivamente de los expertos y que los agentes sociales poco o nada aportan a ese conocimiento (y en todo caso sería una anacrónica concepción positivista de la ciencia), está el hecho incontrovertible de las dificultades que tenemos los investigadores sociales para desarrollar nuestras investigaciones en un país como Colombia.

Justamente una de las caras positivas del proceso de paz que se desarrolló en El

Caguán fue la posibilidad que tuvieron numerosos sectores de la sociedad civil de exponer a través de las llamadas "audiencias públicas" y las "mesas temáticas", sus ideas y propuestas frente a la paz, en una dinámica que con muchas limitaciones se trató de proyectar en doble vía. Así, por ejemplo, a la mesa temática sobre sustitución de cultivos asistieron diplomáticos de 27 países del mundo y, en diferentes momentos, hicieron presencia en la zona desmilitarizada varios ejecutivos de las multinacionales, el presidente y vicepresidente de la Bolsa de Valores de Nueva York y hasta una delegación del Congreso de los Estados Unidos. Esto sin contar con la gira internacional de un mes por varios países de Europa, encabezada por el mismo "Raúl Reyes", en compañía de representantes del Gobierno, el Congreso y el Sector privado.

Fue precisamente en el ambiente generado por este proceso que, tras vencer muchas dudas y vacilaciones, tomé la decisión de viajar al Caguán a comienzos del 2001, con el propósito de hacer un balance de lo que había sido hasta ese momento la zona de despeje, y contrastar directamente sobre el terreno, el cúmulo de afirmaciones que desde diferentes sectores de la opinión pública planteaban que se trataba bien de un paso importante en el proceso de solución política al conflicto armado y social colombiano, bien una claudicación del Estado ante una guerrilla que parecía haber perdido su horizonte político. En esa perspectiva me resultaba de particular interés entrevistarme con el jefe guerrillero "Raúl Reyes", quien fungía como el más claro representante de las FARC en las mesas de diálogo y negociación con el gobierno.

No pude escoger peor momento para adelantar mi trabajo de campo: desde hacía tres meses los diálogos entre los voceros del gobierno y la guerrilla se hallaban suspendidos, y en el plano internacional los ataques del 11 de septiembre de 2011 a las torres gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono, habían estimulado un discurso belicista que desestimaba cualquier otra salida que no fuera la de la guerra. De hecho el "Plan Colombia" estaba siendo rediseñado para adaptarse a las nuevas circunstancias de la "lucha antiterrorista", como quedaría posteriormente demostrado con la política de la llamada "seguridad Democrática" del presidente Uribe. Pese a ello, los recurrentes encuentros entre el Comisionado de Paz y los voceros de las FARC, así como la intermediación de organismos internacionales hacía pensar que podrían superarse estos escollos, y avanzar hacia la concreción de unos acuerdos que abrieran verdaderos caminos de paz.

En medio de estos avatares, y tras cruzar varios retenes primero del ejército y luego de la guerrilla, incluyendo en el primer caso fotografías y filmaciones ilegales, arribé hasta la cabecera municipal de San Vicente del Caguán. No requerí de muchas indicaciones para llegar hasta una casa, que todos identificaban como una suerte de "sede" de las FARC, donde se decía recibían a los miembros de la sociedad civil, interesados en llevar propuestas o participar en las audiencias públicas. Todo parecía indicar que sería más fácil de lo que imaginaba. Sin embargo, al arribar a la casa, ésta estaba vacía y sus puertas y ventanas cerradas. Estuve indagando con los pobladores vecinos pero nadie me dio una explicación satisfactoria

sobre la ausencia allí de los guerrilleros. Decidí entonces rentar una habitación en un modesto hotel del centro y en varias oportunidades estuve rondando en los alrededores de la casa buscando alguna información, hasta que finalmente me interceptaron varios hombres armados, vestidos de camuflado, que se desplazaban en una camioneta y que se identificaron como guerrilleros de las FARC. El que parecía ser el jefe, me llamó y me interrogó con cierta arrogancia y desconfianza. Su actitud no difería sustancialmente de los efectivos de las fuerzas militares con que había tenido contacto hasta ese momento.

Me presenté como profesor universitario, le comuniqué el propósito de mi viaje y le hice saber mi intención de hablar con Raúl Reyes. De entrada no hizo explícita su negativa, pero todos sus gestos, movimientos y palabras me dieron a entender que era algo impensable. Me dijo que estuviera pendiente que él haría algunas consultas, y me confirmaría si era posible la entrevista. En esa permanente espera estuve dos o tres días, y cuando ya había desechado definitivamente la posibilidad de un encuentro, una circunstancia vino a obrar en mi favor. Una mañana, cuando me encontraba en las afueras de la sede dialogando con uno de los guerrilleros perteneciente al grupo inicial con el que tuve contacto, llegaron al lugar "Simón Trinidad" y "Marco León Calarcá". Con éste último había tenido oportunidad de conversar e intercambiar ideas sobre la realidad política nacional, cuando cursaba mi doctorado en la UNAM y aquel fungía como vocero oficial de las FARC, con la anuencia del gobierno mexicano.

Marco León lucía un camuflado verde y portaba un arma de largo alcance; sudaba copiosamente, y el contraste de su fisonomía física y su uniforme era evidente; para ser más precisos su apariencia de guerrillero reñía con los estereotipos que nos había acostumbrado una cierta iconografía nacida de los revolucionarios cubanos del 26 de Julio. Hasta entonces lo había tratado en el DF como un ciudadano más, y sólo en ese momento tomé verdadera conciencia de su condición de rebelde levantado en armas. Me saludó amablemente y eso me dio la oportunidad para comunicarle el propósito de mi viaje y mi interés de conversar con Raúl Reyes. Hizo un gesto de escepticismo, pero se comunicó a través de un radio que llevaba consigo. Me dijo que diera una vuelta por la plaza central (¿otra? –pensé yo-) y que nos volviéramos a ver en unos cuarenta minutos. Su gestión dio resultado y una

hora más tarde nos desplazábamos a alta velocidad por una carretera pavimentada que poco a poco se fue convirtiendo en una escarpada trocha. Para entonces ya habíamos cruzado el poblado de La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán en el cual se llevaban a cabo las reuniones de los voceros del Gobierno y la Guerrilla. Media hora después la camioneta se detuvo; mis acompañantes bajaron conmigo, y tras impartir algunas instrucciones a dos hombres armados que se encontraban allí en actitud de guardia, retomó su camino. Nos despedimos, mientras yo me apeé allí.

Pocos minutos después de estar en el campamento, para sorpresa mía apareció en persona el mismo "Raúl Reyes". Se acercó, y me tendió la mano. Vestía un pantalón de camuflado, una camiseta de algodón verde, y una pistola al cinto. Me dijo sonriente, pero con un dejo de sarcasmo: "es muy bueno que los académicos nos visiten y vean con sus propios ojos lo que realmente está pasando en este país". Asentí con mi cabeza de una manera casi mecánica, pues aún no terminaba de reaccionar al encuentro.

-¿qué tal el viaje? me preguntó

Aproveché la oportunidad para referirle las múltiples dificultades de mi travesía, como una manera también de comunicarle que no era tan sencillo llegar hasta allí. Se quedó pensativo un momento y me dijo: "Nosotros somos los únicos que podemos garantizarnos nuestra seguridad" y enseguida me señaló un grupo de hombres que trabajaban con picos y palas, cavando una serie de huecos que asumí eran trincheras y efectivamente así me lo corroboró: "Son para nuestra protección, aquí permanentemente sobrevuelan la zona aeronaves de las fuerzas militares con el pretexto de buscar pistas clandestinas, que siempre han existido y que ellos mismos, desde hace mucho tiempo, vienen utilizando para su negocio del narcotráfico; también todos los días detectamos miembros de la inteligencia vestidos de campesinos, o que se hacen pasar por empresarios, vendedores, misioneros y hasta locos pero que traen planes precisos para asesinarnos".

Continuamos nuestra conversación mientras terminábamos una taza de limonada que nos ofreció un guerrillero. Durante esos minutos "Reyes" aprovechó para darme algunos detalles de la organización del campamento: el lugar de los chontos (baños); la "rancha" (cocina) acompañada de un horno de barro y un inmenso tanque de agua; el salón cultural con su televisor y DVD y los respectivos "cambuches". Se veía mucha actividad en el campamento. Unos llevaban y traían leña, otros trabajaban con sus picas y más al fondo, un pequeño grupo de guerrilleros se hallaba reunido, en un amplio salón como si estuvieran adelantando una tarea colectiva de estudio, después supe que preparaban un tema que irían a desarrollar durante "la hora cultural".

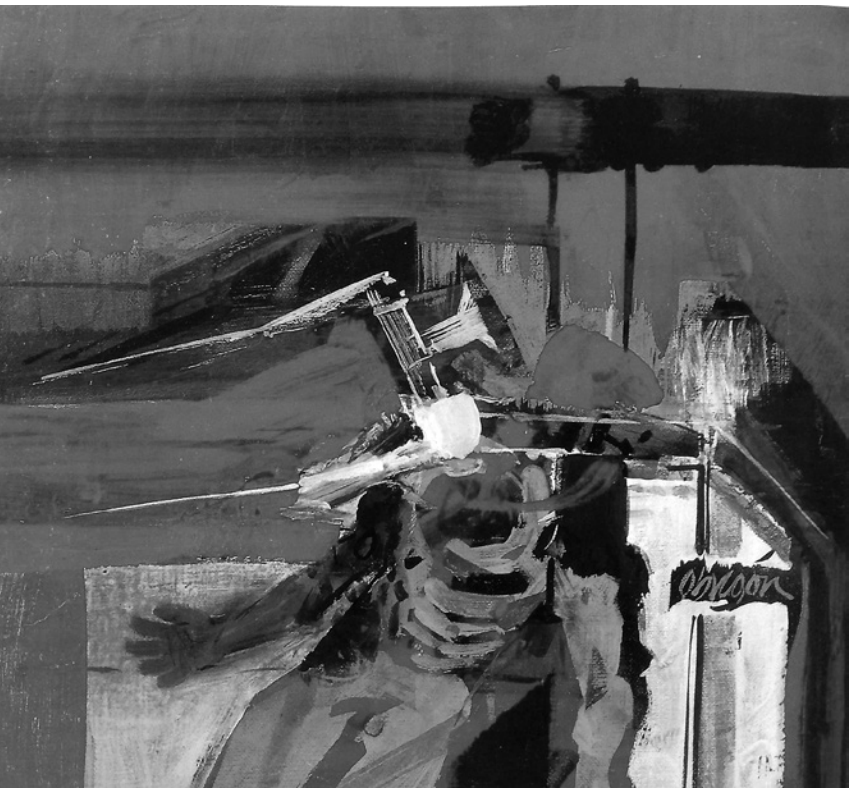
"Esté pendiente que en la tarde podemos conversar", me dijo Reyes, antes de retirarse y dejarme con una joven guerrillera a quien le había hecho una breve presentación mía. A partir de ese momento ella se convirtió en algo así como mi guía dentro del campamento. Luego de acomodar mi equipaje tuve oportunidad de recorrer el lugar e incluso hablar con

algunos de los guerrilleros y guerrilleras. Contrario a lo que esperaba encontré una gran disposición para entablar conversación; se notaba que durante estos tres años de diálogos y negociación, habían ganado en confianza. Sin duda su mayor contacto con la población civil, con los medios de comunicación, y con gentes y personajes procedentes de diferentes regiones del país e incluso del mundo, les había forzado a una mayor apertura de sus horizontes mentales. La imagen del guerrillero tímido y, en ocasiones, hosco parecía pertenecer al pasado.

A la hora del almuerzo los guerrilleros con sus respectivas vajillas hacían una fila para recibir su porción de alimento y luego se ubicaban en una especie de comedor, aunque muchos preferían comer de pie. Me disponía a preguntar dónde conseguir un plato y cubiertos, cuando vi aparecer a mi guía con un plato de lentejas, arroz, yuca, papa, una porción de carne de res y un vaso de refresco royal. Una hora y media después de la comida, iniciaba mi entrevista con el jefe guerrillero. Llegué hasta su "oficina" que se reducía a una mesita hecha de tabla con un par de bancos de madera y en uno de cuyos costados tenía apoyado un fusil; Sobre la superficie de la mesa pude observar una libreta de notas y un libro. Su título no me era desconocido: *Colombia: una nación a pesar de sí misma* del historiador inglés David Bushnell, una síntesis muy bien lograda de la historia colombiana desde la época precolombina hasta la época actual. Me reconfortó conocer su interés por la historia nacional.

Apenas nos sentamos, y antes de que me diera tiempo de reiterarle el objetivo de

mi entrevista, me lanzó una pregunta seca: "Bueno, y que piensan los universitarios (¿académicos?) sobre las FARC?". Le expresé que no había una opinión unificada frente al tema y que existía un amplio espectro de perspectivas, desde aquellos que veían esta organización como un actor armado del conflicto, hasta aquellos que señalaban que las FARC era una guerrilla degradada que había perdido su horizonte político. Le manifesté, sin embargo, que pese a esa diferencia de percepciones, existía un conjunto de problemáticas compartidas que desde la



investigación social nos interesaban: sus propuestas políticas y sociales, el tema de los secuestros, sus vínculos con el tráfico de la coca, sus relaciones con la población civil, la búsqueda de salidas al conflicto armado y social, entre otros. Mi interlocutor me escuchó atentamente y tomó nota en una libreta de notas. Muy de vez en cuando me interrumpía para hacer alguna acotación, una pregunta, una aclaración, o solicitarme una ampliación pero en general su actitud de oyente fue bastante respetuosa.

Una vez concluida mi intervención, tomó la palabra y se refirió uno por uno a los puntos que yo había acotado. Debo reconocer que hasta ese momento la imagen que desplegaba en mi mente del jefe guerrillero, era la del comandante militar, un poco atemperada, es cierto, por sus intervenciones y declaraciones en los medios de comunicación durante esos tres años de diálogos y negociación. Aún así desde el proceso adelantado por la Coordinadora Nacional Guerrillera "Simón Bolívar" (CNGSB) en Caracas, había compartido –al igual que muchos analistas sociales- esa dicotomía que veía en "Alfonso Cano" un hombre de la política y en "Raúl Reyes" un hombre de la guerra. Nada más lejano de la realidad, la impresión que tuve en ese momento –y la que quedaría en mi memoria- es que este último era un revolucionario convencido, con un sólido conocimiento de la realidad del país que revelaba un significativo compromiso con la paz de Colombia.

En algún momento de nuestra conversación me expresó que antes de ingresar a las FARC, había militado en las filas del Partido Comunista, y que como militante de esta organización desarrolló una intensa actividad sindical en la compañía multinacional Nestlé, desempeñándose también como concejal en el municipio de Doncello, municipio del cual tuvo que partir debido a la represión estatal y el acoso del ejército, viéndose finalmente abocado a tomar el difícil camino de las armas para resguardar su vida y llevar adelante sus ideales de cambio y justicia social.

En aquella calurosa tarde y en medio del verde y frondoso follaje que enmarcaba su improvisada oficina, escuché las voces de otro país que me hablaba desde sus historias de persecución y exterminio; de sus hombres y mujeres privados de la libertad en las cárceles colombianas, cuyos padres, hermanos/as, cónyuges e hijos también reclamaban y que estaban dispuestos a intercambiar por soldados, políticos y

empresarios que tenían en su poder; así mismo, descubrí en aquellos territorios las demandas de paz y de justicia de miles de campesinos que asumían su identidad con las luchas de Marquetalianos y Marquetalianas en pos de una reforma agraria democrática, y que anhelaban oportunidades de trabajo y educación para que la guerra no consumiera a sus hijos e hijas; en fin, palpé el horror hacia la guerra y los anhelos de una solución política y dialogada al conflicto armado.

"Pero esto último no se va a lograr de la noche a la mañana –me aclaraba el jefe guerrillero- porque lo que está en juego es la solución de los problemas estructurales que han originado el conflicto. Y lo que nosotros vemos es que el gobierno no se compromete: no hay medidas claras contra el paramilitarismo, El "Plan Colombia" y la intervención gringa sigue su curso y el modelo económico neoliberal se continúa profundizando generando privatizaciones, despidos masivos, alzas en el costo de vida, en una palabra, más miseria para el pueblo colombiano", para concluir afirmando: "Por eso es que tampoco las FARC ha cesado sus acciones militares, eso requiere un compromiso de las dos partes". Con estas palabras pronunciadas en un tono enfático culminó nuestra entrevista esa tarde, con la promesa de que al día siguiente abordaríamos, aspectos específicos del proceso del Caguán.

Desafortunadamente por esos días el proceso de paz estaba en vilo, y pareció entrar en su fase terminal luego que los voceros de las dos partes se levantaran una vez más de la mesa sin llegar a ningún resultado previo. El 9 de enero del 2002, el presidente Pastrana anunció un plazo perentorio para que las FARC desalojaran la zona de despeje. El jefe guerrillero me llamó muy preocupado y me informó que en menos de 48 horas el sitio sería retomado por el ejército, por lo que ellos debían tomar posiciones estratégicas y que en esas condiciones era imposible garantizar mi seguridad. Tuve que salir con precipitud de la zona. Nuevamente, el fantasma de la guerra se cernía sobre el país y aunque el proceso logró sobrevivir unas semanas más hasta su rompimiento el 20 de febrero, para entonces ya estaba herido mortalmente.

Doce años después, aunque los escenarios y los protagonistas parecen haber cambiado, el conflicto armado colombiano sigue su curso con su estela de destrucción y muerte. Sin embargo, en los diálogos de La Habana (Cuba) se ha abierto una nueva luz de esperanza que promete la firma de un "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" entre los delegados del gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y que los colombianos y colombianas esperamos incorpore a otras organizaciones guerrilleras activas.

Pese a lo anterior, el relato oficial sólo posibilita hablar de "Raúl Reyes" como "bandolero", y "narcoterrorista" y enunciar a las FARC como una "organización narcoterrorista"; cualquier análisis en sentido contrario es estigmatizado y señalado de connivente con la guerrilla. Valga anotar que esta misma acusación fue esgrimida hace más de medio siglo contra prestigiosos investigadores como Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna cuando dieron

a la publicidad su estudio pionero sobre la violencia en Colombia el cual abrió novedosos caminos para la comprensión sociológica de este fenómeno[1].

En mi condición de investigador social y estudioso del fenómeno de la guerra, me resisto a hacer esas clasificaciones simplistas a las que nos quiere someter el pensamiento único y menos aun pretendo construir –de manera antagónica- un panteón de "héroes" dechados de virtudes. Al igual que el protagonista de la obra de Vargas Llosa, me inclinó por ver en estos guerrilleros a hombres y mujeres de carne y hueso plagados y plagadas de contrastes, debilidades y grandezas, en la perspectiva que nos señalara Marx en aquel célebre (pero hoy olvidado) pasaje del *18 Brumario de Luis Bonaparte (1852): "Los hombres hacen su propia historia, pero no en las condiciones que ellos escogen: lo hacen bajo las circunstancias directamente encontradas, dadas y transmitidas desde el pasado".*

Notas

1. Cfr. Enrique Santos Calderón. "El 'Cano' que yo conocí" en *El tiempo*, diciembre 18 de 2011; Horacio Serpa Uribe. "El cano que yo conocí". En *Vanguardia.com,* noviembre 8 de 2011; Tomás Betín. "Alfonso Cano era un bogotano pequeño burgués" en *El Heraldo*, noviembre 7 de 2011.
2. http://www.elabedul.net/Documentos/Lineamientos.pdf
3. Edward Said. *Representaciones del Intelectual*. Barcelona: Paidós, 1996, p. 84
4. El crimen contra investigadores sociales como Alfredo Correa de Andreis, Darío Betancur, y las recurrentes amenazas al sociólogo y periodista Alfredo Molano constituyen una prueba de ello. Mi reciente destitución del cargo de profesor asociado de la Universidad Nacional y mi inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 13 años, decidida de manera arbitraria por el actual procurador general de la nación Alejandro Ordoñez y avalada de espaldas a la comunidad universitaria, por el rector de la Universidad Nacional Ignacio Mantilla revelan, de igual modo, esta persecución contra la investigación crítica.
5. *Cfr*. Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. La Violencia en Colombia. 2 tomos. Bogotá: Punto de Lectura, 2014.

Diálogos

Acuerdos de la Uribe*

Con el fin de afianzar la paz nacional, que es el requisito indispensable para la prosperidad general del pueblo colombiano, y para lograr el desarrollo de la actividad social y económica sobre bases de libertad y de justicia, la Comisión de paz y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, acuerdan los siguientes puntos.

1. Las FARC-EP ordenarán el cese al fuego y demás operativos militares a todos sus frentes en el país, a partir del día 28 de mayo de 1984 a las 0:00 horas, fecha que podrá posponerse, como máximo, hasta por dos meses si fuere necesario. La orden de que antes se habla se mantendrá indefinidamente si el señor presidente de la República, doctor Belisario Betancur, corresponde a este gesto efectivo de paz con una orden semejante suya, dada a todas las autoridades civiles y militares bajo su jurisdicción, en la oportunidad debida.

* Acuerdo firmado en el municipio de Mesetas, departamento del Meta el 28 de marzo de 1984.

2. Las FARC-EP condenarán y desautorizarán nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas.

3. La orden del señor presidente de la República se cumplirá únicamente respecto de los grupos y personas que acaten y respeten estas bases y no infrinjan la ley penal.

4. Una Comisión nacional amplia y representativa de las fuerzas implicadas en los enfrentamientos, designada por el señor presidente de la República, será encargada de la verificación de todas las disposiciones contenidas en este Acuerdo, con la finalidad de consolidar el proceso de pacificación. La Comisión creará subcomisiones en Florencia (Caquetá), Vistahermosa (Meta), Barrancabermeja (Santander), Saravena (Arauca), Santa Marta (Magdalena), Medellín (Antioquia), Neiva (Huila), Orito (Putumayo), y Cali (Valle), y podrá asesorarse de personas extrañas a ella para estudiar, con su concurso, en las regiones o sitios en que fueren conducentes sus servicios, las quejas o reclamos por hechos que pudieren interferir al anhelo nacional de paz y seguridad. La Comisión funcionará por todo el tiempo que fuere necesario y podrá acordar sus propios reglamentos.

5. La Comisión nacional de verificación funcionará en Bogotá, y se trasladará periódicamente para sesionar, con plenas garantías de acceso y libre tránsito, a una de las siguientes localidades, a elección del señor presidente de la República: a) San Juan de Arama, Granada, Vistahermosa, (Meta); b) San Vicente del Caguán (Caquetá); c) Colombia (Huila); d) Dolores y Prado (Tolima), y e) La Uribe (Meta).

6. El gobierno dotará a la Comisión de todos los elementos necesarios de comunicación para el mejor desempeño de sus funciones y expedirá a sus miembros las credenciales indispensables para garantizar su libre tránsito y seguridad.

7. Cuando a juicio de la Comisión nacional de verificación, hayan cesado los enfrentamientos armados, se abrirá un período de prueba o espera de un (1) año para que los integrantes de la agrupación hasta ahora denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), puedan organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión. El gobierno les otorgará, de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes. Durante este mismo período el gobierno tomará las medidas necesarias para restablecer en las zonas de violencia la normalidad civil.

8. Los integrantes de las FARC-EP podrán acogerse a los beneficios de la ley 35 de 1982 y decretos complementarios, cuando llenen las condiciones en ella y en ellos establecidos. En el Plan Nacional de Rehabilitación el gobierno dará prelación a los colombianos que han padecido, directa o indirectamente, los estragos de la violencia y estimulará la creación de los medios jurídicos necesarios para el restablecimiento de derechos injustamente conculcados como consecuencia de la alteración del orden público y la inseguridad social.

9. La Comisión de paz da fe de que el gobierno tiene una amplia voluntad de: a. Promover la modernización de las instituciones políticas, dirigida a enriquecer la vida democrática de la nación, e insistir ante las Cámaras en la pronta tramitación de los proyectos sobre reforma política, garantías a la oposición, elección popular de alcaldes, reforma electoral, acceso adecuado de las fuerzas políticas a los medios de información, control político de la actividad estatal, eficacia de la administración de justicia, impulso al proceso de mejoramiento de la administración pública y nuevas iniciativas encaminadas a fortalecer las funciones constitucionales del Estado y a procurar la constante elevación de la moral pública. b. Impulsar vigorosamente la aplicación de una política de reforma agraria en reconocimiento a que los problemas de la tierra están presentes en los actuales conflictos sociales, y las demás acciones de las agencias del Estado dirigidas a ampliar permanentemente los servicios al campesinado para mejorar la calidad de vida y la normal producción de alimentos y de materias primas para la industria, para lo cual dispone del instrumento jurídico contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece la dirección de la economía por el Estado. c. Robustecer y facilitar la organización comunal, de usuarios campesinos y de indígenas, las asociaciones cooperativas y sindicales, a favor de todos los trabajadores urbanos y rurales, así como sus organizaciones políticas. d. Hacer constantes esfuerzos por el incremento de la educación a todos sus niveles, así como de la salud, la vivienda y el empleo. e. Mantener su propósito indeclinable de que para la protección de los derechos que a favor de los ciudadanos consagran la Constitución y las leyes y para la conservación y restablecimiento del orden público, sólo existan las fuerzas institucionales del Estado, de cuyo profesionalismo y permanente mejoramiento depende la tranquilidad ciudadana. f. Promover, una vez restablecida la paz, y

tal como ocurrió en otras oportunidades, iniciativas para fortalecer las mejores condiciones de la fraternidad democrática, que requiere perdón y olvido, y del mejor estar en lo económico, político y social de todo el pueblo colombiano.

10. La Comisión de paz estima que los enunciados anteriores representan un notable mejoramiento de las condiciones objetivas para la acción política y electoral y reitera su invitación a los sectores comprometidos en acciones disturbadoras del orden público, a que se acojan a la normalidad y apliquen sus talentos y prestigio a la conquista de la opinión pública por procedimientos democráticos y pacíficos.

11. El presente Acuerdo será válido respecto de cualquiera otro grupo alzado en armas que exprese su decisión de acogerse a él, previa manifestación de tal voluntad hecha al gobierno por intermedio de la Comisión de paz. Para facilitar la adhesión a este Acuerdo de los grupos que deseen hacerlo, se realizará una reunión con todos ellos en el lugar y la fecha que las partes convengan.

12. Este Acuerdo, para su validez, requiere la ratificación del señor presidente de la República. Para constancia se firma el presente documento en La Uribe, municipio de Mesetas, departamento del Meta, a los 28 días del mes de marzo de 1984.

Por la Comisión de Paz:

John Agudelo Ríos, presidente - Rafael Rivas Posada - Samuel Hoyos Arango - César Gómez Estrada - Alberto Rojas Puyo - Margarita Vidal de Puyo.

Por el Estado Mayor de las FARC-EP:

Manuel Marulanda Vélez - Jacobo Arenas - Jaime Guaraca - Raúl Reyes - Alfonso Cano.

Los papeles de Tlaxcala*

Presentación

La información precisa sobre los diálogos que se desarrollaron en Tlaxcala, México, del Gobierno y la Coordinadora Guerrillera, ha sido escasa. Con el fin de satisfacer el deseo de conocimiento de este episodio, presentamos la serie de documentos que allí se produjeron. Hemos considerado conveniente hacerlos preceder por las actas finales de las rondas de Caracas, del 10 de noviembre de 1991.

Hay que tener presente que el Gobierno resolvió levantarse, por decisión unilateral, de la mesa de negociación con motivo del fallecimiento del doctor Argelino Durán Quintero. Después ya no fue posible reanudarlos porque las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre el temario, cuyo cambio exigía el Presidente Gaviria como condición previa para seguir dialogando.

Acta de las reuniones de 1991

El Gobierno de Colombia y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar manifiestan:

- Que en desarrollo de las conversaciones que adelantan, han aportado elementos positivos en la búsqueda de la solución al conflicto político armado, que deben resaltarse porque muestran la buena disposición de las

* Documentos de la ronda del diálogo entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Guerrillera *Simón Bolívar*, en Tlaxcala, México, 10 de marzo a 5 de mayo de 1992.

partes durante los varios meses de diálogo que es necesario consolidar, si quiere garantizar la continuidad del proceso.

- Que esos elementos se refieren a compromisos bilaterales surgidos de las mesas de negociaciones y a compromisos unilaterales asumidos por cada una de las partes en el propósito de allanar el camino que conduzca a una fórmula de paz negociada y a la creación de un ambiente de credibilidad y confianza por parte de la sociedad colombiana en torno al proceso.

- Que como resultado de la primera reunión en Caracas, acordaron un conjunto de diez temas que constituyen una agenda preliminar para situar el proceso en una perspectiva general, dentro de los cuales las partes han convenido en señalar como prioritario el tema del cese al fuego y a las hostilidades.

  Se acordaron, así mismo, mecanismos de verificación para este tema, consistentes en comisiones regionales no gubernamentales y un comité nacional de evaluación, seguimiento y asesoría al proceso.

- Se acordó la creación de una veeduría internacional para el proceso, que actuará a partir del momento que las partes definan. También se convino la presencia en la mesa de negociación de un testigo internacional, el doctor Emilio Figueredo Planchar y su equipo de colaboradores, cuya gestión destacamos como altamente positiva para el desarrollo de las conversaciones.

- La segunda ronda de las conversaciones del presente año se ha dedicado al tema del cese al fuego y las hostilidades. La síntesis de las deliberaciones al respecto se recogen en el cuadro comparativo que hace parte integral de la presente acta.

- Las partes valoramos positivamente la creación por el Gobierno de la Comisión Asesora de Orden Público, con presencia de las distintas fuerzas políticas del país, por sus importantes y oportunos aportes al proceso, considerando vital la continuidad de su gestión.

- Igualmente destacamos el interés del sector empresarial del país por aportar su concurso en el proceso en marcha y cuyos esfuerzos el Gobierno ha querido canalizar a través del confirmado Comité Nacional de Reinserción.

- A pesar de las diferencias que tienen las partes en relación con el proceso de integración de la Asamblea Nacional Constituyente y del resultado final de su trabajo, destacan:

  Que hubiese aportado instrumentos que en el futuro podrían resultar útiles para la búsqueda de la paz, tales como la favorabilidad política y los distritos especiales de paz.

- Por su parte, y de modo antónomo, el Gobierno Nacional ha ofrecido, dentro del marco de una fórmula de paz negociada, la presentación, ante el Congreso Nacional, del Protocolo Segundo de Ginebra para su aprobación

y posterior ratificación por el Estado colombiano.

- Resultan importantes para generar un mejor ambiente en torno a la negociación, las declaraciones de la Coordinadora en las que precisa que no hace parte de su orientación el atentado contra dirigentes políticos ni contra la población civil y que los rechaza como práctica. Así como también el anuncio hecho sobre su decisión de suspender los atentados contra la infraestructura eléctrica, lo mismo que a gasoductos y poliductos.

- Los elementos expuestos han contribuido a generar un ambiente favorable que es necesario mantener y mejorar para avanzar en la consecución de las metas de solución política que nos hemos impuesto.

- Las comisiones negociadoras han acordado un receso para adelantar las consultas necesarias y esperan que se preserve el ambiente que permita la reanudación de las conversaciones, las que habrán de reiniciarse a más tardar el primero de febrero de 1992 en Caracas, previa anuencia del gobierno venezolano.

  El Gobierno reitera las garantías ofrecidas para el desplazamiento de la comisión de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en las mismas condiciones que en ocasiones anteriores.

- Las partes renuevan su sentimiento de gratitud con el gobierno y el pueblo venezolano por la generosa hospitalidad ofrecida a sus delegaciones, lo cual se ha constituido en un valioso aporte a la paz en Colombia.

Por la delegación del Gobierno: Jesús Bejarano, Consejero Presidencial; Héctor Riveros, Viceministro de Gobierno; Carlos Eduardo Jaramillo, asesor; Humberto Vergara, asesor; Alvaro Hernández, asesor; Tomás Concha, asesor Consejería de Paz.

Caracas, noviembre 10 de 1991

Acta de compromisos

A continuación se recogen los elementos que las partes han considerado como constitutivos de un eventual diseño del cese al fuego y de las hostilidades. Entendiendo como cese del fuego una suspensión de la confrontación militar entre la guerrilla y la Fuerza Pública, con objeto de crear un clima de confianza que posibilite la continuidad del diálogo y la obtención de la paz como conclusión final del proceso.

Se presenta una divergencia en lo que para cada parte abarca el término de hostilidad. Para el Gobierno las hostilidades incluyen en primer lugar, aquellas derivadas del quehacer habitual de la guerrilla tales como: terrorismo, secuestros, boleteo, proselitismo armado, extorsión y amedrentamiento.

En segundo lugar, están aquellas derivadas de la confrontación militar tales como: requisas, retenes y control de suministros.

Para la Coordinadora, hostilidades significa: cesación de las repercusiones de la confrontación en la población civil que incluyen: terrorismo de Estado, bombardeo, ametrallamiento, retenes y salvoconductos, desalojos y saqueo, retenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, secuestros, torturas, boleteo, chantaje, violaciones, control de provisiones y suministros.

Se ha intentado presentar los elementos agrupados de tal forma que inicialmente se reúnen aquellos que resultan generales cualquiera sea la fórmula de cese del fuego y a las hostilidades.

Luego los referidos a los efectos de la confrontación sobre la población civil y finalmente lo que dicen relación con la discusión de una posible fórmula de localización de la fuerza armada de la guerrilla.

Elementos y posiciones:

Bilateralidad: Definida como una situación que no implique ventajas estratégicas ni militares para ninguna de las partes. Hay acuerdo. Existe consenso en el contenido general del concepto.

Verificación: Diseño del cese del fuego verificable. Quedaría por aplicar los términos del acuerdo suscrito el 25 de junio de 1991. Existe un acuerdo condicionado. El Gobierno está de acuerdo en que el cese del fuego debe ser verificable, pero es solamente la localización lo que permite esa verificación.

La Coordinadora está de acuerdo con que el cese al fuego debe ser verificable, pero para ella lo importante son los mecanismos de verificación y no cree que la localización sea necesaria para estos efectos.

Transitoriedad: Definida como el carácter temporal y secuencial de las diversas bases del proceso. Existe un acuerdo entre las partes.

Evaluación: Definido como mecanismo de seguimiento y calificación del proceso, divergencia. En cuanto a los elementos constitutivos así como en la integración y función de una comisión de evaluación.

El Gobierno opina que los negociadores no deben formar parte de esta sino que una vez presentado el informe, los negociadores decidirán eventuales acciones al respecto. La Coordinadora opina que sí es conveniente que la comisión de evaluación conforme la mesa de negociaciones, la veeduría internacional y la comisión de evaluación de seguimiento y asesoría del proceso y se tomen las decisiones en conjunto.

Veeduría internacional: Existe un acuerdo: Las partes coinciden en que estudiarán un mecanismo concreto para conformarla y ponerla en marcha una vez iniciado el cese del fuego con base en los acuerdos suscritos el 25 de junio de 1991.

Norma de comportamiento: Referidas a regla de juego en el manejo del cese del fuego y a las hostilidades. Acuerdo. Las partes están de acuerdo en que deben trabajar a fin de definir compromisos con el objeto de establecer normas de comportamiento que eviten situaciones de confrontación.

Paramilitarismo: Las partes consideran el tema como esencial y pertinente.

Posición de la Coordinadora:

- Presentación de un informe al país sobre las acciones adelantadas por el Estado contra el paramilitarismo. El Gobierno deberá dar a conocer el resultado de las investigaciones por las múltiples masacres y asesinatos políticos ocurridos en los últimos seis años.

- Pronunciamiento oficial del Gobierno en el sentido de que no es política estatal la promoción y actividad del paramilitarismo. Ratificación de la derogación de todas las leyes, decretos y resoluciones militares o administrativas que autoricen, ordenen o favorezcan la creación o constitución de grupos paramilitares.

- Acciones inmediatas del Estado contra el paramilitarismo como ordenar a todo el organismo del Estado, civiles, militares o de policía, iniciar en forma inmediata las acciones que conduzcan al desmonte y destrucción de todas las organizaciones de este tipo existentes y a la captura de sus integrantes para su juzgamiento.

- Explicación al país en torno al documento que sobre el tema presentará la Coordinadora.

- Creación de una comisión internacional de alto nivel y con las necesarias garantías y facultades para la investigación del paramilitarismo.

- Depurar la Fuerza Pública de miembros comprometidos con grupos paramilitares, autores materiales, intelectuales y financiadores de los mismos sin prejuicio de la acción penal a que su responsabilidad diera lugar.

- Creación de una reglamentación que impida que mercenarios extranjeros den instrucciones paramilitares a ciudadanos colombianos.

- Levantamiento del fuero militar porque ha sido y es el principal factor de impunidad en materia de crímenes políticos y de violación de los derechos humanos y porque bajo su amparo miles de miembros de las Fuerzas Armadas autores de asesinatos políticos, masacres, torturas y desapariciones han quedado sin castigo.

- Retorno de los desplazados a causa de la acción de los paramilitares a sus hogares y sitios de origen con todas las garantías y favorabilidad social.

- Revisión de la doctrina militar, sobre seguridad nacional.

Posición del Gobierno: Deja constancia que ya existe una política contra los paramilitares. En ese sentido y en fusión del presente proceso el Gobierno reitera su imposición de comprometerse a:

- Presentar un informe sobre acciones contra paramilitares.

- Investigar el informe que pudiera presentar la guerrilla.

- Convenir con la Coordinadora acciones específicas en zonas despejadas por la guerrilla.

- Los demás temas serían materia de tratamiento del punto tercero de la agenda.

Secuestros: Posición del Gobierno. La liberación de las personas secuestradas por la guerrilla debe ser inmediata y no tiene contraprestaciones por parte del Gobierno.

Posición de la Coordinadora. Dentro del contexto del presente proceso se compromete a encontrar soluciones a los casos de secuestro denunciados en el país, en lo que a su responsabilidad competa. Las partes convienen en la creación de una comisión para esclarecer casos sobre dudosa autoría de la guerrilla ante determinado secuestro. La creación de una comisión distinta a la de los secuestros para investigar los casos de desaparición forzada. Los otros temas se tratarían cuando se discuta el punto cuatro de la agenda.

Garantías a la población civil: No hay definición común aceptable a las partes.

Posición del Gobierno: Se refiere a las garantías específicas para la población que habita en áreas despejadas por la guerrillera, a fin de evitar retaliaciones, amenazas y amedrentamiento a dicha población. Definido así, el Gobierno estaría dispuesto a convenir un acuerdo a este texto.

Posición de la Coordinadora: El acuerdo que se haga debe posibilitar que cesen los efectos de la confrontación sobre la población civil en todo el territorio nacional.

Militares retenidos por la guerrilla: El Gobierno no acepta la calificación dada por la Coordinadora de Prisioneros de Guerra y lo único que puede esperar es que liberen a los militares secuestrados.

Posición de la Coordinadora: La Coordinadora considera que habría que discutir el tratamiento que da la Fuerza Pública a los guerrilleros capturados y acordar un código de conducta.

Localización: Ubicación transitoria de la guerrilla dentro de áreas razonables de extensión limitada aún por determinar. Desacuerdo. Divergencia de posiciones en cuanto al tamaño, número y oportunidad de localización.

El Gobierno está dispuesto a considerar un breve plazo a fin de lograr el tránsito de la guerrilla hacia las áreas de localización.

La Coordinadora parte de que la localización es producto de una fase del proceso y no una condición preliminar.

Fuerza Pública: Referida a la presencia de las distintas instituciones para el mantenimiento del orden público. Divergencias.

El Gobierno señala que en caso de un cese del fuego localizado, no se está discutiendo la presencia de la Fuerza Pública en esas áreas. Lo que debe discutirse son las condiciones de su permanencia.

La Coordinadora sostiene que:

- El Gobierno debe retirar las brigadas móviles, los grupos de contraguerrilla y destacamentos que participan en operativos militares ofensivos contra la guerrilla sin que sea necesario que se retiren de cuarteles y bases en donde habitualmente están instalados.

- Para cualquier tipo de cese del fuego el papel de la Fuerza Pública significaría el levantamiento de los dispositivos militares ofensivos.

- El cese del fuego, no significaría dejar sin Fuerza Pública a los municipios del país.

- En el caso de un cese del fuego localizado es imposible que las fuerzas confrontadas se ubiquen en un mismo espacio.

Franja neutral: Definido como espacio cuyos límites habría que determinar y que serviría de "colchón" para reducir roces entre las partes confrontadas.

Garantías jurídicas y de integridad personal para los voceros de la guerrilla.

El Gobierno las aplicaría dentro de un diseño de un cese del fuego localizado.

La Coordinadora lo aplicaría a cualquier, tipo de acuerdo sobre cese del fuego.

Realización de tres encuentros nacionales relativos a:

- Desarrollo económico del país y bienestar social.

- Violencia política, corrupción administrativa, derechos humanos e impunidad.

- Política y administración de los recursos naturales. Desacuerdo.

El Gobierno estaría de acuerdo en discutir este elemento siempre que ya se haya acordado una fórmula de cese del fuego.

La Coordinadora considera que la realización de estos tres encuentros deben formar parte de la fórmula de cese del fuego.

Se firma por la delegación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar: Alfonso Cano, Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Antonio García, Francisco Galán, Diego Ruiz.

Por la delegación del Gobierno: Jesús Bejarano, Héctor Riveros, Carlos Eduardo Jaramillo, Humberto Vergara, Tomás Concha, Alvaro Hernández.

En presencia de los miembros de la Comisión Asesora para el Orden Público, quienes rubrican el presente documento, Horacio Serpa Uribe, Otti Patiño, Gilberto Vieira, Saulo Arboleda, Juan Gabriel Uribe, Carlos Rodado y el testigo internacional Emilio Figueredo Planchar.

Caracas, noviembre 10 de 1991.

Construir una estrategia de paz

Discurso inaugural de los diálogos de Tlaxcala, pronunciado por Alfonso Cano, a nombre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

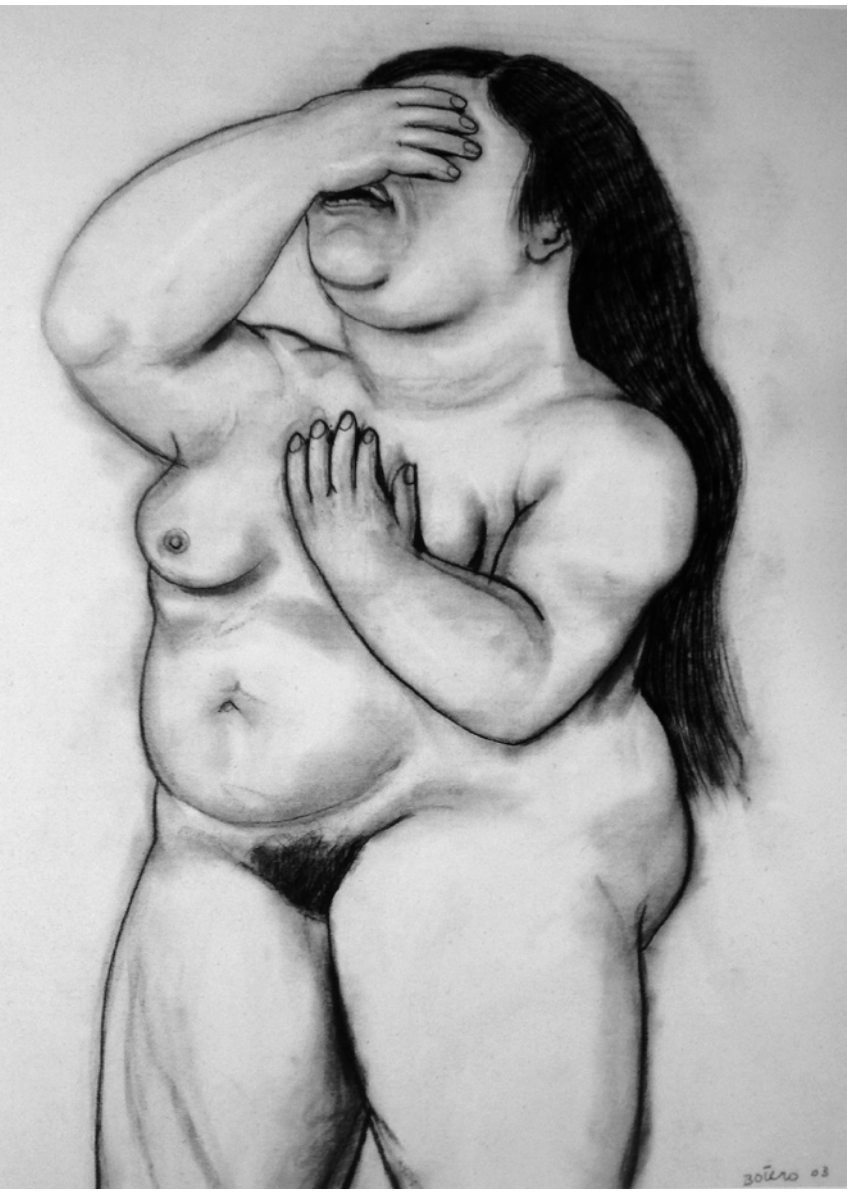
Una de la más grandes tragedias de los últimos 500 años de nuestra historia ha sido la imposibilidad para desarrollar soberanamente una política económica que nos proyectará con fuerza hacia el futuro, pues siempre hemos dependido de las directrices trazadas por los grandes centros del poder mundial que nos han impuesto los rumbos hacia donde debemos transitar.

La causa bolivariana se erigió contra esa indignidad y triunfó, pero su obra quedó trunca por ausencia de grandeza de quienes, desde entonces han regido los destinos del país.

Hoy Colombia está sometida a los designios del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial que han impuesto la concepción neoliberal bajo el rótulo de Apertura Económica e internacionalización que ha debilitado la capacidad económica del Estado, desvaneciendo su responsabilidad social, lanzando miles de trabajadores a la calle sin alternativa de empleo o planes de bienestar social, condenando a la ruina sectores importantes de la industria nacional y creando un ambiente incondicional para estimular la presencia del capital internacional en Colombia, que dado nuestro escaso desarrollo, amenaza con liquidar los esfuerzos nacionales por producir para el país.

La lisonja y las garantías para los poderosos de dentro y fuera del país y el desempleo, el hambre y el garrote para los productores y trabajadores nacionales. Pero contra esa política excluyente se está levantando Colombia: van a la huelga

los trabajadores del sector eléctrico, los portuarios, los bancarios, los empleados de la telefónica, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, protestan los caficultores, los empleados de Telecom, los integrantes de la Policía Nacional, los trabajadores del banano, la totalidad de los empleados al servicio del Estado, protestan empresarios, agricultores, ganaderos, algodoneros, todos en nombre de una sociedad agotada bajo el peso de la política económica del Fondo Monetario Internacional.



La Apertura Económica

Se agota la paciencia y el compás de espera que los colombianos le dieron al Presidente Gaviria, que además se ha empeñado en destruir la industria nacional al levantar las barreras aduaneras para poner a competir sin aviso, sin estímulos ni protección a nuestra industria con los productores de los grandes países desarrollados.

Esa apuesta del Presidente Gaviria al libre juego del mercado, no la posee ningún otro país pues todos han diseñado una política que les permita sostener en condiciones ventajosas las ramas fundamentales de su producción nacional.

No se escatiman esfuerzos para estimular al capital financiero, que sin producir bienes de ninguna naturaleza estrangula con sus altos intereses cualquier iniciativa por incentivar la producción nacional.

Y cuando una política de tal naturaleza golpea a la nación, esta se levanta erguida a protestar y a luchar por una modificación de esos rumbos que están agigantando el hambre y la miseria y oscureciendo el futuro de nuestra nación. Ese clamor nacional se acrecienta cuando la dinámica de la Apertura Económica relega con soberbia el bienestar de los trabajadores ya que según sus teóricos el desarrollo económico excluye una política en grande de bienestar social. Es el capitalismo salvaje que sólo permite sobrevivir a los más fuertes.

Las privatizaciones

De ahí la política de privatizar la educación, los seguros sociales, los servicios públicos, buscando hacer de las necesidades primarias de la población y de las responsabilidades supremas del Estado un gran negocio del cual sólo se beneficiarán los dueños del gran capital.

Todo este diseño elitista tiene como soporte una concepción autoritaria que responde con la militarización y la fuerza toda protesta social. Todas las huelgas importantes decretadas en los últimos

meses han sido sin excepción, declaradas ilegales, despidiéndose a sus dirigentes, destruyendo las organizaciones y congelando sus fondos. Para complementar esta concepción del Estado aprueban como norma permanente una legislación del Estado de Sitio denominada Estatuto Antiterrorista que penaliza toda protesta bajo la sindicación de terrorismo.

Ha ido cerrando el gobierno todas las posibilidades de acción legal de protesta y se precipita a que los inconformes acudan a las vías de hecho para poder manifestar o exponer sus reivindicaciones. Por ello el ánimo de nuestro pueblo se ha ido radicalizando: situaciones de las características del bloqueo de las avenidas por parte de los habitantes de Bogotá o el paro de Barrancabermeja, o la protesta beligerante en El Plato, en Guapi, en Puerto Colombia, o los paros de Segovia, Urabá, Puerto Wilches y en tantos otros lugares del país, son muestra evidente de un acrecentado accionar de los colombianos en su lucha contra el hambre y la indignidad.

Este cuadro se completa con la concepción de Seguridad Nacional que identifica toda protesta social con el comunismo y la subversión y le da tratamiento de guerra a la acción reivindicativa. Como la guerra es a muerte se procede a eliminar físicamente a quienes participan de esta actividad. Las Fuerzas Armadas actúan empapadas de esta concepción y complementan su actividad con la eliminación física de los militantes de la oposición política, que como en el caso de la Unión Patriótica, ha visto caer asesinados uno a uno, a más de 1.400 de sus activistas.

El paramilitarismo

Militares y paramilitares descaradamente apoyados por las brigadas y los batallones del Ejército Nacional, actúan a la luz del día. Además de los mártires de la Unión Patriótica, otros centenares de luchadores de la oposición y dirigentes populares, han caído asesinados y más de 4.000 han desaparecido, las torturas están desde hace muchos años al orden del día.

Al amparo de la lucha contra la insurgencia, miles de colombianos son muertos o violentados en su integridad física y moral. El incremento del presupuesto y los efectivos del Ejército y la Policía Nacional en este último año, ha multiplicado este permanente agredir de la Fuerza Pública a los colombianos.

Tras esta situación se esconde la impunidad que facilita a los ejecutores y pensadores de la Guerra Sucia proseguir su tránsito de muerte sin el temor del castigo social. Ejemplo para ilustrar la situación el del Teniente Coronel Luis Felipe Becerra, conminado a prisión por un juez de la República dada su vinculación comprobada en la masacre de 20 labriegos en Currulao el 3 de marzo de 1988 y de 22 personas más en Nueva Colonia (Turbo) el 11 de abril del mismo año, y quien es hoy, flamante jefe de prensa del Ejército Nacional.

Es tan solo un caso ilustrativo que puede procesarse conjuntamente con los denunciados por la Procuraduría General de la Nación o por los conocidos públicamente como el de la matanza de 20 indígenas en Caloto por parte de integrantes de la Fuerza Pública con el solo propósito de

impedirles el usufructo de sus legítimas tierras, o la masacre de Segovia el 11 de noviembre de 1988, donde fueron asesinados 53 habitantes y heridos 55, bajo responsabilidad de dos oficiales de alto rango del Ejército, quienes han sido conminados por el Procurador General, para tener la conclusión, que una conducta sistemáticamente repetida y recurrente, manifestada en diversas partes del país y en diferentes momentos va configurando una actitud que pone en evidencia orientaciones institucionales que son, sin duda, el principal factor de violencia que existe en nuestro país.

Deshonroso privilegio

A los elementos mencionados anteriormente agreguémosle el deshonroso privilegio de Colombia de contarse entre los países del mundo con mayores índices de corrupción administrativa. El robo sistemático y la apropiación permanente de dineros y bienes del Estado por parte de amplios sectores de la administración pública, es parte de las costumbres políticas en Colombia, tema y situación que fue denunciado ante el Parlamento por el propio Contralor General de la Nación.

Así que muchos de los nombramientos en cargos públicos, de asignación de contratos y de inversiones oficiales están sometidos al sistema de coimas y mordidas, razones que explican por qué muchos municipios de Colombia no tienen servicios de agua potable, ni luz eléctrica, ni servicio telefónico, ni alcantarillado, ni hospitales, ni escuelas, ni carreteras pues buena parte de los recursos de la Nación van a engordar las cuentas bancarias de los administradores de turno.

Cuando señalamos que la lucha armada revolucionaria es tan solo consecuencia de realidades objetivas que se ubican muy en la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, político, económico y social nos estamos refiriendo a lo señalado anteriormente. El objetivo supremo de una negociación como la que abocamos es hacer inocuo el uso de las armas para resolver la controversia política, económica y social que nadie se sienta obligado a recurrir a ellas porque la realidad va evidenciándole que el Estado tiene ante todo una estrategia para garantizar la vida, el bienestar, los derechos humanos, la democracia y la soberanía nacional.

Un acto de guerra

Hoy esas condiciones no se dan: la Apertura Económica es sencillamente un acto de guerra contra la mayorías nacionales, se tiene una estrategia gubernamental contra la violencia que sólo genera mayores niveles de confrontación, la corrupción administrativa es una bofetada recurrente contra quienes confían en la honestidad de quienes le reclaman su voto en las urnas, millones de campesinos continúan su brega por la tierra y por mejorar sus condiciones de producción, de comunicación, mercadeo, y financiación por un Estado que sólo se manifiesta a través de la violencia, nuestros recursos naturales no son defendidos con empeño y criterio patriótico, el pago de los servicios de la Deuda Externa, recae a través de las tarifas de los servicios públicos en los sectores de menores ingresos de la población convirtiendo a Colombia en un país exportador de capital, cuando nos estamos consumiendo en la necesidad.

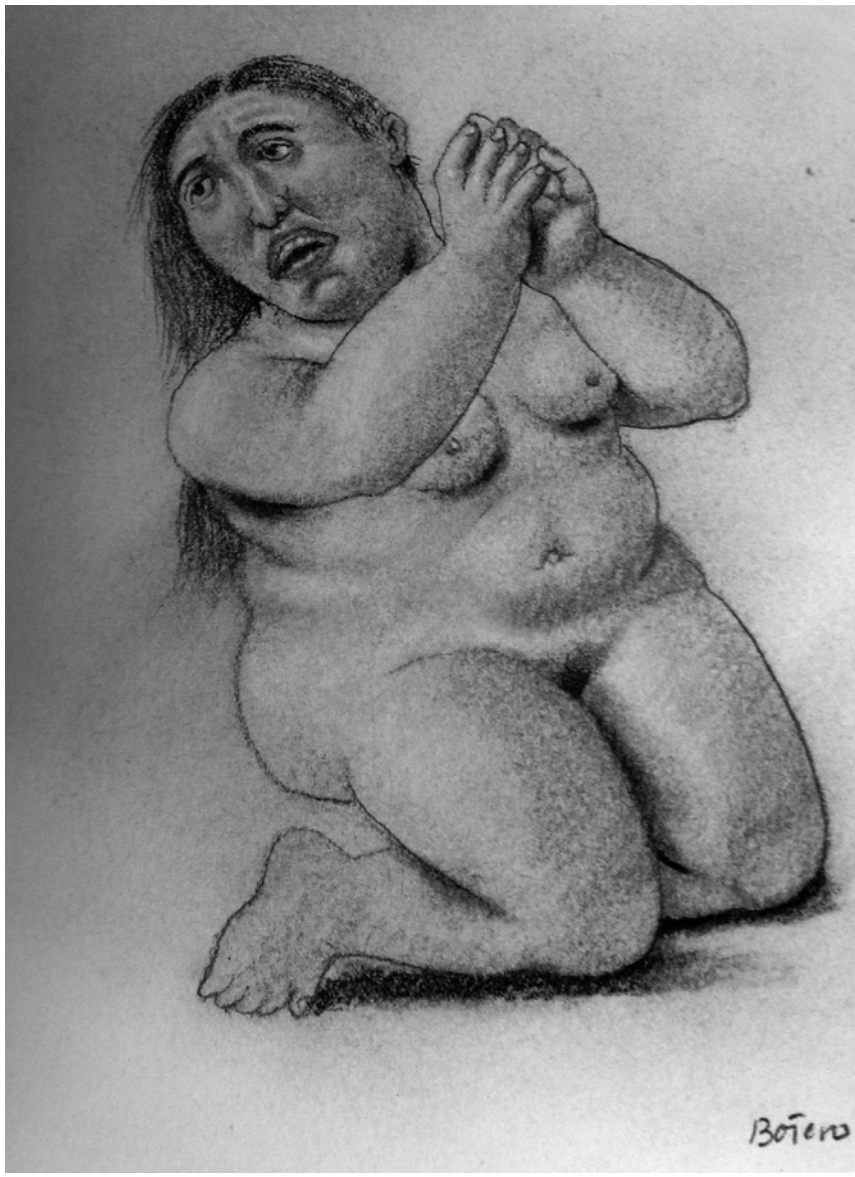
Una oportunidad de diálogo como la actual debe tener referencia permanente de todo lo señalado, para que todos y cada uno de nosotros pueda entender la complejidad del problema y la transparencia que debe existir desde el comienzo por quienes estamos representando al Gobierno y a la Coordinadora en esta oportunidad, y considerar también, los elementos de coyuntura que le dan marco a esta negociación.

Entender por ejemplo que a pesar de las conversaciones no hay compromisos hasta hoy, de ninguna de las partes, que inhiban su accionar. Cualquier acuerdo por mínimo que él sea debe comprometer bilateralmente de tal manera que nadie pretenda sacar ventajas de la negociación.

Diálogos regionales

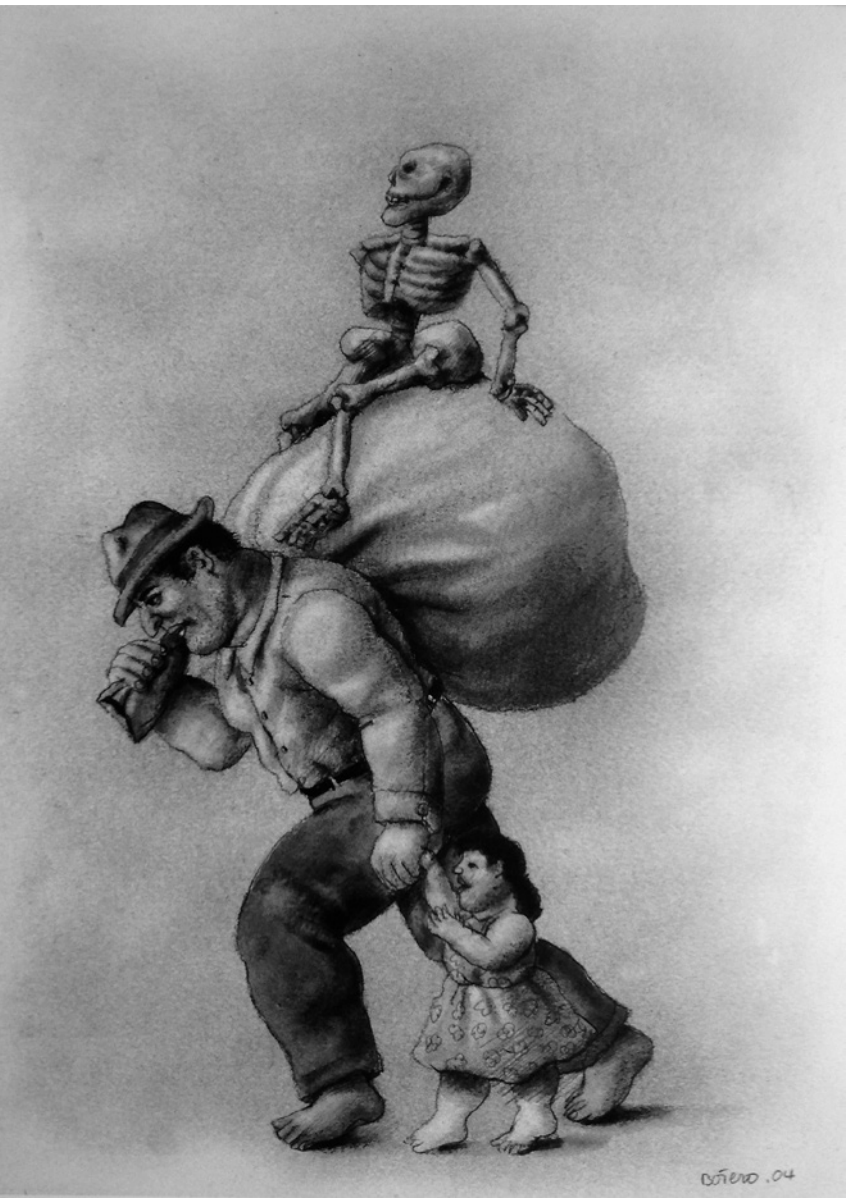
Los colombianos debemos disponernos a participar en este proceso en donde hacen falta protagonistas de primer orden a los que es necesario vincular. Los diálogos regionales jugarán un papel de primer orden en el desarrollo del proceso, pues posibilitarán que las regiones expongan con suficiencia los problemas que aquejan todos los rincones de nuestro país. Vincular al Parlamento, la Rama Jurisdiccional, los partidos políticos, los movimientos políticos y los cívicos, los gremios de la producción, las organizaciones populares, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los estudiantes, los intelectuales, los periodistas, los indígenas. Colombia necesita de esa conversación y de una concertación.

También precisamos de gran objetividad en el señalamiento que hagamos de la



realidad del país. Decirle por ejemplo al doctor Gaviria que está mal informado porque la guerrilla no tiene ningún tipo de vínculo con los cultivos o con el procesamiento y comercialización de la amapola.

Este problema generado por razones de índole social, por las injusticias existentes, de lo cual es responsable fundamental el Estado colombiano y la sociedad que demanda su consumo, no puede ser utilizado para tratar de opacar el adversario cuando



los argumentos políticos se agotan y la impotencia se acentúa, pues poco o nada se le está aportando a un proceso como el actual, que necesita de mucha objetividad.

Daniel García

Consideramos vital para el desarrollo de una negociación como esta, que el Gobierno emita una opinión oficial de sus investigaciones en torno al paradero de Daniel García, enlace entre la CGSB y sectores muy importantes de la producción y con los mismos altos mandos de las Fuerzas Militares que conocían perfectamente el papel de Daniel en esta coyuntura. No puede este caso augurarle nada bueno a una negociación que apenas, empezando, tiene desaparecida a una persona dedicada a estimular este proceso en Bogotá. Valdría la pena explicar si son oficiales las versiones aparecidas en algunos medios de comunicación que citan como fuente a los mecanismos de inteligencia del Estado. Pero de cualquier manera exigimos la aparición con vida de Daniel García y de todos los desaparecidos.

Esta etapa de la negociación la abordamos con optimismo que nos nace no sólo de la disposición integral de nuestras organizaciones para avanzar sino también la presencia del nuevo Consejero de Paz de quien todo el país está a la expectativa. Entendemos que el Gobierno ha superado la etapa que pretendía imponer un modelo de negociación diseñado para grupos cansados de la situación tan dura que exige la guerra y que funcionó para otras organizaciones, lo que facilitará formas de aproximación a los temas que posibiliten desempantanar la conversación.

Entendemos que Colombia aún transita por los senderos del viejo país, que la construcción de la nueva patria que todos añoramos es reto a superar. Todo nos indica que las expectativas de los colombianos en las repercusiones de la Asamblea Nacional Constituyente no han sido colmadas, que el slogan de la democracia participativa no ha encontrado los canales que permitan su concreción. Cuatro elecciones que apenas si arañan la cuarta

parte del potencial electoral cuestionan la legitimidad de un régimen que no ha logrado integrar a las mayorías nacionales, deben llamar a una profunda reflexión que genere políticas convocantes.

Los doce puntos

El Gobierno ha de entender que a los tiempos que corren han roto muchos esquemas entre otros la arrogancia excluyente en el ejercicio del poder. Al orden del día están la concertación, lo colectivo, lo multipartidario, lo integrativo. Por eso al exponer sus doce propuestas para construir una estrategia de paz la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar aspira a una discusión nacional en donde aporta los siguientes criterios:

1. Sustitución de la apertura económica por una política que estimule toda la industria nacional y la producción agropecuaria, facilitando créditos, construcción de infraestructura, importación de moderna tecnología y mercado para los productos. En donde desarrollo y progreso económico signifiquen bienestar social y respeto por los derechos de trabajadores y empleados, que abra nuevas fuentes de empleo y estimule formas de producción asociativas y la microempresa.

Nuestra incorporación al mercado internacional no puede ser la imposición de las políticas de choque del FMI ni de la banca mundial, sino consecuencia de una reflexión nacional que proteja las ramas vitales de la producción del país. Es imperioso renegociar la deuda externa para impedir la exportación de capitales que requerimos para nuestro desarrollo.

2.Los recursos naturales de Colombia deben ser explotados, administrados y comercializados con criterio patriótico, haciendo valer nuestra condición de propietarios. Los beneficios de la producción mineral del petróleo, carbón, oro, esmeraldas, platino, níquel, cobre, etc., deben revertir prioritariamente en el desarrollo de las regiones, como fruto de un plan nacional concertado.

Hay que revisar para modificar, los contratos de asociación existentes con las compañías multinacionales para la explotación de nuestros recursos y garantizar que las concesiones que van cumpliendo sus términos reviertan inmediatamente al Estado colombiano y no a manos de ningún particular. Debemos construir nuevas refinerías y desarrollar la petroquímica para así lograr nuestro autoabastecimiento.

La Comisión Nacional de Energía debe ser planificadora de la política energética del país.

3. Fortalecer la función social del Estado garantizando su eficacia administrativa protegiéndolo de la politiquería y desarrollando su capacidad productiva a través de empresas de alta eficiencia y competitividad.

El Estado debe garantizar en salud, educación, vivienda, transporte, cultura, recreación, equilibrio ecológico y servicios públicos, el bienestar de todos los colombianos.

4. La corrupción administrativa es uno de los principales factores de la violencia en nuestro país. Hay que fortalecer mecanis-

mos de fiscalización popular: aumentar las penas de sanción a los corruptos, llevar a juicio a los servidores públicos comprometidos en enriquecimiento ilícito y regresar los dineros y bienes malhabidos al Estado.

5. El Estado colombiano debe cambiar su política militar de guerra total y de enemigo interno. La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional y de Guerra de Baja Intensidad cuando se ha terminado el conflicto Este-Oeste y la Guerra Fría, continúa sembrando de odios y tragedias a nuestra patria.

Debemos desmilitarizar la vida nacional: reconstruir la Fuerza Pública con una doctrina democrática, nacionalista y patriótica que represente las diferentes corrientes del pensamiento, reducir sus gastos y número de efectivos, desintegrar sus servicios de inteligencia, regresar la Policía Nacional al régimen y control del Ministerio de Gobierno y cancelar la participación de Colombia en los pactos militares internacionales.

6. Se deben desmontar los grupos paramilitares y de autodefensa. Castigar a sus inspiradores, instructores, financiadores y jefes, así como a los responsables de asesinatos y masacres. Depurar la Fuerza Pública de sus miembros comprometidos en la guerra sucia.

7. Restituir y hacer vigentes los Derechos Humanos en Colombia, garantizándole al ciudadano vida, dignidad, respeto y condiciones básicas para su realización como ser humano.

8. Terminar con la impunidad. Supone revisar integralmente el sistema de la rama judicial para dotarlo de todos los elementos posibles que hagan pronta, eficaz e imparcial nuestra justicia. Terminar con el Fuero Militar, alcahuetería suprema convertida en el principal factor de impunidad existente.

9. Colombia necesita una democracia sin trampas, sin Estatutos Antiterroristas que sólo golpean a la oposición y a los inconformes, sin privilegios para los poderosos medios de comunicación, sin militarización de las campañas electorales y con una Registraduría como una rama independiente del Poder Público.

Es urgente llenar de libertad el proceso electoral, instrumentar más y mejor la democracia directa del referéndum, del plebiscito, de la revocatoria del mandato, defender el pleno Derecho de Tutela y acrecentar el papel de órganos elegidos popular y directamente. Pero por sobre todo garantizar la vida de ciudadanos y organizaciones que quieren hacer oposición.

10. Hay que redistribuir la tierra allí donde impere el latifundio. Construir la infraestructura vial y dotar del transporte necesario los campos del país, fijar créditos baratos para la agricultura y la ganadería, seguros de cosecha, facilitar insumos y tecnología moderna a todos quienes generan riqueza en nuestros campos y garantizar la venta de sus productos.

11. Fortalecer la unidad nacional. La arrogancia centralista de los gobiernos y la ausencia de una concertación sobre planes sociales y de desarrollo, han relegado a las distintas regiones del país

a los indígenas y minorías étnicas, al marginamiento, sumidos en la injusticia, integrar armónicamente a Colombia, es prioridad de carácter estratégico para cimentar la paz.

12. Indemnizar a los afectados para la violencia. Debemos elaborar y desarrollar un plan serio que comprometa al Estado, a la empresa privada y a la comunidad internacional para que sin paternalismos, vayamos restañando las profundas heridas que ha dejado la confrontación.

Palabras finales

Queremos agradecer desde esta excepcional tribuna al gobierno y al pueblo venezolano la hospitalidad que nos brindaron en momentos cruciales del año anterior para iniciar la negociación por la paz. Aspiramos y así lo deseamos que soberanamente Venezuela encuentre su mejor camino.

Al Presidente Carlos Salinas de Gortari, al gobierno y al pueblo mexicano, nuestro reconocimiento por su generosa gestión, que nos permite continuar los esfuerzos por hallar el horizonte de paz que tanto añora nuestra nación y nuestro continente. La paz de unos nos irradia a todos. Pueden estar seguros que la jornada que iniciamos contendrá toda la voluntad política que se requiere de nuestra parte para salir avantes.

En nombre de nuestros comandantes Manuel Marulanda Vélez, Manuel Pérez Martínez y Francisco Caraballo, de nuestro cuerpo de mando y de todos nuestros combatientes, muchas gracias.

Tlaxcala, México.
Marzo 10 de 1992
Comisión Negociadora
Coordinadora Guerrillera
"Simón Bolívar"

Comunicado

Las Comisiones negociadoras del Gobierno Colombiano y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, informan que:

Con el propósito de dinamizar los diálogos y avanzar en la búsqueda de la paz para Colombia han acordado discutir aspectos de la Agenda convenida que tienen que ver con problemas de la vida nacional en los órdenes económico, social y político. Para ello, invitarán conjuntamente a personas representativas de los diferentes sectores de la Nación así como a funcionarios estatales y especialistas en cada uno de los puntos sin perjuicio de las iniciativas que para el análisis de los mismos se desarrollan en el país por parte de organizaciones cívicas, políticas, sociales y culturales.

Coinciden en la importancia que para el país tiene el tema del cese al fuego y a las hostilidades. Por lo tanto desarrollarán esfuerzos conjuntos para ir generando las condiciones que puedan conducir a un acuerdo en este aspecto. Con esta finalidad abordarán este asunto a través de los diversos elementos que lo componen.

Para iniciar el debate hemos convenido realizar sesiones de trabajo en torno a los siguientes asuntos: Apertura económica y efectos sociales, corrupción administrativa, derechos humanos, paramilitarismo, efectos de la confrontación en la población civil, secuestros, desapariciones forzadas, retenciones arbitrarias, entre otros, y Estado, democracia, nueva Constitución y sistema político.

Las Comisiones Negociadoras:

Por el Gobierno Nacional
Horacio Serpa Uribe
Héctor Riveros Serrato

Por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
Alfonso Cano
Iván Marquez

Tlaxcala, marzo 13 de 1992

Comunicado de prensa al pueblo colombiano

Se han confrontado en la Mesa de Tlaxcala, la visión gubernamental y la de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar sobre la actual realidad económica que vive el país. Se expresan en primer término los enfoques contrarios como reflejo de una realidad antagónica que vive la patria. El mundo del privilegio y la oligarquía prepara un nuevo saqueo al mundo del trabajo y la esperanza, la nueva guerra que se declara, matará por hambre a más colombianos, arrojará al desempleo inmediato a 300 mil colombianos.

Un proyecto de paz, requiere una política económica para la paz, que nosotros entendemos como más empleo, más salario, más posibilidades y oportunidades para los trabajadores, sectores populares, capas medias, miembros de las Fuerzas Armadas y mejoría general de la situación económica.

En desarrollo del punto de la agenda referida a la Apertura Económica el doctor Armando Montenegro, jefe de Planeación Nacional, expuso las ideas centrales del Gobierno Nacional sobre la actual política económica que ha considerado muy benéfica para el país. Sin embargo, esta política, inscrita dentro del modelo de economía neoliberal o internacionalización de la economía,

impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sólo pretende despojarnos de los casi nulos vestigios de soberanía, no está pensada con criterio propio patriótico, ni tiene en cuenta la necesaria reciprocidad que proteja las ramas vitales de la producción del país.

No compartimos este modelo basado en la sobre-explotación de la mano de obra nacional, despidos e inestabilidad laboral, detrimento de la industria, ruina del agro, recorte de la inversión social; mientras se aumentan los recursos para la guerra contra las mayorías nacionales, se incrementan los impuestos para destinarlos a la compra de armas, medios aéreos, explosivos e inteligencia. Más de 250 millones de dólares acaban de ser destinados para la maquinaria militar.

Los intereses del capital extranjero han primado en las definiciones gubernamentales. La política tributaria no puede seguir recayendo sobre los sectores de menores ingresos. Es necesario aprobar una legislación laboral donde prime el interés de defender nuestro patrimonio humano como motor de cualquier proyecto de desarrollo.

En aras de alcanzar una concertación que abra posibilidades de superación de los fenómenos de fondo que generan violencia en Colombia, la CGSB enarbola el derecho y el deber que tiene Colombia de buscar su propia vía hacia el futuro que todos queremos.

Llamamos a movilizarse y pronunciarse en torno al curso de las conversaciones,

y convocamos a organizar los encuentros con la nación, los diálogos regionales, eventos locales y sectoriales en que se analicen las problemáticas específicas y se levanten las propuestas en torno a los temas de la agenda.

Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar
Tlaxcala, México, marzo 19 de 1992.

Comunicado de la Coordinadora guerrillera Simón Bolivar

1.- La decisión de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar de impulsar el debate sobre los grandes problemas del país, nace de la profunda convicción de buscar la solución política a la tragedia nacional. El buen ambiente para el diálogo es necesario porque existe una aguda confrontación por resolver. En consecuencia se requiere construirlo y preservarlo entre todos.

2.- Aún no se ha pactado ningún acuerdo en torno a la confrontación armada entre el Gobierno y la Coordinadora Guerrillera, sobre el cual se puedan hacer reclamaciones. Existe sí, un acuerdo firmado por las partes en Tlaxcala en torno al temario y al orden en el que se debe abordar la discusión. Por consiguiente no se puede pretender el condicionamiento de los diálogos, a no ser que se quiere bloquear el proceso.

3.- Cuando apenas se inicia el análisis del primer tema acordado para esta ronda -Apertura Económica y sus Efectos Sociales- no se pueden colocar obstáculos que impidan su normal desarrollo.

4.- Según lo acordado, los temas referidos a secuestros, presos políticos, prisioneros de guerra y desapariciones forzadas, tendrán el espacio para su tratamiento en los próximos días. Señalamos que es nuestra preocupación el silencio guardado por el Gobierno sobre la suerte del compañero Daniel García, para quien exigimos su pronta aparición con vida.

5.- Preocupados como hemos estado por la situación del doctor Argelino Durán Quintero, lo cual le consta al Gobierno, las distancias con el país han sido un serio obstáculo para contribuir en las gestiones que se adelantan en Colombia en la búsqueda de una solución adecuada. Como reafirmación de esa voluntad y a ese propósito, proponemos el desplazamiento inmediato de uno de los representantes del EPL en la Comisión Negociadora de la CGSB al Departamento de Norte de Santander, con las debidas garantías de seguridad.

6.- Aprovechando que se encuentra en Tlaxcala un grupo de especialistas y voceros de movimientos sociales, y dada su importancia, debemos proseguir las discusiones sobre el tema de la Apertura Económica y sus Efectos Sociales.

Comisión Negociadora
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
Tlaxcala, México 21 de marzo de 1992.

Por una paz digna, cumplamos lo acordado

El Estado es el principal generador de violencia en Colombia. Su autoritarismo excluyente, su política económica y social que golpea a las mayorías de la nación, una desafiante corrupción en la administración de la cosa pública y por sobre todo su diseño de guerra sucia que institucionalizó y prohijó los denominados grupos paramilitares o escuadrones de la muerte, las torturas, las desapariciones forzadas, los asesinatos políticos y toda suerte de actividades arbitrarias contra la población nacidas en la concepción de Seguridad Nacional y de la práctica de la guerra interna, ubican en el Estado colombiano y en su régimen político el gran problema de la crisis que afecta a nuestra nación.

En el desarrollo de esta guerra sucia caen diariamente asesinados, por razones del conflicto político-social muchos luchadores populares; es parte de la cotidianidad el asesinato de dirigentes políticos de la oposición, líderes sindicales, activistas de los derechos humanos, periodistas, la aparición de cadáveres de personas torturadas, las masacres de indígenas y campesinos, la eliminación de indigentes; acciones criminales en la mayoría de las cuales, se comprueba la participación de

la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad del Estado.

En este contexto, el infortunado suceso de la muerte de Argelino Durán Quintero, ha sido interpuesto para explicar la decisión gubernamental de imponer un receso indefinido en las conversaciones de paz que se desarrollan en Tlaxcala.

La desaparición forzada del compañero Daniel García, enlace político de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, con los distintos sectores de la nación para los diálogos de paz, jamás se utilizó como elemento de presión para obligar replanteamientos en la mesa de negociaciones; persistimos sí, en la reclamación de que aparezca con vida. El caso reviste una gravedad similar a la que motivó el llamado a consulta de la comisión negociadora del Gobierno y se suma a las más de dos mil desapariciones forzadas, situación sobrecogedora que llena de vergüenza a Colombia.

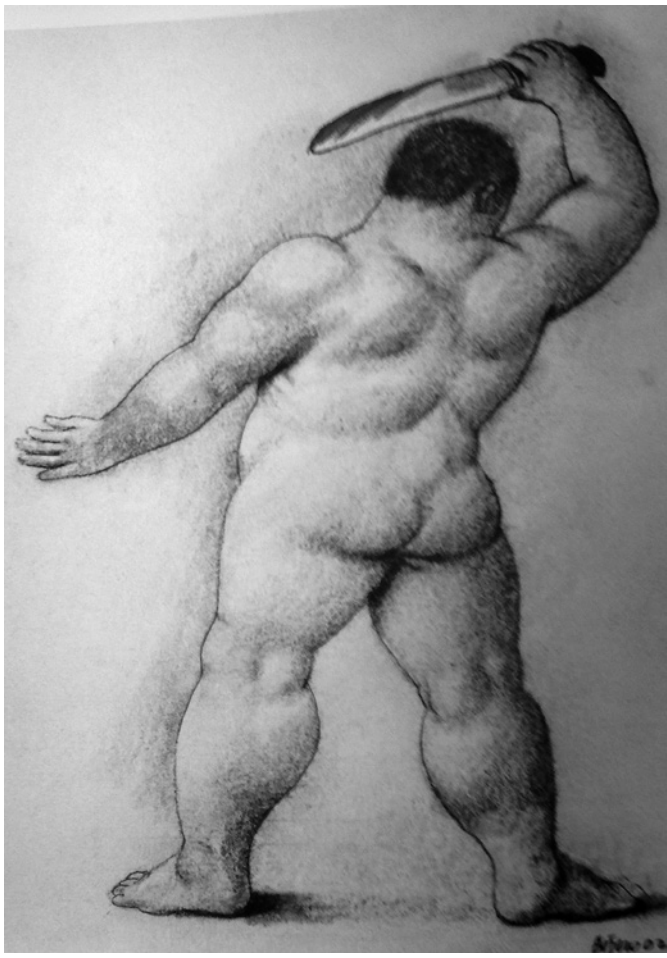
Mientras el Gobierno condiciona el diálogo y nos exige gestos unilaterales, continúa su carrera armamentista. Simultáneamente con las conversaciones se apertrecha con sofisticado equipo bélico, incrementa el pie de fuerza, mantiene el impuesto de guerra, refuerza la inteligencia y despliega intensos operativos militares por tierra y aire sobre áreas de asentamiento de las comandancias de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, como ocurre en La Uribe, San Vicente del Caguán, el Magdalena Medio, Arauca y Urabá, zonas en las que se libran desde hace varios meses intensos combates. En estas operaciones por razón de los bombardeos indiscriminados resulta afectada la población civil.

Largos años de lucha armada en Colombia nos han enseñado que mientras subsistan las causas que la originaron no será posible la erradicación de la insurgencia por vía militar.

El ataque a Casa Verde es un hecho aleccionador: el principal logro de la "Operación Centauro", en la que se emplearon a fondo tropas especiales y Fuerza Aérea, fue la reactivación del movimiento guerrillero y su ensanchamiento en todo el territorio nacional.

El lenguaje beligerante y provocador en boca de altos funcionarios o ministros no modifica la situación. La Coordinadora entiende que el Gobierno adelanta un esfuerzo sicológico dirigido hacia la población, buscando aislar a la guerrilla en momentos en que las mayorías nacionales ven en la Simón Bolívar una clara alternativa de poder y de cambio.

Seamos realistas. Estamos obligados a dialogar. Colombia no debe tener otra alternativa distinta a la de buscar colectivamente una solución pacífica a sus conflictos.



Es lo que indica el sentido común en un país al borde del estallido social motivado por los efectos de la Apertura Económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Si la Apertura fue concebida para ricos y grandes empresarios, y para que las transnacionales se apoderen del país, ¿por qué tiene el pueblo que pagar los costos a través del desempleo, de insoportables cargas tributarias y restricción del gasto social? Es el tema que el país quiere se discuta en la mesa de Tlaxcala.

El haber acordado en Caracas una Agenda de Negociación es producto de una disposición a abordar la discusión sobre todos y cada uno de los temas incluidos. En Tlaxcala, el 13 de marzo priorizamos cinco de ellos y nos comprometimos a su tratamiento ordenado. Debemos darle continuidad al pacto, sin pretender modificar las reglas del juego mutuamente aceptadas, ni mucho menos introducir elementos condicionantes.

Queremos hablar de derechos humanos para establecer quién los viola en Colombia. Queremos hablar del secuestro para analizar este fenómeno en toda su complejidad, queremos hablar del asesinato político, de las desapariciones forzadas, de la impunidad, de las Fuerzas Armadas y del Fuero Militar, de los recursos naturales y energéticos; del Estado, la democracia y la nueva institucionalidad, queremos de verdad aproximarnos al cese del fuego.

Estamos seguros que con el concurso de todos los sectores de la nación y de la comunidad latinoamericana se aportarán soluciones que nos permitan desbrozar el camino hacia la paz, con bienestar y justicia social.

Nos anima la más irreductible voluntad de paz y reiteramos nuestra decisión de buscar con dignidad este propósito superior por la vía política del diálogo y el acuerdo nacional.

Comisión Negociadora
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar

Tlaxcala, México, marzo 30 de 1992.

El gobierno tiene la palabra

La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar hace público reconocimiento a la importante gestión mediadora de la Iglesia Católica de Colombia realizada por intermedio del sacerdote Nel Beltrán, en procura de la continuidad de los diálogos de Tlaxcala, amenazados por la suspensión unilateral del Gobierno y por su negligencia para la reanudación.

Entendiendo que las urgencias del país reclaman la solución política y en tanto coincide con las aspiraciones de los colombianos, aceptamos la patriótica invitación del Mediador para reanudar las conversaciones. De igual manera reafirmamos nuestra voluntad y decisión por discutir en la Mesa de Diálogo cualquier propuesta y aportar al proceso de paz todo lo necesario para desbloquearlo y sacarlo avante.

La crítica situación del país exige decisiones prontas. En tal sentido, la Comisión Negociadora de la Simón Bolívar, espera en Tlaxcala la respuesta del Gobierno colombiano frente a la invitación de la Mediación para reanudar los diálogos.

Agradecemos al Presidente Carlos Salinas de Gortari, a su gobierno y al Testigo Internacional Embajador Sergio Romero, su hospitalidad y contribución a la causa de la paz en Colombia. Esperamos que la pronta reanudación de las conversaciones sea el mejor reconocimiento a la generosa solidaridad de todos los mexicanos.

Comisión Negociadora
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
Tlaxcala, México, abril 14 de 1992.

Moción

La Comisión Negociadora de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en Tlaxcala (México) presenta la siguiente *Moción de Procedimiento*

Considerando que:

1.- La Mesa de Diálogo se ha visto interferida en su normal funcionamiento, por decisiones unilaterales del Gobierno colombiano, sometiéndola a recesos que distancian los objetivos de la paz.

2.- Los acuerdos alcanzados, el 13 de marzo de 1992, en Tlaxcala firmados debidamente por los negociadores de las partes, avalados por el Testigo Internacional y difundidos a la opinión se pretenden desconocer y ser sometidos a una rediscusión.

3.- Un proceso como el que adelantamos debe estar caracterizado por la seriedad con que se aborde, el respeto de la palabra

empeñada, la firmeza y decisión en el cumplimiento de los acuerdos logrados como forma exclusiva de avanzar hacia los pactos finales.

4.- El 25 de junio de 1991 en Caracas, las comisiones negociadoras firmamos un Documento cuyo numeral 2 dice: "Que se convino la creación de una *Veeduría* de carácter internacional a conformarse de común acuerdo. Las partes convendrán el momento a partir del cual comenzará a operar esta *Veeduría.* Para el efecto, se adelantarán las consultas pertinentes con gobiernos, organizaciones internacionales, organismos no gubernamentales de carácter internacional y personalidades internacionales".

Proponemos:

Que la Mesa de Diálogo convenga inmediatamente los pasos pertinentes para que este proceso disponga de una Veeduría Internacional que garantice la seriedad frente a los compromisos adquiridos por las partes y la consecuencia en su cumplimiento.

Comisión Negociadora
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
Tlaxcala, México, abril 22 de 1992.

Que paren los asesinatos políticos en Colombia

La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, CGSB; expresa, su más enérgica protesta ante el Gobierno de Colombia, en la mesa de negociaciones por la ola de crímenes y asesinatos arreciada en los últimos días contra dirigentes sindicales y populares que no parecen sensibilizar al Gobierno.

Lo que está en marcha es la concreción de las medidas represivas contenidas en el reciente documento de la Escuela Superior de Guerra y el anticipo de las normas dictatoriales del proyecto de Ley Estatutaria de los Estados de Excepción.

A continuación presentamos una reseña, aún incompleta, de los hechos acontecidos en los últimos 20 días.

Valle del Cauca

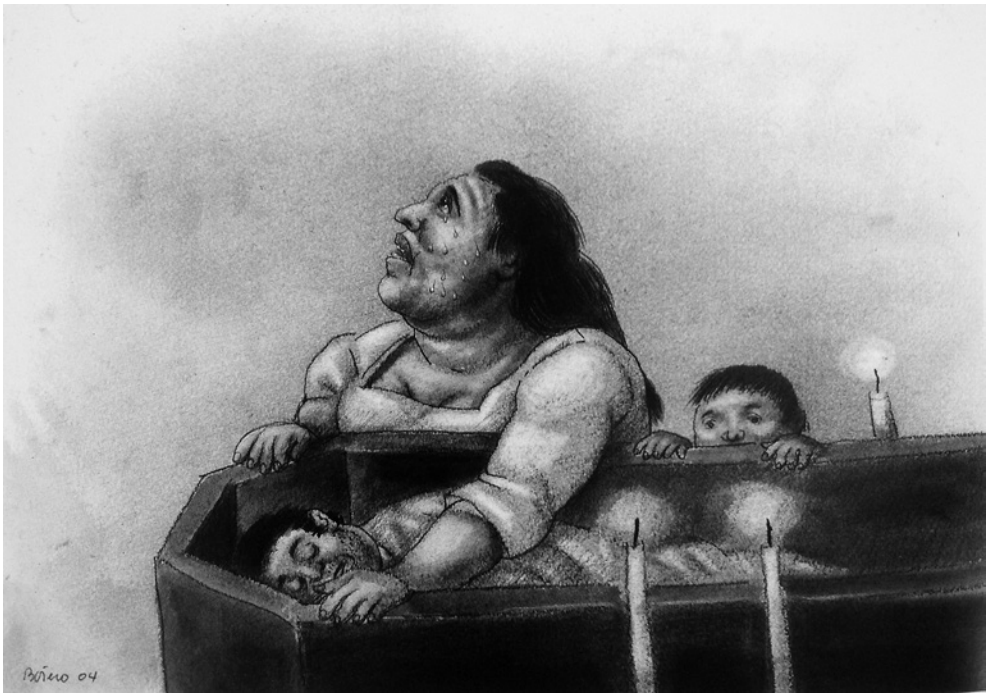
El día 3 de abril fueron detenidos dos dirigentes populares en el barrio Siloé de Cali, acusados de ser enlaces de las FARC. El mismo día fueron desaparecidos tres dirigentes populares, entre ellos John Haver Ardila, de 28 años de edad. Los tres aparecieron asesinados el día 6 de abril con graves señales de tortura.

El martes 14 de abril fueron desparecidos los dirigentes populares Carmen Helena Pereira, enfermera; Carlos Ramos Minolta y William Javier Almario, miembros de la dirección nacional de A Luchar; Juan Gustavo Giraldo, trabajador del centro educativo La Ceiba y asesor de la CUT-Valle y Leonardo Salazar Portilla. Sus cadáveres torturados, amordazados y con las cabezas envueltas en bolsas de polietileno, aparecieron en predios rurales de Cali y en Puente Hormiguero del río Cauca.

Magdalena

El martes 14 de abril fueron asesinados dos dirigentes del movimiento cívico en el municipio de Plato.

En el municipio de Apure, luego de ser detenidos y salvajemente torturados, fue-



ron asesinados 4 dirigentes agrarios, entre ellos Ulcides Poveda Suárez, dirigente de la CUT-Bolívar.

Córdoba

En San Andrés de Sotavento, corregimiento de Tuchín, fue ametrallado, en un kiosco del parque central, el expresidente de la Asociación de Usuarios del DRI, Manuel Atencio junto con su esposa embarazada y un hijo menor de edad.

Urabá

Durante la Semana Santa fueron asesinados 22 dirigentes y activistas de la región, entre los cuales se encuentran: Wilberto Reyes Rodríguez, en Currulao; Rino Abel Mosquera Borja, directivo de Sintrainagro, en Carepa; José de los Santos Martínez Varela en Turbo y Prisciliano Velásquez en Chigorodó.

Meta

En el municipio de Mesetas, el día 2 de abril fueron asesinados los dirigentes de la Unión Patriótica, Gabriel Alzate, Jacinto y Ana María Ortíz. El día 3 de abril fueron secuestrados y luego aparecieron asesinados los dirigentes del Partido Comunista, Eduardo Rodríguez Porras y Santiago Avila, en el perímetro de la base militar acantonada allí.

El sábado 4 de abril los paramilitares ametrallaron a Pedro Ramírez y a un ciudadano de apellido Pulgarín, en un retén que establecieron en la vía que conduce de Mesetas a Jardín de las Peñas.

Cesar

El Batallón La Popa amenazó y profirió orden de captura, ejecutada por la SIJIN, contra el diputado de la Unión Patriótica Alexis Hinestrosa, los concejales de Becerril Félix A. Ramírez, Edgar Murillo y Francis-

co Suárez; los profesores Víctor Quintero, Roberto Támare y Diosnel Santiago.

Santander

El día 14 de abril en Bucaramanga fue asesinado el dirigente cívico Luis Domingo Solano, quien fue ametrallado en la puerta de su casa en el barrio José Antonio Galán.

El día 18 de abril fue asesinado Diosenel Estrada Flórez en el municipio de Barrancabermeja.

No es justo que el Gobierno adopte las medidas más enérgicas, sólo cuando la violencia afecta a los privilegiados. Es inexplicable e inadmisible el silencio del Estado cuando el crimen, la desaparición forzada y las torturas toca a los humildes y a los luchadores por una patria justa y digna.

La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, exige del Gobierno poner fin de una vez por todas al asesinato político de dirigentes populares por parte de los organismos de seguridad del Estado y el cumplimiento de su deber constitucional que le obliga a garantizar el derecho a la vida, honra y bienestar de todos los colombianos.

Comisión Negociadora
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
Tlaxcala, México, abril 23 de 1992.

Comunicado

La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar manifiesta su rechazo y condena el asesinato ocurrido el 23 de abril, de

que fuera víctima EDGAR JIMENEZ CANO, hermano de ASDRUBAL JIMENEZ, negociador de la insurgencia en los diálogos que se adelantan en Tlaxcala, con el Gobierno colombiano.

El compañero Edgar Jiménez, cayó bajo las balas criminales de paramilitares que con la colaboración y bajo el amparo de la XI Brigada han cometido múltiples crímenes y espantosas masacres contra el pueblo de Urabá.

Hechos como este y los incontables asesinatos políticos que a diario se están cometiendo en Colombia, muestran la indecisión y poca voluntad del Gobierno y de sus Fuerzas Armadas para buscarle una salida política al conflicto social que vive Colombia.

La CGSB hace públicas manifestaciones de condolencia por la desaparición de Edgar Jiménez, a la familia Jiménez Cano que tan duramente ha sido golpeada por la violencia estatal y paramilitar.

Denunciamos ante la comunidad internacional y sus organizaciones humanitarias y de derechos humanos este nuevo crimen que enrarece aún más el ambiente para el logro de la paz en Colombia.

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
Comisión Negociadora
Tlaxcala, México, abril 24 de 1992.

Propuesta Por la continuidad de los diálogos

Considerando que la presencia activa de la comunidad internacional en la totalidad del proceso de negociación y el cumplimiento estricto de lo acordado le darán confianza a nuestro país y al mundo de la responsabilidad con que asumimos los compromisos adquiridos:

Proponemos:

"Que la Mesa de Diálogos convenga inmediatamente los pasos pertinentes para que este proceso disponga de una Veeduría Internacional que garantice la seriedad frente a los compromisos adquiridos por las partes y la consecuencia en su cumplimiento".

Proseguir la negociación según lo acordado el 13 de marzo por las partes: "Para iniciar el debate hemos convenido realizar sesiones de trabajo en torno a los siguientes asuntos: Apertura Económica y efectos sociales, corrupción administrativa, Derechos Humanos, Paramilitarismo, efectos de la confrontación en la población civil (secuestros, desapariciones forzadas, retenciones arbitrarias entre otros) y Estado, Democracia, nueva Constitución y Sistema Político".

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
Comisión Negociadora
Tlaxcala, México, abril 29 de 1992.

Declaración

En relación con la Ronda de Diálogos de Tlaxcala, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, expresa:

1. El empecinamiento del Gobierno Nacional por modificar los Acuerdos del 13 de marzo y condicionar la discusión, se erigieron como obstáculo fundamental para la continuación inmediata de la negociación. Mal precedente para un proceso que debe ir afianzando cada acuerdo logrado y forjar así, la confianza de la opinión. Nadie va a creer en un proceso colmado de incumplimientos y retractaciones. Ante todo, debemos rescatar el valor de la palabra empeñada.

2. Al reiniciar las conversaciones el 22 de abril, propusimos al Gobierno la implementación del mecanismo de *Veeduría Internacional* como garantía de continuidad, respeto y apego a los compromisos, propuesta que sigue vigente, pues este proceso reclama con urgencia una muy activa presencia de la comunidad internacional.

3. Los Acuerdos de Tlaxcala, el 13 de marzo, signados por las dos comisiones, avalados por el Testigo Internacional Embajador Sergio Romero y difundidos al país y al mundo en la misma fecha,

señalan, en orden para la discusión, los siguientes temas:

I. Apertura Económica y efectos sociales
II: Corrupción Administrativa
III. Derechos Humanos, Paramilitarismo, efectos de la confrontación en la población civil (secuestros, desapariciones forzadas, retenciones arbitrarias entre otros), y
IV. Estado, Democracia, nueva Constitución y Sistema Político.

Nuestro compromiso con este temario, es diáfana muestra de voluntad por abordar en la *Mesa* el tratamiento conjunto y sin esguinces de las dificultades que más agobian al país.

4. Es muy cierto que la negociación precisa un Medio-ambiente favorable. Y el Gobierno debe asumir su responsabilidad: Que liquide su concepción del *Enemigo Interno,* que se desmonten los grupos *paramilitares* y se detenga la *guerra sucia* que ha cobrado últimamente víctimas en Urabá, en el meta, en el Valle del Cauca, en otros lugares del país, y en Bogotá, recientemente en la persona del Ingeniero José María Caicedo Angulo en feroz acto retaliatorio con el patriótico movimiento de los trabajadores de TELECOM. Hay que parar el tratamiento violento al justo reclamo nacional contra la política económica y social del Gobierno y abandonar la desafiante actitud de incrementar el presupuesto para la guerra cuando Colombia entera exige paz, trabajo y bienestar. El Gobierno debe cumplir con la normatividad institucional y velar por la vigencia y aplicación de la Ley 5ª de 1960 que trata sobre la aplicación en Colombia de los Convenios de Derecho Internacional Humanitario.

5. Reiteramos nuestra preocupación sobre el paradero del compañero Daniel García, de quien nada se sabe aún. Esta tragedia de los desaparecidos que es la misma de miles de colombianos, requiere explicaciones y soluciones de parte del Gobierno Nacional. Así, entre todos, forjaremos el ambiente requerido para la negociación.

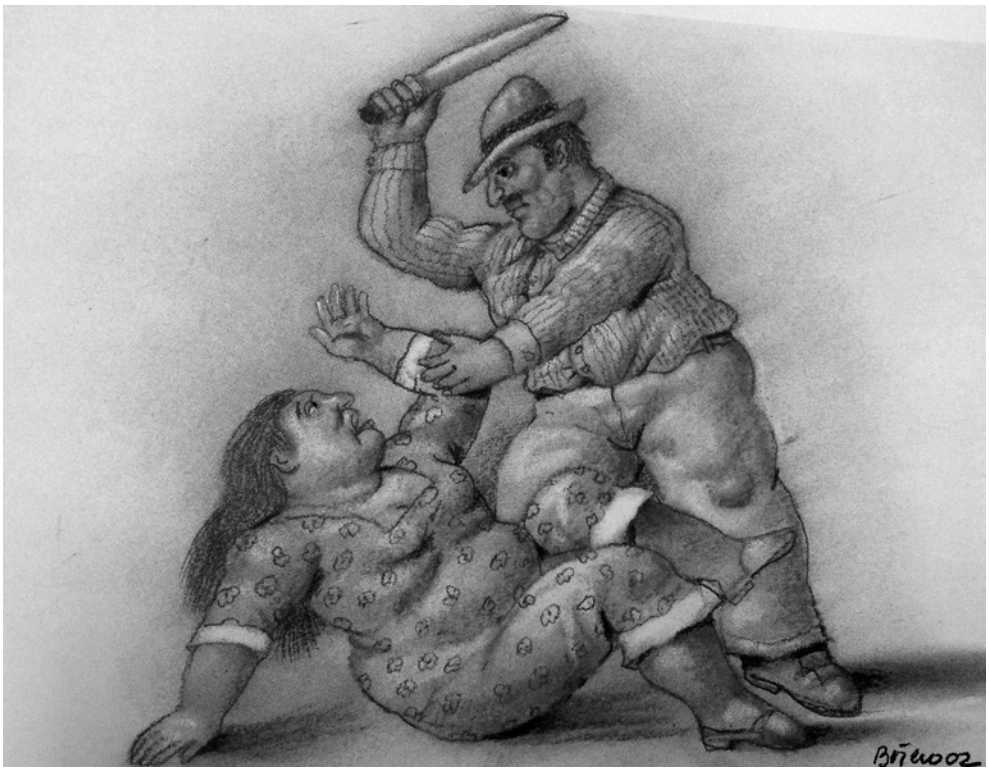
6. Al receso en los diálogos, hemos llegado como una necesidad. Se abre un momento de la historia nacional que nos compromete a todos los colombianos para una reflexión colectiva y en voz alta, que enriquezca la próxima jornada de negociación, en la que sin duda, hemos de ampliar la interlocución, con nuevos sectores de la sociedad.

7. Llamamos a todos los colombianos a incorporarse a través de los diálogos locales, municipales, regionales y departamentales por la paz, o a través de encuentros bilaterales, o con la movilización y la discusión a desarrollar este proceso que nos interesa y compete a todos por la solución política de la grave crisis que vive nuestra sociedad.

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
Comisión Negociadora
Tlaxcala, México, mayo 4 de 1992.

Comunicado

Las comisiones negociadoras del Gobierno colombiano y de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar han convenido un receso en las conversaciones que adelantan en Tlaxcala, México, y



manifiestan su propósito de reanudarlas a más tardar el 31 de octubre de 1992, en el mismo país, previa anuencia del Gobierno mexicano.

Con el propósito de establecer las condiciones para la reanudación de los diálogos y la continuidad del proceso, las comisiones mantendrán comunicaciones directas.

El Gobierno reitera las garantías para el desplazamiento de la Comisión de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en las mismas condiciones que en ocasiones anteriores.

El Gobierno colombiano y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar manifiestan su reconocimiento y gratitud al Gobierno y al pueblo mexicano por haber permitido que su país sirviera de escenario a esta ronda de conversaciones por la paz en Colombia, por haber brindado las facilidades de su desarrollo y por la cálida acogida de que fueron objeto durante su permanencia. Expresan igualmente su agradecimiento y especiales sentimientos de consideración y aprecio con el testigo internacional señor embajador Sergio Romero Cuevas y su equipo de colaboradores, por su paciencia y dedicación para contribuir al logro de la paz en Colombia.

Tlaxcala, México, 4 de mayo de 1992.

Comisión del Gobierno colombiano:

Horacio Serpa Uribe
Hector Riveros

Comisión de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar:

Alfanso Cano
Ivan Marquez

Antonio García
Diego Ruíz

Pablo Catatumbo
Tomas Lince

Andres Paris
Luis Carlos Guerrero

Asdrubal Jimenez

Testigo Internacional:

Sergio Romero Cuevas

Habla Alfonso Cano

"El diálogo no es solo para resolver el conflicto armado"

En declaraciones exclusivas para VOZ el Comandante Alfonso Cano de la Coordinadora Guerrillera "Simón Bolívar" explica las causas de la suspensión del diálogo en Tlaxcala, a la vez que reafirma la importancia que este tiene para una solución política del conflicto armado y social colombiano

-¿Acordado un receso tan prolongado en las negociaciones, se viene la guerra?

-¡Por supuesto que no! El país entero debe integrarse a este proceso por la solución política, levantando las banderas de la paz, de diálogo a todos los niveles, de soberanía nacional, de democracia y de bienestar. Los protagonistas de la historia nacional contemporánea somos todos los colombianos. No hay tiempo que perder para entre todos imprimirle los ritmos de futuro que clama el país.

-¿Por qué no continuaron la Mesa de Tlaxcala, buscando los acuerdos si tanto el Gobierno como la Coordinadora Guerrillera, hicieron manifestaciones de intención para proseguir la negociación?

-Porque el Gobierno quiso desconocer los acuerdos firmados. Condicionó la continuidad de la mesa a la modificación del orden que habíamos convenido. La determinación conjunta nos remitía al tema de la Apertura Económica y sus efectos sociales para comenzar el diálogo pero el Gobierno, luego de levantarse unilateralmente, manifestó que sólo seguiríamos la discusión si colocábamos

el secuestro y el cese al fuego en primer lugar. Por supuesto no podíamos avalar tal precedente, funesto para el futuro de la negociación.

-¿Y por qué ustedes no quieren discutir el tema del secuestro?

-Al contrario, estamos muy interesados en discutir al respecto en la mesa para aclararle al país y al mundo la realidad de una industria que existe en Colombia y cuyos usufructuarios pretenden abrogar integralmente a la guerrilla. Lo que argumentamos es la pertenencia del tema al punto acordado sobre Derechos Humanos y efectos de la confrontación en la población civil que está en tercer lugar para la discusión.

-¿Y el cese del fuego?

-Esta es reivindicación del pueblo colombiano y por tanto bandera muy importante de la Simón Bolívar. Es que el agresor es el Estado y su máquina de hacer la guerra, su enfoque de *enemigo interno* y sus grupos paramilitares. Pero sucedió en Caracas que el Gobierno pretendió rendirnos y someternos en el tratamiento del tema. Por eso no se avanzó mayormente. El tema es necesario de abordar, pero más adelantada la negociación y por sobre todo, con el cambio de la concepción gubernamental.

-Hay quienes afirman que los diálogos se están agotando como instrumento para alcanzar la paz…

-Nunca, mientras haya confrontación social, política y militar, los diálogos que pretenden acuerdos y concertación, perderán vigencia. Lo que se ha desactualizado es la concepción del Estado por imponer vías de sometimiento y rendición. Nadie tiene derecho a desfallecer en la búsqueda de acuerdos, porque cualquier otra opción está empapada de sangre y tragedia. Hay que perseverar para aislar la violencia de los portadores y ejecutores de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

-¿Por qué propusieron la Veeduría Internacional si no estaba dentro del temario acordado en Tlaxcala?

-como simple moción de procedimiento. Hay que vincular más activamente a la comunidad internacional, para que sirva de garante en un proceso que el Gobierno ha estado atropellando con sus retiros unilaterales, sus imposiciones y condicionamientos. Hay que perderle el miedo a la contribución que la comunidad internacional quiere plasmar, como ayuda a la paz del país.

-Es evidente que asistimos a un despertar del movimiento popular. ¿No es contradictoria la situación que se vislumbra con el receso acordado en la negociación?

-No, en absoluto. La Simón Bolívar ha propuesto 12 iniciativas en el marco de una Estrategia de Paz, que se confunde en su esencia, con el sentimiento nacional. Es el momento de generar una gran discusión sobre el país que añoramos y soñamos. Al orden del día se colocan los diálogos regionales, municipales, veredales. Los coloquios en fábricas, empresas y barrios. Conversaciones en colegios y universidades. Y en fin, todo tipo de eventos que puedan recoger el anhelo nacional. La

Simón tiene plena voluntad de meterlo al diálogo a todo nivel, para verter iniciativas a lo largo de todo el proceso.

-Pero de la mesa está ausente, buena parte de la sociedad colombiana…

-Es evidente. Es la gran falencia que tenemos que trabajar. Es imprescindible que Colombia entera tenga presencia activa en todo el proceso de paz. Sin ello, es imposible pensar en la meta de la reconciliación.

-¿Acaso la discusión no es para solucionar el conflicto armado?

-No exclusivamente. Ni siquiera fundamentalmente. La confrontación que existe es consecuencia de las desigualdades e injusticias que subyacen en el fondo de la crisis nacional. Paz equivale a soberanía nacional, a democracia y a justicia social. El enfoque equivocado de este fenómeno genera procesos de negociación como el de los actualmente insertos. No puede tratarse de la solución de situaciones de personas o de organizaciones. No se trata de darle garantías electorales ni curules a sus dirigentes. Se trata de lograr acuerdos que permitan iguales derechos y garantías a todos los colombianos. Sin excepción. Esta es la esencia de la negociación.

-Se comenta mucho de tendencias dentro de la Coordinadora Guerrillera. ¿Qué hay de cierto?

-Hombre, somos tres organizaciones diferentes. Cada una con su historia, sus peculiaridades y su propio acumulado. Lo importante es la profunda convicción de todos nosotros en construir la unidad momento a momento. En lo concreto. Interpretando un sentimiento popular en la certeza que Colombia merece algo diferente a lo existente. Se merece un futuro digno, soberano y en democracia.

-¿Qué puede esperar el país del período de receso?

-Excluyamos del diccionario popular la palabra esperar. Los nuevos tributos para la guerra, las privatizaciones, la violencia paramilitar, los bombardeos a la población civil, el tratamiento militar a las exigencias nacionales de trabajo, seguridad, vivienda, tierra, no dan espera. Hay que movilizarse por el diálogo, por la vida, por la dignidad, por la paz.

-¿Y cuándo regresan al país?

-Estamos analizando con detenimiento la situación. Existen antecedentes negativos en anteriores traslados. Las FF.MM. han actuado provocadoramente. Además el área de nuestro arribo es escenario de intensos enfrentamientos militares como es conocido. Y como al Ejército no le ha ido bien, pues todo lo que han hecho es incrementar el número de efectivos. Llevan 15 meses de operativos en La Uribe y ahí vamos…

Resolución de paz

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
RESOLUCIÓN NÚMERO 85 DEL 14 DE OCTUBRE DE 1998

"Por la cual se declara la iniciación de un proceso de paz, se reconoce el carácter político de una organización armada y se señala una zona de distensión".

El Gobierno Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las que le confiere la Ley 418 de 1997,

CONSIDERANDO:

1. Que la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc-Ep- ha expresado su propósito y voluntad de paz.

2. Que el Gobierno Nacional, atendiendo la voluntad expresada por los colombianos en las urnas el 26 de octubre de 1997 en el mandato por la Paz, la Vida y la Libertad, ha iniciado conversaciones con la mencionada organización insurgente, con el objeto de resolver pacíficamente el conflicto armado.

3. Que el Gobierno y los miembros representantes de las Farc acordaron iniciar el proceso dentro de los tres primeros meses de gobierno, el cual tendrá lugar en una zona de distensión comprendida por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Declarar abierto el proceso de diálogo con la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc-Ep.

ARTÍCULO 2º. Reconocer carácter político a la organización mencionada.

ARTÍCULO 3º. Con el fin exclusivo de llevar a cabo las conversaciones de paz con

representantes del Gobierno y voceros y representantes de las Farc, a partir del 7 de noviembre de 1998 y hasta el 7 de febrero de 1999, establécese una zona de distensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa, municipios del departamento del Meta y San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, zonas en las cuales regirán los efectos del inciso 5º del parágrafo 1º del artículo 8º de la ley 418 de 1997, en relación con las personas que intervengan legalmente en dichas conversaciones.

ARTÍCULO 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de octubre 1998.

Firman:

Andrés Pastrana Arango.

El Ministro del Interior,
Néstor Humberto Martínez Neira.

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Parmenio Cuéllar Bastidas.

El Ministro de Defensa,
Rodrigo Lloreda Caicedo.

Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia*

La Machaca, 6 de Mayo de 1999

1. Solución política Negociada. Se buscará una solución política al grave conflicto social y armado que conduzca hacia una nueva Colombia, por medio de las transformaciones políticas, económicas y sociales que permitan consensos para la construcción de un nuevo Estado fundamentado en la justicia social, conservando la unidad nacional. En la medida en que se avance en la negociación, se producirán hechos de paz.
   De ahí el compromiso que debemos asumir todos los colombianos con la construcción de la paz, sin distinción de partidos, intereses económicos, sociales o religiosos.
2. Protección de los derechos humanos como responsabilidad del Estado
   - 2.1 Derechos fundamentales.
   - 2.2 Derechos económicos.
   - 2.3 Tratados internacionales sobre derechos humanos.
3. Política Agraria Integral
   - 3.1 Democratización del crédito, asistencia técnica, mercadeo
   - 3.2 Redistribución de la tierra improductiva
   - 3.3 Recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico o enriquecimiento ilícito
   - 3.4 Estímulos a la producción
   - 3.5 Ordenamiento territorial integral
   - 3.6 Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo
4. Explotación y Conservación de los Recursos naturales
   - 4.1 Recursos naturales y su distribución
   - 4.2 Tratados Internacionales
   - 4.3 Protección del ambiente sobre la base del desarrollo sostenible

* Documento aprobado por los voceros del Gobierno Nacional y de las Farc-Ep, reunidos en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, el 9 de enero de 1999.

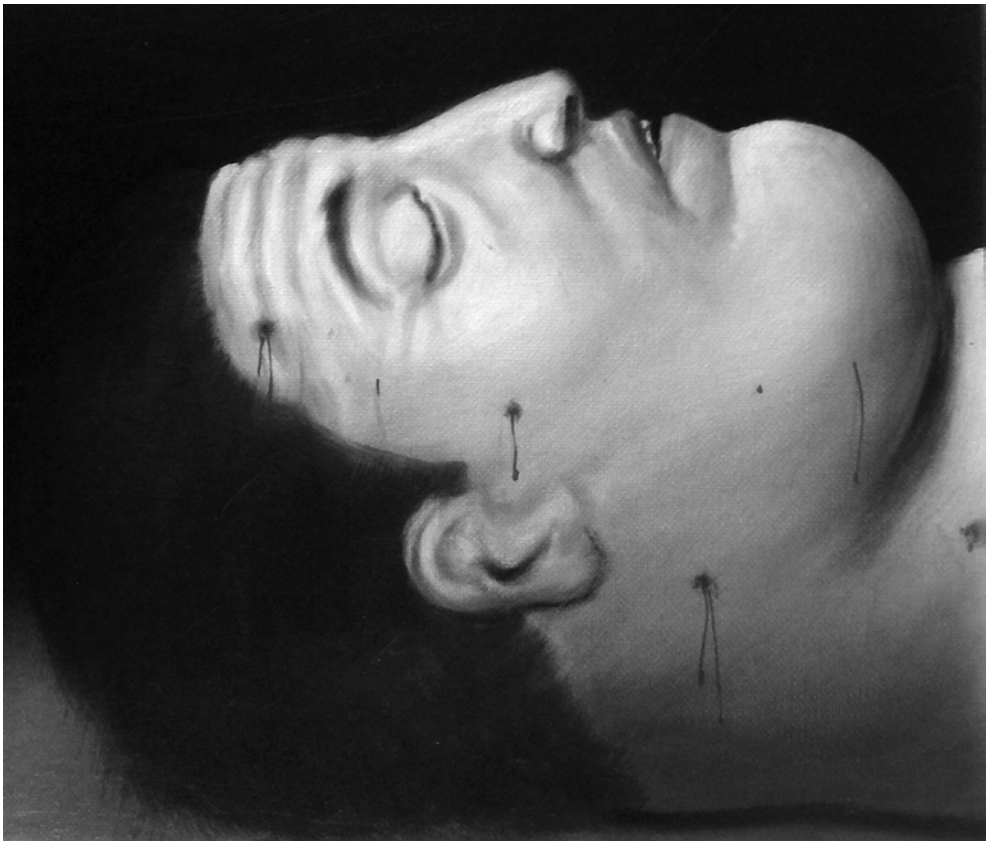
5. Estructura Económica y Social
5.1 Revisión del modelo de desarrollo económico
5.2 Políticas de redistribución del ingreso
5.3 Ampliación de mercados internos y externos
5.4 Estímulos a la producción a través de la pequeña , mediana y gran empresa privada
5.5 Apoyo a la economía solidaria y cooperativa
5.6 Estimula a la inversión extranjera que beneficie a la Nación
5.7 Participación social en la planeación
5.8 Inversiones en bienestar social, educación e investigación científica
6. Reformas a la justicia, lucha contra la Corrupción y el Narcotráfico
6.1 Sistema judicial
6.2 Órganos de control
6.3 Instrumentos de lucha contra la corrupción
6.4 Narcotráfico
7. Reforma política para la ampliación de la democracia
7.1 Reformas de los partidos y movimientos políticos
7.2 Reformas electorales
7.3 Garantías a la oposición
7.4 Garantías a las minorías
7.5 Mecanismos de participación ciudadana
8. Reformas del Estado
8.1 Reformas al Congreso
8.2 Reforma administrativa para lograr una mayor eficiencia de la administración pública
8.3 Descentralización y fortalecimiento del poder local
8.4 Servicios Públicos
8.5 Sectores estratégicos
9. Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario
9.1 Desvinculación de los niños al conflicto armado
9.2 Minas antipersonales
9.3 Respeto de la población civil
9.4 Vigencia de las normas internacionales
10. Fuerzas Militares
10.1 Defensa de la soberanía
10.2 Protección de los derechos humanos
10.3 Combate a los grupos de Autodefensa
10.4 Tratados internacionales
11. Relaciones Internacionales
11.1 Respeto a la libre autodeterminación y a la no intervención
11.2 Integración regional latinoamericana
11.3 Deuda externa
11.4 Tratados y convenios internacionales del Estado
12. Formalización de los acuerdos
12.1 Instrumentos democráticos para legitimar los acuerdos.

Firmado

Por el Gobierno 3Nacional
Victor G. Ricardo
Fabio Valencia Cossio
María Emma Mejía Vélez
Nicanor Restrepo Santamaría
Rodolfo Espinosa Meola

Por las FARC EP
Raúl Reyes
Joaquín Gómez
Fabián Ramírez

Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*



Los delegados del gobierno de la República de Colombia, gobierno nacional, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (farc-ep):

Como resultado del encuentro exploratorio que tuvo como sede en la Habana, Cuba, entre febrero 23 del 2012 y agosto del 2012, y que contó con la participación del gobierno de la república de Cuba y del gobierno de Noruega como garantes, y con el apoyo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como facilitador de logística y acompañante.

Con la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera, atendiendo el clamor por la paz y reconociendo que:

* Firmado el 26 de agosto de 2012 en la Habana Cuba por el Gobierno Nacional y las Farc-Ep

La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción; que el respeto a los ddhh en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse; el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso.

El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país; una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial. Es importante ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de la paz; con la disposición total del gobierno nacional y de las farc-ep de llegar a un acuerdo y la invitación a toda la sociedad colombiana, así como a los organismos de integración regional y a la Comunidad Internacional, a acompañar este proceso; Hemos acordado:

I

Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda aquí establecida con el fin de alcanzar un acuerdo final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera.

II

Establecer una mesa de conversaciones que se instalará públicamente, un mes después del anuncio público, en Oslo, Noruega, y cuya sede principal será la Habana, Cuba. La mesa podrá hacer reuniones en otros países.

III

Garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre pronto acuerdo. En todo caso, la duración estará sujeta a evaluaciones periódicas de los avances.

IV

Desarrollar las conversaciones con el apoyo de los gobiernosde Cuba y Noruega como garantes y los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes. De acuerdo

con las necesidades del proceso, se pondrá de común acuerdo invitar a otros.

V

La siguiente agenda:

1. Política de desarrollo agrario integral.

El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social, económico y equitativo del país.

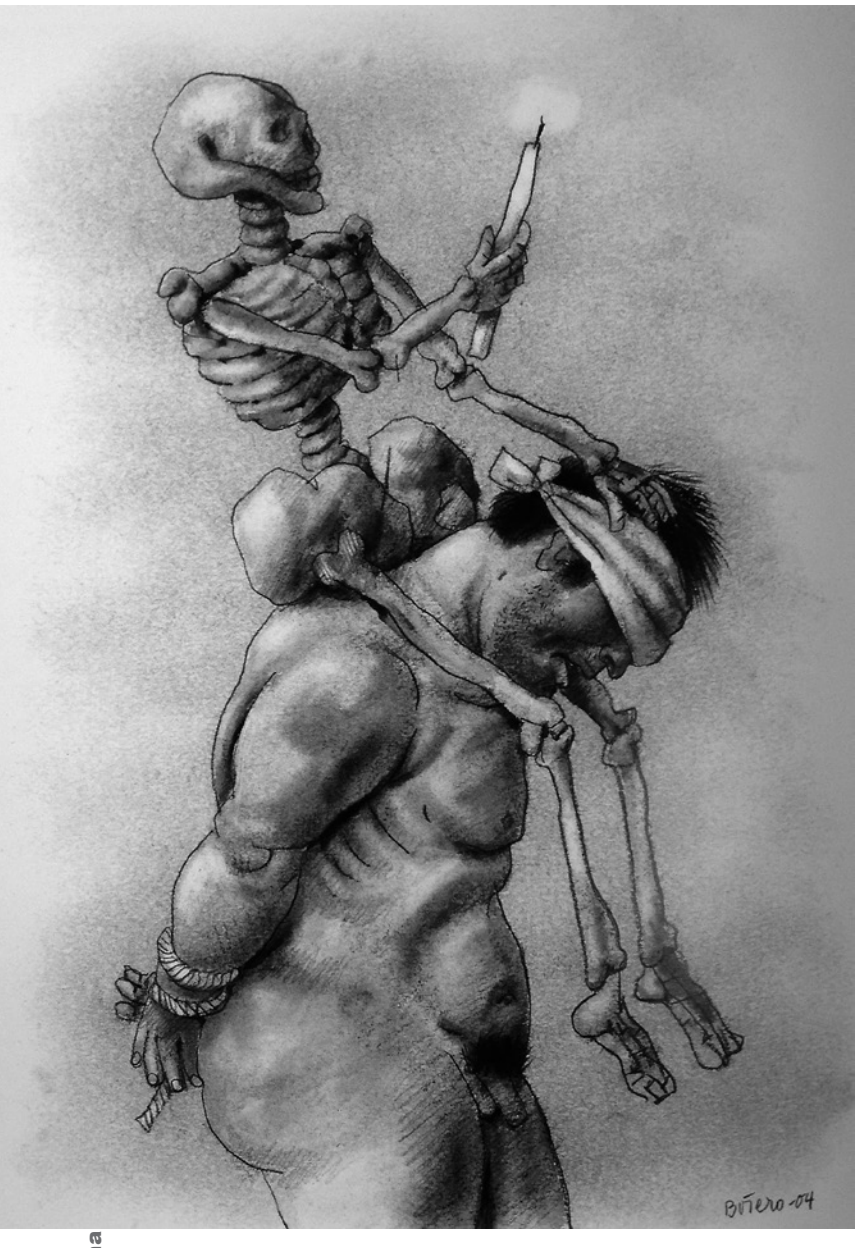
a. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola. Protección de zonas de reserva.
b. Programa de desarrollo con enfoque territorial.
c. Infraestructura y adecuación de tierras.
d. Desarrollo social: salud, educación, erradicación de la pobreza.
e. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.
f. Sistema de seguridad alimentaria.

2.- Participación política.

a. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación.
b. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los diferentes niveles y diversos temas.
c. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

3.- Fin del conflicto

Proceso integral y simultáneo que implica:



a. Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo.
b. Dejación de armas. Reincorporación de las farc-ep a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político–, de acuerdo a sus intereses.
c. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las farc-ep.
d. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de D.D. H.H., movimientos sociales o movimientos políticos.
e. El gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.
f. Garantías de seguridad.
g. En el marco de lo establecido en el punto quinto (Víctimas) de este acuerdo, se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.

La firma del acuerdo final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.

4.- Solución al problema de las drogas ilícitas.

a. Programa de sustitución de cultivos ilícitos. Planes integrales de participación de las comunidades en el diseño, ejecución, y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos.
b. Programas de prevención del consumo y salud pública.
c. Solución del fenómeno de producción del consumo y la salud pública.

5. Víctimas.

Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional-farc-ep.

En ese sentido se tratarán:

A. D.D. H.H. de las víctimas.
b. Verdad.

6.- Implementación, verificación y refrendación.

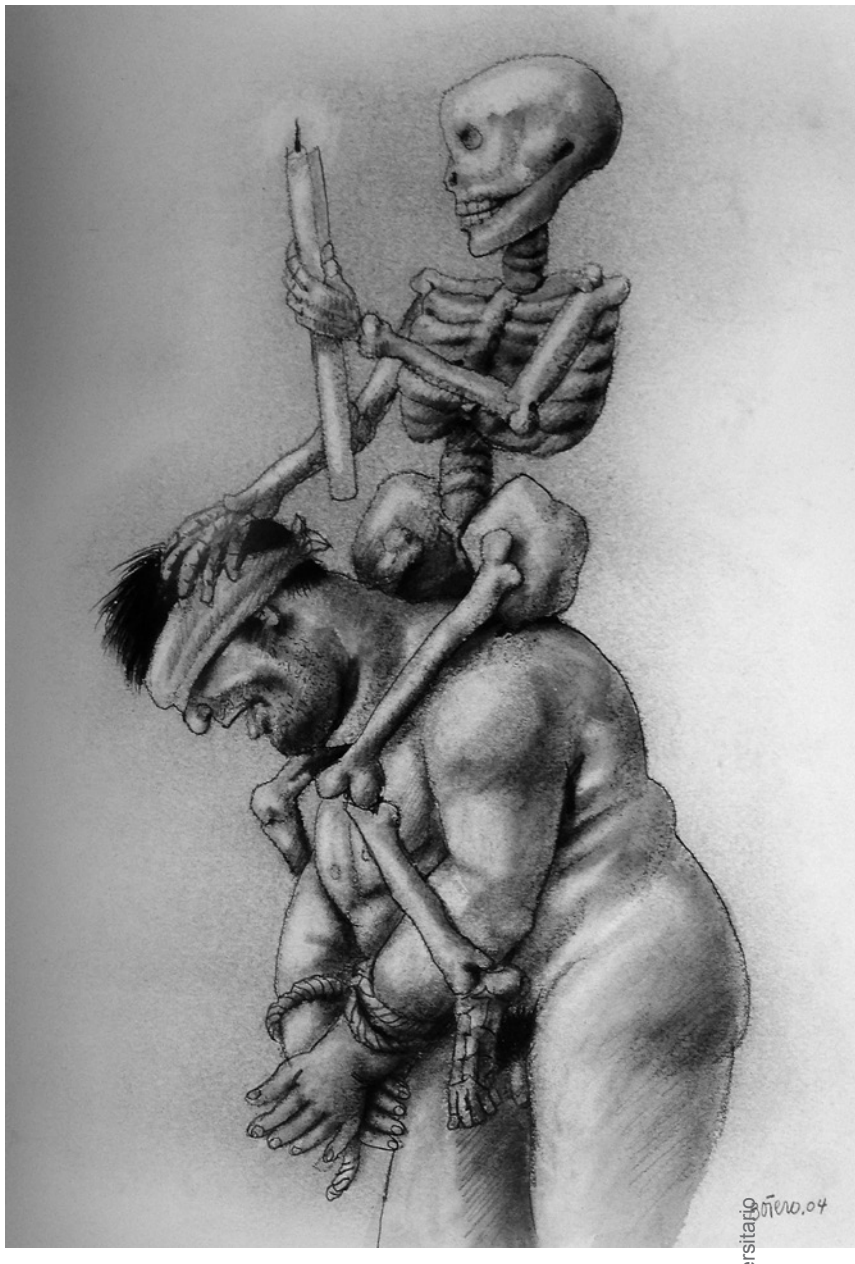
La firma del acuerdo final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados.

a. Mecanismos de implementación y verificación.
   - Sistema de implementación. Dándoles especial atención a las regiones.
   - Comisión de seguimiento y verificación.
   - Mecanismos de resolución de diferencias.

   Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán confirmadas por representantes de las partes y de la sociedad civil, según el caso.
b. Acompañamiento internacional.
c. Cronograma.
d. Presupuesto.
e. Herramienta de difusión y comunicación.
f. Mecanismos de refrendación de los acuerdos.

VI.: Las siguientes reglas de funcionamiento

1. En las sesiones de la mesa participarán hasta 10 personas por delegación, de los cuales hasta 5 serán plenipotenciarios, quienes llevarán la vocería respectiva. Cada delegación estará compuesta hasta por 30 representantes.



2. Con el fin de contribuir al desarrollo del proceso, se podrán realizar consultas a expertos sobre los temas de la agenda, una vez surtido el trámite correspondiente.
3. Para garantizar la transparencia del proceso, la mesa elaborará informes periódicos.
4. Se establecerá un mecanismo para dar a conocer conjuntamente los avances de la mesa. Las discusiones de la mesa

no se harán públicas.

5. Se implementará una estrategia de difusión eficaz.
6. Para garantizar la más amplia participación posible, se establecerá un mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la agenda de ciudadanos y organizaciones por medios físicos o electrónicos. De común acuerdo y en un tiempo determinado, la mesa podrá hacer consultas directas y recibir propuestas directas sobre dichos puntos o delegar en un tercero la organización de espacios de participación.
7. El Gobierno Nacional garantizará los recursos necesarios para el funcionamiento de la mesa que serán administrados de manera eficaz y transparente.
8. La mesa contará con la tecnología necesaria para adelantar el proceso.
9. Las conversaciones iniciarán con el punto Política de
   Desarrollo Agrario Integral y se seguirá con el orden que la mesa acuerde.
10. Las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado.

Firmado a los 26 días del mes de agosto de 2012, en la Habana, Cuba.

Por el gobierno de la república de Colombia:
Sergio Jaramillo
Frank Pearl
Plenipotenciarios

Por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo
Mauricio Jaramillo
Ricardo Téllez
Andrés París
Plenipotenciarios

Testigos:

Por el Gobierno de la República de Cuba
Carlos Fernández de Cossío
Abel García

Por el gobierno de Noruega
Dag Halvor
Nylander Vegar S. Brynildsen

Archivo fotográfico

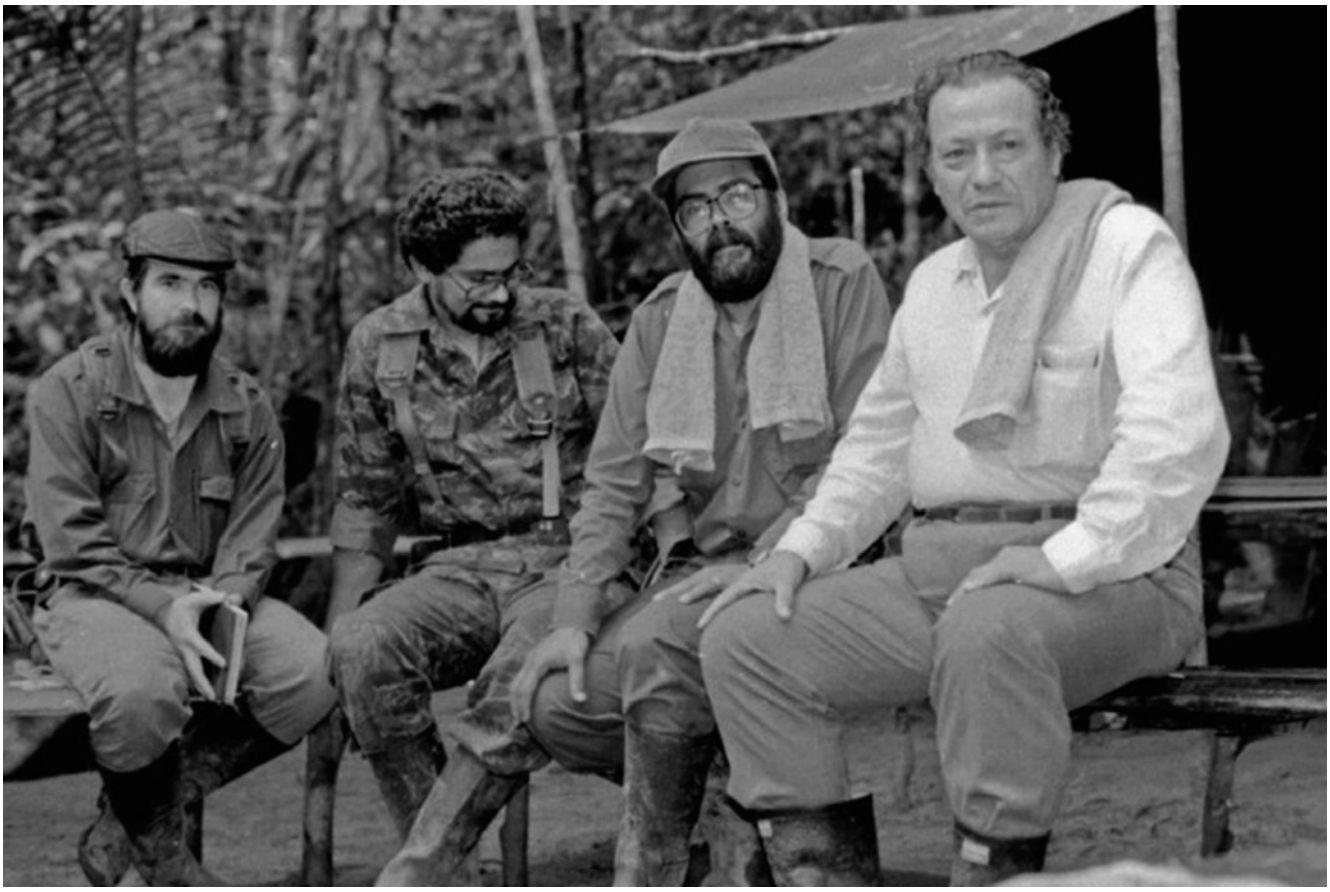
Guillermo Cano y Tirofijo en las negociaciones de Casa Verde.

De izquierda a derecha el segundo es Jesús Bejarano, Humberto de la Calle y Alfonso Cano, jefe negociador de las FARC, en Tlaxcala 1992.

Pedro Antonio Marín en los años 60, cuando ya desafiaba al Estado colombiano pero estaba aún lejos de convertirse en el principal objetivo de las Fuerzas Militares.

Fotografía tomada en la década de los 80. Su apodo ´Tirofijo´ proviene de la habilidad para acertar en el blanco al disparar con armas de fuego. Fuente AFP .

Fotografía tomada en la década de los 60.



De izquierda a derecha: Timoleón Jiménez, Iván Márquez, Alfonso Cano y Manuel Marulanda.

Manuel Marulanda, Manuel Pérez y Alfonso Cano.

Marquetalia 1964.

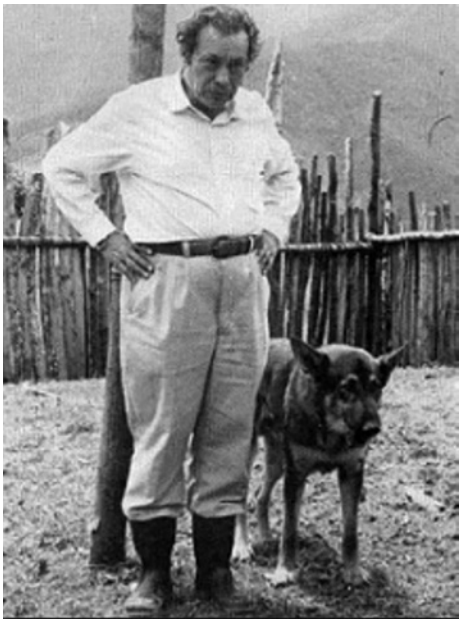
Manuel Marulanda

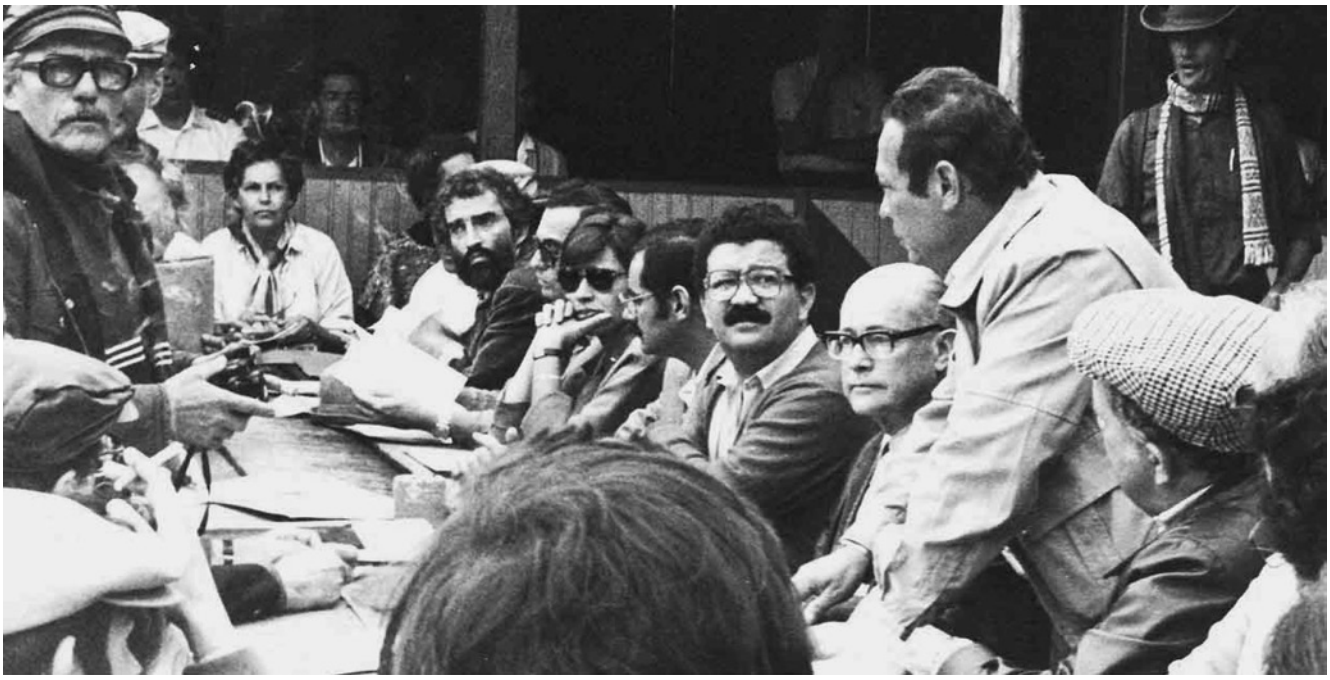
San Vicente del Caguán, 1999. Andrés pastrana Arango junto a Manuel Marulanda.

Humberto de la Calle, Alfonso Cano e Ivan Márquez.

Marulanda y Jacobo Arenas. Década del 80.

Fotografía tomada en la década de los 70 durante el entrenamiento de los combatientes en un campamento. Fuente AFP.





Coordinadora Gerrillera Simón Bolívar.

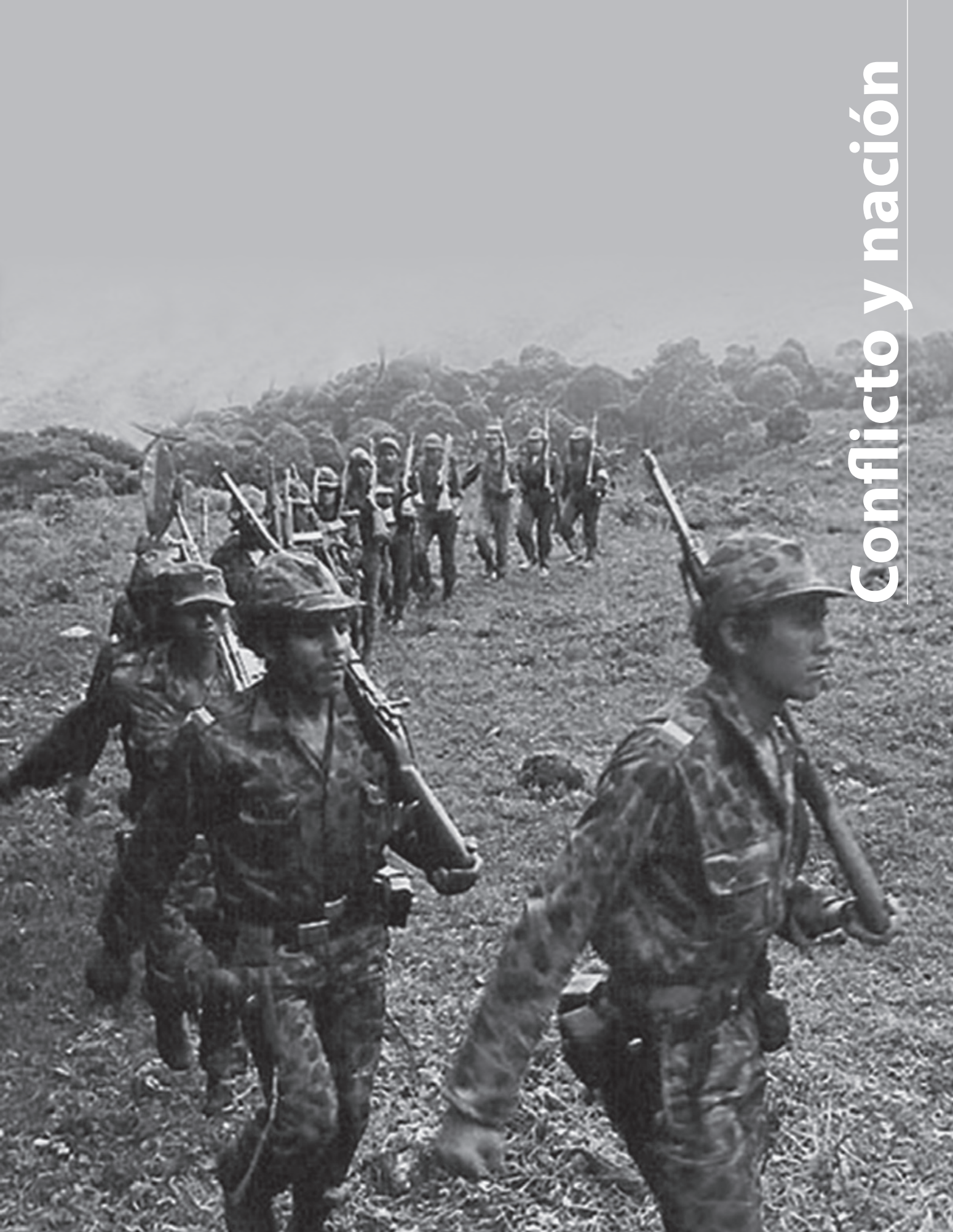
Delegación para la mesa de negociación de la paz en Tlaxcala, México. 1991.

Secretariado de las FARC. San Vicente del Caguán.1999.

La silla vacia.

Mesa de negociación de la paz. 2014. La Habana Cuba.

Diálogos de paz. Habana Cuba. 2015.



Conflicto y nación

Colombia: guerra, conflicto histórico y solución política

Miguel Eduardo Cárdenas Rivera*

En la actual etapa histórica colombiana aparecen, entre muchas otras, dos explicaciones sobre la guerra como expresión del conflicto interno: 1) la visión de la élite sobre el peligro del comunismo y 2) su aceptación consuetudinaria del método de la violencia, aplicado con la intención de liquidar los conflictos sociales que amenazan con rebasar la institucionalidad. Como es sabido, en Colombia pervive el *orden* con la *violencia.* Los métodos de control y de dominación política persuasivos/disipativos ante su (in)eficacia dan paso o se combinan con los coercitivos/represivos, para mantener el *status quo* [1].

La derrota militar de una de las dos partes en conflicto conduciría necesariamente a una forma de dictadura; por tanto, la negociación política es la alternativa que podría permitir la construcción de una democracia real. Lo evidente es que el orden impuesto solo favorece a una íntima minoría; no obstante, los privilegiados no pueden gozar del sistema que han constituido para preservar sus intereses: *su* orden genera veinte mil muertos al año,

Jurista, Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo (CEPA), Colombia.

y condena a la postración moral y económica a más de las dos terceras partes de la población, estimada en 43 millones [2].

La inercia histórica de la guerra

La violencia represiva opera históricamente como un mecanismo racional y planificado para contener cualquier intento de revolución, regular los cambios estructurales funcionales al régimen hegemónico, y gestionar el modelo de desarrollo forzado colombiano. En efecto, la invasión española ocasionó un genocidio de tres millones de indígenas que provocó la importación, como esclavos, de un millón de hombres capturados en África. La «Guerra de los mil días», entre 1899 y 1902, causó 180.000 muertos (4,3% de la población), la guerra civil de mediados del siglo xx conocida como «La Violencia» sumó 300.000 muertes (2,6% de la población) y dos millones desplazados (17,4%), El conflicto social y político entre 1985 y 2006 ha generado 620.000 homicidios (1,5% de la población), 2.500 sindicalistas asesinados impunemente, 3.000 militantes de Unión Patriótica -por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el Estado colombiano-, y 3,6 millones de desterrados y expropiados (8,6%), más cuatro millones de personas que decidieron buscar su destino fuera de Colombia.

La intervención imperialista por parte del gobierno de los Estados Unidos se expresa en la «ayuda militar» al gobierno para solucionar el conflicto interno mediante el llamado Plan Colombia. Si bien oficialmente se declara que no se trata de un plan de guerra, lo cierto es que procura

implementar una acción contundente contra la insurgencia en el sur del territorio, y otra fase complementaria para *pacificar* el país. Por más discurso pacifista que lo sustente, el Plan Colombia es en verdad un plan de guerra, que se ejecuta en el marco de la «doctrina Bush» de lucha contra el terrorismo.[3]

La opinión constata que el gobierno no tiene la capacidad de orientarse en medio de la complicada situación, ni puede, *motu proprio,* adelantar las reformas que se necesitan. Estas se viabilizarían so

pretexto de la negociación con la insurgencia y se concretarían como resultado de un supuesto y futuro «acuerdo de paz». ¿Cuáles son esas reformas? En la medida en que internamente no se tiene la capacidad para definirlas y ejecutarlas, etas vendrán por cuenta y riesgo de la «comunidad internacional». Así como en materia económica el Fondo Monetario Internacional ya se hizo cargo de estos asuntos, en materia política y militar cada día se incrementa el «intervencionismo multilateral», bajo la batuta del Departamento de Estado norteamericano. En tanto se considera que el gobierno de Colombia no está en capacidad de propinar una derrota a las fuerzas insurgentes de las FARC, la ayuda militar no se le entrega sino que se ejecuta de manera directa.[4]

La mayoría de la población no está involucrada como combatiente en el conflicto bélico, más bien trata de escapar de la guerra. No hay conexión entre los cuerpos armados y el grueso de la población; no hay identidad ni simpatía con sus propuestas; no se piensa que la solución a la crisis nacional pueda provenir del triunfo de alguno de los bandos enfrentados. Las múltiples violencias se conectan unas con otras; la generada por las organizaciones armadas -que manejan sus propias estructuras financieras y captan ingentes recursos provenientes de diversas fuentes y actividades según su propia naturaleza guerrillera o paramilitar, y su intencionalidad, ya sea revolucionaria o contrainsurgente-, con la urbana, la juvenil, las milicias, los ajustes de cuentas, la producción y distribución de narcóticos -que equivale a casi 20% de la economía-,[5] la de la pobreza, etc, conformando una espiral cada día más vertiginosa y abismal, a la que se suma la actividad económica expresada en un incremento de 6% del Producto Nacional anual, pero que se centraliza en pocas manos: se trata de un crecimiento concentrador, insostenible e inequitativo.[6]

Las instituciones colombianas se han creado en un ambiente de desconfianza; sus mandatos son cortos e irrelegibles. Por encima del Estado se encuentran múltiples grupos que piensan que tienen más legitimidad para defender los intereses del conjunto de la sociedad colombiana. La ilegitimidad del Estado colombiano también se mide por el terrorismo, al que apela de manera encubierta su aparato represivo,[7] al punto de considerar que la mejor manera de acabar con los paramilitares es permitir que los militares atropellen los derechos civiles.

En lo estratégico, las organizaciones armadas han conquistado territorios en los que la ley del Estado no se aplica. No ha gobierno que pueda proyectar una política si no tiene algún apoyo de la opinión publica. Y para ello tiene que definir principios de largo alcance; no puede intentar aplicar modelos de pequeñas transacciones o acuerdos. El gobierno colombiano no debería depender de lo que opina la guerrilla, tendría que mostrar, con gestos simbólicos y medidas concretas, que tiene una orientación estratégica independiente de lo que acontece en la confrontación militar; pero no ha definido principios que no se negocian, ni ha contado con una política que no dependa de la actitud de la guerrilla. Es preciso separar el plano de los principios del plano de lo pragmático.

Por otra parte, la política presupuestal de los sucesivos gobiernos, tal como se

expresa en los gastos militares anuales, es incongruente con un proceso genuino de paz.[8] El pago a la deuda externa e interna equivale a siete veces lo que se destina a la salud y la educación.

Ha sido advertida la dificultad para impulsar una negociación con el principal grupo insurgente -las FARC-, dada la contradictoria orientación de los gobiernos en lo que se refiere a establecer una agenda para transformar el país, y sobre esa base discutir a fondo lo que pudiera ser un nuevo Estado social para definir el futuro del cambio. Los gobiernos, sin excepción, hacen una política social de contenido regresivo en contravía a una propuesta democratizadora. Es la acción gubernamental la que termina por destruir -en su confrontación con el movimiento obrero- sus conquistas, y agrava el problema de la educación, de la salud, etc. Pero lo más preocupante es que es la misma institucionalidad vigente la que coloca en serias dificultades a sectores medios y populares de la población para resolver su problema económico, en tanto incentiva a los ricos, a los poderosos, de tal manera que resulta incongruente -en términos absolutos- que mientras se aplica una política social regresiva, se pretenda sentar las bases para una eventual iniciativa acordada para que el país se transforme a través de una negociación.[9]

Viabilidad estructural de un proceso de paz

Es preciso interrogarse acerca de la viabilidad estructural de un proceso de paz. La pobreza no es la explicación absoluta de la violencia que azota a Colombia desde hace más de seis décadas. Tampoco lo es una cierta condición cultural acompañada de una predisposición genética al uso irracional de la fuerza. Entre los dos extremos interpretativos hay un hecho irrefutable el crecimiento y concentración de la riqueza, el aumento de la pobreza y la mayor violencia contra las poblaciones más vulnerables socialmente, conforman el retrato de la sociedad colombiana.

En Colombia se profundiza una tendencia histórica a la desigualdad social. El país ostenta uno de los coeficientes Gini más altos de la región.[10] Este indicador llega al 0,576 reconocido internacionalmente. Existen casos aberrantes como el del capital bursátil, cuyo 79,9% está concentrado en los veinte mayores accionistas de cada empresa, y 0,21% de la totalidad de los accionistas del país. Algo similar ocurre con la propiedad agraria: 2.428 propietarios públicos y privados poseen 53,3% del territorio registrado catastralmente, es decir, 44 millones de hectáreas, para un promedio de 18.093 por propietario, un territorio seis mil veces más grande que el minifundio de tres hectáreas en el que viven 2,2 millones de colombianos.

En los inicios de la década de los 80, el porcentaje del valor agregado apropiado por los trabajadores en el PIB era de 44%; actualmente viene cayendo de manera acelerada: en el año 2000 esta participación fue de 36,5% y en 2006 alcanzó su nivel más bajo, 32,5%. Ello significa que en las dos últimas décadas los asalariados perdieron 11,5 puntos en la apropiación de la riqueza anual, generada por ellos mismos.

El gobierno argumenta que le promedio de crecimiento económico ha tenido

efectos significativos en la reducción de la pobreza en casi 10 puntos porcentuales, en lo que va del siglo xxI (de 58% a 49%). Más de dos millones de personas habrían salido de la pobreza. Pero la verdadera causa de este descenso debe buscarse en los impactos de la guerra, esto es, en la eliminación y la desaparición física d cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría pobre, y en la diáspora de aproximadamente cinco millones de colombianos dispersos por el planeta.[11] Estos trabajadores envían a sus familias remesas por más de cuatro mil millones de dólares anuales, el segundo renglón en ingreso de divisas al país. Este dinero, una vez descontados los costos financieros, es utilizado para aliviar las necesidades básicas de sus familias.

En las zonas rurales, la población sufre la peor parte del enfrentamiento bélico. Durante el periodo analizado, perdió diez puntos porcentuales en su participación en el total nacional: según el censo de 1985, representaba 35%; en el de 2005 cayó a 25%. Todo esto, resultado del destierro y expropiación asociados a la guerra, a la consolidación de poderes regionales-paramilitares, a la presencia directa de empresas transnacionales y la invasión de tropas estadounidenses, a la ejecución de megaproyectos en marcha y a la pérdida progresiva de ingresos de los pobres del campo. Actualmente, el destierro y la expropiación afectan a alrededor de cuatro millones de personas. De la mano de esta guerra en contra de los pobres del campo, la concentración de la propiedad rural es alarmante. El vuelco en la distribución de la tierra, según datos de las autoridades catastrales, ha sido abrumador: en el último cuarto de siglo la gran propiedad (más de 500 hectáreas) pasa de controlar 47% a 68% de la superficie catastrada; entre tanto, la pequeña propiedad cae de 15% a 9%.

Para apreciar la distancia entre ricos y pobres habría que anotar que los colombianos más ricos tienen 46 veces más que los más pobres. En Japón, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suecia, Reino Unido y Alemania, esa relación es de solo seis veces, entre unos y otros. América Latina es la región con más alta concentración de la riqueza y el ingreso en el mundo, y en ella sobresalen Brasil y Colombia por el alto nivel de desigualdad.

En la distribución del ingreso, 38% va a los asalariados y el 62% restante está consumido por las ganancias del capital e

ingresos del Estado. El gobierno controla 36% del PIB y ocupa 10% de la fuerza laboral, o sea, 1,3 millones de empleados. Su acción redistributiva, a través del gasto social, es inferior a 15% a la inversión. La estructura impositiva en Colombia es bastante regresiva (más concentrada en impuestos indirectos -IVA- que en directos a la propiedad y el ingreso); los niveles de evasión y elusión de los grandes grupos económicos alcanzan 3% del PIB. Por lo anterior, la función redistributiva del Estado es mínima y no logra afectar los altos niveles de pobreza.

Actualmente, la pobreza presenta un perfil distinto al de hace treinta años. Es más urbana, con niveles de educación más altos y con mayores expectativas. Colombia, al igual que todas las sociedades capitalistas, genera ampliar expectativas consumistas en sectores populares, sobre todo en los jóvenes, que no pueden satisfacer debido a la injusticia social y la desigualdad en la distribución de las oportunidades, lo que se convierte en un caldo de cultivo para la violencia.

La historia colombiana demuestra que el mayor gesto en la guerra no soluciona la violencia. Esta se volvió una forma de funcionamiento de la sociedad colombiana, y ha propiciado redes diversas de influencia y presión sobre la población. La violencia es parte de los negocios en el país, de los cuales participan no solo los directamente vinculados con ella, sino empresarios, comerciantes, terratenientes y políticos. Mueve, por lo menos, 8% del Producto Nacional (sumado el gasto público y privado) y emplea a 5% de la fuerza laboral, entre los distintos mercaderes de la guerra, profesionales de la seguridad nacional, diversidad de ejércitos y cuerpos de seguridad privada. El país tendría que preguntarse, si alcanzamos la paz, dónde ubicará a los más de 600.000 empleados de la guerra.

Existe además un nexo entre clientelismo, corrupción y mafia, que fungen como fermentos de la violencia. La corrupción resulta ser otra relación de intercambio, como el clientelismo, y ambos representan una privatización de la política claramente contraria a los principios y a las reglas de la democracia, que se constata en los fenómenos de corrupción en el alto gobierno, y en el tráfico de influencias que caracteriza, por ejemplo, el uso de los fondos públicos destinados a obras y servicios sociales en los municipios y regiones y la red de asistencia social, que maneja un considerable presupuesto para hacer inversiones.

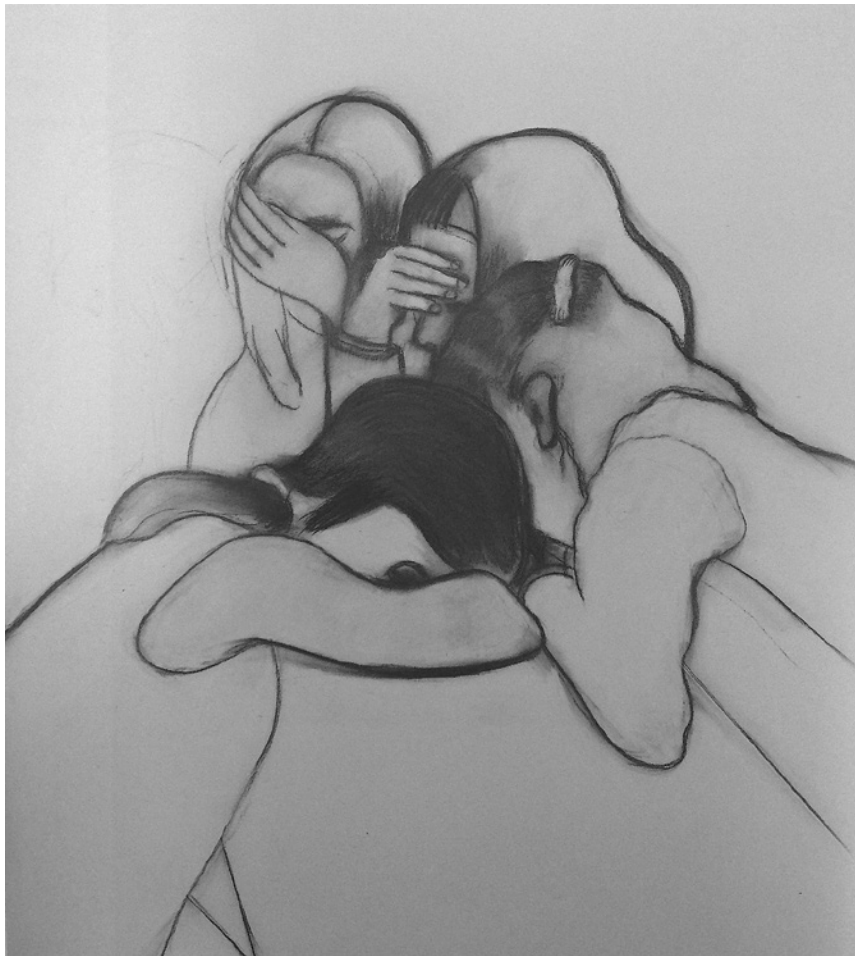
Más allá de la consonancia de las cifras de pobreza y de violencia, y de los factores coadyuvantes referidos anteriormente, hay un matiz que escapa a los analistas: la pobreza es, en sí misma, violencia. Y su presencia resulta tan ominosa que en buena parte de nosotros actúa como freno a las iniciativas para construir un país que supere el atraso productivo, la concentración de la riqueza, la iniquidad y la injusticia social.

El sistema societal colombiano se levanta y reproduce mediante la exclusión y la existencia de un Estado patrimonial al servicio de las élites y grupos de poder. Una organización social de estas características requiere, para mantenerse, de una alta dosis de violencia y represión. La pobreza no genera la violencia, la pobres es,

en sí misma, violencia. Violencia social. El violento es un sistema que excluye, oprime y reprime. El gasto militar es parte de las condiciones de producción y de reproducción, la esencia del «ambiente de los negocios», el instrumento para crear las condiciones y mantener el «clima para la inversión». No afecta, sino que es condición estructural para el funcionamiento del oprobioso sistema vigente y de sostenimiento del inaceptable *status quo.* Por eso, mientras se habla de paz, la guerra se agudiza.

La situación actual es muy complicada. Hay más gente combatiendo y dispone de mejores equipos. Se ha derramado más sangre y hay aún más sangre en juego. El aumento de la ayuda norteamericana le ha infundido al ejército un ánimo triunfalista, por primera vez en muchos años, y en esas condiciones los militares querrán más victorias armadas que estarán a su alcance por los nuevos equipos de alta tecnología y los asesores. Por otra parte, el fortalecimiento del ejército podría obligar a la guerrilla a reconsiderar sus opciones y a optar por una negociación con el gobierno.

Colombia sigue siendo uno de los países incapaces de elaborar una historia común, en lo que se refiere a los episodios violentos. No existe todavía una historia integrada por los colombianos de «La Violencia» de los años 50. No hubo esa capacidad de recuperar el momento del negativo, como decía Hegel, dentro de una construcción narrativa ampliamente reconocida. Lo que supone un debate sobre las responsabilidades. Frente a la violencia actual tendrá que haber un tribunal para juzgar las responsabilidades;



un tribunal moral, pero también uno para condenar las atrocidades.

Lo que dificulta todo es la profunda desconfianza en el Estado enraizada en el legado decimonónico, por lo cual la Colombia política vive más a la hora del siglo xIx que a la del siglo xxI. Al mismo tiempo, todos se refieren al «Estado de derecho», pero sin Estado, sin creer en su existencia. Hay razones para desconfiar: desde la corrupción hasta la tolerancia de parte de ciertos sectores con los paramilitares. Pero tampoco se puede olvidar que son muchos los individuos y grupos democráticos dentro del Estado. En el fondo, Colombia continúa siendo una sociedad liberal, donde la libertad se de-

fine negativamente contra el Estado. Así que la mayoría acepta ciertas formas de privatización estatal. Una vez más, la tarea es desprivatizar un poco. Es decir, volver a poner al Estado en su lugar, con tal que se transforme y se democratice. Tal vez la «desprivatización» sea el camino, a falta de Estado, para retomar los derechos humanos y conformarse en serio con un nuevo derecho internacional. El problema es volver a construir un espacio público. O tal vez construirlo simplemente, pues se puede dudar sobre su existencia.

Todos los actores con poder (territorial, financiero, armado) son, de alguna manera, actores políticos reconocidos. Pero no basta tener poder para ser plenamente un actor político en sentido democrático. En este caso, se necesita, además, un esfuerzo de «desprivatización; es decir, aprender que no se puede ser reconocido como tal en tanto se piensa tener derecho a aplicar la justicia en nombre de todos, bajo intereses ocultos y crímenes atroces.

Es un problema de principios y también de circunstancias. No se debe olvidar que, para lograr mayor peso en la negociación, el gobierno tiene que conseguir apoyo internacional, pues la opinión mundial cuenta hoy y acude mucho más a la idea de un deber de intervención internacional. Los casos de Kosovo e Iraq han creado un precedente que no deja de influir en las márgenes de maniobra del gobierno colombiano. Lo más probable, para orientar el proceso, es que se busque cómo concebir responsabilidades políticas bajo el control de las normas democráticas de la sociedad en su conjunto.

La ilusoria solución política por vía constituyente

El propósito del constitucionalismo es administrar la polémica material de la vida cotidiana, a fin de imponer un orden racional, un esquema normativo que despliegue principios y procedimientos de asignación de recursos y de solución de conflictos a través de múltiples niveles y sectores de la sociedad. Las Cartas constitucionales o Leyes fundamentales bien pueden resultar obras de la razón, y su lenguaje aparece con frecuencia como el ejemplo arquetípico del discurso racional que describe las cosas como deben ser y no como son. Pero su dinamismo central, su energía, es el conflicto civil, la batalla social, mucho más que el contrato social. Y el Derecho mismo, a causa de su textura

abierta,[12] debe ser visto en lo sucesivo dentro de una perspectiva estratégica opuesta a los enfoques contractualistas y funcionalistas a un dominantes en el reino de la jurística. De lo contrario, no es posible dar cuenta del carácter complejo, heterogéneo, rebelde, de las relaciones sociales que el Derecho pretende concertar. Solo mediante una nueva concepción del Derecho y del constitucionalismo, que se abre paso ya en el ancho mundo de las ciencias humanas, parece factible captar la naturaleza intrínsecamente estratégica, o sea, esencial y relacional de lo social.[13]

Contra la creencia subyacente de muchas escuelas de pensamiento jurídico, el Derecho no es la paz sino la guerra, la guerra ritual. Y el dominio del Derecho es el de un saber polémico, una retórica estratégica, una gramática de y para la guerra civil que es la vida cotidiana. El culto ni al orden, al apelar sin tregua y sin pausa al círculo vicioso del reformismo constitucional, y bloquear así el acceso del pueblo y de terceras fuerzas al Estado, ha transformado a Colombia en una sociedad violenta, que recurre una y otra vez a la guerra política (lucha bipartidista, bandidismo popular, guerrilla ideológica) en busca de participación en loa distribución de poder, recursos, oportunidades y responsabilidades para todos. Y sin embargo, esta dinámica ayuda a comprender por qué el país no ha tenido una tradición significativa de caudillismo y militarismo, a diferencia del resto de Hispanoamérica, a menos que se acepte que el formalismo jurídico es tan solo una forma subliminal de caudillismo.[14] En una sociedad como la colombiana, la Constitución suministra una serie de pistas indispensables para armar el rompecabezas del poder político. En ella, los legisladores, que no han sido sino las voces y las manos de unos hechos, un pensamiento y una voluntad de sometimiento, han escrito los principios básicos con los que buscan dar legitimidad a un poder nacido de la usurpación y la degradación.

En los prolegómenos de la reforma constitucional de 1991 se advirtió como en Colombia la necesaria ruptura entre la realidad y los principios de la «democracia burguesa», llevó a consagrar los artículos constitucionales y las normas que permiten vivir en un régimen de excepción, como los pilares de la vida jurídica. Por consiguiente, la Constitución nunca logró su vigencia política efectiva. En su reemplazo, la sinrazón militar impuso su particular código para resolver los conflictos de poder durante las guerras civiles, o para responder a la protesta popular a partir del Frente Nacional.[15] Esta situación obliga a los movimientos populares a conocer la Constitución y las leyes para poder avanzar, no porque en ellas encuentren su realización, sino porque integran uno de los puntos que por su ambigüedad representa el talón de Aquiles del poder político dominante en Colombia.

La imposibilidad de cumplir su propia Constitución y de respetar las conquistas populares que ha asimilado y neutralizado reduciéndolas a la categoría de norma, coloca al gobierno ante la inevitable pérdida de legitimidad. Es un desgaste que tiene importantes repercusiones políticas, pues ayuda a desnudar la verdadera naturaleza de la opresión, y favorece el fortalecimiento de una alternativa popular. Colombia sigue teniendo una Constitución que

no se cumple, que no se puede cumplir, pero que si se cumpliera lo único que lograría sería solidificar una sociedad sin perspectivas para los que actualmente no las tienen. A pesar de ello y como una paradoja, el hecho de su incumplimiento abre un terreno de lucha, al enfrentar el poder con sus propias incongruencias. No hay cambios sustanciales en cuanto al papel del constitucionalismo en la realidad institucional y material colombiana.

La «construcción del posconflicto»: una salida institucional

El debate sobre el posconflicto[16] tiene una gran pertinencia en los momentos actuales por la situación frente a los mecanismos y procedimientos para dar terminación al conflicto, de acuerdo con las expresiones y programas de acción presentados por el Estado colombiano. Tal situación está ratificad por el hecho de que este carece del monopolio de la coerción y de la recaudación tributaria. Esta situación provoca la incapacidad de construir un orden y, con ello, de hacer cumplir las leyes de manera efectiva.

El conflicto en Colombia es tanto un problema práctico como conceptual, y por ello hay quien asevera que necesita madurar y llegar a una situación estratégica en la que las posturas sean claras y las posibilidades de encontrar una salida negociada estén en posición de facilitar una negociación directa. El problema se agrava ante el unanimismo en las relaciones internacionales de apoyar la lucha antiterrorista, lo que implica enfatizar la búsqueda de la seguridad dejando de lado los derechos humanos. Este enfoque es contrario a la búsqueda de alternativas como las que propone el Foro Social Mundial.

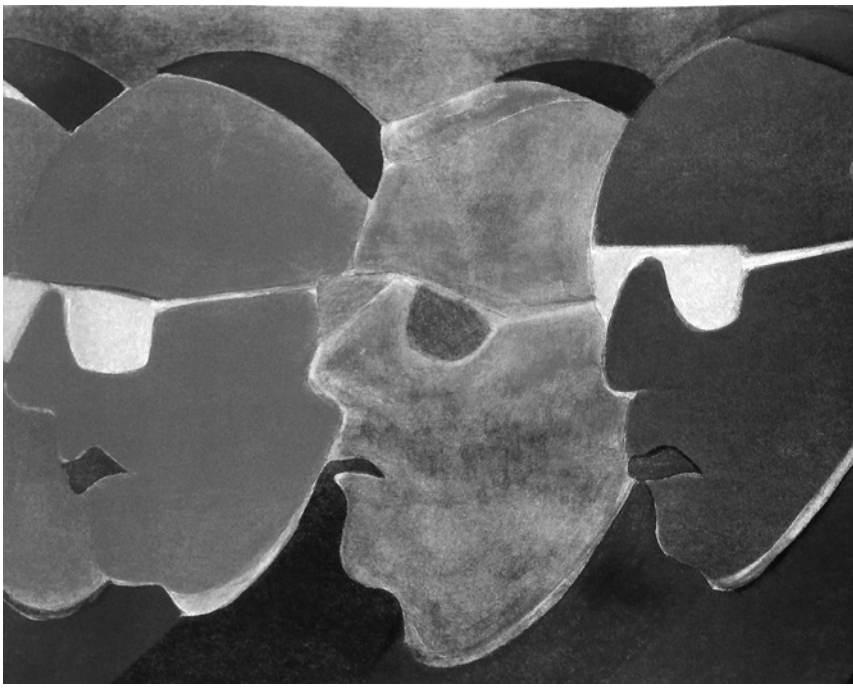
En Colombia se ha presentado un rebrote de la necesidad de repensar la paz, dada la política gubernamental de acabar con la insurgencia sin solucionar las causas efectivas del conflicto. Esto lo ratifica el criterio del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) quien sostiene que en el país no existe ningún conflicto armado.

Una primera salida del conflicto se puede buscar a través del «fortalecimiento institucional», propinando una derrota a los Señores de la guerra,[17] y apostar por la ampliación de la institucionalidad de la sociedad colombiana. Este procedimiento tiene como objetivo lograr la estabilidad política del Estado y crear los mecanismos para mantener la seguridad, como principio del libre ejercicio de la ciudadanía. En ese sentido, se argumenta que no pueden existir derechos ni garantías políticas, sociales, económicas o culturales, sin una estructura que aporte los elementos mínimos de la seguridad, para que todos puedan vivir sin el temor a ser secuestrados, asesinados o asaltados.

Una segunda variante puede denominarse «el posconflicto como ampliación de la democracia», y acude a una idea muy importante en el contexto de la lucha antiterrorista, expuesta por Fareed Zakaria,[18] que consiste en que la única forma de mantener las libertades y las garantías institucionales para las sociedades amenazadas por el terrorismo es fortalecer y ampliar la democracia, pues solo en la medida en que las responsabilidades colectivas crezcan, crecerán los mecanismos institucionales y se cercará el espacio

para la violencia y el desorden social. No es posible un posconflicto pensado sin una democracia fuerte y activa, y para tal efecto el camino del fortalecimiento institucional es ineludible. La ampliación de la democracia y la construcción de una institucionalidad fuerte implica que las negociaciones sobre el conflicto en las «élites dirigentes y las de los grupos alzados en armas, sean agendas realistas».

Una tercera se puede calificar como de «llamado al realismo». Esta variante está compuesta por dos partes: una que muestra que el Estado colombiano es el producto de una larga experiencia histórica de fragmentación territorial e institucional, y de una extensa división social donde la inexistencia de una sociedad nacional es amortiguada por una gran red de islas de legitimidad. Tales islas son territorios claramente delimitados, más identificados con zonas urbanas, y que han convertido al Estado en una entidad básicamente urbana, imposibilitado para una integración nacional en todo sentido. La otra parte de este argumento se dirige a plantear que el Estado colombiano debería evaluar las posibilidades militares reales de conducir el conflicto dentro de sus propios planes y la forma en que puede llevar a los grupos alzados en armas a la aceptación de una negociación de paz y la consecuente desmovilización. Este aspecto implica que el Estado debe hacer evaluaciones reales de las condiciones del conflicto y en qué medida le son favorables o desfavorables para imponer una institucionalidad y un orden posibles. Tales demandas de evaluación traen tareas adicionales con respecto a los efectos de las relaciones entre economías ilícitas y grupos armados, y el espectro de la



política internacional que coadyuve al desarrollo de un proceso de paz y estabilización real del país.

Una cuarta es la «tradicional», que insiste en una solución radical a las «causas que origina el conflicto». Está construida sobre dos argumentos: la pobreza y los desajustes estructurales, que muestran la posibilidad de que la violencia sea perpetua, y en cierta medida justificada, por esta misma naturaleza. Esto hace insostenible cualquier proceso de negociación de la paz y de creación de una situación de posconflicto. Uno de los elementos más sorprendentes entre los argumentos tradicionales es que resurja el «problema agrario» cuando el país, en la actualidad, es urbano en más de 76%.

Es preciso abordar tres temas adicionales, determinantes para la comprensión del problema del posconflicto. Uno es el de las economías ilícitas, en especial aquellas relacionadas con el narcotráfico, el tráfico

ilegal de armas y el de servicios sexuales, tres actividades altamente florecientes en Colombia. Un segundo tema de alta sensibilidad es la incapacidad de los grupos armados para reconocer el apego de la mayoría de la sociedad a una cierta institucionalidad, haciendo que la violencia se justifique en sí misma. Y un tercer asunto es la dimensión internacional de las transformaciones internas de Colombia, tanto con respecto a los países más desarrollados, como a los más pobres, y los que la rodean.

Igualmente es importante el tema de la economía, junto con el de la estructura empresarial existente en Colombia, justificado en sí mismo por la necesidad de generar riqueza y modelos de transformación social autosostenidos.

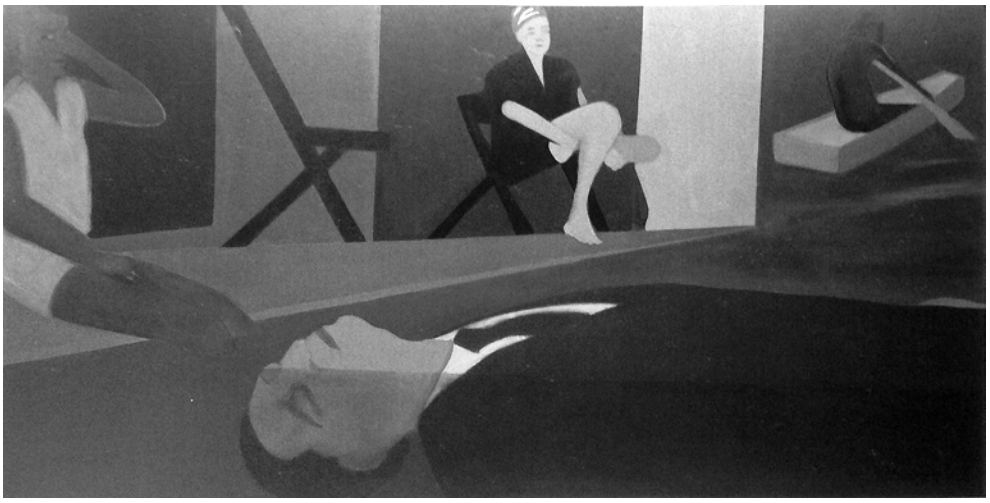
En conclusión, el asunto del posconflicto aún se manifiesta como un tema teórico y no como una opción política precisa. Para llegar a una situación definida de posconflicto es necesario reconocer las realidades del cambio político e institucional del Estado y la sociedad colombianos. Y también reconocer que la violencia es parte de una profunda tradición anti-institucional que impide llegar a acuerdos y procedimientos políticos determinados, y afinca las posiciones de los grupos armados ilegales en una trinchera de interpretación «verdadera» de la realidad.

La rasgada hoja de ruta

¿Cuáles son los elementos que están en la base de la construcción del posconflicto en Colombia? El primero se centra en el carácter del conflicto armado -cómo está estructurado-, para evidenciar las exigencias y condicionamientos de la construcción de una paz estable. Existen limitaciones de los procesos de paz que determinan que deriven en posconflictos parciales. No se pueden desconocer los retos de las fuerzas sociales en un proceso de paz, tratando de responder a uno de los déficits más evidentes de estas hasta hoy, el de la participación: definir lo que podría ser el objeto del conflicto armado y, por ende, el de la negociación (el poder), y bosquejar los núcleos de las transformaciones y las reformas que posibilitarían las bases de una paz estable.

Usualmente, la idea de posconflicto se utiliza para hacer referencia a la situación resultante o posterior a las etapas de resolución de los conflictos armados. Se endiente domo un proceso que tiene sus raíces en las mismas dinámicas del enfrentamiento armado, con base en un método de *transformación de conflictos.*[19] Es un concepto que permite hacer explícitos los intereses en juego de los distintos actores y sectores de la sociedad, y la naturaleza de los cambios en las relaciones de poder que conlleva la paz.

En el proceso de construcción del posconflicto se evidencian distintas etapas; una, que encuentra sus orígenes en la misma negociación, observando en la historia política del país el desarrollo de distintos modelos, sin que ninguno logre constituirse en un escenario de consolidación de una paz estable; otra, que para el caso colombiano se propone como una transición dentro de la democracia restringida (o régimen semi-represivo), entendida como *democratización;* y finalmente, la *reconstrucción,* período de materialización de los acuerdos, que incluyen la implementación de una serie de



reformas políticas y socioeconómicas, los procesos de justicia, verdad y reparación, y la concreción de los apoyos económicos y de asistencia de origen internacional.

El ejercicio pendiente es el de un proceso de paz que supere el modelo restringido (cese al fuego y desmovilización) y se proponga uno abierto, que incluya junto a lo anterior un conjunto de reformas y transformaciones. Esta concepción de un proceso de paz exige un *modelo de negociación ampliada,* donde el aspecto militar se negocia entre el gobierno y la insurgencia, y las reformas las decide el conjunto de la sociedad.

La fase actual muestra las dinámicas de *degradación* del conflicto y deja en cuestión las estrategias de posicionamiento para una negociación vía correlación de fuerzas, restringidas al campo militar. Una lectura de la estructura del enfrentamiento armado colombiano muestra la confluencia de tres factores: los estructurales (régimen semi-represivo, iniquidad y problema agrario), los externos (orden internacional: «guerra contra el terrorismo» y políticas de lucha antidrogas), y un factor contingente, el narcotráfico.

Una mirada a los límites de procesos de paz sucedidos en Colombia y a las características de sus acuerdos, conforma otro campo temático. Las experiencias han sido parciales, restringidas y fragmentarias en razón de que no han significado la consolidación de una paz estable y prolongada, y en sus procedimientos se hallan resultados de negociaciones poco significativos respecto a los conflictos sociales y políticos que están en su base. En tales circunstancias, los acuerdos de paz a los que han llegado distintos gobiernos y grupos rebeldes se caracterizan por la poca o nula remoción del *status quo*, en cuanto la dejación de armas por parte de los grupos alzados, la amnistía, etc., y, en consecuencia, por la ausencia de repercusiones sustanciales en el conjunto de la sociedad, situación que, por su parcialidad, da origen a lo que se denomina posconflicto subjetivo.

Para reflexiones sobre las fuerzas sociales y una paz estable es necesario reconocer que la participación del conjunto de la sociedad se desestima como alternativa de consensos amplios y de legitimación hacia la transición posconflicto. La falta de participación social en las negociacio-

nes de paz se convierte en un elemento de exclusión y de conservación del poder constituido. El camino de las fuerzas sociales en medio del conflicto enfrentaría los siguientes retos: a) lograr sus estructuración en actor político, con autonomía frente a las partes armadas e imponiendo la negociación como la vía más equilibrada y digna de solución a la guerra; b) promover un modelo de negociación ampliada que garantice la participación y decisión sociales; c) construir agendas suprasectoriales que coadyuven a definir acuerdos nacionales no regresivos, y reforzables en el tiempo; d) estructurar su fuerza política en un proyecto capaz de garantizar las reformas conducentes a la transición posconflicto.

El punto central sobre el objeto de la negociación parte de aceptar el carácter político del conflicto que, en últimas, remite al poder (entendido en una concepción relacional que supere la mirada instrumentalista). Esta manera de abordar el problema lleva a una dicotomía en la resolución del conflicto: un nuevo contrato social o la instauración de un nuevo poder político al que obedece; que es lo mismo que la clásica polaridad entre o que podría ser un nuevo Estado y un nuevo acuerdo de poder político, sin embargo, es saludable tomar distancia de esta lectura, en cuanto ella no reconoce la dinámica que implica la relación entre la sociedad y el Estado. Una mejor alternativa nace de una comprensión relacional y dinámica del poder político, en la que este no se sitúa solo en la institucionalidad estatal, ni tampoco se ubica plenamente en un actor determinado, sino en un conjunto de prácticas, escenarios y regulaciones de los órdenes político-culturales y económico-sociales: transformaciones en el sistema de intercambios entre Estado y sociedad. Esta lectura del poder reconoce el universo político como el que atraviesa

el espacio de la economía, la cultura, la ecología, etc. De lo anterior se colige que es fundamental no solo reformar el Estado, sino generar las garantías necesarias para el tránsito del formalismo democrático a las prácticas democráticas.[20]

El objeto y la naturaleza del conflicto armado deberían definir las agendas, sin embargo, la correlación de fuerzas de los actores armados tiende a tornase en el mecanismo fundamental. Por ello se debe esbozar otra manera de abordar la definición de agendas que parta del conflicto armado como «crisis» (recurrente y no resuelta) que se manifiesta en la relación Estado-sociedad. La definición de paz se construye teniendo como problema central la dinámica y la interacción crisis y guerra, lo cual implica que la agenda la defina el conjunto de la sociedad y su alcance no se circunscriba exclusivamente a la confrontación político-militar bilateral -correlación de fuerzas-, sino al marco de relaciones sociopolíticas multilaterales. Esta visión asume los referentes de una *paz estructural* articulada con una *paz cultural.*

Por último, se debería resaltar las dimensiones prioritarias de la transformación, conducentes a la construcción del posconflicto en Colombia: la naturaleza del Estado y el régimen político, el sistema de gobierno, las condiciones económicas y los derechos humanos, estrechamente ligados con la desmilitarización de la sociedad. La naturaleza del Estado es una dimensión relevante en cuanto comprende su carácter interventor en temas relacionados con la distribución de la riqueza producida por la sociedad, regulación de mercados, etc., y que aborda los problemas de concreción material entre Estado liberal, Estado social de derecho y Estado social. Respecto del régimen político, se trata de recomponer las estructuras y canales permanentes de acceso a los escenarios de toma de decisiones de repercusión general: gobierno, sistema electoral y de justicia, procedimientos de participación, fuerza pública, entre otros. El sistema de gobierno debe preguntarse sobre los límites del presidencialismo, no respecto al parlamentarismo o al semipresidencialismo, sino sobre la comprensión del carácter incluyente y plural requerido en una eventual transición posconflicto en Colombia, en función de no repetir los defectos de procesos anteriores y consolidar una paz estable, sin debilidades. Las condiciones económicas remiten, sin embages, a la desaparición de los niveles de inequidad que están en la génesis del conflicto, y que históricamente han ido renovando y reforzando las apariencias de la confrontación. En estrecha relación con lo anterior, la dimensión de los derechos humanos es uno de los aspectos más sensibles que tocan nuestra dignidad. En el caso colombiano, además de su violación estructural, se adicionan los excesos (premeditados y no intencionados) de la guerra -si es que la guerra *por si* no es ya un exceso- a manos de los grupos paraestatales, la insurgencia y las fuerzas armadas oficiales. Esta circunstancia también incluye, de antemano, comenzar a abordar los temas de la justicia, la verdad y la reparación, en la empresa de disminuir ahora y evitar luego la repetición de la tragedia humanitaria.

El conflicto militar, la guerra como proceso social y humano, no ha terminado; en Colombia la guerra no ha perdido

sus horizontes como eventual salida del conflicto. Y, a la vez, hay un consenso nacional por la paz. En síntesis, es un proceso que se está desarrollando como bélico, como guerrerista y, por otra parte, hay circunstancias concretas que permiten luchar por la paz.

Notas

1. Medófilo Medina, «Las continuidades de la guerra, las intermitencias de la paz», 2007,
2. Ángel Libardo Herreño Hernández, «El debate de la medición de la pobreza», 11 de julio de 2007, ww.voltairenet.org/article149922.html.
3. Grupo Cruz del Sur, «América del Sur y la doctrina Bush», https://politicayactualidad.com/textos.asp?id_texto=1308&id_seccion=11.
4. G. A. de A., «Clima ideal para la intervención de EE.UU.», www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/4-29372-2007-I0-04 html, 4 de octubre de 2007.
5. Gustavo Duncan, «¿El narcotráfico, un obstáculo a la paz?», Fundación Seguridad & Democracia, Bogotá, 2007, www.seguridadydemocracia.org.
6. Ricardo Bonilla González y Jorge Iván González, «Bien-estar y macroeconomía 2002-2006; el crecimiento inequitativo no es sostenible». http://econpapers.repec.org/paper/col000121/002064.htm, 30 de junio de 2006.
7. Véase Vladimir Carrillo y Tom Kucharz, *Colombia: terrorismo de Estado, Testimonios de la guerra sucia contra los movimientos populares,* Icatia, Barcelona, 2006.
8. Carlos Caballero Argáez, «La estrategia de seguridad democrática y la economía colombiana: un ensayo sobre la macroeconomía de la seguridad», www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra234.pdf, 2002.
9. Boris Salazar y María del Pilar Castillo, *La hora de los dinosaurios, Conflicto y depredación en Colombia,* CIDSE-CEREC, Bogotá, 2001.
10. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Costado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero sirve para medir cualquier forma de distribución desigual, incluso la riqueza. Es un número entre 0 y 1, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y las demás ninguno), www.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini.
11. Según el Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo (CEPA), «entre 1993 y 2005 fueron asesinadas y/o desaparecieron en el país 3,9 millones de personas; 6.3 veces más de lo que las cifras oficiales registran por homicidios. Para el año 2005, las proyecciones demográficas estimaban el número de habitantes de Colombia en 46 millones de habitantes; el último Censo Nacional de Población contabilizó tan solo 42,1 millones. Fenómeno que no se explica por la diáspora colombiana -superior a tres millones de personas-, dado que fue contada en el Censo». Véase *Revista CEPA,* n. 4, Bogotá, julio-septiembre de 2007.
12. Herbert L. A. Hart, *The Concept of Law,* Oxford University Press, Oxford, 1961, p. 121.
13. Hernando Valencia Villa, *Cartas de batalla. Una crítica del constitucionalismo colombiano,* CEREC, Bogotá, 1997, pp. 19-20.
14. Ibídem, pp. 170, 3.
15. Biblioteca L. A. Arango, «El Frente Nacional», www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli60.htm, 2005.
16. Véase Miguel Eduardo Cárdenas Rivera, coord., *La construcción del posconflicto en Colombia. Enfoques desde la pluralidad,* Cerec-Pescol, Bogotá, 2003.
17. Gustavo Duncan, *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia,* Bogotá, Planeta, 2006.
18. Fareed Zakaria, «The Politics of Rage: Why Do They Hate Us?», www.fareedzakaria.com/ARTICLES/newsweek/101501_whyhtml.
19. Véase Eduardo Posada Carbó, «Sobre modelos negociadores de paz», Bogotá, Fundación Ideas para la Paz, ww.ideaspaz.org, 2004.
20. Véase Miguel Eduardo Cárdenas Rivera, coord., *La reforma política del Estado en Colombia,* Cerec-Fescol, Bogotá, 2005.

Colombia, ¿mucha nación?

Herbert Braun*

Muy difícil sería imaginar las violencias Colombianas en los Estados Unidos. Al fin y al cabo, a la región del norte llegaron los colonizadores anglos, convencidos de que iban a crear nuevas vidas espirituales y también materiales en el Nuevo Mundo por el solo hecho de haberse separado de la antigua sociedad, de sus poderes, sus jerarquías, sus tradiciones, sus culturas y sus cultos. Habían partido para no volver a cruzar el océano jamás. Buscaban la libertad. Y así fue como en la Nueva Inglaterra los colonos se fueron integrando en pequeños pueblos, cada uno con su iglesia y su one-room colegio, y unos pedazos de tierra que todos trabajaban. Pensaban de la misma manera, oraban a uno solo Dios, leían la Biblia sin dialogar, y les enseñaban a sus hijos que eran el chosen people, un pueblo -mejor dicho, una serie de individuos- al que Dios había escogido para que ejerciera una vida ejemplar aquí y en el más allá. Cada cual debía aceptar a Dios, find God en su ser, en su fuero interno, abrirse a Él, y albergarlo. A los que les llegaba alguna idea distinta -por bobos, por locos, o porque estaban

* Historiador y profesor de la Universidad de Virginia.

poseídos por el diablo- o a los que no acataban -sea por pasión carnal o convicción religiosa- las rígidas normas dentro de esas autoritarias culturas pueblerinas, nos les iba nada bien.

Pero los pueblitos eran pequeños, y el campo grande y afortunadamente despoblado. Había para dónde irse. A los malos se les echaba. Con ellos no era posible convivir. Ellos se iban, ilusionados con la ya tradicional idea de que un poco más allá, en la otra ribera del río, en el valle tierra adentro, construirían un nuevo y pequeño pueblo -un town- donde todos pensarían como ellos, tendrían su propia iglesia y su colegio, trabajarían codo a codo, y lograrían rehacer su vida y vivir la utopía terrenal. Y así los que comenzaron a considerarse americanos empezaron a separase los unos de los otros, hasta nuestros tiempos, a desparramarse por toda esa tierra, y a buscar dentro de sí mismos, dentro de su self, solitos, en la soledad, en el aislamiento, en otro lugar, esa libertad y esa fe que cada cual tanto añoraba y que todavía hoy los tiene peregrinando.

Dando vueltas por estos lados hoy en día, en bicicleta o aun en carro, se topa uno a cada kilómetro con una iglesia más. Algunas son más pequeñas y más recientemente pintadas que otras. De vez en cuando una porta un techo nuevo. Otras están a punto de desplomarse, pero parece que siguen funcionando un día por semana. Cada cual tiene su avisito: el nombre de la denominación protestante a la que pertenece y expresa; la hora de la congregación, sea las diez o las once de la mañana de cada domingo; el nombre del reverendo de turno. Algunas veces muestran unas palabras tomadas de la Biblia, o mejor aún, del Nuevo Testamento, un mensaje espiritual. Desde siempre han sido muchas estas iglesias. A partir de 1865, pero también antes, se multiplicaron, ya que la liberada población negra fue construyendo sus iglesias, y hasta hoy es raro que blancos y negros celebren juntos a Dios. Cada raza reza por separado.

Es así como la felicidad -el pursuit of happiness que llegó a inscribirse en la Constitución- radica en el individuo, y siempre se encuentra un poco más allá de él. Es la gran paradoja de la vida americana. El individuo no se encuentra, no se halla, y sale a buscar su vida y su esencia en otro lugar, a find himself. Abre campo. El ideal americano desde los primeros días de aquella civilización está en el campo, en el wilderness, en tierras vírgenes y sanas, alejadas de donde vive la gente, del pueblo, de la ciudad, de lo urbano, de lo que corrompe, lejos de todo aquello que va mermando al individuo, al self-made man, al self-sufficient individuo, al ser humano que no depende de nadie. El individuo es anterior a la sociedad. Es la cultura de Henry David Thoreau, de Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Aquí las universidades las construyeron casi todas distantes de la urbe, para que ahí los jóvenes lograran dedicarse a la vida espiritual e intelectual, alejados de la vida misma. Aun en el movimiento estudiantil de los años sesenta, lo que motivaba a miles de jóvenes era encontrar una comuna rural donde pudieran llevar vidas de amor, de pureza, sin tener que ver los shopping malls, y donde pudieran comer frutas sin rastros de pesticidas. Es el país del inconforme cultural, el cowboy, el rebelde sin causa. Son outsiders. Las cosas no cambian. Prácticamente la única manera de llegar a ser presidente de los Estados Unidos hoy en día es rechazando al mismo gobierno que uno va a presidir, rechazando al poder central, a Washington, a las reglas y a las leyes, a la burocracia.

Bastante difícil sería imaginarnos unas violencias estadounidenses en Colombia. Es prácticamente imposible que se dé un Theodore Kaczynski, un unabomber criollo, no tanto porque en Colombia la tecnología está tan poco extendida que no valdría la pena oponerse a ella, sino porque ningún colombiano se iría a vivir a una choza por allá en el páramo, año tras año, en la pobreza total, sin música, sin radio, sin televisión, sin con quién hacer el amor, para no comunicarse con nadie, estar ahí consigo mismo, y ponerse a mandar unas bombas por correo sin que nadie supiera de su autoría. En Colombia no se va uno de la sociedad. No se la rechaza. Nadie, casi nadie, quiere separarse de ella. El colombiano, no importa de qué clase social sea, o si vive en la ciudad o en el campo, busca estar en sociedad, con otros, compartiendo, conversando, bailando, haciendo parte de la esencia vital de la colectividad, de la humanidad.

En Colombia el individuo no se va al monte solo, y no se enmonta para quedarse ahí. No quiere estar allá. En la historia del país no hay movimientos separatistas de algún alcance. Los campesinos de las regiones que el senado conservador Álvaro Gómez Hurtado denominó "repúblicas independientes", simplemente buscaban defenderse, no formar una comuna, una nación nueva, con nombre nuevo. Los que las formaron las entendían como un fenómeno pasajero, y ellos no las llamaron ni "repúblicas" ni "independientes".

El 27 de mayo de 1964, cuando el ejército ya había comenzado sus maniobras alrededor de Marquetalia, la más sonada de esas "repúblicas independientes", dos miembros de una cuadrilla liberal interceptaron en el sitio Rioclaro, en los límites del Huila con el Tolima, en la carretera en construc-

ción entre El Carmen y Planadas, a un inspector de carreteras y a un farmacéutico del distrito de obras públicas del Huila, para que le entregaran al gobernador González Trujillo y al coronel Corredor Pardo, comandante del batallón Tenerife, una carta firmada por Tirofijo, indicándoles que las autoridades deberían enterarse de ella. En la conversación que sostuvieron los dos guerrilleros y los dos funcionarios del Estado, éstos fueron informados de que en el documento Tirofijo señalaba que no permitiría la entrada de tropas a la región por él dominada, pero que sí aceptaría que civiles construyeran la carretera. La cara hacía hincapié en la construcción de escuelas, puestos de salud y almacenes de víveres. Luego del encuentro, el inspector y el farmacéutico cumplieron con la misión que los había llevado a la región. Al hacer entrega de la carta, los dos funcionarios, cuyos nombres no se dieron a conocer, dijeron que les parecía que a Tirofijo lo tenía sin cuidado la presencia de soldados en la región.

Hoy en día, el propósito de la guerrilla en una zona de despeje como el Caguán, no es despejarse del país, sino poderse organizar, cobrar más fuerza, para pelear y conversar mejor con el gobierno. Nariño y Putumayo no buscan la autonomía. Por el contrario, quieren más atención del gobierno nacional. Las regiones del país pretenden que Bogotá les haga más caso, les dé dinero, carreteras, colegios. Los paisas siempre han querido hablar de su región, pero el hacerlo sólo vale la pena cuando se contrasta con y no contra las otras regiones de Colombia. Solitos seguramente tendrían que compararse con otros, quizás con los gringos, y así la cosa sería más complicada.

Lo que atemoriza al colombiano es estar solo. La soledad agobia. Si la novela del Nobel García Márquez se hubiera basado en la historia de los Estados Unidos, seguramente esos cien años habrían tenido mucho de celebración. En Colombia no. Todos piensan que son más de cien años que poco de bueno tienen y nada dieron. ¿Cuántos miles, millones de colombianos no se han escapado de ese asilamiento? En sus Memorias, Alberto Lleras Camargo siente que para los campesinos del siglo XIX "la guerra resultaba un ejercicio alegre, que, con sus tiros y sus gritos, sus asaltos y atropellos a la propiedad y a la mujer del prójimo, rompía la sórdida rutina del trabajo… Porque al campesino aislado en su rancho, más que al habitante de la aldea, lo devoraban la soledad, el silencio, la oscuridad nocturna, el impenetrable rostro de la mujer, el ladrido de los perros, el llanto de las criaturas". "La guerra -dice Lleras- era el correo popular, y a veces el único".

A Lleras mismo le pasó algo similar. Ya en la ciudad se unía con los otros intelectuales para encontrarse, para conversar, para sentirse parte de algo grande, amplio, para sobreponerse "al tedio, al frío, a la desolación" del ambiente pueblerino de la Bogotá de los años veinte. Mejor todavía, los intelectuales se iban de la capital, al extranjero. "Y los demás sentíamos, cada vez que alguien se iba, que éramos náufragos en nuestra isla mediterránea, entre las nubes heladas, tan cerca de los 3.000 metros, separados del mar y de la civilización por espacios sin término…". Un día logró irse él también, "hacia el mundo".

La élite política de Colombia se fue formando generación tras generación

precisamente para que pudieran estar juntos, y de ellos brotó un sentido de colectividad. En 1944 Juan Lozano y Lozano escribió que "Para nosotros particularmente, los nativos de los países tropicales, sin cultura, sin tradición, con gloria tan inadvertida, en condiciones de vida social tan primitiva, es la sensación de nacer, crecer, desenvolverse, unirse y chocar, saberse recíprocamente la vida, estar presente en los momentos de duelo y alegría, convivir, en fin, con un grupo de seres, lo que nos ata al concepto de nacionalidad, lo que nos da la emoción profunda e irremplazable de la patria".

Los rebeldes colombianos también son así. Son insiders. Lo que han estado buscando durante los últimos 50 años es ser parte de la sociedad. En vez de separarse, quieren la integración de Colombia. Desde el aislamiento del cautiverio en 1988, Álvaro Gómez Hurtado siente ese deseo de la guerrilla del M-19. "Porque en ellos menos se insistía en la posesión de la tierra y mucho más en la indefensión y el aislamiento de los campesinos". "Se protestaba -escribe en Soy libre, libro de las memorias de su secuestro- por la soledad, por la incomunicación, por la falta de servicios, por la ausencia de maestros y por el mal estado de las vías".

> Cuando en los años cincuenta los jefes liberales rompieron sus redes clientelistas con sus séquitos del campo, aquéllos se quedaron por fuera, desamparados, aislados, solitos en el campo. Tirofijo se acuerda de esos momentos. "¿Qué planes tienen? ¿Qué dicen los Lleras, los López? Nada, silenciados… ¿Qué dice la dirección liberal departamental…? Pocas noticias. Nada en absoluto, dejaron de abrir la boca, la sellaron de pensamientos; por tanto, dejaron de pensar por miedo físico. O por lo menos ya no actúan. Nosotros no sabemos nada en absoluto, esa gente está perdida en la bruma de la legalidad de las ciudades… Esta situación está muy complicada, parece que todo cambió de carácter, entonces hay que buscar una solución. Ya uno se decía, pero ¿con quién la buscamos? ¿A quién recurrimos? ¿A las armas? ¿Dónde están las armas, cómo se Consiguen? Si nos quedamos así de Tranquilos, nos van a matar a todos. El Cuerpo no resiste más humillación".

Y muchos años después de esa separación forzosa, Tirofijo siente el aislamiento todavía más. "Ya son muchos los años que llevamos gateando en esta lucha… Pero yo creo que hemos tenido un enemigo, el pero de todos los enemigos. ¿Saben cuál ha sido…? Hablo del aislamiento de esta lucha, que es peor que aguantar hambre por una semana seguida. Entre ustedes, los de la ciudad, y nosotros que hemos estado enmontados, hay de por medio una gran montaña. Las voces de ustedes, las voces de nosotros no se escuchan, pocas veces se hablan. No es una distancia de tierras y de ríos, de obstáculos naturales, no es la montaña atravesada. De nosotros es poco lo que se sabe entre ustedes, de ustedes es poca la historia que conocemos aquí".

Entre los rebeldes y el gobierno hay teléfonos, conversaciones, diálogos, encuentros, relaciones, chistes, tragos. Es casi como si el proceso de paz tuviera una dinámica propia, más allá de cualquier resultado que pueda traer. ¿Sería un despropósito pensar que una de las muchas razones que llevan a la guerrilla a secuestrar a miembros de la sociedad es el deseo de verse con ellos, de relacionarse con otros, de comunicarse con las familias, de sentir esa angustia humana, de hacerse presentes en la vida privada de muchos colombianos, de decir "aquí también estamos nosotros", de conversar, de transar, de entregar al secuestrado y recibir algo en el canje, dinero, las gracias, la reputación de haber tratado humanamente al plagiado?

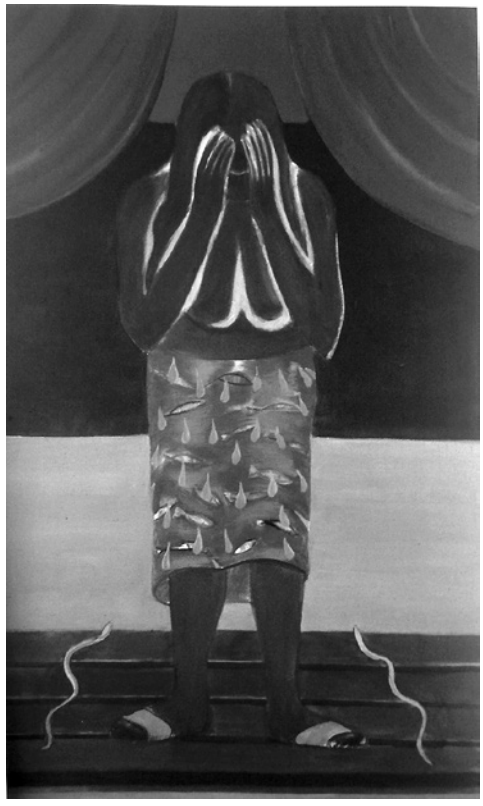
Lo que pasa es que a estas tierras llegaron los españoles y no los ingleses. Establecieron sociedades completas, con un Estado regulador y paternalista, una sociedad jerárquica donde cada cual tenía su lugar por encima y por debajo de otros, donde las personas se relacionaban, era parte de un organismo social, integradas de manera disímil a la sociedad. En Colombia el individuo se entiende dentro del conjunto de la sociedad, no por fuera de ella, por sí mismo. Ese orden jerárquico se fue

desmoronando después de la independencia, el Estado se alejó de la sociedad, y poco a poco la gente se fue organizando por su cuenta, de abajo hacia arriba. Ahí radica mucha de la vitalidad colombiana. Los de abajo han buscado integrarse a la colectividad, muchas veces con bastante éxito, pero otras no. Los de arriba no han sabido, y algunos nos han querido, abrirse. Mucha veces, como bien se sabe, incitaban a que los de una colectividad política mataran a los de otra. Y luego, los de arriba se separaron. Desesperados por no poder controlar tanto alboroto, tanta vitalidad, tanta gente un poco deferente, dejaron de entenderse entre ellos, y se fueron. A comienzos de 1949 dejaron sus cargos públicos y algunos partieron al exilio. Decían que el problema de Colombia era que la democracia había llegado demasiado temprano, y que al pueblo no se lo podía controlar. La noción de nacionalidad que vivía Lozano y Lozano no daba para un país en el que todos querían participar, tener su lugar y estar albergados por la patria.

Y ahí estamos. Los rebeldes no se enmontaron para encontrarse consigo mismos, sino para encontrarse con nosotros, con la ciudad, la civilización. Y durante todo un medio siglo de historia, desde la urbe no hemos sabido cómo integrarlos. Cosa complicada, Colombia.

Veamos dos breves textos. Después de que el ejército cercó y bombardeó la "república independiente" de Marquetalia en 1964, el naciente movimiento guerrillero hizo la siguiente declaración al año siguiente.

"Nosotros, campesinos trabajadores, amantes de la paz, progreso y bienestar social, ansiosos de una patria libre y soberana sin intervencionistas en sus asuntos internos, sin estado de sitio, y sin violencia oficial; después de haber soportado por varios meses el bloqueo económico-militar oficial a partir del 24 de septiembre de 1964 que produjo la muerte de más de treinta niños por falta de atención médica y la pérdida de las cosechas. Fuimos pacientes en esperar que promesas oficiales de respeto a la vida, honra y bienes de los trabajadores fueran cumplidas, después de dirigirnos a todas partes donde nos fue posible: al parlamento nacional y demás entidades representativas, al alto clero, el gobierno nacional y no fuimos oídos… Nos hemos visto obligados a empuñar las armas y convertirnos en un movimiento guerrillero y por tanto hemos resuelto: Primero. Permanecer en pie de lucha…". El otro



texto apareció en El Tiempo el 1° de mayo de 1964, dieciséis antes de que se diera comienzo al ya anunciado "gran plan de acción cívica militar" del ejército contra Marquetalia. "Informaciones obtenidas anoche por uno de nuestros redactores dan cuenta de que su eminencia el cardenal, arzobispo de Bogotá, monseñor Luis Concha Córdoba, en nota cuyo texto aún no se ha dado a conocer, negó el permiso solicitado por los sacerdotes monseñor Germán Guzmán, Carrillo Torres y Gustavo Pérez, para formar parte de la comisión socio-económica que proyectaba viajar a las regiones del sur del departamento del Tolima, muy especialmente a Marquetalia, con el fin de buscar un entendimiento con los campesinos para las labores de pacificación que actualmente adelanta el gobierno nacional… La nota en la cual su eminencia el cardenal niega el permiso solicitado fue enviada ayer al ministro de guerra encargado, mayor general Gabriel Rebeiz Pizarro, en respuesta a una carta que el general Rebeiz envió en días pasados al señor cardenal, informándole de la labor que la comisión se proponía adelantar con la cooperación de las fuerzas armadas, y a la vez solicitándole el permiso respectivo para el viaje de los sacerdotes".

Al día siguiente, los otros tres miembros de la comisión, Gerardo Molina, Orlando Fals-Borda y Eduardo Umaña Luna, los dos últimos autores junto con Germán Guzmán del ahora clásico libro La Violencia en Colombia, publicado en 1962 y reeditado en 1964, informaron a la opinión pública que sin la participación de los tres sacerdotes la comisión no podía funcionar a cabalidad, y por tanto quedaba desintegrada.

Son orígenes próximos de la crisis que vive el país.

Programa agrario de las Farc-Ep*

Compañeros campesinos, obreros, estudiantes, artesanos, intelectuales, soldados, policías y oficiales patriotas, hombres y mujeres de Colombia.

Víctimas de cinco guerras

Nosotros somos nervio de un movimiento revolucionario que viene de 1948. Contra nosotros, campesinos del Sur del Tolima, Huila y Cauca, desde 1948 se ha lanzado la fuerza del gran latifundio, de los grandes ganaderos, del gran comercio, de los gamonales de la política oficial y de los comerciantes de la violencia.

Nosotros hemos sido víctimas de la política de "a sangre y fuego" preconizada y llevada a la práctica por la oligarquía que detenta el poder.

Contra nosotros se han desencadenado en el curso de los últimos 45 años, cinco guerras: una, a partir de 1948; otra, a partir de 1954; otra, a partir de 1962; otra,

* Publicado el 20 de julio de 1964. Actualizado en la VIII Conferencia de 1993.

a partir del 18 de mayo de 1964 cuando los Altos Mandos declaran oficialmente que ese día empezaba la "Operación Marquetalia"; y esta que enfrentamos a partir del 9 de diciembre de 1990, cuando el dictador Gaviria y los Altos Mandos Militzares iniciaron la operación de Exterminio contra el Secretariado de las farc en *Casa Verde* y de agresión militarista contra el movimiento popular en todo el país.

Hemos sido víctimas de la furia latifundista y castrense porque aquí, en esta parte de Colombia, predominan los intereses de los grandes señores de la tierra y los intereses en cadena de la reacción más oscurantista del país. Por eso nos ha tocado sufrir en la carne y en el espíritu, todas las bestialidades de un régimen podrido que brota de la dominación de los monopolios financieros entroncados con el imperialismo.

Una vía cerrada

Es por eso, que en esta guerra participan contra nosotros aviones, Altos Mandos y especialistas norteamericanos. Es por eso, que se lanzan contra Marquetalia 16.000 hombres provistos de todo tipo de armas. Es por esto, que contra nosotros se emplea la táctica del bloqueo económico, de los cercos de exterminio, de las acometidas por aire y tierra y, por último, la guerra bacteriológica.

Es por esto que el gobierno, los Altos Mandos Militares y el imperialismo yanki, emplean cientos de millones en armas, pertrechos, pagos de espías y delatores. Es por esto, que el gobierno y los Altos Mandos sobornan y corrompen conciencias, matan, persiguen y encarcelan a la gente colombiana que se levanta a la lucha solidaria con nosotros, víctimas de una cruel e inhumana guerra de exterminio.

Nosotros hemos golpeado en todas las puertas posibles en busca de auxilio para evitar que una cruzada anticomunista, que es una cruzada contra nuestro pueblo, nos condujera a una lucha armada prolongada y sangrienta.

Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas

"Repúblicas Independientes" y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder.

El régimen actual, ha incorporado a su sistema de gobierno, formas abiertas de fascismo. Al mando de las fuerzas represivas se hallan los elementos más provocadores y aventureros. Las Fuerzas Armadas oficiales están llevando a la práctica la Teoría de la Seguridad Nacional, que es la filosofía del terror, la guerra sucia, el paramilitarismo y la muerte, bajo el patrocinio y mando de la oligarquía y de un grupo de Altos Oficiales que hacen suya la política, la táctica y la estrategia de la guerra preventiva y del enemigo interno para mantener la disciplina social de los monopolios, la explotación de nuestro pueblo y de nuestros recursos naturales por parte del imperialismo y de una clase dominante rapaz y reaccionaria como la colombiana.

Por eso esta guerra ha asumido en la actualidad un genuino carácter nacional, que necesariamente incorpora a la lucha armada revolucionaria a las más amplias masas de nuestro pueblo contra los soportes militares del régimen.

Por eso, las farc-ep se han constituido como una organización político-militar que recoge las banderas Bolivarianas y las tradiciones libertarias de nuestro pueblo para luchar por el poder y llevar a Colombia al ejercicio pleno de su soberanía nacional y a hacer vigente la soberanía popular. Luchamos por el establecimiento de un régimen político democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los Derechos Humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos quienes vivimos en Colombia.

Luchamos por una Política Agraria que entregue la tierra del latifundio a los campesinos: por eso, desde hoy, 20 de julio de 1964 somos un ejército guerrillero que lucha por el siguiente Programa Agrario:

Primero: A la Política Agraria de Mentiras de la Oligarquía, oponemos una efectiva Política Agraria Revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano, entregando en forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador.

La Política Agraria Revolucionaria entregará a los campesinos favorecidos por ella, la ayuda técnica y de infraestructura, herramientas y animales de labor para la debida explotación económica de la tierra. La Política Agraria Revolucionaria es condición indispensable para elevar verticalmente el nivel de vida material y cultural de todo el campesinado, librarlo del desempleo, el hambre, el analfabetismo y las enfermedades endémicas que limitan su capacidad de trabajo; para liquidar las trabas del latifundismo y para impulsar el desarrollo de la producción agropecuaria e industrial del país. La Política Agraria Revolucionaria confiscará las tierras ocupadas por compañías imperialistas norteamericanas a cualquier título y cualesquiera que sea la actividad a la cual estén dedicadas.

Segundo: Los colonos, ocupantes, arrendatarios, aparceros, terrazgueros, agregados, etc., de tierras de los latifundistas y de la nación, recibirán los títulos correspondientes de propiedad de los terrenos que exploten. Se liquidará todo tipo de explotación atrasada de la tierra, los sistemas de aparcería, el arriendo en especie o en dinero.

Se creará la unidad económica en el campo de acuerdo con la fertilidad y ubicación de los terrenos, con un mínimo de 10 a 20 hectáreas, cuando se trate de tierras planas y aledañas a poblaciones o ciudades y, en otras tierras, de acuerdo con su fertilidad y red de comunicaciones. Se anularán todas las deudas de los campesinos con los usureros, especuladores, instituciones oficiales y semi-oficiales de crédito.

Tercero: El Gobierno Revolucionario respetará la propiedad de los campesinos ricos que trabajen personalmente sus tierras. Se preservarán las formas industriales de trabajo en el campo. Las grandes explotaciones agropecuarias que por razones de orden social y económico deban conservarse, se destinarán al desarrollo planificado de todo el pueblo.

Cuarto: El Gobierno Revolucionario establecerá un amplio sistema de crédito con facilidades de pago, el suministro de semillas, asistencia técnica, herramientas, animales, aperos, maquinaria, etc., tanto para los campesinos individuales como para las cooperativas de producción que surjan en el proceso. Se creará un sistema planificado de irrigación y electrificación y una red de centros oficiales de experimentación agrotécnica.

Se organizarán servicios suficientes de sanidad para la atención completa de los problemas de la salud pública en los campos. Se atenderá el problema de la educación campesina, la erradicación total del analfabetismo y se creará un sistema de becas para el estudio técnico y superior de los hijos de los trabajadores de la tierra. Se cumplirá un vasto plan de vivienda campesina y la construcción de vías de comunicación de los centros

rurales productivos a los centros de consumo.

Quinto: Se garantizarán precios básicos remunerativos y de sustentación para los productos agropecuarios.

Sexto: Se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que les hayan usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivos. Las comunidades indígenas gozarán de todos los beneficios de la Política Agraria Revolucionaria. Al mismo tiempo estabilizará la organización autónoma de las comunidades respetando sus Cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna.

Séptimo: La realización de este Programa Agrario Revolucionario dependerá de la alianza obrero-campesina y del Frente Unido de todos los colombianos en la lucha por el cambio de régimen, única garantía para la destrucción de la vieja estructura latifundista de Colombia. La realización de esta política se apoyará en las más amplias masas campesinas, las que contribuirán decididamente a la destrucción del latifundio. Para tal fin se organizarán potentes uniones de lucha campesina, fuertes sindicatos, comités de usuarios y juntas comunales. Por eso, este Programa se plantea como necesidad vital, la lucha por la forjación [sic] del más amplio frente único de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país para librar un combate permanente hasta dar en tierra con el régimen oligárquico al servicio de los imperialistas yankis, que impiden la realización de los anhelos del pueblo colombiano.

Octavo: Las farc-ep en su momento promulgarán la Primera Ley de la Política Agraria Revolucionaria. Por eso invitamos a los campesinos, obreros, empleados, estudiantes, artesanos, pequeños industriales y comerciantes, a la burguesía nacional que esté dispuesta a combatir contra el imperialismo, a los intelectuales demócratas y revolucionarios, a todos los partidos y corrientes de izquierda y de centro, que quieran un cambio en sentido del progreso, a la gran lucha revolucionaria y patriótica por una Colombia para los colombianos, por el triunfo de la revolución, por un gobierno democrático de Liberación Nacional. Marquetalia, Julio 20 de 1964.

Firmas:

Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Rigoberto Lozada, Isauro Yosa, Isaías Pardo, Luis Pardo, Jesús María Molina, Dario Lozano, Tarcisio Guaracas, Parménides Cuenca, Roberto López, Miryam Narváez, Judith Grisales, Jesús Ortíz, Rogelio Díaz, Miguel Aldana, Hernando González Acosta, Gabriel Gualteros, Miguel Pascuas, Jaime Bustos, Alcides González y hermanos, David González, Andrés López y hermanos, Luis Salgado, Pedro Ipús, Evaristo Lozada, Vicente Torres, Desiderio García, Agustín Cifuentes, Abraham García, Ismael Valderrama, Miguel Garzón, Jaime García, José Domingo Rivera, Mariano Pérez Montes.

Acerca del terrorismo

Acerca del terrorismo

Julio César Carrión Castro*

En momentos en que los representantes del Estado Colombiano han emprendido una serie de conversaciones, en busca de acuerdos para la superación de un conflicto armado que se ha extendido por más de medio siglo, sectores regresivos del espectro político nacional e internacional, insisten astuta y machaconamente en señalar como erróneo o equivocado sostener diálogos con "terroristas" y, con este tipo de argumentos pretenden que se rompan las conversaciones y que se impongan exclusivamente las medidas de fuerza.

En la Revista *Aquelarre* consideramos pertinente abrir una discusión respecto al uso y al abuso, que los políticos y los medios de comunicación, han hecho del concepto de "terrorismo".

* Director del Centro Cultural Unversiadad del Tolima

Definir el concepto de *terrorismo* se ha convertido en un asunto complicado para las ciencias políticas contemporáneas, dado no sólo el carácter polisémico del término, sino la compleja maraña ideológica que éste comporta, principalmente después de los hechos del 11 de septiembre de 2001. La amplitud interpretativa de la palabra *terrorismo*, la ha ido transformando, de vocablo marginal, en expresión primordial y de uso obligado y cotidiano en el lenguaje de los poderes políticos y de los medios de comunicación.

El terrorismo que antaño se definía vagamente como la realización de actos violentos para infundir terror con fines políticos entre la población civil, que se asimilaba a la ejecución de actos ilícitos de guerra o "crímenes de guerra", hoy, sometidos a la impronta de una visión unipolar del mundo, con el establecimiento de *estados de excepción* permanentes, cuando el criterio de la "seguridad" se impone arbitrariamente por sobre el Derecho y la noción de ciudadanía, cuando se nos establece una falsa alternativa entre seguridad y democracia plena; se dice que la lucha contra el *terrorismo* está en el orden del día y nos compete a todos.

Todas las acciones políticas de oposición, las movilizaciones populares y los quehaceres sindicales, han caído indefectiblemente bajo la sindicación de "terroristas", si no se amoldan a los intereses de las élites en el poder que claman por la "seguridad democrática" en el plano local y a nivel mundial.

Los sectores políticos dominantes y los manipuladores de la opinión, machaconamente insisten en hacernos ver que "terrorismo" es sólo aquel que aplican los individuos o los pequeños grupos de oposición armada, pero el sistemático empleo de la fuerza, de las armas de destrucción masiva y la escalada de acciones genocidas que practican los grandes estados de Occidente, son eufemísticamente denominadas "intervenciones armadas", casi siempre de índole humanitaria y preventiva y que las considerables muertes de civiles son simples "daños colaterales".

El terrorismo hoy, como lo expresa Peter Sloterdijk, es una forma de la cultura del entretenimiento, en la que los terroristas cuentan con la complicidad garantizada del sistema mediático. La rutinaria utilización del término "terrorismo", con todas sus implicaciones y finalidades ideológicas, hace parte de la guerra preventiva que ejecutan los detentadores del poder contra la inconformidad y la insurgencia popular y constituye el preludio de la instauración de un fascismo democrático, en el que el poder de los estados contará con una general aceptación ciudadana.

Con el propósito de aportar elementos de juicio para asumir una postura crítica frente al concepto de *terrorismo*, la Revista Aquelarre ofrece a sus lectores tres documentos, uno de los cuales, *El terrorismo de Estado*, del profesor Antonio García Nossa, nos ha sido cedido de manera exclusiva. Se incluyen también textos de Noam Chomsky y de León Trotsky.

Julio César Carrión Castro
Director revista *Aquelarre*

La posición marxista acerca del terrorismo individual*

León Trotsky

Nuestros enemigos de clase tienen la costumbre de quejarse de nuestro terrorismo. No resulta claro que quiere decir. Les gustaría ponerles el rótulo de terrorismo a todas las acciones del proletariado dirigidas contra los intereses del enemigo de clase. Para ellos, el método principal del terrorismo es la huelga. La amenaza de una huelga, la organización de piquetes de huelga, el boicot económico a un patrón superexplotador, el boicot moral a un traidor de nuestras propias filas: todo esto y mucho más es calificado de terrorismo. Si por terrorismo se entiende cualquier cosa que atemorice o dañe al enemigo, entonces la lucha de clases no es sino terrorismo. Y lo único que resta considerar es si los políticos burgueses tienen derecho a proclamar su indignación moral acerca del terrorismo

* Artículo de la edición de noviembre de 1911 de *Der Kampf* (Nuestra Lucha), órgano teórico de la socialdemocracia austríaca, bajo el título *Acerca del terrorismo.* Trotsky lo escribió a pedido de Federico Adler, director de *Der Kampf*, como respuesta a las actitudes terroristas que ciertos elementos difundían entre la clase obrera de ese país.

proletario, cuando todo su aparato estatal, con sus leyes, policía y ejército no es sino un instrumento del terror capitalista.

Sin embargo, debemos señalar que cuando nos echan en cara el terrorismo, tratan, aunque no siempre en forma consciente, de darle a esta palabra un sentido más estricto, menos indirecto. Por ejemplo, la destrucción de las máquinas por parte de los trabajadores es terrorismo en este sentido estricto del término. La muerte de un patrón, la amenaza de incendiar una fábrica o matar a su dueño, el atentado a mano armada contra un ministro: todos estos son actos terroristas en el sentido estricto del término. No obstante, cualquiera que conozca la verdadera naturaleza de la socialdemocracia internacional debe saber que ésta se ha opuesto de la manera más irreconciliable a esta clase de terrorismo.

¿Por qué? El "terror" mediante la amenaza o la acción huelguística es patrimonio de los obreros industriales o agrícolas. La significación social de una huelga depende, en primer término, del tamaño de la em-presa o rama de la industria afectada; en segundo lugar, del grado de organización, disciplina y disposición para la acción de los obreros que participan. Esto es cierto tanto en una huelga económica como en una política. Sigue siendo el método de lucha que surge directamente del lugar que en la sociedad moderna ocupa el proletariado en el proceso de producción.

Para desarrollarse, el sistema capitalista requiere una superestructura parlamentaria. Pero al no poder confinar al proletariado en un gueto político, debe permitir tarde o temprano, su participación en el parlamento. En las elecciones se expresa el carácter masivo del proletariado y su nivel de desarrollo político, cualidades determinadas por su rol social, sobre todo por su rol en la producción.

Al igual que en una huelga, en las elecciones el método, objetivos y resultado de la lucha dependen del rol social y la fuerza del proletariado como clase.

Sólo los obreros pueden hacer huelga. Los artesanos arruinados por la fábrica, los campesinos cuya agua envenena la fábrica, los lumpenproletarios en busca de un buen botín, pueden destruir las máquinas, incendiar la fábrica o asesinar al dueño.

Sólo la clase obrera consciente y organizada puede enviar una fuerte representación al parlamento para cuidar de los intereses proletarios. Sin embargo, para asesinar a un funcionario del gobierno no es necesario contar con las masas organizadas. La receta para fabricar explosivos es accesible a todo el mundo, y cualquiera puede conseguir una pistola.

En el primer caso hay una lucha social, cuyos métodos y vías se desprenden de la naturaleza del orden social imperante; en el segundo, una reacción puramente mecánica que es idéntica en todo el mundo, desde la China hasta Francia: asesinatos, explosiones, etcétera, pero totalmente inocua en lo que hace al sistema social.

Una huelga, incluso una modesta, tiene consecuencias sociales: fortalecimiento de la confianza en sí mismos de los obreros, crecimiento del sindicato, y, con no poca frecuencia, un mejoramiento en la tecnología productiva. El asesinato del dueño de la fábrica provoca efectos policíacos solamente, o un cambio de propietario desprovisto de toda significación social.

Que un atentado terrorista, incluso uno "exitoso", cree la confusión en la clase dominante depende de la situación política concreta. Sea como fuere, la confusión tendrá corta vida; el

estado capitalista no se basa en ministros de estado y no queda eliminado con la desaparición de aquéllos. Las clases a las que sirve siempre encontrarán personal de reemplazo; el mecanismo permanece intacto y en funcionamiento.

Pero el desorden que produce el atentado terrorista en las filas de la clase obrera es mucho

más profundo. Si para alcanzar los objetivos basta armarse con una pistola, ¿para qué sirve esforzarse en la lucha de clases? Si una medida de pólvora y un trocito de plomo bastan para perforar la cabeza del enemigo, ¿qué necesidad hay de organizar a la clase? Si tiene sentido aterrorizar a los altos funcionarios con el rugido de las explosiones, ¿qué necesidad hay de un partido? ¿Para qué hacer mítines, agitación de masas y elecciones si es tan fácil apuntar al banco ministerial desde la galería del parlamento?

Para nosotros el terror individual es inadmisible precisamente porque empequeñece el papel de las masas en su propia conciencia, las hace aceptar su impotencia y vuelve sus ojos y esperanzas hacia el gran vengador y libertador que algún día vendrá a cumplir su misión.

Los profetas anarquistas de la "propaganda por los hechos" pueden hablar hasta por los codos sobre la influencia estimu-lante que ejercen los actos terroristas sobre las masas. Las consideraciones teóricas y la experiencia política demuestran lo contrario. Cuanto más "efectivos" sean los actos terroristas, cuanto mayor sea su impacto, cuanto más se concentre la atención de las masas en ellos, más se reduce el interés de las masas en ellos, más se reduce el interés de las masas en organizarse y educarse.

Pero el humo de la explosión se disipa, el pánico desaparece, un sucesor ocupa el lugar del ministro asesinado, la vida vuelve a sus viejos cauces, la rueda de la explotación capitalista gira como antes: sólo la represión policial se vuelve más salvaje y abierta. El resultado es que el lugar de las esperanzas renovadas y de la excitación artificialmente provocada viene a ocuparlo la desilusión y la apatía.

Los esfuerzos de la reacción por poner fin a las huelgas y al movimiento obrero de masas han culminado, generalmente, siempre y en todas partes, en el fracaso. La sociedad capitalista necesita un proletariado activo, móvil e inteligente; no puede por tanto, tener al proletariado atado de pies y manos por mucho tiempo. En cambio la "propaganda por los hechos" de los anarquistas ha demostrado cada vez que el Estado es mucho más rico en medios de destrucción física y represión mecánica que todos los grupos terroristas juntos.

Si esto es así, ¿qué pasa con la revolución? ¿Queda negada o imposibilitada? De ninguna manera. La revolución no es una simple suma de medios mecánicos. La revolución sólo puede surgir de la agudización de la lucha de clases, su victoria la garantiza sólo la función social del proletariado. La huelga política de masas, la insurrección armada, la conquista del poder estatal; todo está determinado por el grado de desarrollo de la producción, la alineación de las fuerzas de clase, el peso social del proletariado y, por último, por la composición social del ejército, puesto que son las fuerzas armadas el factor que decide el problema del poder en el momento de la revolución.

La socialdemocracia es lo bastante realista como para no desconocer la revolución que está surgiendo de las circunstancias históricas actuales; por el contrario, va al encuentro de la revolución con los ojos bien abiertos.

Pero, a diferencia de los anarquistas y en lucha abierta con ellos, la socialdemocracia rechaza todos los métodos y medios cuyo objetivo sea forzar el desarrollo de la sociedad artificialmente y sustituir la insuficiente fuerza revolucio naria del proletariado con preparaciones químicas.

Antes de elevarse a la categoría de mé todo para la lucha política el terrorismo hace su aparición bajo la forma del acto individual de la venganza. Así fue en Ru sia, patria del terrorismo. Los azotes a los presos políticos llevaron a Vera Zasulich a expresar el sentimiento de indignación general con un atentado contra el general Trepov (1). Su ejemplo cundió entre la intelectualidad revolucionaria, desprovista del apoyo de las masas. Lo que comenzó como un acto de venganza perpetrado en forma inconsciente fue elevado a todo un sistema en 1879-1881 (2). Las oleadas de atentados anarquistas en Europa Occidental y América del Norte siempre se producen después de alguna atrocidad cometida por el gobierno: fusilamientos de huelguistas o ejecuciones de la oposición política. La fuente psicológica más importante del terrorismo es siempre el sentimiento de venganza que busca una válvula de escape.

No hay necesidad de insistir en que la socialdemocracia nada tiene que ver con esos moralistas a sueldo que, en respuesta a cualquier acto terrorista, hablan solamente del "valor absoluto" de la vida humana. Son los mismos que en otras ocasiones, en nombre de otros valores absolutos -por ejemplo, el honor nacional o el prestigio del monarcaestán dispuestos a llevar

a millones de personas al infierno de la guerra. Hoy su héroe nacional es el ministro que da la orden de abrir fuego contra los obreros desarmados, en nombre del sagrado derecho a la propiedad privada; mañana, cuando la mano desesperada del obrero desocupado se crispe en un puño o recoja un arma, hablarán sandeces acerca de lo inadmisible de la violencia en cualquiera de sus formas.

Digan lo que digan los eunucos y fariseos morales, el sentimiento de venganza tiene sus

derechos. Habla muy bien a favor de la moral de la clase obrera el no contemplar indiferente lo que ocurre en éste, el mejor de los mundos posibles. No extinguir el insatisfecho deseo proletario de venganza, sino, por el contrario, avivarlo una y otra vez, profundizarlo, dirigirlo contra la verdadera causa de la injusticia y la bajeza humanas: tal es la tarea de la socialdemocracia.

Nos oponemos a los atentados terroristas porque la venganza individual no nos satisface. La cuenta que nos debe saldar el sistema capitalista es demasiado elevada como para presentársela a un funcionario llamado ministro. Aprender a considerar los crímenes contra la humanidad, todas las humillaciones a que se ven sometidos el cuerpo y el espíritu humanos, como excrecencias y expresiones del sistema social imperante, para empeñar todas nuestras energías en una lucha colectiva contra este sistema: ése es el cauce en el que el ardiente deseo de venganza puede encontrar su mayor satisfacción moral.

Notas

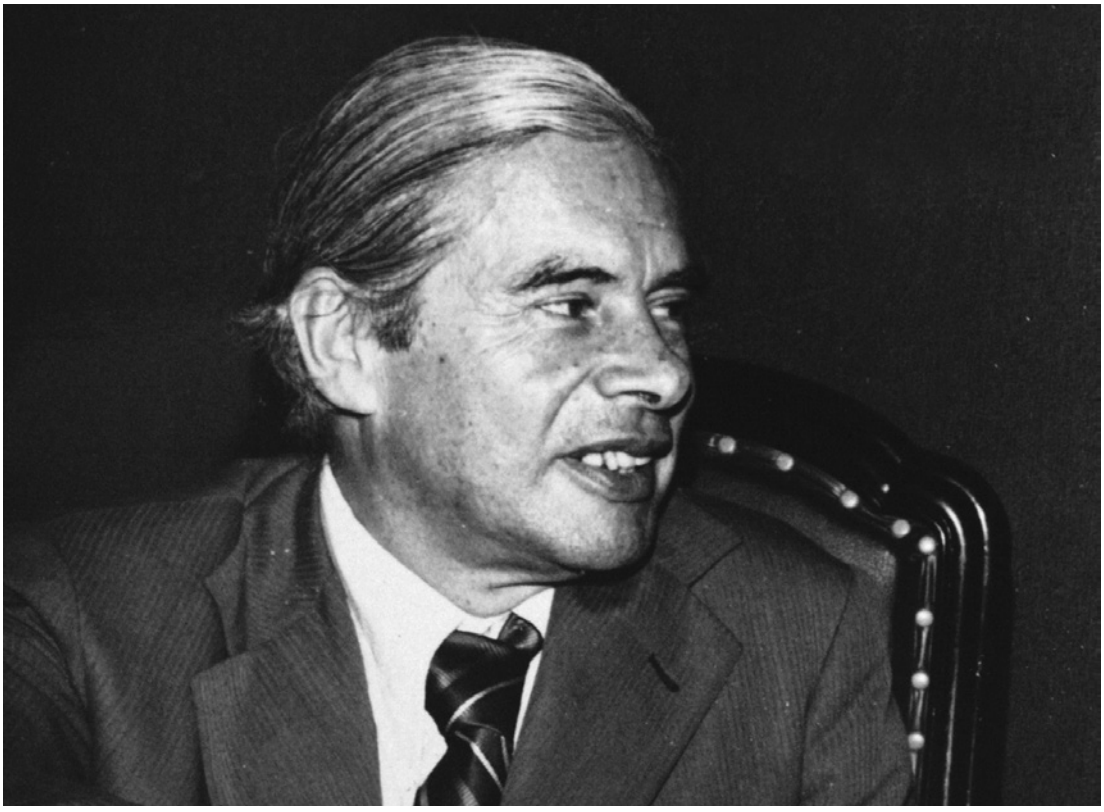
1. Vera Zasulich (1849-1919), perteneció a la dirección del Partido Socialdemócrata Ruso hasta

   1903, en que éste se dividió en mencheviques y bolcheviques. Pasó entonces a la dirección de la fracción menchevique. El 24 de enero de 1878 atentó contra el jefe de policía, Trepov, por cuya orden un detenido había sido sometido a castigos corporales poco antes.

2. Narodnaia Volia (Voluntad del Pueblo) era el partido de los narodniki (populistas), intelectuales rusos organizados para liberar a los campesinos con concepciones anarquistas y medios terroristas. Después del asesinato del Zar Alejandro II en 1881, la organización fue aplastada por el gobierno zarista.

El terrorismo de Estado en América Latina*

Antonio García Nossa



El terrorismo contemporáneo es un fenómeno de extrema, cruel y agresiva violencia, con objetivos políticos explícitamente declarados o deliberadamente encubiertos, desencadenado históricamente cuando ciertos grupos o estamentos sociales han dejado de creer en la posibilidad de defender sus intereses o de transformar sus condiciones de

* Texto inédito fechado por el autor en Bogotá el 1º de diciembre de 1981, poco antes de su muerte, cedido para Aquelarre por el doctor Carlos Rugeles Castillo.

pensamiento y de vida por medio de los mecanismos institucionales existentes y de las reglas del Estado de Derecho y optan por una lucha irregular, sorpresiva, en la que no importan los medios ni los costos sociales sino la conquista, implacable de ciertos objetivos inmediatos. Desde luego, son los propios grupos o movimientos terroristas los que impulsados por el choque frontal con una realidad explosiva por las fuerzas irrefrenables de una reacción subjetiva y radicalmente pesimista contra elladeciden acerca de la incapacidad absoluta o de la insalvable limitación de un cierto ordenamiento jurídico y de un cierto, aparato institucional, punto de partida de su abdicación a la legalidad y de su ruptura con todas las formas convencionales de la acción política.

Una de las posiciones más generalizadas y frecuentes en el análisis del terrorismo dadas sus formas brutales, publicitarias y no convencionales de utilización de la extrema violencia es su calificación como una simple forma de la delincuencia común: semejante óptica desvía el análisis y oculta la verdadera naturaleza y la intrincada causalidad del fenómeno, ya que los actos terroristas pueden originarse y encubrirse en las más diversas y aun antagónicas tendencias políticas, hacia la izquierda o hacia la derecha. Otro de los más frecuentes errores es el que resulta de confundir, en una misma categoría, a grupos terroristas y a destacamentos guerrilleros, ya que estos se articulan y operan de acuerdo con unas normas político-militares, y aquellos repudian toda forma convencional de organización y de acción, no se detienen ante los costos humanos o sociales y no evalúan los medios sino en términos de eficiencia destructiva. Por desgracia, semejante error

de óptica y de capacidad analítica, no es sólo producto de la banalidad y contaminación ideológica de ciertos medios de comunicación social, sino también expresión de la doctrina norteamericana de la Seguridad Nacional, que califica indiscriminadamente como *terroristas* a todos los grupos alzados en armas contra una cierta organización de la sociedad y del Estado y que toma en préstamo del fascismo la peligrosa teoría de que todo tipo de oposición o de resistencia a unas ciertas formas del absolutismo político (propagadas no sólo a través de los gobierno de fuerza sino de las democracias aparentes que se apoyan más en el estado de sitio y en las prácticas represivas que en la libre expresión del sistema representativo y en el libre juego de la opinión pública) constituye un amplio repertorio de formas punibles de subversión. En este camino, el absolutismo político transforma los sistemas, de poder y los aparatos del Estado en una artillada estructura cuyos objetivos ya no son el bien común o la búsqueda de ese mínimo consenso de las diversas clases o grupos sociales sin el cual no es posible la convivencia aceptada y pacífica, -el *Pacto Social* a que se han referido hace siglos el Padre Mariana o Rousseausino el arrasamiento puro y simple de la oposición -de toda oposición- y la eliminación implacable y sistemática de toda posible alternativa. Una vez que se han destruido las bases del Estado de Derecho y el respeto de las clases, partidos o grupos gobernantes por todo aquello que constituye el frágil armazón de la democracia política y el delgado piso de los Derechos Humanos, se inicia un nuevo e irrefrenable proceso: el de la acción directa de los organismos de Seguridad de Estado abdicando progresivamente de toda norma moral y atropellando sin control posible las formas de la legalidad vigente.

En el vertiginoso desarrollo de esta estrategia de la acción directa contra las declaradas fuerzas sociales en estado de subversión, se considera que por tratarse de una actividad realizada por aparatos del Estado, la violencia cualquiera que sea, se legitima en sí misma y no tiene otro límite que el de su eficacia prác-

tica en el desmantelamiento puro y simple de ciertos objetivos. Ocurre entonces que estos aparatos del Estado que repudian las normas del Derecho al aplicar las reglas de la guerra interior de contra-insurgencia y al aceptar la validez de todas las formas de la violencia consideradas eficaces se sitúan en una posición semejante al de los grupos terroristas, desechan toda limitación humana o moral y se dejan arrastrar, progresivamente, hacia esas formas de acción demoledora, brutales y degradantes, condenadas por el. Derecho de Gentes en los casos de guerra convencional entre naciones.

Lo que funciona, entonces, no es la utilización defensiva y sujeta a normas de esos tipos de coerción o de fuerza sin los cuales no existiría el Estado de Derecho, sino el *terrorismo de Estado*, ejercido incontroladamente a través de órganos públicos pero sin ninguna limitación de carácter legal o moral. Nadie podría decir, exactamente, cuándo la legítima acción defensiva de un Estado de Derecho se transforma en una acción abusiva y brutal, fuera de toda norma o de toda posibilidad de regulación o de control jurídico-político.

Por la ancha y complaciente vía del estado de sitio y de la suspensión indefinida de las garantías constitucionales -a partir de la lejana época de la república liberal de López Pumarejo y Eduardo Santos- fueron articulándose, progresivamente los eslabones de este sistema de reacción en cadena: retención arbitraria de las personas sin proceso y sin Juez, violación punitiva de los domicilios y de la correspondencia, demolición o arrasamiento de las libertades personales y públicas, creciente ilegalización de las huelgas o de las formas de expresión del descontento y la protesta, asignación sistemática, a la justicia militar de ese enorme y complejo repertorio de problemas y conflictos relacionados con el orden público.

Mientras en, los países capitalistas desarrollados -llámese Inglaterra o Estados Unidos, Francia o Suecia- el Estado de Derecho tiende a asimilar institucionalmente los conflictos sociales y políticos y a ampliar el territorio de

la legalidad política, en los países latinoamericanos ocurre todo lo contrario: El Estado -más de hecho que de Derecho- procura restringir al mínimo el área de la legalidad o de la asimilación institucional de los conflictos y a ampliar, correlativamente, el territorio de la subversión o de la actividad no tolerada por los órganos del poder autoritario. Dentro de estos marcos históricos se generan y propagan los fenómenos del absolutismo político y se desencadenan los procesos de desmantelamiento de la democracia representativa y del Estado de Derecho. Sin embargo, es necesario ponerse en guardia frente a las tendencias conceptuales que confunden y equiparan las diversas formas del absolutismo político: no todo gobierno absolutista aplica el terrorismo, aún cuando se apoye en diversas, formas de violencia institucional. En otros términos: el terrorismo de Estado no es el modo necesario de operación de todas las formas de absolutismo político no está necesariamente encarnado en gobiernos militares. Eso depende de la naturaleza y condiciones de ciertos contextos sociales y políticos, sin cuya caracterización no es posible establecer la naturaleza y los alcances de una cierta forma específica de Estado absolutista.

El fenómeno del *terrorismo de Estado* no es sólo una contrapartida histórica del terrorismo activado por un grupo político-social, sino es la forma más extrema y despiadada del terrorismo, ya que se ejecuta a través de cuerpos, órganos encargados de la preservación, corrección y supervivencia de una sociedad. Cuando esos órganos o cuerpos de Estado desechan las normas jurídicas e invalidan prácticamente los Derechos Humanos -esto es, cuando deciden colocarse también fuera de las limitaciones de un sistema civilizado de leyes y de legitimidad democrática bien sea directamente o por medio de cuerpos militaresnada puede ya esperar. Las cosas han regresado a la situación en que estaban hace muchos siglos o a las recientes y oscuras épocas victoriosas del fascismo. Las

Naciones Unidas no sólo lucharon en todos los frentes del mundo contra unas modalidades del imperialismo italo-alemán, sino contra un sistema brutal de negación y arrasamiento del Derecho, de los derechos de los pueblos, de las razas, de las Naciones, de las personas. Lo que caracterizó al fascismo no fue tanto la organización político-militar y la mitificación cesarista del Estado, como el arrasamiento bárbaro de los Derechos Humanos y el empleo sistemático del *terrorismo* para aniquilar toda oposición, toda resistencia, toda forma legítima de descontento: así nacieron y se desarrollaron monstruosamente todos los medios instrumentales del terrorismo de Estado, el secuestro, el campo de concentración, la tortura física y moral, el castigo degradante, la detención arbitraria, el desprecio absoluto y despiadado por la vida humana.

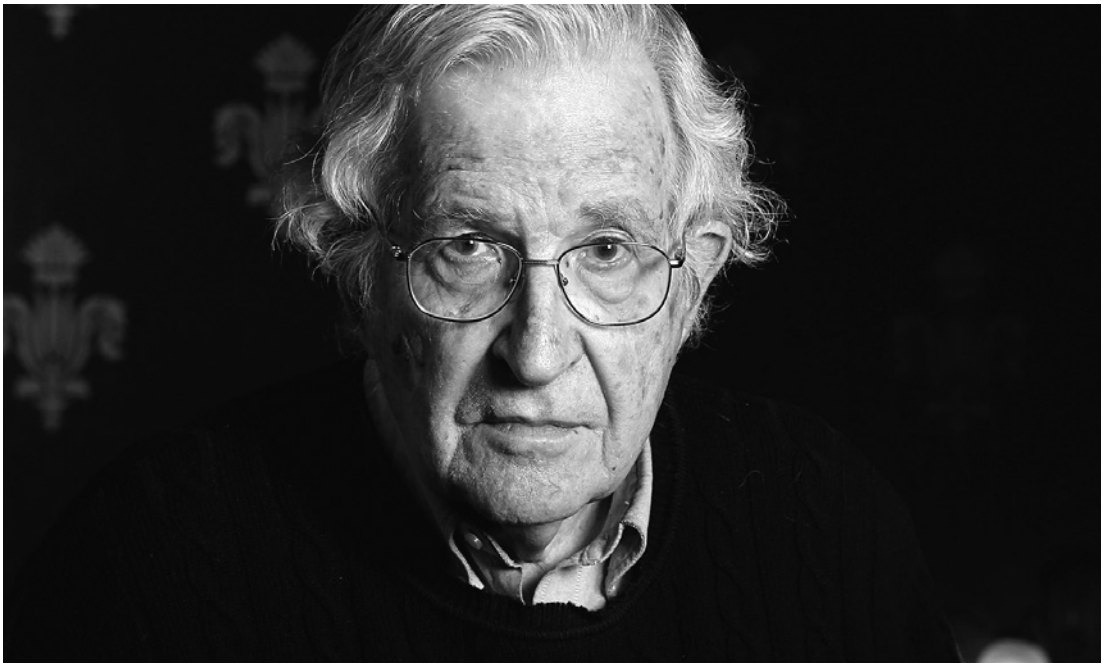
En el caso de la América Latina, los resultados de este tipo de terrorismo están a la vista; las sociedades se han envilecido, el poder público ha perdido respeto y legitimidad, se ha roto la posibilidad de convivencia pacífica, se han desgarrado internamente los países entre víctimas y victimarios; la autoridad pública se ha hecho tan ineficaz como prepotente y se han alejado las posibilidades de enfrentar con éxito los problemas del subdesarrollo económico, político y cultural.

Algo quiere decir el que ni uno sólo de los países en los que se ha practicado sistemáticamente el terrorismo de Estado -Argentina, Uruguay, Chile o antes Nicaragua o Cubahan dado un sólo paso adelante en el plano de la economía, de la cultura, de la industrialización, de los cambios tecnológicos o del desarrollo. Todo lo contrario; aún naciones tan potencialmente ricas como Argentina, se encuentran hoy en las puertas de la descomposición y del colapso, después de una larga y ominosa dictadura ejercida no sólo por los generales sino por el aparato institucional y los órganos terroristas de los cuerpos armados. En el caso argentino, se ha demostrado que el terrorismo de Estado está sujeto a su propia y asoladora dinámica, ya que continúa funcionando aún después de que han sido desmantelados los destacamentos guerrilleros y aplastados los grupos terroristas. Absolutismo y terrorismo estatal se nutren recíprocamente y terminan por bloquear las vías de organización y expresión democrática de los pueblos y las posibilidades históricas de restablecimiento de la democracia política y del Estado de Derecho. Y algo más: terminan por desviar el esfuerzo latinoamericano por falsas pistas, por retrasar su desarrollo y por hacer más profundas las brechas que separan a la América Latina de las naciones industriales de Occidente o que desgarran internamente su organización social.

Terrorismo y respuesta justa

(Fragmento)

Noam Chomsky
Abril de 2002



Una definición del terrorismo

El 11 de Septiembre entrará seguramente en los anales del terrorismo como un momento definitorio. Los atentados de ese día fueron condenados en todo el mundo como graves crímenes contra la humanidad, con el acuerdo casi universal de que todos los Estados deberían actuar para "librar al mundo de los malvados" y de que "el azote del terrorismo" -particularmente el terrorismo internacional respaldado por algunos Estados- es una plaga propagada por "opositores depravados a la propia civilización" en un "regreso a la barbarie" que no puede ser tolerado. Pero más allá del enérgico apoyo a las palabras de los dirigentes políticos estadounidenses -George W. Bush, Ronald Reagan y su secretario de

Estado George Shultz- (1) las interpretaciones han sido variadas, tanto en la cuestión concreta de la respuesta apropiada a los crímenes terroristas como en el problema más genérico de determinar su naturaleza.

Sobre esta última, la definición oficial estadounidense llama terrorismo al "uso calculado de la violencia o la amenaza de emplearla para alcanzar fines de naturaleza política, religiosa o ideológica... mediante la intimidación, la coerción o la inculcación del miedo".(2) Esa formulación deja muchas preguntas abiertas, entre ellas la eventual legitimidad de acciones violentas con el fin de lograr "el derecho de autodeterminación, la libertad o la independencia, según lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, de los pueblos privados por la fuerza de esos derechos..., en particular de los pueblos bajo regímenes coloniales y racistas o una ocupación extranjera... ". En su denuncia más vigorosa de los crímenes terroristas, la Asamblea General de la ONU respaldó no obstante tales acciones por 153 votos contra 23. (3)

En la explicación de sus votos negativos Estados Unidos e Israel se refirieron a las frases que acabamos de citar. Entendían que justificaban la resistencia contra el régimen sudafricano, un aliado de Estados Unidos responsable de más de un millón y medio de muertos y de 60.000 millones de dólares en daños a los países vecinos tan sólo en 1980-88, dejando a un lado los causados en el propio país. Esa resistencia era dirigida por el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, uno de los "grupos terroristas más notorios" según un informe del Pentágono de 1988, mientras que la Renamo (Resistencia Nacional Mozambiqueña), financiada por el gobierno sudafricano, era calificada en el mismo informe como un mero "grupo insurgente indígena", aun señalando que podía haber matado a 100.000 civiles en Mozambique en los dos años precedentes(4). Las mismas frases servían para justificar la resistencia frente a la ocupación militar israelí, entonces en su vigésimo año, que mantiene el sometimiento de los territorios ocupados mediante la violencia sistemática con la decisiva ayuda militar y diplomática de Estados Unidos, esta última con el fin de bloquear el consenso internacional existente desde hace muchos años en torno a la necesidad de un acuerdo de paz (5).

A pesar de tales desacuerdos fundamentales, la definición oficial de Estados Unidos me parece adecuada como punto de partida para esta discusión(6), aunque los desacuerdos arrojan cierta luz sobre la naturaleza del terrorismo según distintas perspectivas.

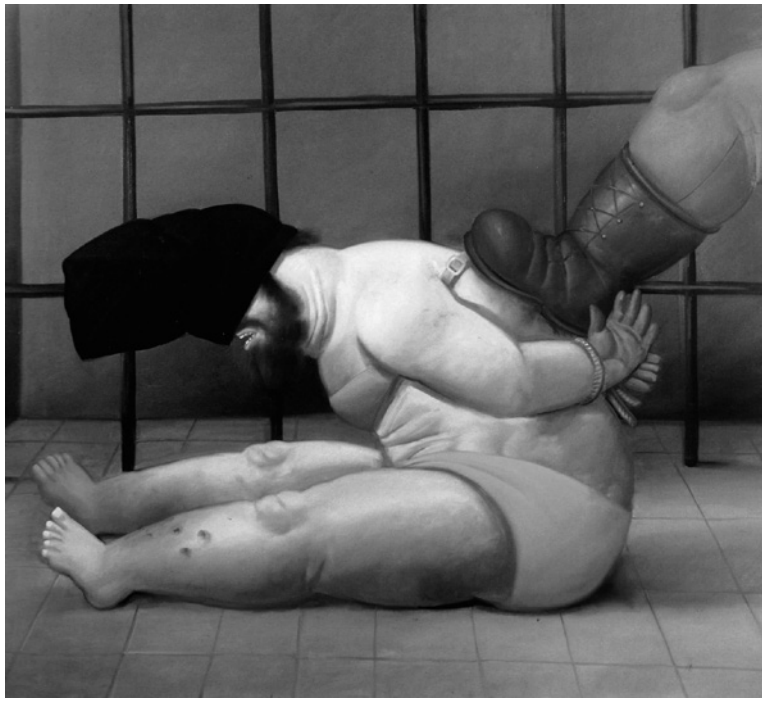
Volvamos a la cuestión de la respuesta apropiada. Algunos argumentan que el terrorismo es un mal "absoluto" y merece como respuesta "una doctrina igualmente absoluta" (7), lo que parece dar a entender la necesidad de un ataque militar implacable según la doctrina Bush, citada con evidente aprobación en esa misma colección de ensayos sobre la Era del Terror: "Si alguien da cobijo a terroristas es un terrorista; quien ayuda e incita a terroristas es un terrorista y se le debe tratar como a tal". El volumen en cuestión refleja la opinión expresada en Occidente que considera apropiada y correctamente "calibrada" la respuesta de Esta-

dos Unidos y el Reino Unido, pero el alcance de tal consenso parece limitado a juzgar por las pruebas disponibles, sobre las que volveremos más adelante.

Más en general, no abundan los adeptos a la doctrina de que el bombardeo masivo es la respuesta apropiada a los crímenes terroristas, ya sean los del 11 de Septiembre u otros aún peores que por desgracia no son difíciles de encontrar. Eso si adoptamos el principio de universalidad: si una acción es correcta (o incorrecta) cuando la llevan a cabo otros, será igualmente correcta (o incorrecta) cuando la efectuamos nosotros. Los que no llegan al nivel moral mínimo de aplicarse a sí mismos las normas que aplican a otros -más rigurosas, de hecho- no pueden ser tomados en serio cuando hablan de lo apropiado de la respuesta, o de lo correcto y lo incorrecto, del bien y el mal.

El ejemplo de Nicaragua

Para ilustrar lo que está en juego, consideremos un caso que no es el más extremo pero sí indiscutible, al menos entre quienes sienten cierto respeto por la ley internacional y las obligaciones establecidas en los tratados. Nadie habría apoyado bombardeos nicaragüenses sobre Washington cuando Estados Unidos rechazó la orden del Tribunal Internacional de poner fin a su "uso ilegal de la fuerza" y de pagar a Nicaragua reparaciones sustanciales, decidiendo por el contrario una escalada de sus crímenes terroristas internacionales, ampliándolos oficialmente a los ataques sobre blancos civiles indefensos, vetando una resolución del Consejo de Seguridad que pedía a



todos los Estados que respetaran el derecho internacional y votando solo en la Asamblea General (aparte de uno o dos Estados clientes) contra resoluciones similares. Estados Unidos menospreció al Tribunal Internacional de Justicia argumentando que, dado que otras naciones no están de acuerdo con nosotros, debemos "reservarnos la capacidad de determinar si ese tribunal tiene jurisdicción sobre nosotros en cada caso particular"; este caso, el de los ataques terroristas contra Nicaragua, correspondía "esencialmente a la jurisdicción interna de Estados Unidos" (8).

Al mismo tiempo Washington continuó saboteando los esfuerzos regionales por alcanzar un acuerdo político, siguiendo la doctrina formulada por George Shultz, un "moderado" de la administración: Estados Unidos

debía "extirpar el cáncer de Nicaragua" por la fuerza. Shultz rechazó con desprecio a quienes defienden "medios utópicos y legalistas como la mediación exterior, las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia, sin prestar atención al elemento de poder de la ecuación... Las negociaciones equivaldrían a una capitulación si no se proyecta sobre la mesa de negociaciones la sombra de la energía". Washington continuó manteniendo la doctrina Shultz cuando, a pesar de las serias objeciones estadounidenses, los presidentes centroamericanos acordaron en 1987 un plan de paz: el Acuerdo de Esquipulas, que exigía que todos los países de la región dieran pasos hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos bajo supervisión internacional, subrayando que un "elemento imprescindible" era el fin del ataque de Estados Unidos contra Nicaragua. Washington respondió ampliando de nuevo su ofensiva, triplicando los vuelos de abastecimiento de la CIA para las fuerzas terroristas. Tras mantenerse al margen del Acuerdo, con lo que lo saboteó eficazmente, Washington procedió a exceptuar igualmente a sus regímenes clientes, proyectando la sustancia -no la sombra- de la energía para desmontar la Comisión Internacional de Verificación (CIV) al considerar sus conclusiones inaceptables, y exigiendo, con éxito, que el Acuerdo se revisara con el fin de permitir a sus Estados clientes proseguir sus atrocidades terroristas. Éstas sobrepasaron de lejos la propia guerra devastadora de Estados Unidos contra Nicaragua que dejó decenas de miles de muertos y el país arruinado, quizá sin posibilidades de recuperación. Manteniendo la doctrina Shultz, Estados Unidos obligó con severas amenazas al gobierno de Nicaragua a retirar la demanda de reparaciones ante el TIJ (9).

Difícilmente se podría encontrar un ejemplo más claro de terrorismo internacional según lo definido oficialmente, esto es, operaciones destinadas a "demostrar con violencia notoriamente indiscriminada que el régimen existente no puede proteger a la gente supuestamente bajo su autoridad", causando así no sólo "angustia, sino el deterioro de las relaciones que constituyen el orden social establecido" (10). El terrorismo de Estado en otros países de Centroamérica en esos años también puede entenderse como terrorismo internacional, a la luz del papel decisivo en él de Estados Unidos y de sus objetivos, a veces abiertamente proclamados, por ejemplo, por la Escuela Militar de las Américas, que entrena a los oficiales latinoamericanos y se enorgullece de que la "teología de la liberación ... fuera derrotada con la ayuda del ejército estadounidense" (11).

Parecería deducirse bastante claramente que solamente quienes apoyaran un bombardeo de Washington como respuesta a esos crímenes terroristas internacionales -es decir, nadie- podría aceptar "la doctrina igualmente absoluta" como respuesta a las atentados terroristas o considerar el bombardeo masivo como una respuesta apropiada y correctamente "calibrada".

Ampliación del principio

Consideremos, a la luz de la sentencia del TIJ en el caso de Nicaragua, algunos de los argumentos legales que se han presentado para justificar el bombardeo británico-esta-

dounidense sobre Afganistán; no me refiero aquí a su validez, sino a sus implicaciones si se mantiene el principio de normas universales. Christopher Greenwood argumenta que Estados Unidos tiene derecho a la "autodefensa" contra "quienes causaron o amenazaron... la muerte y la destrucción". Pero su cita se puede aplicar mucho más claramente a la guerra de Estados Unidos contra Nicaragua que a los talibán o Al-Qaeda, de forma que si vale para justificar el bombardeo y el ataque por tierra de Estados Unidos en Afganistán, Nicaragua habría tenido derecho a realizar ataques mucho más severos contra Estados Unidos. Otro distinguido profesor de derecho internacional, Thomas Franck, apoya la guerra de Estados Unidos-Reino Unido contra Afganistán en el argumento de que "un Estado es responsable de las consecuencias que puedan derivarse de permitir que su territorio sea utilizado para dañar a otro Estado"; esto se podría aplicar con seguridad a Estados Unidos en los casos de Nicaragua, de Cuba y de muchos otros países, siendo muchos de esos casos extremadamente graves (12).

No hace falta decir que en ninguno de esos casos se consideraría ni remotamente tolerable la violencia en "defensa propia" contra actos continuados de "muerte y destrucción"; actos, no simples "amenazas".

Lo mismo se puede decir de propuestas más matizadas sobre una respuesta apropiada a atentados terroristas. El historiador militar Michael Howard propone "una operación de policía bajo auspicios de las Naciones Unidas ... contra una conspiración criminal cuyos miembros deben ser buscados y llevados ante un tribunal internacional, donde se les sometería a un juicio justo, y en caso de ser hallados culpables, cumplirían la condena correspondiente". Suena bastante razonable, aunque la idea de que esa propuesta fuera de aplicación universal resulta increíble. El director del Centro para la Política de Derechos Humanos de Harvard argumenta que "la única respuesta responsable a los actos de terrorismo

es un honrado trabajo policíaco y un proceso judicial ante un tribunal, vinculado al uso decidido e implacable de la energía militar contra quienes no puedan ser sometidos a la justicia" (13). También parece razonable, si agregamos la matización de Howard sobre la supervisión internacional, y si el recurso a la fuerza no tiene lugar hasta que se hayan agotado los medios legales. Su criterio no se aplica por tanto al 11 de Septiembre (Estados Unidos se negó a ofrecer pruebas y rechazó ofertas condicionales sobre la entrega de los sospechosos), pero sí se aplica muy claramente al caso de Nicaragua.

Y también a otros casos. Consideremos el de Haití, que ha ofrecido abundantes pruebas para apoyar sus repetidas peticiones de extradición de Emmanuel Constant, quien dirigió las fuerzas responsables de millares de muertes bajo la junta militar que Estados Unidos apoyaba tácitamente (por no hablar de la historia anterior); Estados Unidos rechaza esas peticiones, probablemente debido al temor de que Constant pudiera hacer revelaciones embarazosas en caso de ser sometido a juicio. La petición más reciente de extradición se presentó el 30 de septiembre de 2001, al mismo tiempo que Estados Unidos exigía a los talibán la entrega de Bin Laden (14). Esa coincidencia también fue ignorada, de acuerdo con el principio de que hay que rechazar vigorosamente las normas morales mínimas.

La respuesta al terrorismo

Volviendo a la «respuesta responsable», un llamamiento a su puesta en práctica en casos en que es claramente aplicable sólo suscitaría furia y desprecio. Algunos han formulado principios más generales para justificar la

guerra de Estados Unidos contra Afganistán. Dos eruditos de Oxford proponen un principio de proporcionalidad: "La magnitud de la respuesta estará determinada por la intensidad con que la agresión afectó a los valores dominantes en la sociedad atacada"; en el caso de Estados Unidos, la "libertad para pretender la mejora personal en una sociedad plural con economía del mercado", alevosamente atacada el 11 de Septiembre por unos "agresores ... cuya ortodoxia moral diverge de la de Occidente". Puesto que "Afganistán es un Estado que se alinea con los agresores" y puesto que se negó a entregar a los sospechosos, "Estados Unidos y sus aliados, según el principio de proporcionalidad, podía recurrir justificada y moralmente a la fuerza contra el gobierno talibán" (15).

Pero según el principio de universalidad Haití y Nicaragua podían "recurrir justificada y moralmente a la fuerza" contra el gobierno de Estados Unidos. Y esa misma conclusión se extiende mucho más allá de esos dos casos de terrorismo de Estado, unos más serios y otros de menor importancia como el bombardeo de Clinton a la planta farmacéutica de al Shifa en Sudán en 1998, que produjo "varias decenas de miles" de muertos según el embajador alemán y otras fuentes fiables, cuyas conclusiones son acordes con las evaluaciones inmediatas de observadores bien informados (16). El principio de proporcionalidad concedía pues a Sudán el derecho a represalias de terror masivo, conclusión que se refuerza si consideramos que ese acto del Imperio tuvo consecuencias sociales y económicas espantosas para Sudán, de modo que aquella atrocidad fue proporcionalmente mucho peor que los crímenes de 11 de Septiembre; por muy espantosos que fueran éstos, no tuvieron unas consecuencias tan graves (17).

La mayoría de los comentarios sobre el bombardeo de Sudán se refieren a la cuestión de si se creía o no realmente que aquella fábrica producía armas químicas; pero en cualquier caso no se plantea "la intensidad con que la agresión afectó a valores claves de la sociedad atacada" como la supervivencia. Otros apuntan que las muertes no fueron intencionadas, como sí lo son muchas de las atrocidades que denunciamos con razón. En este caso apenas se puede dudar que los estrategas estadounidenses conocían bien las probables consecuencias letales del bombardeo, por lo que éste sólo se puede excusar sobre la base de la suposición hegeliana de que los africanos son "meras cosas", cuyas vidas "no tienen valor", una actitud acorde con la práctica hasta un punto que las víctimas entienden bien, sacando sus propias conclusiones sobre la "ortodoxia moral de Occidente".

La primera "guerra contra el terrorismo"

Uno de los participantes en el volumen de Yale (Charles Hill) reconocía que el 11 de Septiembre se había iniciado la segunda "guerra contra el terrorismo". La primera fue declarada veinte años antes cuando entró en funciones la administración Reagan, con el acompañamiento retórico ya citado; y "la ganamos", anuncia Hill triunfante, aunque el monstruo terrorista quedó solo herido, no muerto (18). La primera

"era de terror" resultó ser un aspecto importante de los asuntos internacionales durante toda la década, sobre todo en Centroamérica pero también en Oriente Medio, donde el terrorismo fue seleccionado por los medios como el principal asunto de 1985 y alcanzó puestos muy altos en otros años.

Podemos aprender mucho de la actual guerra contra el terrorismo investigando la primera fase y cómo se presenta hoy. Un importante especialista académico califica la década de 1980 como la del "terrorismo de Estado" o "la implicación permanente del Estado como patrocinador del terrorismo, especialmente por parte de Libia e Irán". Estados Unidos se limitó a responder, adoptando una "actitud preventiva contra el terrorismo". Otros recomiendan ahora los métodos con los que "ganamos": las operaciones por las que Estados Unidos fue condenado por el Tribunal Internacional y el Consejo de Seguridad (si no tenemos en cuenta el veto de los propios Estados Unidos) constituyen el modelo para "un apoyo del tipo nicaragüense para los adversarios de los talibán (especialmente la Alianza del Norte)". Un destacado historiador del tema encuentra profundas raíces para el terrorismo de Osama Bin Laden: en Vietnam del Sur, donde "la eficacia del terrorismo del Vietcong contra el Goliat americano armado con tecnología moderna despertó la esperanza al mostrar que el núcleo de Occidente era también vulnerable" (19).

Ateniéndose a lo convencional, esos análisis presentan a Estados Unidos como una víctima benévola, que se defiende a sí misma del terrorismo de otros: los vietnamitas (en Vietnam del Sur), los nicaragüenses (en Nicaragua), los libios e iraníes (aunque sufrieron un poco a manos estadounidenses, eso no mereció la atención de la prensa), y otras fuerzas antiestadounidenses en todo el mundo.

Pero no todos ven el mundo de esa forma. El lugar más obvio es Latinoamérica, que cuenta con una notable experiencia en cuanto al terrorismo internacional. Los crímenes del 11 de septiembre fueron allí duramente condenados, pero sin olvidar al mismo tiempo sus propias experiencias. Como observaba la revista de investigación de la universidad jesuita de Managua, se pueden describir los atentados 11 de Septiembre como un Armagedón, pero Nicaragua "vivió su propio Armagedón a cámara lenta" bajo el asalto estadounidense y "está ahora sumergida en sus tristes consecuencias"; otros países sufrieron aún más bajo la plaga de terrorismo de Estado que se extendió por todo el continente desde comienzos de los años 60, gran parte de él atribuible a Washington. Un periodista panameño se unió a la condena general de los crímenes del 11 de Septiembre, pero recordó la muerte de quizá miles de personas (crímenes occidentales, por tanto no sometidos a examen) cuando el padre del actual presidente bombardeó Barrio Chorillo en diciembre de 1989 en la operación Causa Justa, emprendida para secuestrar a un esbirro desobediente que fue condenado a cadena perpetua en Florida por crímenes cometidos en su mayor parte cuando fungía como agente de la CIA. El escritor uruguayo Eduardo Galeano observó que Estados Unidos proclama oponerse al terrorismo apoyándolo

no obstante de hecho en todo el mundo, incluidos "Indonesia, Camboya, Chipre, Irán, África del Sur, Bangladesh y los países sudamericanos que sufrieron la guerra sucia del Plan Cóndor" a cargo de dictadores militares que establecieron un reinado del terror con respaldo estadounidense (20).

Notas

1. Bush, citado por Rich Heffern, National Catholic Reporter, 11 de enero de 2002. Reagan, The New York Times, 18 de octubre de 1985. Shultz, U.S. Dept. of State, Current Policy, núm. 589, 24 de junio de 1984; núm. 629, 25 de octubre de 1984.
2. US Army Operational Concept for Terrorism Counteraction, TRADOC Pamphlet núm. 525-37, 1984.
3. Res. 42/159, 7 de diciembre de 1987; Honduras se abstuvo.
4. Joseba Zulaika y William Douglass, Terror and Taboo, Nueva York y Londres, Routledge, 1996, p. 12. En cuanto a los sucesos de 1980-88, véase «Inter-Agency Task Force, Africa Recovery Program/Economic Commission, South African Destabilization: The Economic Cost of Frontline Resistance to Apartheid, Nueva York, UN, 1989, p. 13, citado por Merle Bowen, Fletcher Forum, invierno de 1991. Sobre la expansión del comercio estadounidense con Sudáfrica después de que el Congreso autorizara sanciones en 1985 (superando el veto de Reagan), véase Gay McDougall, Richard Knight, en Robert Edgar, ed., Sanctioning Apartheid, Trenton (New Jersey), Africa World Press, 1990.
5. Para una revisión del rechazo unilateral estadounidense durante 30 años, véase mi introducción a Roane Carey, ed., The New Intifada, Londres y Nueva York, Verso, 2000 [de próxima publicación en castellano, en esta misma editorial]; para mayor detalle véanse las fuentes ahí citadas.
6. Sin embargo, nunca se recurre a ella. Sobre las razones, véase Alexander George, ed., Western State Terrorism, Cambridge, Polity-Blackwell, 1991.
7. Strobe Talbott y Nayan Chanda, introducción, The Age of Terror: America and the World after September 11, Nueva York, Basic Books and the Yale U. Center for the Study of Globilization, 2001.
8. Abram Sofaer, «The United States and the World Court», U.S. Dept. of State, Current Policy, núm. 769 (diciembre de 1985). La resolución vetada del Consejo de Seguridad pedía obediencia a las sentencias del TIJ y, sin mencionar específicamente a ninguno, exigía a todos los Estados que se abstuvieran «de llevar a cabo, apoyar o promover acciones políticas, económicas o militares de cualquier tipo contra cualquier otro Estado de la región». Elaine Sciolino, The New York Times, 31 de julio de 1986.
9. Shultz, «Moral Principles and Strategic Interests», 14 de abril de 1986, U.S. Dept. of State, Current Policy,

núm. 820. Testimonio de Shultz ante el Congreso, véase Jack Spence en Thomas Walker, ed., Reagan versus the Sandinistas, Boulder y Londres, Westview, 1987. Para un repaso al sabotaje contra la diplomacia y la escalada del terrorismo de Estado internacional, véanse mis libros Culture of Terrorism, Boston, South End, 1988 [ed. cast., La cultura del terrorismo, Barcelona, Ediciones B, 1989; Ed. Popular, 2002]; Necessary Illusions, Boston: South End, 1989 [ed. cast., Ilusiones necesarias: control de pensamiento en las sociedades democráticas, Ed. Libertarias Prodhufi, 1991]; Deterring Democracy, Londres y Nueva York, Verso, 1991 [ed. cast., El miedo a la democracia, Grijalbo Mondadori, 1992]. Sobre las consecuencias, véase Thomas Walker y Ariel Armony, eds., Repression, Reistance and Democratic Transition ¡n Central America, Washington, Scholarly Resources, 2000. Sobre las reparaciones de guerra, véase Howard Meyer, The World Court ¡n Action, Lanham, MD, Oxford, Rowman & Littlefield, 2002, cap. 14.

10. Edward Prince, «The Strategy and Tactics of Revolutionary Terrorism», Comparative Studies in Society and History, 19, 1; citado por Chalmers Johnson, «American Militarism and Blowback», New Political Science, 24, 1, 2002.
11. SOA, 1999, citado por Adam Isacson y Joy Olson, Just the Facts, Washington, Latin America Working Group and Center for Intemational Policy, 1999, ix.
12. Greenwood apela en «International law and the "war against terrorism"», 78, 2 (2002), al párr. 195 de Nicaragua vs USA, que el Tribunal no aplicó para justificar su condena del terrorismo estadounidense, pero que seguramente era más apropiada en aquel caso que en el que preocupa a Greenwood. Franck, «Terrorism and the Right of Self-Defense», American J. of International Law, 95.4 (oct. de 2001).
13. Howard, Foreign Affairs, enero/febrero de 2002, conferencia del 30 de octubre de 2001 (Tania Branigan, The Guardian, 31 de octubre). Ignatieff, lndex on Censorship, 2, 2002.
14. The New York Times, 1 de octubre de 2001.
15. Frank Schuller y Thomas Grant, Current History, abril de 2002.
16. Werner Daum, «Universalism and the West», Harvard International Review, verano de 2001. Sobre otras declaraciones y las advertencias de Human Rights Watch, véase mi 9-11, Nueva York, Seven Stories, 2001 [ed. cast., 11/09/2001, RBA Editores, 2001], p. 45 y ss.
17. Christopher Hitchens, Nation, 10 de junio de 2002.
18. Talbott y Chanda, The Age of Terror: America and the World after September 11, cit.
19. Martha Crenshaw, Ivo Daalder y James Lindsay, David Rapoport, Current History, America at War, diciembre de 2001. Sobre las interpretaciones coetáneas de la primera «guerra contra el terror», véase George, Western State Terrorism, cit.
20. Envío (UCA Managua), octubre; Ricardo Stevens (Panamá), NACLA Report on the Americas, nov/ dic; E. Galeano, La Jornada, 21 de septiembre (Ciudad de México), citado por Alain Frachon, Le Monde, 24 de noviembre; todas las fechas de 2001.

Índice de ilustraciones

Pág. 16
Pedro Nel Gómez
Barequeras y barequeros frente a la draga nacional
Fresco / 1962 (detalle del fresco del Banco Popular de Medellín) / 140 M^2

Pág. 19
Pedro Nel Gómez
Emigración de la ciudad al campo
Fresco (I.C.T.) Instituto de Crédito Territorial (detalle), Medellín / 1965 / 160 M^2

Pág. 22
Marco Ospina
Sin título
Óleo/
120 x 48, 5 cm.

Pág. 24
Marco Ospina
Nueve de abril
1948 / Fundación Marco Ospina Pro-Arte, México D.F.

Pág. 25
Marco Ospina
Capricho Vegetal
1943/ Óleo sobre tela / 69,5 x 99,5 cm / Fundación Marco Ospina Pro-Arte.

Pág. 26
Marco Ospina
Flor- rosa
1946 / Óleo sobre lienzo / 60,5 x 70,5 cm / Museo de arte moderno de Bogotá.

Pág. 29
Marco Ospina
Cohete III
Óleo sobre tela / 1951 /130 x 95 cm. / Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Pág. 30
Marco Ospina
Sputnik – construcción dinámica
Óleo sobre tela / 1952 /139 x 70 cm / Fundación Marco Ospina Pro – Arte, México D.F.

Pág. 32
Marco Ospina
Estudio para dictico de la Violencia Sobras de la violencia sobre la paz - Luminosa
Acuarela sobre papel / 1955 /38 x 28 cm. / Fundación Marco Ospina Pro – Arte, México D.F.

Pág. 34
Marco Ospina
El café
Boceto para tapete, acuarela sobre papel / Sf / 50,5 x 38 cm / Fundación Marco Ospina Pro-Arte, México D.F.

Pág. 36
Marco Ospina
II violencia, tributo a la paz
Óleo sobre tela / 1955 / 73 x 58 cm / Fundación Marco Ospina Pro – Arte, México D.F.

Pág. 38
Marco Ospina
Trópico del cauca
Óleo sobre tela / 1962 /
140 x 200 cm /
Museo de Arte, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Pág. 41
Marco Ospina
Subachoque
Óleo sobre tela / 1970 /
72 x 100 cm /
Banco de la Republica, Bogotá

Pág. 42
Marco Ospina
Arizona desertico
Oleo sobre tela /
1972 / 83 x 123 cm /
Ediciones gamma Bogota.

Pág. 44
Jorge Elías Triana
Guerrilleros (fragmento)
Óleo sobre tela / 1961 /
85 x 65 cm.

Pág. 47
Jorge Elías Triana
Guerrilleros
Óleo sobre tela / 1961 /
85 x 65 cm.

Pág. 50
Marco Ospina
Eclipse
Tempera sobre papel / 1974 /
50 x 35 cm /
Colección particular, Bogotá.

Pág. 53
Marco Ospina
Horizontes
Óleo sobre tela / 1975 /
90,5 x 61 cm /
Alonso Garcés Galería, Bogotá.

Pág. 54
Marco Ospina
Los soles
Óleo sobre tela / 1976 /
40 x 60,5 cm /
Fundación Marco Ospina Pro-Arte, México D.F.

Pág. 56
Marco Ospina
Boquerón Sumapáz
Óleo sobre lienzo / 1977 /
65 x 95 cm /
Museo de Arte Moderno de Bogotá

Pág. 59
Marco Ospina
Hoja 8
Acuarela sobre papel / 1981 /
40 x 29,5 cm /
Fundación Marco Ospina Pro-Arte, México D.F.

Pág. 60
Marco Ospina
Hoja 9
Acuarela sobre papel / 1981 /
40 x 29,5 cm /
Fundación Marco Ospina Pro-Arte, México D.F.

Pág. 61
Marco Ospina
El Mar
Óleo sobre tela / 1975 /
69,5 x 99,5 cm /
Fundación Marco Ospina Pro-Arte, México D.F

Pág. 65
Beatriz Gonzáles
Apocalipsis camuflado
Óleo sobre papel / 1989 /
150 x 150 cm /
Colección particular, Bogotá.

Pág. 67
Beatriz Gonzáles
Señor presidente, que honor estar con usted en este momento histórico
Óleo sobre papel / 1987 /
150 x 150 cm /
Colección particular, Bogotá.

Pág. 68
Beatriz Gonzáles
Los papagayos
Óleo sobre papel / 1986 /
75 x 1200 cm /
Colección particular, Bogotá.

Pág. 71
Beatriz Gonzáles
Los papagayos II
Óleo sobre pastel sobre papel / 1986 /
35 x 80 cm.

Pág. 73
Beatriz Gonzáles
La constituyente (fragmento)
Óleo sobre tela / 1991 /
150 x 300 cm /
Casa de Nariño, Bogotá.

Pág. 75
Beatriz Gonzáles
Entre guerras
Óleo sobre tela / 1992 /
150 x 150 cm /
Colección particular, Paris.

Pág. 77
Beatriz Gonzáles
Tensión
Sanguina y pastel sobre papel / 1988
50 x 35 cm /
Colección particular Bogotá.

Pág. 78
Beatriz Gonzáles
*M*áteme a mí que yo ya viví II
Óleo sobre tela / 1997 /
160 x 90 cm /
Casa de Nariño, Bogotá.

Pág. 80
Beatriz Gonzáles
Enterradores
Óleo sobre tela / 2000 /
120 x 205 cm /
Colección particular, Medellín.

Pág. 81
Beatriz Gonzáles
Dolores
Óleo sobre tela / 2000 /
150 x 150 cm /
Colección particular Cali.

Pág. 87
Pedro Nel Gómez
Los guerreros Boyacenses se despiertan (fragmento)
Acuarela / 1948 /
48 x 78 cm.

Pág. 88
Pedro Nel Gómez
La familia en la esquina de una ciudad
Óleo sobre lienzo / 1945 /
100 x 70 cm.

Pág. 89
Pedro Nel Gómez
Protesta
Óleo sobre tela / 1973 / 60 x 58 cm.

Pág. 91
Pedro Nel Gómez
Los guerreros Boyacenses se despiertan (fragmento)
Acuarela / 1948 /
48 x 78 cm.

Pág. 92
Jorge Elías Triana
Guerrillero
Óleo sobre tela / 1967 /
100 x 90 cm.

Pág. 93
Jorge Elías Triana
Guerrilleros (fragmento)
Óleo sobre tela / 1961 /
85 x 65 cm.

Pág. 94
Jorge Elías Triana
Desamparo
Óleo sobre tela / 1959 /
80 x 110 cm.

Pág. 97
Alejandro Obregón
Violencia
Óleo sobre lienzo / 1962 /
200 x 170 cm /
Museo del Banco de la república, Bogotá.

Pág. 98
Alejandro Obregón
Violencia devorado por una fiera
Óleo sobre lienzo / 1963 /
55 x 50 cm

Pág. 101
Alejandro Obregón
Amanecer en los Andes
Óleo sobre lienzo / 1963 /
350 x 200 cm.

Pág. 103
Alejandro Obregón
Volcán de Galera zamba
Acrílico sobre tabla / 1966 /
100 x 90 cm.

Pág. 104
Alejandro Obregón
Dos cóndores
Agua fuerte / 1967 /
40 x 50 cm.

Pág. 107
Alejandro Obregón
Huesos de mis bestias
Acrílico sobre tabla / 1967 /
150 x 130 cm.

Pág. 109
Alejandro Obregón
El cóndor
Acrílico sobre lienzo / 1970 /
120 x 100 cm.

Pág. 110
Alejandro Obregón
El cóndor
Óleo sobre lienzo / 30 x 50 cm.

Pág. 112
Alejandro Obregón
Flor carnívora
Acrílico sobre tabla / 1973 / 20 x 40 cm.

Pág. 115
Alejandro Obregón
Huesos de mis bestias
Acrílico sobre tabla / 1974 /
40 x 55 cm.

Pág. 117
Alejandro Obregón
Flora
Acrílico sobre lienzo / 1976 /
130 x 160 cm.

Pág. 118
Alejandro Obregón
Homenaje al Che
Acrílico sobre madera / 1968 /

Pág. 123
Fernando Botero
El paisaje de Colombia
Óleo sobre tela / 2004 /
43 x 46 cm.

Pág. 125
Fernando Botero
Masacre en Colombia
Óleo sobre lienzo / 2000 /
129 x 192 cm.

Pág. 127
Fernando Botero
Motosierra
Lápiz y tinta sobre papel / 2003 /
15 x 19 cm.

Pág. 129
Fernando Botero
Fusilado
Acuarela, lápiz, carboncillo y sanguina sobre papel / 2004 /
41 x 31 cm.

Pág. 131
Fernando Botero
Un crimen
Lápiz sobre papel / 2002 /
31 x 41 cm.

Pág. 132
Fernando Botero
Un secuestro
Lápiz sobre papel / 2003 /
37 x 30 cm.

Pág. 135
Fernando Botero
Mujer llorando
Lápiz sobre papel / 2002 /
38 x 30 cm.

Pág. 136
Fernando Botero
Mujer llorando
Lápiz sobre papel / 2003 /
107 x 80 cm.

Pág. 139
Fernando Botero
Vencida
Lápiz sobre papel / 2004 /
24 x 18 cm.

Pág. 140
Fernando Botero
Desplazado
Óleo sobre lienzo / 2002 /
61 x 44 cm.

Pág. 143
Fernando Botero
Violencia
Acuarela, lápiz y carboncillo sobre papel / 2004 /
31 x 41 cm.

Pág. 145
Fernando Botero
Madre llorando
Carboncillo, lápiz y pastel sobre papel / 2004 /
35 x 44 cm.

Pág. 147
Fernando Botero
Desplazados
Acuarela y lápiz sobre papel / 2004 /
31 x 40 cm.

Pág. 148
Fernando Botero
Verdugo
Lápiz sobre papel / 2002 /
39 x 29 cm.

Pág. 151
Fernando Botero
Velorio
Carboncillo y lápiz sobre papel / 2004 /
31 x 41 cm.

Pág. 152
Fernando Botero
Drama
Carboncillo sobre papel / 2004 /
31 x 31 cm.

Pág. 155
Fernando Botero
Otro crimen
Sanguínea sobre papel / 2002 /
20 x 27 cm.

Pág. 156
Fernando Botero
Terror
Lápiz sobre papel / 2003 /
107 x 80 cm.

Pág. 161
Fernando Botero
Ruego
Lápiz y tinta sobre papel / 2003 /
40 x 30 cm.

Pág. 163
Fernando Botero
Muerte
Óleo sobre lienzo / 2002 /
32 x 35 cm.

Pág. 164
Fernando Botero
Drama
Carboncillo sobre papel / 2004 /
41 x 31 cm

Pág. 165
Fernando Botero
Hombre armado
Lápiz sobre papel / 2002 /
28 x 20 cm.

Pág. 166
Fernando Botero
Sin rumbo
Carboncillo y lápiz sobre papel / 2004 /
41 x 31 cm.

Pág. 167
Fernando Botero
Sin título
Carboncillo y lápiz sobre papel / 2004 /
41 x 31 cm.

Pág. 182
Beatriz Gonzáles
Máteme a mí que yo ya viví III
Óleo sobre tela / 1997 /
160 x 90 cm /
Colección particular, Bogotá.

Pág. 185
Beatriz Gonzáles
Paisaje pendiente
Óleo sobre tela / 2003 /
30 x 30 cm /
Colección Galería Garcés Velásquez,
Bogotá.

Pág. 187
Beatriz Gonzáles
Boceto dolores
Sanguina sobre pape / 2000 /
80 x 80 cm /
Colección particular, Bogotá.

Pág. 188
Beatriz Gonzáles
Las delicias III
Óleo sobre tela / 1997 /
24 x 24 cm /
Colección particular, Bogotá.

Pág. 191
Beatriz Gonzáles
El concordato
Litografía sobre papel / 1993 /
50 x 70 cm /
Asociación de amigos del Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Pág. 193
Beatriz Gonzáles
La pesca milagrosa
Óleo sobre tela / 1992 /
75 x 150 cm /
Colección del Museo de Arte Moderno de Barranquilla.

Pág. 194
Beatriz Gonzáles
El silencio
Óleo sobre tela / 1997 /
155 x 45 cm /
Colección particular, Bogotá.

Pág. 198
Beatriz Gonzáles
Retratos mudos, (fragmento)
Óleo sobre papel / 1990 /
75 x 200 cm /
Colección particular. Bogotá.

Pág. 201
Beatriz Gonzáles
Condición natural
Óleo sobre tela / 1992 /
130 x 90 cm /
Colección particular, Bogotá.

Pág. 202
Beatriz Gonzáles
Una golondrina no hace verano
Óleo sobre tela / 1992 /
110 x 180 cm /
Colección particular, Bogotá.

Pág. 203
Beatriz Gonzáles
Lágrimas y peces
Óleo sobre tela / 1997 /
160 x 90 cm /
Colección del Banco de la Republica, Bogotá.

Pág. 205
Beatriz Gonzáles
Subdesarrollo 70
Óleo sobre tela / 1968 /
110 x 135 cm /
Colección particular Bogotá.

Pág. 206
Beatriz Gonzáles
Las delicias 12
Carboncillo sobre tela / 1997 /
24 x 24 cm /
Colección particular, Bogotá.

Pág. 208
Beatriz Gonzáles
Parasol político
Óleo sobre tela / 1992 /
70 x 100 cm /
Colección particular Bogotá.

Pág. 211
Fernando Botero
Motosierra
Lápiz y pastel sobre papel / 2004 /
30 x 41 cm.

Pág. 213
Fernando Botero
Sin título
Óleo sobre lienzo / 1999 /
26 x 34 cm.

Pág. 216
Fernando Botero
Muerte
Lápiz sobre papel / 2002 /
41 x 31

Pág. 217
Fernando Botero
Sin compasión
Lápiz sobre papel / 2002 /
27 x 20 cm.

Pág. 219
Fernando Botero
Grito
Lápiz sobre papel / 2002 /
18 x 15 cm

Pág. 222
Fernando Botero
Suplica
Lápiz y tinta sobre papel / 2004 /
18 x 29 cm.

Pág. 223
Fernando Botero
Despedida
Tinta, acuarela y lápiz sobre papel / 2004 / 36 x 27 cm.

Pág. 224
Fernando Botero
Madre e hijo
Óleo sobre lienzo / 2000 /
31 x 39 cm.

Pág. 225
Fernando Botero
Un hijo muerto
Carboncillo y lápiz sobre papel / 2004 /
41 x 31 cm.

Pág. 229
Fernando Botero
Abu Ghaid # 60
Óleo sobre lienzo/ 2005

Pág. 231
Fernando Botero
Viva la muerte
Óleo sobre lienzo / 2001 /
44 x 33 cm.

Pág. 232
Fernando Botero
Motosierra
Lápiz sobre papel / 2004 /
30 x 41 cm.

Pág. 235
Fernando Botero
Hombre cayendo
Lápiz, acuarela y pastel sobre papel / 2004 /
37 x 31 cm.

Pág. 235
Fernando Botero
Motosierra
Lápiz sobre papel (fragmento) / 2004 /
30 x 41 cm.

Centro Cultural
Universidad del Tolima